

221

# LOS ESPEJISMOS DEL CAMBIO 2000 - 2002

Rosa Albina Garavito Elías  
Prólogo de Lorenzo Meyer

LOS ESPEJISMOS DEL CAMBIO  
2000-2002

BIBLIOTECA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

#217092  
C.B. 2893255

# LOS ESPEJISMOS DEL CAMBIO 2000-2002

ROSA ALBINA GARAVITO ELÍAS,



2002

2893255



*Rector General*  
Dr. Luis Mier y Terán Casanueva

*Secretario General*  
Dr. Ricardo Solís Rosales

*Rector de la Unidad Azcapotzalco*  
Mtro. Víctor M. Sosa Godínez

*Secretario de la Unidad*  
Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán

*Coordinadora General de Desarrollo Académico*  
Mtra. María Aguirre Tamez

*Coordinadora de Extensión Universitaria*  
DCG Ma. Teresa Olalde Ramos

*Jefa de la Sección de Producción y Distribución Editoriales*  
DCG Silvia Guzmán Bofill

Ilustración de portada  
Niles Spencer, *The Watch Factory*, núm. 2

Primera edición, 2002  
© Rosa Albina Garavito Elías  
© Universidad Autónoma Metropolitana  
Unidad Azcapotzalco  
Av. San Pablo 180 Col. Reynosa Tamaulipas  
C.P. 02200, México, D.F.

ISBN: 970-654-725-8

*Impreso en México*

# Contenido

## Prólogo

15

## Introducción

25

2000

<i>Impresiones después de la batalla</i>	61
<i>Apuntes para el camino</i>	63
<i>Carta al PRD</i>	66
<i>¿Hacia el bipartidismo?</i>	68
<i>Los signos de la política social</i>	70
<i>Aborto: dar la batalla</i>	73
<i>A Dios lo que es de Dios</i>	74
<i>Un PRI que no resiste</i>	77
<i>De hipocresías panistas</i>	79
<i>Entre familia</i>	81
<i>Dejar atrás la impunidad</i>	83
<i>Algo más que perdón</i>	85
<i>¿Desmantelar o refuncionalizar?</i>	88
<i>¿Dónde quedó la transición?</i>	90
<i>La difícil modernización</i>	93
<i>El continuismo económico de Fox</i>	95
<i>Transitar hacia el siglo XIX</i>	97
<i>La rebelión de los Lurócratas</i>	99

<i>Cuates que se apoyan</i>	101
<i>Precariedad en el empleo</i>	103
<i>La rebelión de Tepito</i>	106
<i>Gabinete habemus</i>	108
<i>Los primeros pasos</i>	111
<i>Más sobre la izquierda (I)</i>	113
<i>Más sobre la izquierda (segunda y última parte)</i>	115
<i>Los salados salarios</i>	118

## 2001

<i>Bienvenido el siglo XXI</i>	121
<i>Los ilusionismos salariales de Fox</i>	123
<i>¿Cuál reforma fiscal?</i>	126
<i>La Hidra del narcotráfico</i>	128
<i>Chiapas: histerias y fobias</i>	131
<i>Nueva constitución, nuevo pacto social</i>	133
<i>La estrategia de la foto</i>	135
<i>La tercera etapa</i>	138
<i>La derrota como triunfo</i>	140
<i>Llegaron para quedarse</i>	142
<i>Un nuevo proyecto de nación</i>	145
<i>Congreso en crisis</i>	147
<i>Derrumbando muros</i>	149
<i>La hora fiscal</i>	151
<i>El síndrome de Santa Anna</i>	153
<i>La intolerancia de Abascal</i>	156
<i>El VI Congreso del PRD</i>	158
<i>Indígenas y trabajadores</i>	160
<i>Destinos enlazados</i>	163
<i>Los mismos vicios</i>	165
<i>Las dos economías</i>	167
<i>Bancos y migrantes</i>	169

Y la huelga se hizo	171
El elefante existe	174
El escuálido neo populismo	176
Ni guerra ni tregua	178
Colaboracionismo migratorio	181
Espionaje	183
Por la senda de la desigualdad	185
El campo, voces de alarma	187
Dos culpables	190
El pacto silencioso	192
Acuerdo migratorio: sin prisa	194
¿Pacto entre partidos?	196
¡No hay que apanicarse!	199
El informe y la transición	201
Anteponer la razón a la barbarie	203
Triunfo obrero	205
La guerra y los trabajadores	207
Gigante con pies de barro	210
Cosas veremos	212
PRD: oposición leal	215
Voces críticas	217
En memoria de Digna Ochoa	219
Migración y agenda laboral	221
Herencias y complicidades	223
Despacio porque llevamos prisa	226
La asamblea de un partido inocente	228
¿Reelección legislativa?	231
El informe de la CNDH	233
La hora del poder judicial	236
Perspectiva salarial	238
Jugar con fuego	240

## 2002

<i>Derrota fiscal</i>	243
<i>Espejismos</i>	245
<i>Mayoría de edad</i>	248
<i>El PRI en la alternancia</i>	250
<i>El PRD en la alternancia</i>	252
<i>El PAN en la alternancia</i>	255
<i>Tarifas eléctricas y Pidiregas</i>	257
<i>La frontera que se desplaza</i>	260
<i>Reforma laboral y PRI</i>	262
<i>Efectos colaterales</i>	264
<i>Crisis en la Ibero</i>	267
<i>El triunfo de Rosario</i>	269
<i>El nuevo fracaso perredista</i>	272
<i>Migrantes en la indefensión</i>	274
<i>Cinismo económico</i>	276
<i>Globalización y derechos</i>	279
<i>El coletazo del caimán</i>	281
<i>Ciclo de derrotas</i>	284
<i>Casi sin salida</i>	286
<i>Estrategia errónea</i>	289
<i>Economía vulnerable</i>	291
<i>Toque de queda</i>	293
<i>La charola</i>	295
<i>¡Amnistía, ya!</i>	298
<i>Agresión contra indocumentados</i>	300
<i>Zozobra</i>	302
<i>La transición atorada</i>	304
<i>Atenco: provocación priísta</i>	307
<i>Atenco y Chiapas</i>	310
<i>El juego de la justicia</i>	312

<i>De rupturas y pasados remotos</i>	315
<i>Atenco y el beso, una buena y una mala decisión</i>	317
<i>Blindaje a las trasnacionales</i>	320
<i>¿Medir o resolver la pobreza?</i>	322
<i>La reforma eléctrica</i>	325
<i>En busca de la gobernabilidad</i>	328
<i>Golpe a la democracia</i>	330



# Prólogo

*Lorenzo Meyer Cosío*

ROSA ALBINA GARAVITO es la personificación, entre otras posibilidades, de la combinación de la teoría con la práctica; de la capacidad y aptitud para integrar la reflexión con la acción; finalmente, también encarna los riesgos –enormes en su caso– y costos de intentar vivir de acuerdo a los principios ideológicos y valores que dan sustento al análisis de la realidad social desde la izquierda. La biografía de la autora de esta obra se entrelaza con las últimas etapas de la historia política mexicana –una historia donde el cambio como realidad o posibilidad, resulta ser el factor dominante– de manera más profunda que la de la mayoría de nosotros. Y en su caso, esa relación y unidad entre el desarrollo y evolución personal y el colectivo, no es resultado de accidentes o del azar, sino de la voluntad y del compromiso razonado. De ahí que el interés de esta obra que el lector tiene entre manos –una visión del México de inicios del siglo XXI–, sea mayor que el del grueso de los trabajos que se han producido sobre el particular desde el periodismo, la política institucional o la academia. *Los espejismos del cambio*, es el resultado del análisis propio de una científica social, combinado con la sensibilidad y la experiencia de una activista política en el mejor sentido del término.

La maestra Garavito, sonorenses de origen, llegó en 1963 a la Facultad de Economía de la Universidad de Nuevo León –entonces



el centro más avanzado e interesante para el estudio de esa disciplina en México. Un año antes había sucedido la “crisis de los misiles”, cuando la “Guerra Fría” llegó de lleno a una América Latina donde la Cuba revolucionaria aparecía en el horizonte del subcontinente como la mejor respuesta –la radical, la adecuada– a los males sociales que habían acompañado a nuestra región desde, al menos, la época colonial: pobreza, subdesarrollo, explotación interna, subordinación al exterior y una notable variedad de autoritarismos con su respectiva cauda de abusos, corrupción, humillaciones y horrores. Nuestra autora concluyó su licenciatura justamente en el año clave de la historia política contemporánea mexicana: 1968.

Una estudiante inteligente e inquieta al decir de sus profesores, Rosa Albina respondió a la represión gubernamental con la acción, acción que por poco le cuesta la vida y que le llevó a experimentar en carne propia la violencia de un régimen que se propuso usar todos los medios a su alcance –legales e ilegales– para cambiar sólo en la forma pero evitando modificar su naturaleza fundamental, la propia de un sistema autoritario, con un partido de Estado y una presidencia fuerte, con amplios poderes constitucionales, metaconstitucionales e incluso anticonstitucionales. En el México de los 1970, país de reformas políticas gatopardianas y pseudo populismo, de cooptación de los opositores a la vez que de guerra sucia, Rosa Albina Garavito salió del país, sin modificar su orientación ideológica y continuando su preparación profesional en el área de las ciencias sociales; lo hizo primero en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Chile y después en la Universidad de Salerno, en Italia.

Cuando en 1982 el modelo económico mexicano postrevolucionario llegó a su crisis final, la maestra Garavito era ya una profesional de la economía, pero de una economía en su sentido original, amplio, donde había espacio no sólo para la técnica sino también

para la sociología, la ciencia política, la historia...y la moral. La crisis del modelo económico de inicios de los ochenta no debió tomar por sorpresa a la autora, pues para entonces ella era directora de la revista "El Cotidiano", publicada en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Atzacapotzalco -donde ya era profesora- y desde cuyas páginas se seguía paso a paso el desarrollo de la crisis mexicana, se analizaron sus causas y se previeron sus consecuencias. En realidad, este libro formado por 116 artículos publicados a lo largo de dos años, es la continuación de la tarea emprendida en la revista de la UAM por la autora y donde se hizo la disección de la problemática económica, política y social del México de los años ochenta, proceso que no hizo más que confirmar lo apropiado del análisis y lo necesario de la izquierda para dar voz a los intereses de una mayoría que iba a ser quien pagara con inflación y desempleo los platos rotos por la clase política que poco antes había prometido "administrar la prosperidad".

Una de las consecuencias del desastre económico mexicano de los años ochenta, fue la división en la cúpula del partido de Estado, la aparición de la "Corriente Democrática" y la sorprendente insurrección electoral de 1988 encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas (el Madero del final del siglo XX, según la autora). Si bien el neo cardenismo no pudo o supo desembocar entonces en el cambio de régimen, sí dejó vislumbrar esa posibilidad en un horizonte no muy lejano. Como sabemos, en 1988 el autoritarismo mexicano aún pudo disponer de la energía interna y externa suficiente para resistir la presión en favor del cambio e imponer, una vez más, al candidato del partido de Estado en la presidencia (el décimo primero al hilo). Rosa Albina Garavito, en unión de un amplio sector de izquierda, respondió a la derrota del 88 no con la desmovilización sino con la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es decir, con la creación de una estructura institucional nueva que permitiera reanudar, en mejores condiciones, el combate contra el viejo sistema.

En el curso de la lucha a contracorriente que debió seguir el PRD en el último decenio del siglo XX, nuestra autora, que había iniciado su actividad política en las reducidas pero intensas filas de una izquierda radical que, tras la represión de 1968, se propuso responder al fuego con el fuego por no tener alternativa, arribó al congreso federal en 1991 –primero como diputada y más tarde como senadora– convertida en dirigente y representante de una izquierda que había optado por la vía electoral. Desde la realidad mexicana, y coincidiendo con la desaparición del “socialismo real” soviético y teniendo aún en su favor los vientos de la “tercera ola democrática” que soplaban en el mundo, esa izquierda contribuyó decisivamente a modificar la dinámica del autoritarismo nacido de la Revolución Mexicana. En efecto, el PRD obligó al régimen a llevar a cabo un proceso de liberalización o flexibilización política –en este proceso, justo es reconocerlo, también participó la derecha democrática, es decir, el PAN –que no hubiera aceptado por decisión propia.

El PRD y los otros elementos de la oposición al régimen priísta pudieron entonces actuar con mayor libertad y eficacia usando los incipientes canales de la política electoral. Desde luego que lo hicieron con la conciencia de que se trataba de vías aún minadas por el fraude, la ilegalidad y la corrupción tradicionales del sistema al que se enfrentaban.

El aceptar jugar el papel de oposición electoral al PRI en las pos-trimerías del siglo pasado, como fue el caso de la autora de esta obra, no significó asumir un rol simbólico, testimonial, como hubiera sido el caso cuando el partido de Estado tenía el monopolio de todas las variables importantes del proceso político. En las nuevas condiciones, la oposición institucionalizada pudo contribuir a la transformación del marco legal y de la cultura política mexicanos. Se abrió entonces un espacio por donde era posible introducir de manera más o menos pacífica el cambio irreversible, el de fon-

do. A partir del 2000, la maestra Garavito dejó su posición como cuadro político de tiempo completo del PRD para volver a poner el acento en la observación crítica –muy crítica– de ese proceso de cambio y del desempeño de su propio partido.

Las elecciones del 2 de julio del año 2000 dieron como resultado que por primera vez en la historia del régimen del partido de Estado, del PRI, su candidato presidencial se viera obligado a aceptar la derrota. Era la primera vez en 71 años que el PRI perdía el control sobre la institución clave del sistema político mexicano. Es verdad que en varias ocasiones en ese periodo México había vivido procesos electorales realmente competidos, pero en ninguno de esos casos habían existido las condiciones adecuadas para transformar la energía liberada por el movimiento de oposición en algo constructivo, permanente y que contribuyera a la modernización y democratización de México. En 1929 con el vasconcelismo, en 1940 con el almazanismo, en 1946 con el padillismo y en 1952 con el henriquismo, las urnas se convirtieron en el sitio o al menos el pretexto, de la gran disputa política. Sin embargo, en esas cuatro ocasiones, el resultado electoral final, el oficial, sólo reflejó lo que el poder antidemocrático quiso –la reafirmación de las estructuras autoritarias–, y la oposición, impotente, se evaporó, se convirtió en desmovilización y en historia sin futuro. En 1988 se rompió ese patrón; esta vez la maduración de la sociedad mexicana, combinada con la voluntad de personajes como Rosa Albina Garavito, impidieron que la supuesta derrota de la oposición volviera a conducir a la revitalización de lo viejo, a la frustración, a la apatía y a la resignación de los opositores. El PRD, a contracorriente y a un costo altísimo, desproporcionado, se consolidó y actuó como ariete para golpear de manera eficaz sobre las cuarteaduras viejas –las del 68– y la nuevas –las del 88– de la legitimidad del régimen priísta.

Cuando finalmente en el 2000 llegó el cambio, éste no tuvo lugar desde la izquierda, que no pudo cosechar el fruto de sus inne-

gables esfuerzos por hacer realidad la democracia política en un terreno tan abonado por las fuerzas antidemocráticas como es el mexicano. El cambio fue encabezado por la otra oposición, la de derecha. Y aquí es el lugar adecuado para señalar que no se requiere tener una identificación con el PAN y con su visión del mundo y sus causas, para reconocer que desde 1939 ese partido inició un lento pero sistemático esfuerzo por construir una alternativa conservadora pero democrática al régimen autoritario, y que esa estrategia de inversión de energía política a largo plazo dio finalmente fruto en una sociedad donde los intereses conservadores tienen a su favor la cultura cívica dominante y el control de la mayoría de los nudos de poder estratégicos: medios masivos de comunicación, instituciones religiosas, centros académicos y, desde luego, el gran capital.

En el 2000, el PRD –un partido heredero de una izquierda histórica pero en sí mismo una organización joven y abundante en conflictos internos y donde quedan remanentes de las malas costumbres adquiridas en la cultura política tradicional– quedó como tercera fuerza electoral. Las razones de esta pérdida de importancia relativa de la izquierda en el proceso electoral respecto de lo logrado en 1988 son muchas, algunas atribuibles a errores propios y otras a causas externas, pero en cualquier caso es comprensible que una dirigente política como Rosa Albina Garavito, cuya contribución a la transformación política de México ha sido particularmente personal y mucho mayor que la de la mayoría de nosotros, se muestre, a la vez, crítica con su partido y muy escéptica sobre la verdadera naturaleza de lo que ocurrió en el 2000.

Desde la perspectiva de la autora, al provenir de la derecha, el cambio que tuvo lugar en el 2000 no equivale realmente a una transición a la democracia sino a una etapa más de la liberalización del autoritarismo. Es decir, que la transformación de la vida política mexicana ha sido más de forma que de fondo: cambiaron los perso-

najes al frente de las instituciones, fueron rostros nuevos la mayoría de los que conformaron la clase política que en diciembre del 2000 quedó al frente del Poder Ejecutivo mexicano, pero debido a su origen –el sector empresarial– los intereses que defienden resultaron ser, básica y naturalmente, los mismos que defendía o protegía el antiguo régimen. Se trata esta, desde luego, de una visión partidista que puede ser cuestionada, pero como en el análisis social la objetividad completa es imposible, entonces la percepción del México actual de Rosa Albina Garavito, simplemente es una de las posibles. El juicio que debe de hacer el lector de esta obra no es uno de “neutralidad objetiva” –esa no existe– versus “subjetividad partidista”, sino de calidad y utilidad del análisis concreto que aquí se le presenta. A mi juicio, *Los espejismos del cambio* no es la única interpretación posible del México de inicios del siglo XXI, pero sí una sin la cual ese México no se entendería cabalmente, sobre todo es sus aspectos más negativos que, desafortunadamente, no son secundarios sino centrales.

Desde el inicio, Rosa Albina Garavito subrayó la posibilidad –el peligro– de que detrás del cambio espectacular de partido, se pudiera intentar la preservación de algunos de los elementos más dañinos del pasado. Las áreas donde esto puede ocurrir son numerosas. Las finanzas públicas son tan precarias que mantienen al Estado casi en la impotencia, la investigación y el castigo a la corrupción institucionalizada del régimen priísta no se ha llevado con la velocidad y profundidad que se prometió, las ataduras corporativas que desde hace mucho mantienen sujeto al movimiento obrero a liderazgos corruptos y antidemocráticos, siguen firmemente en su lugar. Vicente Fox prometió la rápida y justa solución del problema vuelto a plantear por el estallido de la rebelión del neozapatismo en Chiapas en 1994, pero hasta hoy se le sigue dando la vuelta a la histórica demanda de dar forma a una autonomía indígena efectiva. La apertura económica frente a la hiperpotencia

del siglo XXI, Estados Unidos, presenta un desafío a la idea misma de nación mexicana que, de tan grande, no se ha querido o podido plantear y discutir a fondo. Relacionado y cubriendo todas las anteriores materias, esta un gran problema: el planteado por un modelo económico que por veinte años no ha podido reiniciar el crecimiento y que, además, es excluyente en extremo. El modelo, el neoliberal, persiste y se afianza; el nuevo gobierno simplemente no quiere o no puede, o ambas cosas a la vez, presentar una alternativa a la economía heredada y la marginación. La pobreza –que oficialmente en el 2002 abarcaba al 53% de la población– en vez de empezar a resolverse, se mantiene y se agudiza.

La visión de la realidad mexicana en esta última obra de Rosa Albina Garavito se estructura desde la izquierda, lo cual no le ha impedido a la autora hacer una dura crítica al propio partido del que ella proviene: el PRD. Ese partido que nació de la insurgencia electoral de 1988 no pudo, finalmente y siempre según la autora, colocarse al frente de lo que, para Garavito es la auténtica democracia que México requiere: moderna, que vaya más allá de lo electoral hasta dar forma a los canales por donde puedan correr en el futuro inmediato las luchas sociales que de todas maneras se van a tener que seguir dando, como la indígena o la sindical.

En suma, *Los espejismos del cambio* sostiene con buenos argumentos que el desmantelamiento del viejo sistema autoritario priísta se está llevando a cabo de manera lenta, parcial y contradictoria. Y si bien la democracia nunca podrá estar asegurada de una vez por todas, los peligros de retroceso aumentan en la medida en que se mantengan las medias tintas y no se enfrenten y desmantelen las múltiples estructuras e intereses del pasado que aún sobreviven y están dispuestos a recuperar las alturas de las que fueron desplazados.

Las razones del escepticismo de la autora sobre la naturaleza del cambio que tuvo lugar en las urnas de la jornada del 2 de julio del 2000, son buenas razones. Es natural que más de un lector no

comparta todos los valores, puntos de vista, perspectivas, razonamiento desarrollados por la autora de esta obra, pero su inteligencia, profesionalismo, experiencia directa en el proceso político y compromiso y congruencia con una visión sobre lo que debe y puede ser México, hacen de *Los espejismos del cambio* una obra que debe ser tomada en cuenta al evaluar la naturaleza del proceso histórico del México contemporáneo y advertir sus posibilidades y sus peligros de cara al futuro.





## Introducción

QUISO LA HISTORIA QUE EN MÉXICO coincidiera el fin de siglo y de milenio con la derrota del PRI después de setenta y un años en el poder. De la mano de las rupturas del calendario, aquel nuevo sujeto social, el ciudadano que emergió en las urnas del seis de julio de 1988, echó al PRI de Los Pinos de manera democrática y así marcó un quiebre en la vida política del país, la etapa de la alternancia en el poder que hasta ahora se niega a convertirse en transición a la democracia.

Muy lejos de siglos y milenios, en este libro reúno mis artículos semanales publicados en *El Universal* durante los dos últimos años. En ellos interrogo de manera interesada a la realidad, precisamente en torno a su capacidad para proyectar la conquista de la democracia electoral hacia otros órdenes de la vida política del país, y de esa manera lograr un nuevo pacto social que dé vida a la transformación democrática del Estado. En ese análisis terco y sistemático no pretendo ni creo en los juicios neutrales, fríos y distantes sobre el acontecer nacional, por el contrario, soy más bien partidaria de la observación comprometida, hago explícitas mis convicciones políticas y sólo trato de que esa toma de partido con las causas que considero justas, no se riña con la capacidad explicativa de la realidad. El lector juzgará si logro conciliar ambos propósitos.

El gobierno, los partidos y las luchas sociales en el marco de la situación económica, así como algunos elementos del contexto internacional, son los personajes recurrentes de la semana cuya presencia y acción aportan signos de posibles cambios en el sistema político nacional, o con mayor frecuencia del estancamiento, y hasta de la amenaza de retrocesos.

Los hechos, las declaraciones de los representantes de las fuerzas sociales y políticas, así como los datos crudos de la evolución económica, constituyen una abigarrada realidad cotidiana que pasa por el filtro del olfato y obsesiones de quien la analiza. El hecho que se destaca cada semana ya está por supuesto contaminado del criterio de selección personal, y sin embargo trata de ser fiel a una orientación: ubicar en cada actor político al representante de una clase, sector o grupo cuyo interés puede expresar el más amplio de la sociedad, o simplemente al pequeño y mezquino aliciente de un grupo, que no por su inmediatez, deja de ser relevante para el proceso político del país.

Así, calificar las acciones de las fuerzas sociales y los sujetos políticos en términos de su capacidad para alentar el proceso de liberalización-democratización, o en su caso de hacerlo retroceder, guía buena parte de la pasión de estas colaboraciones periodísticas semanales. Clase política y liderazgos se constituyen también en categorías para tratar de entender el devenir nacional.

La metodología utilizada es la aprendida en aquella magnífica aventura intelectual de veinte años atrás que fue la fundación de la revista *El Cotidiano*, esto es el seguimiento de la realidad actual para diagnosticar periodos en el acontecer nacional, definidos por las eventuales rupturas (coyunturas) en el proceso político que pueden llegar a configurar un nuevo régimen político.<sup>1,2</sup> Atrapada por

<sup>1</sup> Bolívar, Augusto, *Alternativas metodológicas en la aproximación al análisis de coyuntura, y La importancia y la necesidad del Análisis de Coyuntura, noviembre de 1983, documentos de trabajo para el Proyecto de seguimiento de la realidad mexicana en la década de los ochentas, realizado en los Dptos. de Sociología y de Economía de la UAM-A, que dio sustento al proyecto editorial de la revista El Cotidiano de la DCSH de la UAM-A, fundado en 1984*

<sup>2</sup> Para una definición de régimen político, véase, Bobbio, Norberto, et.al., *Diccionario de Política, Siglo XXI, editores, sexta edición, 1991, pp. 1363-1366*

el período que abrió la coyuntura del seis de julio de 1988, dejé de participar en el equipo editorial de esa revista para colaborar en otra apasionante tarea que fue la fundación y el desarrollo del PRD. Sin embargo, quizá entre oídos menos receptivos como pueden ser los de la militancia política, continué con la disciplina de escudriñar la realidad en mis colaboraciones periodísticas en *La Jornada*, y a partir de 1995 en *El Universal*. Esta práctica, combinada con la evidencia ineludible, en 1999-2000, del agotamiento del proyecto con el que nació el PRD<sup>3</sup> ha determinado que mi antigua militancia de observación y análisis de lo real no esté por ahora acompañada de la sistemática participación política que tuve hasta el año 2000. Los artículos que aquí se publican corresponden a esa etapa. Hago este corto relato quizá para ilustrar lo que es suficientemente claro: la pasión en el análisis político sirve no sólo para tratar de entender la realidad, sino también para comprometerse con su transformación. Claro, siempre que la realidad lo permita. Al menos así lo entiendo.

### CONTINUAMOS EN LA ETAPA DE LA LIBERALIZACIÓN POLÍTICA

En el mensaje político de su II Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión, el Presidente Fox señaló que “estamos en la primera fase de consolidación de la democracia”. Sin embargo, del seguimiento semanal de la realidad nacional surge un balance lejano a esta apreciación política del Presidente, en el que sólo se avizora una profundización del proceso de liberalización política,<sup>4</sup> proceso

<sup>3</sup> Véase, Garavito E., Rosa Albina, “El PRD, el partido que se niega a reconocer su triunfo”, en *El Cotidiano*, Núm 108, julio-agosto del 2001, DCSH, UAM-A, pp. 81-94.

<sup>4</sup> Entiendo por proceso de liberalización política la ampliación de las libertades ciudadanas como vía de legitimación de un sistema político. En un régimen popu-

en el que se encuentra inmerso el país desde hace treinta años y en el que la muy importante conquista del respeto al voto en julio del 2000 parecía ser su momento culminante. No obstante, esa conquista no ha sido suficiente para romper con los pilares que dieron fundamento al viejo régimen, de manera que a pesar de cambios importantes en el funcionamiento del sistema político, aún no se dan las rupturas necesarias para generalizar el funcionamiento de un nuevo conjunto de reglas plenamente democráticas.

Por otra parte, el futuro de ese proceso no está garantizado, es probable que la etapa que se abrió el dos de julio del 2000, contribuya a un largo proceso de desmantelamiento del viejo régimen, pero es posible también que el período se resuelva en una refuncionalización del mismo, con nuevos actores, pero con igual esencia. El juego que despliegan el gobierno y los dos principales partidos políticos, el PRI y el PAN, no podría calificarse como la oposición entre dos proyectos económicos, tampoco la disputa por instaurar una nueva institucionalidad política; por el contrario la lucha entre las cúpulas se reduce a tratar de dirimir qué sector de esa clase política gestiona el poder para continuar beneficiando a unos cuantos. La bisoña clase política que ha emergido del PAN y de los *Amigos de Fox* tiene la ventaja de la legitimidad otorgada por el voto ciudadano. Por su parte la vieja clase política priista –con todo y sus divisiones internas– lleva la ventaja del oficio desarrollado a lo largo de siete décadas en el poder.

*lista y autoritario como el mexicano, guarda especial significado el desarrollo de rasgos de una democracia liberal como es la legalización de los partidos, la libertad de expresión y el respeto al voto. Sin embargo este mayor respeto por las garantías individuales, aún no logra cambiar la esencia de un régimen antidemocrático fundamentado en el corporativismo autoritario. Para la distinción entre liberalización y transición a la democracia, Ver: O'Donnell y Schmitter, Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas (4), Paidós, Buenos Aires, 1988, pp. 20-23*

Los cambios generados a partir del período que se abrió con la coyuntura del 6 de julio de 1988, que continúan caracterizando al sistema después de julio del 2000, pero que aún no llegan a constituir una transición democrática, están a la vista:

- a) la consolidación de procesos electorales transparentes;
- b) el fin de un sistema de partido único para dar paso a la pluralidad política;
- c) el acotamiento del poder presidencial
- d) la presencia de rasgos significativos de independencia y contrapesos entre los poderes;
- e) el despliegue de mayores grados de libertad en la acción política de los gobernadores como esbozo de lo que en un futuro puede constituirse como un auténtico federalismo;
- f) una fuerte presencia y libertad de expresión de los medios de comunicación junto con una sociedad más atenta e informada;
- g) una mayor vigilancia de la sociedad y de nuevos órganos del Estado para el cumplimiento del respeto a los derechos humanos.

Ciertamente en relación a veinte años atrás, el país ha evolucionado positivamente hacia un sistema democrático; y sin embargo aún no vivimos una democracia plena. No podemos aún hablar del inicio de la transición a la democracia porque hasta ahora no se ha pactado la reforma del Estado que rediseñe las instituciones y su forma de funcionamiento para pasar a un régimen plenamente democrático. Varios intentos se han hecho al respecto, baste recordar el Pacto de los Pinos firmado por todos los partidos con el Presidente Ernesto Zedillo como testigo honorario el 17 de marzo de 1995, y en el gobierno de Vicente Fox, el acordado por los partidos con el Secretario de Gobernación, Santiago Creel, en octubre del 2001. Otro acuerdo, en este caso trascendente para la transformación democrática del Estado, fue el alcanzado en los Acuerdos de

San Andrés Larrainzar en 1996 como producto del diálogo con el EZLN para la reforma de los derechos y la cultura indígena, mismo que fue desconocido por el gobierno de Zedillo, retomado por Vicente Fox y finalmente desechado por el Congreso de la Unión.

Más adelante señalo el por qué de la importancia del proyecto de la autonomía indígena para la transición democrática del país, por ahora sólo me interesa documentar que los pactos con los partidos han terminado por ser marginales en el proceso político del país, fenómeno que estaría denotando la ausencia de liderazgos en el gobierno así como la carencia de visión histórica de los partidos, de manera que esos acuerdos terminan por ser los espacios de negociación para intereses particulares en una visión de muy corto plazo. Por su parte, en el caso de los Acuerdos de San Andrés, la trascendencia de lo pactado ha sido dejada en el aire por la falta de voluntad política de los partidos en el Congreso, y al final por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) al declarar improcedentes las controversias constitucionales interpuestas por más de 300 municipios con amplia presencia indígena.

El pacto necesario para la transición democrática requiere, además de la representación legítima de las diversas fuerzas sociales a través de los partidos o de otros actores políticos, del acuerdo en torno a un proyecto nacional moderno y democrático. De un proyecto y acuerdo de esta naturaleza se derivaría un sistema político basado en la observancia de la ley para otorgar certidumbre jurídica a los actores sociales, lo que construiría un sistema racional y previsible, muy lejano de la discrecionalidad y de las decisiones casuísticas que caracterizan a un sistema de dominación tradicional como aún es el nuestro.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Weber construye tres tipos ideales para entender los sistemas de dominación: la dominación legal, la tradicional, y la carismática, cuyas diferencias residen en las fuentes de legitimidad de cada uno para ejercer el poder. Mientras en el primer tipo de dominación, esa fuente es la ley, en el segundo la constituyen los hábitos, la

Obviamente, en las dimensiones de un pacto de esa naturaleza tendrían que estar presentes la garantía de los derechos individuales y sociales en el marco de un Estado soberano que logra insertarse de manera adecuada en el proceso de globalización. Ese nuevo pacto tendría además que plasmarse en una nueva constitución política. No sabemos cuánto tiempo sea necesario para que de la confrontación de fuerzas e intereses de las diversas clases y grupos sociales, finalmente ese pacto se logre, lo cierto es que en este seguimiento de la realidad política del país, vale la pena fijar la atención en los procesos cuyo desenlace finalmente sea el detonante para alcanzarlo. Se trataría ciertamente de un momento refundacional de la República, de un equivalente histórico al logrado por el Constituyente de 1917 que se plasmó en la Carta Magna. Si aquel pacto de 1917 expresó el desarrollo de las fuerzas sociales que estallaron en la revolución de 1910, el pacto social para el siglo XXI tendría que expresar las luchas desarrolladas a lo largo del siglo XX, las que, en su expresión moderna se encuentran dibujadas en la autonomía indígena.

Es claro que los siete cambios enunciados páginas atrás están muy lejos de constituir un nuevo pacto social para sentar las bases de un nuevo Estado-nación, de ahí que sostenga que esos cambios siguen formando parte de un largo proceso de liberalización política iniciado con la reforma de Jesús Reyes Heróles en 1978. No obstante, vale la pena detenernos un poco en cada uno de esos nuevos rasgos del funcionamiento del sistema político mexicano, de los cuales pocos corresponden a una nueva visión de Estado, y la mayoría se enmarca apenas en acciones de gobierno que no garantizan su continuidad.

*costumbre y la fidelidad personal del servidor público hacia quien detenta la autoridad. Véase Weber, Max, Economía y Sociedad, Tomo II, FCE, México, 1964, pp. 706-716.*



El cambio indudable por su significado y permanencia, es sin duda el relativo a la organización de comicios transparentes que garantizan el respeto a la voluntad ciudadana para elegir a sus gobernantes, una vez que los órganos electorales quedaron fuera de las manos del Ejecutivo para trasladarse a consejos ciudadanizados, autónomos e independientes. No fue una concesión graciosa de los gobiernos priístas, sino una conquista del tenaz movimiento democrático sobre todo a partir de julio de 1988. Es preciso recordar, por las consecuencias que todavía tiene para el período abierto el dos de julio del 2000, la alianza histórica del PAN con Carlos Salinas que obstaculizó el largo proceso de las reformas electorales iniciado en 1989 y concluido en 1997. El trueque estaba claro: legitimidad al gobierno de Salinas a pesar del fraude de 1988, a cambio del reconocimiento de los triunfos panistas. De esa discrecionalidad en los procesos electorales en lugar de la aplicación de normas de universal observancia, el resultado fue el fortalecimiento de los rasgos tradicionales del sistema político. Ese trueque se habría seguido retroalimentando hasta el infinito en perjuicio de la salud política de la República. Por fortuna la intransigencia democrática del PRD no cedió ante las limitadas reformas electorales que en cada ocasión consensaban el gobierno y el PAN, y por supuesto tampoco cedió el ciudadano como nuevo sujeto social y el movimiento democrático al que le dió vida.

Aunque con menor fuerza, entre los cambios políticos importantes registrados en los últimos doce años se encuentra el hecho de que ahora contamos con un sistema plural de partidos en el que destacan tres fuerzas políticas, pluralismo que sin embargo se ve limitado por la menor presencia electoral del PRD, que provoca que ese pluralismo se despliegue como un virtual bipartidismo. Al respecto sin embargo, es preciso registrar la importancia del papel jugado por el PRD en la discusión de la reforma fiscal en diciembre del 2001. Frente a los titubeos del PRI, y la urgencia por parte del gobierno para sacar adelante el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingre-

sos para el 2002, el PRD jugó como pivote para que finalmente se aprobaran reformas fiscales muy lejanas de la regresividad de la propuesta del Ejecutivo. Una reforma que ciertamente no tiene los alcances de conciliar fortalecimiento de las finanzas públicas con mecanismos redistributivos y de dinamización de la actividad económica, pero que sin duda marca una etapa importante en la relación entre los poderes y constituye un antecedente para documentar que existen alternativas al fundamentalismo económico gubernamental, que desde sexenios atrás, sostiene que la salud de las finanzas públicas depende de los impuestos indirectos que gravan más al consumo de los sectores de bajos ingresos. Que la nueva pluralidad política no termine consolidándose en un bipartidismo, depende de la capacidad del PRD para asumir un proyecto de izquierda democrático y moderno. Tema por cierto recurrente en los artículos aquí publicados.

Por su parte y a pesar de su acotamiento, el sistema presidencialista goza aún de amplios márgenes como para hacer predominar la voluntad del Poder Ejecutivo en la vida nacional, sobre todo en materia de política económica. Sólo para ejemplificar con un caso al respecto, hay que recordar que las reformas constitucionales de diciembre de 1982 que aprobaron el llamado sistema de planeación democrática (artículo 26), en los hechos legalizaron la prerrogativa que desde siempre había ejercido el Ejecutivo para definir, sin contrapesos del legislativo, la política económica, y además para no rendir cuentas sobre la falta de cumplimiento de metas y objetivos que se definen en el documento rector en la materia, esto es, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como en los planes sectoriales que se derivan del mismo. Obviamente esas facultades omnímodas tendrían que ser limitadas mediante las reformas necesarias al artículo 26 constitucional y su ley reglamentaria, la Ley Nacional de Planeación, a fin de que la sociedad formara parte de manera efectiva en la elaboración del PND, y el Congreso sancionara su cumplimiento.

Hasta ahora, la rendición de cuentas del Ejecutivo sobre el ejercicio del gasto público, ha sido muy deficiente.<sup>6</sup> Sin embargo con la creación, en 1998, de la Auditoría Superior de la Federación que sustituye a la Contaduría Mayor de Hacienda, es posible esperar mejores resultados en esa fiscalización, mismos que podremos valorar a partir de que se entregue la revisión de la Cuenta Pública del 2001 que estará a cargo del nuevo órgano fiscalizador. Al objetivo de alcanzar transparencia en el ejercicio del poder público –incluido el presupuestal–, seguramente también contribuirá la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información” aprobada a inicios del 2002 y que establece la obligación para los órganos de la Administración Pública Federal, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los entes autónomos, de proveer determinada información y el acceso a sus archivos por parte de los ciudadanos. Hasta ahora, durante el

<sup>6</sup> En diciembre de 1999, después de un minucioso análisis de los 31 tomos del Proyecto de Egresos del Presupuesto Federal para el 2000, investigación coordinada por el Dr. Juan Moreno Pérez, asesor del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, se detectaron gastos superfluos en las partidas 2 200 (Alimentos y utensilios), 2 700 (combustibles, lubricantes y aditivos), 3 200 (servicios de arrendamiento), 3 300 (servicios de asesoría, información, estudios e investigación) y 3 700 (servicios de traslado e instalación que en el caso del Poder Ejecutivo, alcanzaron la cifra de 1965.5 millones de pesos. Por su parte, el análisis de 1998 detectó también partidas superfluas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1999. Sólo para citar un caso: se detectó que la partida 1 500 en la Secretaría de Hacienda escondía percepciones que sumadas a las reconocidas por 103 606.88 pesos mensuales, elevaban el ingreso de los altos funcionarios de esa dependencia a 459,707.92 pesos mensuales. Habría bastado con que esos altos funcionarios renunciaran a la tercera parte de esos ingresos ocultos, para resolver la demanda de la comunidad universitaria de la UAM que reclamaba 300 millones de pesos de aumento para seguir adelante con sus proyectos de investigación y evitar recortes de personal. Documentos de trabajo del Área de Economía del GPPRD en el Senado de la República, diciembre de 1998 y 1999.

gobierno de Fox, el caso más notorio de prácticas que no se apegan a la norma establecida para el ejercicio del gasto público, –por el escándalo que causó– es el llamado *Toallagate*. Además de los daños al erario público y de los obstáculos para el desarrollo de una cultura tributaria sana, ese tipo de prácticas hacen perdurar al sistema político mexicano en una situación de premodernidad.

En cuanto a la mayor independencia entre los poderes, distingo la lograda por el Legislativo y la alcanzada por el Judicial. En este último caso esa autonomía ha tenido manifestaciones muy importantes, para que a la hora de interpretar la ley, se abran las puertas por ejemplo a la libertad sindical. Al respecto me refiero a los casos en que la *SJCN* ha resuelto a favor de organizaciones de burócratas para quienes se aplicaba el artículo 68 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, que establece el monopolio de la organización sindical, un presupuesto francamente violatorio de los derechos de libre afiliación.<sup>7</sup> La presencia de la *SJCN* como poder independiente se ha manifestado también en resolutivos de controversias del Legislativo contra el Ejecutivo, que dan la razón al primero, es el caso del decreto de la fructosa que echaba abajo lo aprobado por el Congreso en diciembre del 2001 para proteger a los productores de caña.

En el caso del Legislativo, a partir de la *mayor pluralidad política* de la representación popular, este ha dejado de ser la ventanilla de trámites de las iniciativas del Ejecutivo como ocurría todavía en el sexenio de Carlos Salinas, para convertirse en un espacio en donde realmente se desarrolla el proceso legislativo con un alto grado de independencia. Le hace falta ciertamente una *mayor profesionalización*. Diversos analistas sostienen que el escollo más fuerte para que esta independencia contribuya a la construcción de un pacto político para la transición, es que esa pluralidad en el Congreso de la Unión se concilie con la fluidez necesaria para la

<sup>7</sup> Véase, Alcalde Justiniani, Arturo, “Alcances sobre la jurisprudencia sobre la libertad sindical”, Documento de trabajo, 1999.

governabilidad democrática. Sin duda la funcionalidad y eficacia de un gobierno dividido como es ahora el mexicano, requiere de un gran acuerdo político entre el Ejecutivo y los partidos, como parte de la reforma democrática del Estado. Y seguramente en la agenda de esa reforma tendrían que estar presentes los cambios necesarios para pasar de un régimen presidencialista al semipresidencialismo; lo que limitaría las facultades del Presidente de manera institucional y daría espacio para la presencia de la pluralidad política en la toma de decisiones gubernamentales.<sup>8</sup>

Acotado el presidencialismo, y con una distribución plural del poder político en la geografía del país, los gobernadores de distintos partidos se han constituido en un factor relevante a la hora de la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito fiscal. La discusión sobre la reforma en esta materia desarrollada a finales del 2001, contó con las propuestas y la participación organizada de los gobernadores, entre los cuales destacaron, por el lado de la oposición, Ricardo Monreal, gobernador de Zacatecas y del PAN, Fernando Canales Clariond, gobernador de Nuevo León. Más allá de lo anecdótico, esta activa participación forma parte del proceso de liberalización política del país que podría culminar con la constitución de un auténtico federalismo.

Pero el activismo político de los gobernadores no siempre se manifiesta en torno a las nobles tareas de fortalecer el federalismo fiscal, también esos poderes locales se han puesto al servicio de conservar los cotos de poder del viejo régimen. El caso de Tabasco es paradigmático al respecto, con Roberto Madrazo, exgobernador de ese estado y actual presidente nacional del PRI, a la cabeza.

<sup>8</sup> Para una discusión sobre la necesidad de transitar hacia un régimen semipresidencial, véase, Varios autores, *¿Continuismo o democracia? Los contenidos de la transición, especialmente los trabajos de Arturo Valenzuela, Alonso Lujambio, y Porfirio Muñoz Ledo*, IERD, México, 1997.

Y por supuesto dentro de ese proceso de liberalización política, la presencia de medios de comunicación abiertos a la crítica y con alto grado de profesionalismo, marcan una gran diferencia en relación al monolitismo y subordinación de esos medios al poder establecido que prevalecía diez años atrás. En esa apertura ha llevado la delantera la radio, seguida por los medios impresos, para que en los últimos años también la televisión forme parte de ese proceso de democratización de la información. Quizá por eso fue tan contrastante el absurdo manejo que se hizo de los medios durante el II Informe de Gobierno del Presidente Fox, cuando la burda manipulación de las cámaras televisivas impidió que el público fuera testigo de las protestas de la oposición en el recinto parlamentario; como en los tiempos en que el Informe de Gobierno se convertía en el "día del Presidente". Falta aún la reforma sobre medios de comunicación, pero en los hechos, el funcionamiento de los mismos ha abonado al desarrollo de una cultura democrática. En este tema los dos años del gobierno foxista han sido de consolidación de ese respeto a la libertad de expresión. Sin duda un avance democrático muy importante.

Por su parte, la mayor vigilancia del respeto a los derechos humanos constituye también un cambio insoslayable durante la última década de la vida nacional. La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con las reformas constitucionales de 1992 y el posterior establecimiento de las Comisiones estatales, han abierto un cauce para la defensa del ciudadano frente a los excesos de la autoridad. Sin embargo, el hecho de que el marco legal que norma la acción de estos órganos, no considere el ámbito laboral como parte del universo de los derechos humanos, constituye una fuerte limitación para el desarrollo de una cultura y un Estado plenamente democráticos. Y para el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos, por supuesto destaca la creación, en diciembre del 2001, de la Fiscalía Especial para movimientos políticos y socia-

les del pasado. Sobre el significado de sus acciones volveré más adelante.

Aunque somero, el balance de los cambios más importantes durante los últimos veinte años de esta larga etapa de liberalización política del país, registra evidencias suficientes del lento dismantelamiento del régimen de partido de Estado que funcionó a lo largo de siete décadas, pero también muestra que el desenlace de ese proceso aún no está claro, y que hasta ahora la conquista del respeto al voto no ha sido capaz de cerrar el proceso de liberalización política para dar paso a un régimen plenamente democrático. Mientras el pacto para lograrlo no se alcance, no podremos hablar de que se ha iniciado la transición a la democracia.<sup>9</sup> Y también, mientras ese pacto no se logre, el sistema político mexicano corre el grave riesgo de la involución al autoritarismo de los viejos tiempos.

Si la democracia electoral no ha sido suficiente para instaurar un régimen de democracia plena, se debe fundamentalmente a que esa importante conquista apenas ha modificado la relación Estado-ciudadano, pero la misma no transformado la esencia de la relación entre el Estado y las organizaciones sociales caracterizada por el corporativismo. De lograrse ese cambio pasaríamos de la democracia electoral a la democracia participativa, esto es a la presencia y actuación de la ciudadanía organizada de manera no subordinada al Estado, en torno a sus intereses gremiales y sectoriales en la toma de decisiones políticas que afectan al rumbo de la nación.

Ciertamente existe un sector social para el cual el Estado sí diseñó ese esquema de participación en las decisiones de política económica, me refiero a los grandes grupos empresariales que gracias a la Ley de Cámaras, desde 1936 tienen la facultad de ser órganos

<sup>9</sup> Véase, Przeworski, Adam, *"Algunos problemas del estudio de la transición a la democracia"*, en *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Paidós, Buenos Aires, 1988

de consulta para la política económica. Privilegio que se fue haciendo cada vez más elitista. Al respecto vale la pena recordar que desde la institución de los pactos económicos en diciembre de 1987 y hasta la fecha, en las diversas comisiones de seguimiento de los mismos han estado los representantes de todos los sectores productivos, menos uno: los banqueros. El mensaje desde el Estado es claro: en la llamada política neoliberal todos los sectores sociales deben compartir responsabilidades para garantizar la estabilidad económica –unos más que otros, por supuesto, basta analizar la evolución precios-salarios– pero de esa responsabilidad está exento el sector bancario y financiero. Ni más ni menos que el sector que determina el comportamiento de una de las mercancías más importantes en el ciclo económico: el dinero y su precio, la tasa de interés. Efectivamente, este modelo es elitista aún para el sector empresarial.

#### PERO NO SE ALCANZA UN NUEVO PACTO SOCIAL

En ese contexto de liberalización política en que están comprendidos los dos primeros años del gobierno de Vicente Fox, no se han registrado los cambios para alcanzar un nuevo *pacto social*. En la búsqueda de las rupturas que den nacimiento a un nuevo pacto social y al inicio de la transición democrática, el lector se dará cuenta de mi abierto entusiasmo por el movimiento de la autonomía indígena plasmado en las demandas del EZLN y en los Acuerdos de San Andrés de 1996 sobre derechos y cultura indígenas. Estoy convencida de que los proyectos capaces de romper con el pasado, se gestan siempre desde abajo, al calor de las luchas de los que menos tienen. Así fue a principios del siglo XX cuando los campesinos empuñaron las armas para romper con la estructura oligárquica del porfiriato que maniataba el desarrollo capitalista del país. Sin esas luchas campesinas representadas emblemáticamente por las fuer-



zas del zapatismo y que cumplieron, como diría Lenin, con el papel del "burgués radical",<sup>10</sup> México no habría vivido un largo período de desarrollo estabilizador, inédito en el resto de los países de América Latina. Su secreto fue haber logrado la desamortización de la tierra en manos de los latifundistas gracias al reparto y a la reforma agraria, y haber liberado la mano de obra hasta entonces acasillada en las haciendas, y desde entonces convertida en la muy jugosa mercancía fuerza de trabajo para el desarrollo de las relaciones capitalistas.<sup>11</sup> La burguesía asociada con esos intereses latifundistas no podía levantar un proyecto progresista como el que sí levantaron los campesinos zapatistas.

Esa primera revolución social del siglo XX gestó un arreglo entre las clases que se plasmó como pacto social en la Carta Magna de 1917 y que dio vida a la constitución del Estado-nación en México, de la mano de la organización corporativa del régimen priísta. Una vez desmantelado ese pacto social a partir de 1982 con la inauguración de las políticas neoliberales, el reto de la democracia en gestación es lograr recrearlo a la luz de las nuevas condiciones históricas; por supuesto muy lejos del corporativismo. El abandono de aquel gran acuerdo social y político se ha sustituido por una política impuesta desde las cúpulas del poder; sin embargo ese nuevo proyecto que continúa siendo hegemónico a pesar del cambio de siglas en

<sup>10</sup> Lenin, V. I., "Programa agrario de la socialdemocracia" en *La cuestión agraria y los críticos de Marx*, Ed. Estudio, Buenos Aires, 1965

<sup>11</sup> Para entender mejor la funcionalidad que tuvo la reforma y el reparto agrario en la generación del llamado "milagro económico" mexicano, es interesante comparar las tareas que le asigna el modelo de Johnston y Mellor a la agricultura para el desarrollo de la industria con las cumplidas de manera puntual por ese sector en México a lo largo de tres décadas (1940-1970). Al respecto véase: Johnston, B y Mellor, J., "El papel de la agricultura en el desarrollo económico", en *American Economic Review*, 51:4, septiembre de 1961.

el Poder Ejecutivo, presenta serios obstáculos para constituirse como la base de un nuevo pacto social que garantice la paz social y la gobernabilidad democráticas. Algunas de las razones son las siguientes:

### LA POLÍTICA ECONÓMICA EXCLUYENTE

La política económica impuesta a partir de 1982 deja fuera de los beneficios del crecimiento a más de la mitad de la población. El deterioro en la generación de empleos que se registra desde entonces, producto de la caída de la inversión pública y privada, ha acumulado un déficit en la generación de puestos de trabajo que pone en serio riesgo la estabilidad social. Tres han sido las principales válvulas de escape a esa demanda de trabajo insatisfecha: el crecimiento de la migración hacia EUA;<sup>12</sup> la participación en actividades ilegales como el narcotráfico, y la llamada economía informal que absorbe a casi el 60% de la Población Económicamente Activa.<sup>13</sup> Pero la política económica de los últimos 20 años no sólo ha sido incapaz de generar los empleos suficientes, además ha dete-

<sup>12</sup> En la actualidad, el porcentaje de la población nacida en México que vive en EUA en relación a la población total, se ha multiplicado por dos en comparación con el punto histórico más alto alcanzado en el período inmediato posterior a la revolución (1920-1930), 7.75% y 3.73%, respectivamente; de manera que de cada 100 mexicanos que nacen en territorio nacional, ocho emigran. Información de Conapo.

<sup>13</sup> El 78.3% de la PEA gana menos de dos salarios mínimos y el 46% trabaja sin prestación alguna. Estadísticas Económicas, Indicadores de Empleo y Desempleo, INEGI, junio del 2000.

riorado el poder adquisitivo del salario, ha disminuido el gasto social y ha alentado la concentración del ingreso.<sup>14</sup>

Así a los asalariados se les ha golpeado como productores en su centro de trabajo y también como ciudadanos vía la caída del gasto social, un fenómeno permanente de la estrategia económica neoliberal. Ciertamente es necesario registrar que durante los dos últimos años, en términos reales, tanto el salario mínimo como el salario medio de la industria manufacturera han registrado una pequeña recuperación, debido a que en esos dos años el crecimiento inflacionario ha sido menor a la meta propuesta por el gobierno. En el caso del salario mínimo este crecimiento sería el primero registrado después de 23 años de caída ininterrumpida, fenómeno positivo y sin duda muy importante. Sin embargo, con una política salarial cuyos criterios discrecionales los define el Ejecutivo, es di-

<sup>14</sup> Según cálculos propios, si sumamos la diferencia entre empleos requeridos y generados de 1982 al 2000 se habría acumulado un déficit de 12 millones 600 mil puestos de trabajo. Según Julio López, de 1982 a 1994, ese déficit creció en 10 millones de puestos de trabajo. Véase, López, Julio, "El empleo durante las reformas", en Clavijo, Fernando (compilador), *Reformas económicas en México 1982-1999*, CEPAL, EAEC S.C., y FCE, serie Lecturas, Núm. 92, México, 2000, p. 315. En 1999, el gasto social como porcentaje del PIB llegó a 8.81%, muy semejante al 8.51% de 1982 pero aún por debajo del 9.05% de 1994. El gasto social como porcentaje del gasto programable se ha recuperado de manera sostenida a partir de 1984, sin embargo el gasto programable como porcentaje del PIB cayó de 27.9% en 1981 a 13.9% en 1999 (descontando el costo de la reforma de la seguridad social). "Notas sobre algunos aspectos de la política social del gobierno mexicano", Documento de trabajo del Área de Economía del GEPROD en el Senado de la República, elaborado por Rino Torres, México, 27 de septiembre de 1999. En 1984, el 20% de la población más pobre percibía el 4.82% del ingreso de los hogares, mientras que el 20% más rico concentraba el 49.53%. Para el año 2000, los datos fueron 4.49% y 54.77% respectivamente. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, INEGI, 1984 y 2000.

ficil argumentar que a partir de ahora esas remuneraciones tendrán una mejoría sostenida. Para que ese crecimiento no fuese efímero, tendría que haber una modificación al régimen salarial, lo que a su vez requiere de una reforma al título V del artículo 123 constitucional. Cambios que no están contemplados, como ninguno al nivel constitucional, en la discusión de la Mesa central de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la reforma laboral.

Pero además de la posibilidad de que se trate solamente de un crecimiento salarial efímero, lo cierto es que el pago de la deuda social con los trabajadores, acumulada por la pérdida de su poder adquisitivo durante esos 23 años, requiere de una discusión en cuanto a su volumen y a sus formas de pago. De la misma manera en que el gobierno se compromete a pagar las deudas externa e interna, así también, la transición democrática requeriría de un plan de pago a esa deuda social. Se trataría por supuesto de una política de Estado, que trasciende a las de gobierno para cambiar las instituciones que rigen la determinación de los salarios mínimos,<sup>15</sup> y también de una política de Estado para el gasto social.

Las consecuencias de la estrategia económica excluyente, no se agotan en los perniciosos efectos sobre los niveles de vida de la población y de la justicia social, sino que se convierten en una condición determinante para la forma en que se reproduce el ciclo económico en el país, para el cual el tamaño y la fortaleza del mercado interno se han convertido en datos marginales para la rentabilidad de las inversiones. Esa reducción del mercado interno se sustituye por un vigoroso sector exportador cuya característica prin-

<sup>15</sup> Una propuesta de cambio del régimen salarial está contenida en el Anteproyecto de reforma laboral del Partido de la Revolución Democrática, GPRD en la Cámara de Diputados, LVII Legislatura, México, 1998, 373 pp.

cial es su casi nula integración con la estructura productiva nacional.<sup>16</sup>

El deterioro del empleo, del salario y la agudización en la desigualdad de la distribución del ingreso, sólo podría revertirse con una estrategia económica que modificara la estructura de precios relativos entre trabajo y capital, a favor del primero, en tanto esa estrategia ha estado orientada a la recuperación de la tasa de ganancia por todos los medios. La cuestión central a colocar en el debate económico es cuánto tiempo más puede sostenerse una política económica que ya está afectando seriamente la paz social y la gobernabilidad democráticas.

Es evidente que la recomposición del patrón de acumulación capitalista en México basada en la exclusión de las grandes mayorías de los beneficios del crecimiento económico, obstaculiza las condiciones para lograr un acuerdo social que sienta las bases para el desarrollo de un Estado democrático que permita transitar desde la democracia electoral hacia la democracia participativa. De ese tipo de recomposición económica lo que se desprende es un desfase peligroso entre legitimidad electoral y legitimidad social. A partir de la toma de posesión de Vicente Fox, el intento de tapar ese bache ha consistido en promover la popularidad de la figura presidencial. Proyectar una figura, una imagen, en lugar de abrir los cauces a la legitimidad que podría otorgar el consenso sobre políticas de Estado incluyentes y democráticas, ha sido una de las novedades del cambio a partir del 2000, no porque los gobiernos priístas de los dos últimos sexenios sobre todo, no estuviesen atentos a las encuestas de popularidad, sino porque en el caso del presidente Vi-

<sup>16</sup> El coeficiente de importaciones del sector manufacturero (*Importaciones/PIB*), pasó de 40.54% en 1980 a 90% en 1996. Véase Dussel Peters, Enrique, *La economía de la polarización. Teoría y evolución del cambio estructural en las manufacturas mexicanas (1988-1996)* UNAM y Ed. Jus, 1997, México, p. 190.

cente Fox, estas se han convertido casi en el único parámetro para decidir sobre sus acciones de gobierno. La ausencia de una visión de estadista se sustituye por el microanálisis de las encuestas de popularidad.

## LA REFUNCIONALIZACIÓN DEL CORPORATIVISMO

En el despliegue de una política impuesta desde las cúpulas del poder, y como un obstáculo más a la creación de condiciones para la transición democrática, se encuentra la relación corporativa de las organizaciones sindicales heredadas del régimen priísta. Consideradas como un estorbo para la política de modernización económica inaugurada en el sexenio de Miguel de la Madrid, veinte años después no han sido sustituidas por organizaciones democráticas y representativas de los trabajadores, entre otras razones, porque el régimen autoritario aún imperante las refuncionaliza para seguir garantizando el control político de los asalariados.

La alternancia en el Ejecutivo Federal, pudo convertirse en condición propicia para definir una nueva relación con esas organizaciones sindicales, para iniciar el desmantelamiento del corporativismo como pilar de un Estado antidemocrático. Sin embargo, muy pronto los signos de la política sindical aportaron evidencia en el sentido de que más que desmantelar, se trataba de refuncionalizar esa relación. Con el nombramiento de un representante del sector empresarial, Carlos Abascal Carranza (exdirigente de Coparmex), al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS), difícilmente podía esperarse la promoción de una reforma laboral que sienta las bases para la democratización de la vida sindical. En un proyecto empresarial con visión histórica, esa democratización otorgaría certidumbre jurídica a las relaciones laborales y desarrollaría una cultura laboral a favor de la productividad. Pero es evidente que el empresariado mexicano no tiene una

visión histórica y que en cambio prefiere la ganancia fácil que le reeditúan los bajos salarios y la flexibilización de los procesos de trabajo, para lo cual opta por reproducir las relaciones autoritarias y corporativas del sindicalismo oficial.

La Mesa Central de Trabajo para la Reforma Laboral, instalada por el nuevo Secretario con la participación de los representantes patronales, el Congreso del Trabajo, y la UNT, concluyó sus elaboraciones sin la participación de esta última, y con el aparente acuerdo durante la última semana de julio del 2002 en torno a un proyecto de reforma laboral. De acuerdo a especialistas del derecho del trabajo, como Arturo Alcalde Justiniani, la propuesta consensada entre empresarios y Congreso del Trabajo, matiza el carácter tutelar de la Ley Federal del Trabajo; impone obstáculos inéditos al sindicalismo independiente para lograr la titularidad de los contratos colectivos, así como para el registro sindical; limita el voto secreto en la elección de la directiva sindical sólo a los casos en que haya más de una planilla; mientras que a los contratos de protección se les protege con la negativa a aceptar demandas de titularidad cuando exista alguna en curso, requisito que puede esconder algún subterfugio de patrones y dueños de contratos. Según Alcalde, se atenta también contra el derecho de huelga al permitir que la autoridad laboral pueda diferir la fecha del estallamiento, mientras que la jornada de trabajo queda en la ambigua definición de que podrá adecuarse a las necesidades de la empresa “siempre que no se labore una jornada inhumana”.<sup>17</sup>

Este tipo de acuerdos, estarían documentando la conciliación de intereses entre empresarios, gobierno y las organizaciones sindicales oficiales, para flexibilizar las condiciones laborales y dejar intocado el poder corporativo de dichos sindicatos. Por lo demás, es obvio que esa refuncionalización del sindicalismo oficial fortale-

<sup>17</sup> *Entrevista de Fabiola Martínez con Arturo Alcalde Justiniani, La Jornada, 12 de septiembre del 2002, p. 44.*

ce el poder del PRI y alienta su existencia como organismo clave para la legitimidad política y social del Estado.

Junto con el sector de energéticos, el laboral forma parte de los proyectos de reforma estructural del gobierno de Fox y ambos constituyen los últimos temas de un ciclo de cambios estructurales que se inició veinte años atrás. Eliminar o matizar el carácter tutelar de la LFT legalizaría el cambio de relaciones entre trabajo y capital que en los hechos ya se ha aplicado, y que deja en la indefensión al trabajador frente a la fuerza de los patrones. Estos cambios tratan de hacer nugatorios los derechos sociales plasmados en el art. 123 constitucional, y de revertir la concepción de que a una relación entre desiguales es necesario darle un trato de desiguales mediante la tutela del derecho del más débil, *para orientarla hacia aquella* del siglo XIX que suponía que la sociedad está constituida por la suma de individuos aislados en una relación de iguales.

#### LA NEGACIÓN DE LA AUTONOMÍA INDÍGENA

En los dos primeros años del gobierno de la *alternancia*, se abrió la expectativa de que finalmente se cumpliera con los Acuerdos de San Andrés, expectativa que se cerró con la resolución de la SCJN del 6 de septiembre del 2002 en el sentido de desechar por improcedentes las controversias constitucionales presentadas contra las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en abril del 2001, reformas distantes de dichos acuerdos.

La respuesta de la Corte cierra los recursos jurídicos que habrían permitido reabrir la discusión sobre el tema de la autonomía indígena. El asunto es trascendental para el futuro de la transición en México, por la negativa a otorgar reconocimiento como sujetos de derecho público a los pueblos indígenas quienes han estado excluidos del Estado desde siempre, y quienes, por las razones que preciso en el artículo “Golpe a la democracia” del 11 de septiembre



del 2002, y en los correspondientes al período de la caravana zapatista a la Ciudad de México a inicios del 2001, estarían aportando elementos refundacionales para la organización del Estado-nación, que no están presentes en ningún otro proyecto.

Una vez conocida la respuesta de la SCJN, el PRD ha declarado que presentará las iniciativas de reforma necesarias para recuperar la propuesta de la Cocopa en la que se plasmaron los acuerdos del gobierno de Zedillo con el EZLN. Ciertamente esa iniciativa podría reabrir el proceso legislativo, sin embargo, es difícil pensar que con la correlación de fuerzas que priva en el Congreso de la Unión cualquier iniciativa sobre el tema no termine en la congeladora o sufra la misma suerte que la elaborada por la Cocopa. Por lo demás, los pronósticos electorales para el 2003 tampoco favorecen la posibilidad de cambiar esa correlación de fuerzas a favor de la autonomía indígena.

El incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, efectivamente está denotando una falla de las instituciones. Aunque el Presidente Fox hizo suya la iniciativa de la Cocopa y la envió al Congreso, lo cierto es que no se vio ningún esfuerzo político de su parte para convencer a los legisladores de su partido para que la respaldaran. De esta manera, responsabiliza al Congreso y se "lava las manos frente a la sociedad". A pesar de ello, no es posible negar el valor político de la decisión de suscribir esa iniciativa, así como la de otorgar todas las facilidades para la realización de la caravana de los zapatistas. Por su parte, las posiciones del Poder Legislativo y del Judicial evidencian que el racismo se encuentra presente, no sólo en la sociedad, sino también en las instituciones del Estado.

Después de la resolución de la SCJN y hasta el momento de escribir estas líneas, el EZLN no ha manifestado públicamente su respuesta a esa decisión. Pero ciertamente, cerrar las puertas al proceso de discusión por parte del máximo órgano del poder judicial, proyecta una sombra ominosa sobre la paz social y trata de marginar a la

autonomía indígena como el proyecto capaz de refundar democráticamente al Estado.

## EL DESASTRE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Los límites que la economía define para la acción de los sujetos sociales, también determinan de manera importante la posible transición. En una situación de estancamiento económico, muy lejos de la promesa de campaña de un crecimiento del 7% anual, el gobierno foxista hace alarde de la estabilidad de precios y del tipo de cambio. Sin embargo, esa estabilidad se encuentra amenazada por el desastre de las finanzas públicas heredado de los gobiernos de sus predecesores, desastre que multiplica el déficit real de las finanzas muy por encima del reconocido oficialmente, y que tiene su origen en la llamada deuda escondida, entre la que se encuentra de manera determinante la del Fobaproa, ahora legalizada en el IPAB.

Ese desastre de las finanzas públicas se ha convertido en una camisa de fuerza para todos los actores políticos, y no sólo un perjuicio para las grandes mayorías, por la continuidad de las políticas de austeridad que no permiten desplegar adecuadamente el gasto social. Gobernadores de diversos signos políticos presionan para eliminar las trabas a las participaciones federales, aunque PRI y PAN se muerdan la cola de la complicidad para no abrir los expedientes del Fobaproa a fin de depurar esa deuda. Ese rescate bancario que además de tener postrada la capacidad de gasto público, constituyó un gran atraco a la nación y una fuente de acumulación para el empresariado del neoliberalismo, sector cuyos intereses han estado representando PRI y PAN. Continuar con la debilidad financiera del gobierno sin acometer una discusión abierta y responsable sobre el rescate bancario y la reforma fiscal, hace peligrar seriamente la salud de la economía nacional, y por supuesto se constituye en



2893255

un gran obstáculo para pasar de la alternancia a la transición democrática.

### LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

La penetración de la industria del narcotráfico y del crimen organizado en las instituciones del Estado, tiene ya larga data como parte de la acumulación permanente que en México ha significado detentar puestos públicos; el mismo sentido tiene la generalización de la corrupción con el consecuente deterioro de la salud de las instituciones republicanas. No es que antes de 1982 esa falta de vigencia del Estado de Derecho no haya existido, más bien fue consustancial al régimen priista, el problema es que desde entonces y hasta ahora, la escala de violaciones a la legalidad establecida significa una densidad que atenta seriamente contra la gobernabilidad democrática.

En el gobierno del cambio, la lucha contra la corrupción se ha dado en los límites que establece el poder del PRI como posible aliado político en un gobierno dividido, idea que desarrollo páginas adelante, mientras que en la lucha contra el narcotráfico, ha logrado importantes detenciones a partir de las cuales aún es prematuro hacer un balance sobre los resultados efectivos de la lucha contra esa medusa. Pero sin duda, el trueque entre impunidad por legitimidad se convertiría en un obstáculo más al pacto para una transición democrática que reclama la vigencia del estado de derecho. Una estrategia que asomó desde el 25 de julio del 2001, cuando los Secretarios de Gobernación y de la Contraloría, dieron al PRI las seguridades de la impunidad, hecho que se comenta en el artículo "El pacto silencioso" del 8 de agosto del 2001 publicado en este libro.

## LA APERTURA ECONÓMICA

Pactar un acuerdo de apertura económica indiscriminada en condiciones tan desventajosas frente a EUA, como es el caso del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, deja al gobierno muy pocos grados de libertad para gestionar adecuadamente su relación con el país más poderoso de la tierra, con el que, por si fuera poco compartimos más de tres mil kilómetros de frontera y en una etapa en que las inserciones inadecuadas a la globalización definen serios riesgos para la viabilidad de los países como naciones independientes.

En esa apertura el tema de los trabajadores migratorios se hizo a un lado. El Presidente Fox lo colocó adecuadamente en la agenda bilateral en el horizonte de abatir las fronteras para esos trabajadores, sin embargo muy pronto ese tema se fue diluyendo en la agenda para continuar con la subordinación que caracterizó a los gobiernos priístas en términos de política migratoria frente a EUA. Los atentados del 11 de septiembre en *Estados Unidos*, han venido a profundizar la política antimigratoria de ese país y a agravar la situación de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, sin que se avizore una estrategia inteligente para responder a esa coyuntura por parte del gobierno de México. Por el contrario, el episodio con Fidel Castro durante la Cumbre de la ONU sobre financiamiento para el desarrollo, y el subsecuente deterioro de las relaciones diplomáticas con la isla, reduce los grados de libertad del gobierno de México para gestionar su delicada relación con el país más poderoso del mundo. Si a ello agregamos las consecuencias económicas de la casi total apertura del sector agropecuario a partir del 2003; ciertamente podemos afirmar que en materia de relaciones exteriores la estrategia del gobierno de Fox no es la mejor para coadyuvar a la posible transición.

## PROYECTOS OBSOLETOS, ACTORES POLÍTICOS AGOTADOS

Por si estos obstáculos fueran pocos para lograr un acuerdo político duradero para la reforma democrática del Estado, es necesario recordar que ese pacto requiere además de un proyecto moderno y democrático, que con visión de futuro sea capaz de empujar la alternancia en el poder hacia la transición a la democracia; y requiere también de fuerzas sociales y políticas capaces de sustentar ese proyecto.

Por las razones expuestas arriba, el portador de ese proyecto no es el gobierno ni su partido el PAN, en tanto los intereses que representan son los de una burguesía parásita y clientelar, antes a la sombra del Estado, ahora a la sombra del capital extranjero, al que ya se acogió también el sector bancario y financiero. La mejor evidencia de esta incapacidad es la continuidad de la política económica de Fox y su complicidad con el Fobaproa.

Tampoco es el caso del PRI, partido que avaló el proyecto excluyente de los tecnócratas desde 1982, proyecto que a su vez contó con el apoyo panista mediante la alianza histórica de ese partido con el gobierno de Carlos Salinas. En los artículos aquí compilados esbozo la hipótesis de que esa alianza histórica y en consecuencia apoyo al proyecto salinista, continúa funcionando en el gobierno de Fox, y que en la recomposición del PRI la fracción que está hegemonizando el proceso encabezada por Roberto Madrazo, responde a esos intereses.

Todo parece indicar que en medio de la alternancia política, se continúa viviendo el conflicto interno del PRI en torno a su modernización: si de la mano de las fuerzas corporativas o ciudadanizando su forma de funcionamiento. Ese proceso de recomposición habría iniciado con el golpe asestado por el gobierno de Miguel de la Madrid a las grandes centrales sindicales a través de la política laboral de deterioro del salario y del empleo, para después ser articulado por Carlos Salinas mediante la práctica gubernamental de sustituir

derechos sociales por derechos individuales con la inauguración de un programa nacional de solidaridad, programa que ha cambiado de nombre pero que continúa aplicándose, incluso por el gobierno de Fox.

Colocar el combate a la pobreza en el centro de la política social, para hacer a un lado el objetivo de la justicia social mediante el cumplimiento de los derechos sociales, ha sido uno de los pilares de la política neoliberal que Carlos Salinas bautizó con la ideología del liberalismo social para dejar atrás la del nacionalismo revolucionario. Debilitar al corporativismo mediante esa política, no significó sin embargo su desmantelamiento, sino simplemente su refuncionalización. Y ese proceso continúa presente después de la derrota presidencial priísta.

Las coincidencias entre el proyecto salinista y el panista-foxista, le están dando al PRI el aliento necesario para no derrumbarse, aún sin el pivote del presidencialismo como el eje articulador de su acción. Y la continuidad de esa alianza se proyecta como un serio obstáculo a la plena democratización del país.

Una de las expresiones más nítidas de esa alianza es el caso del *Pemexgate*, en el que los vericuetos del proceso jurídico en contra de altos funcionarios de Pemex del sexenio zedillista y de los jefes sindicales, pareciera constituirse en el espacio para la negociación política en el que estarían presentes los temas de la investigación del origen de los recursos de los *Amigos de Fox* en el proceso electoral del 2000, y también el apoyo priísta a las reformas eléctrica y laboral.

La coincidencia entre los proyectos de modernización excluyente de ambos sectores de la clase política, es la que sustenta la tesis de que en las elecciones del PRI ganó el candidato de Fox, de manera que en torno al debate sobre la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo que se desplegará a finales del 2002, se estaría construyendo el escenario para que esa alianza histórica empiece a rendir frutos. De ahí también la explicación a la aparente contradicción de

que Vicente Fox haya anunciado en su II Informe de Gobierno que es “la hora de los acuerdos” y que casi de inmediato la Procuraduría General de la República (PGR) haya solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero de los dirigentes sindicales Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana para iniciar su enjuiciamiento por el desvío de recursos de la paraestatal a la campaña electoral de Labastida. En realidad las acusaciones contra los dirigentes sindicales se constituyen en una excelente arma de presión para alcanzar los acuerdos sobre las reformas estructurales pendientes.

Si los acontecimientos futuros respaldan esta hipótesis, entonces estaremos presenciando la funcionalidad de esa alianza para que la alternancia se quede sólo en eso. Con el trueque entre impunidad y apoyo político, la vigencia del régimen de derecho, consustancial a todo Estado moderno y democrático se habrá pospuesto una vez más.

Para quien pensaba que el llamado gobierno del cambio habría significado un parteaguas con el pasado y junto con ello un decidido combate contra la impunidad, el *Pemexgate* y el encriptamiento de los expedientes del Fobaproa están ilustrando con claridad que el gobierno de Fox se sostiene en las complicidades PRI-PAN del pasado y mantiene la continuidad del mismo proyecto económico. En todo caso, como afirmo en el artículo “El PRI en la alternancia” del 23 de enero del 2002, la disputa se refiere a la definición en torno a qué sector de la clase política gestiona y usufructúa el mismo proyecto. No es casual que en cuanto a rompimientos con el pasado, la única instancia de investigación que denota activismo sea la Fiscalía Especial de la PGR para la investigación de la llamada guerra sucia, pero tampoco es casual que los indiciados en los procesos abiertos sean los priístas del populismo, no los del neoliberalismo. Y a pesar de esa distinción, exploro la tesis de que esas investigaciones no tendrán serias consecuencias judiciales para los señalados como responsables, en tanto la maraña de complicidades entre priístas populistas y “modernos” es bastante intrincada. Lo que no

va en detrimento de la importancia política, para el desarrollo de una cultura democrática, de documentar los crímenes de Estado frente a esa fiscalía.

En cuanto a la Iglesia, actor político manifiesto y de amplia presencia, sobre todo a partir de las reformas constitucionales de 1992 que legalizaron sus relaciones con el Estado, es evidente el papel que está jugando a favor de una regresión en el carácter laico del Estado. Su posición en contra de las políticas de salud pública como la lucha contra el sida y por la legalización del aborto; su presión para disminuir el carácter laico de la educación y su intención de limitar las libertades culturales, han sido hasta ahora ineficaces frente a una sociedad más liberal e informada, sin embargo aprovechando el conservadurismo del partido en el gobierno, continuarán con sus campañas. Por su parte el desarrollo de la visita del Papa de julio del 2002, fue motivo para que se manifestara el oportunismo de casi todos los actores políticos en su trato con el jerarca de la Iglesia Católica, oportunismo en el que destacó el Presidente, conductas que significan serios riesgos para el futuro de la laicidad del Estado. Por todo ello y a la hora de hacer el balance de los obstáculos a la democratización plena del país, el papel retrógado de la Iglesia, sin duda forma parte predominante en ese elenco.

Por tratarse del partido opositor de izquierda, podría pensarse que el PRD es el portador del proyecto democrático y moderno que se requiere para la transición. Tampoco es el caso. Su proyecto fue moderno mientras funcionó como el organizador del movimiento democrático surgido en 1988, y supo hacer suya la bandera de la transparencia electoral de manera radical, hasta lograr arrancar la organización electoral de manos del gobierno con la ciudadanización del IFE, que en el 2000 permitió que finalmente el sufragio efectivo fuese una realidad en el país después de 90 años de levantada esa demanda. De ahí mi tesis de que Cuauhtémoc Cárdenas es el Madero de fin de siglo.



Pero esa modernidad, a pesar de su importancia, sólo abarca la democracia electoral, la relación del ciudadano con el Estado en el momento de las urnas. En cambio un proyecto incluyente, requiere de la democracia participativa para decidir *no sólo quiénes son los gobernantes, sino cómo y con qué política gobiernan*. Para esa modernidad democrática el PRD no tiene proyecto y *prefiere continuar* con las propuestas de una política redistributiva y paternalista desde arriba, como en los mejores tiempos del PRI. Ha preferido también no respetar su legalidad interna y cultivar relaciones clientelares con las organizaciones sociales que le son afines. Hasta ahora no ha sido capaz de hacer suyo el proyecto de la democracia y la autonomía de los sindicatos a pesar de tener en sus manos el anteproyecto, citado páginas atrás, de reforma laboral constitucional y legal, elaborado en 1997 y publicado en 1998. Aunque sí apoya esas demandas, el hecho es que no se ha puesto a la cabeza de una discusión propositiva frente a los retos del mundo del trabajo para el siglo que comienza.

El atraso de buena parte del sindicalismo democrático, que prefiere resguardarse en el marco jurídico existente antes que responder a esos desafíos, junto con el oportunismo electoral del PRD, han hecho que este último asuma una actitud bastante pasiva y seguidista frente a un tema nodal para las transformaciones democráticas del país. No podrá seguir así por mucho tiempo, pues es muy probable que antes de que concluya el año, el Ejecutivo presente ante el Congreso una iniciativa de reforma laboral consensada con el Congreso del Trabajo y con las cúpulas empresariales.

Por otro lado, en abril del 2001, el grupo parlamentario del PRD en el Senado desechó la iniciativa de la Cocopa para votar a favor de una propuesta muy lejana de los Acuerdos de San Andrés. Un partido de izquierda que no coloca en el centro de su proyecto las autonomías sindical e indígena, es un partido que no tiene plan para el futuro. Sí para resisitir las políticas neoliberales y las que atentan contra las libertades individuales. Sin embargo, para ser

alternativa real de poder no basta con resistir, es necesario levantar las reivindicaciones que logren romper con la estructura autoritaria del Estado mexicano, y en esa estructura está el corporativismo y la negación del reconocimiento como sujetos políticos de derecho público a los pueblos indios. Hacer realidad esas libertades y autonomías abriría las puertas a la transformación democrática del Estado. Daría paso a la democracia participativa.

Esta orfandad de un proyecto democrático y moderno del partido de izquierda se constituye en un factor explicativo del empantanamiento político del país. Nutrirse del pasado o del interés más inmediato y parcial, provoca también que ningún acuerdo entre las cúpulas de la clase política perdure o sea significativo para transitar hacia un nuevo período y hacia un régimen plenamente democrático.

### EL CAMBIO VIENE DE ABAJO....O NO VENDRÁ

La ausencia de esa propuesta explica también el desánimo electoral de la ciudadanía. El crecimiento del abstencionismo en todas las elecciones locales después del 2 de julio del 2000 es ya motivo de discusión entre los especialistas. Pareciera que el pragmatismo ciudadano usó el arma de su voto sólo para sacar al PRI de Los Pinos, mientras ese mismo ciudadano regresa a sus luchas sectoriales por reivindicaciones económicas y sociales, ya no por demandas políticas como sucedió de 1988 a 1994 sobre todo, pero también hasta el 2000. Ese reciente movimiento pendular en el comportamiento electoral, y el tipo de participación política de la ciudadanía, podrían estar fortaleciendo la hipótesis del fin de un ciclo histórico que se abrió en 1910 y se cerró en el 2000. Y que después de la conquista del respeto al voto, y de la emergencia del ciudadano como nuevo sujeto social, ahora ese sujeto esté reubicándose en su inserción específica en la sociedad para responder al deterioro alarmante de

sus niveles de vida, para empezar a ponerle apellidos a la democracia.

Llaman la atención al respecto, todas las movilizaciones de los productores del sector primario que demandan protección y apoyo frente a una despiadada competencia internacional por la apertura de las fronteras comerciales desde la entrada en vigor del TLCAN, apertura que se ampliará a la casi totalidad de los productos a partir de enero del 2003. Han estado presentes en estas movilizaciones los cañeros por la entrada de la fructosa, los productores de piña, de arroz, de frijol y de maíz, también los pescadores ribereños. No se trata de movilizaciones orquestadas desde alguna organización corporativa priísta para negociar prebendas con el gobierno de Fox, sino de productores que se autoorganizan al calor de sus necesidades sociales.

Pero sin duda la movilización social más significativa después de la caravana zapatista a la Cd. de México, fue la de los ejidatarios de San Salvador Atenco en contra de la construcción del Aeropuerto de la Cd. de México en Texcoco, movimiento que se analiza en varios artículos de este libro y cuyo tratamiento por parte del gobierno evidencia de manera importante el proceso de liberalización política en que se encuentra el país. Además de la defensa de la dignidad, reivindicación que a muchos les parece etérea y romántica, llama la atención en ese movimiento la emergencia de nuevos liderazgos, la ausencia de partidos, y la influencia notable de la experiencia de lucha zapatista. Sobre esta última, son significativos el uso de los símbolos, allá los pasamontañas, acá los machetes. *Pareciera que el México profundo sabe más de mercadotecnia que muchos especialistas.* Esa capacidad de comunicar hace recordar al Centauro del Norte quien llegó a repetir asaltos militares reales en pos de mejores imágenes para los camarógrafos de Hollywood que lo acompañaban.

Todo parece indicar que la fuerza de las luchas sociales y del movimiento democrático y progresista, por ahora sólo está alcan-

zando para consolidar la democracia electoral. No es poca cosa, sin embargo los pilares en los que se asentó el régimen priísta como el corporativismo de las organizaciones sociales; el presidencialismo; la ausencia de un auténtico federalismo; la ilegalidad y la impunidad continúan; mientras empiezan a soplar aires de independencia entre los poderes, aunque de esa independencia se haya quejado a lo largo de sus dos primeros años de gobierno el Presidente Fox con el lamento de que “no lo dejan gobernar”.

Pero por fortuna y como decía Marx, la sociedad se plantea sólo los problemas para los que ya tiene solución. Así, para pasar de la democracia electoral a la democracia participativa ya se manifestó el movimiento social más importante: la insurgencia del EZLN cuyas demandas constituyen un proyecto de izquierda democrático y moderno. Por lo demás el EZLN surge cuando el viejo proyecto de la izquierda en el país, el PRD –que no ha sido ni democrático ni moderno– empieza a declinar. Además de la marcha zapatista del primer trimestre del 2001, el movimiento de los ejidatarios de San Salvador Atenco, constituyen los dos principales signos de la presencia de proyectos que van más allá de la democracia electoral. Ciertamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró una puerta para reabrir la discusión sobre la iniciativa de la Cocopa. Pero seguramente otras muchas se abrirán para dar cauce a la democracia, la libertad, la dignidad y la justicia. A la transición a la democracia.



2000

## IMPRESIONES DESPUÉS DE LA BATALLA

05/07/00

LOGRAR LA ALTERNANCIA DESPUÉS de 71 años de hegemonía priista de manera pacífica y legal, no es poca cosa y hay que celebrarlo. Haber decidido que ese cambio sea a la derecha es desastroso, y hay que lamentarlo. Registrar que el voto ciudadano vale, que se impone contra las trapacerías de un régimen de partido de Estado constituye un parteaguas en la historia del país y hay que festejarlo.

Augurar que ese voto ya tiene vocación perenne para el cambio quizá sea un exceso de optimismo al que me gustaría aferrarme; la joven historiadora con quien discuto me dice que no es posible idealizar el voto de la ignorancia; el compañero que sabe de transiciones afirma que estas empiezan siempre con una opción de derecha, para en la primera oportunidad dar un giro a la izquierda. Entre la cruda realidad de un voto masivo que montó su hartazgo en la eficaz astucia de la mercadotecnia y la experiencia mundial de otras transiciones, sólo registro el golpe seco del voto inconciente y el sabor amargo de que también nuestra transición se anda globalizando, se anda olvidando de que hace cien años, a la globalización de entonces aportó la gran conquista de los derechos sociales.

¿Y dónde quedó aquel nuevo sujeto social, el ciudadano, que según yo surgió de las urnas del 6 de julio de 1988 y que en su

conciencia hizo la síntesis de todas sus desperdigadas luchas sociales en la lucha por el respeto al voto? ¿Fue una entelequia, o para lograr su demanda debió traicionarse a sí mismo? Porque con el logro del respeto al voto mi idealizado sujeto social, también dejó a la deriva la lucha por una educación laica, libre y gratuita, por los derechos laborales, por la vivienda digna, por la salud, por la defensa del patrimonio nacional y por si fuera poco, por la paz con dignidad en Chiapas. ¿Entonces le bastaron doce años para diluirse o para dejarse arrasar por los impetuosos jóvenes que heredaron el hartazgo de los padres y se dejaron seducir por la eficacia del ¡ya, ya!? ¿También por las mujeres en masa quienes vieron en Fox, por fin, al macho que las rescatará de la miseria de la continuidad? ¡Pobre mi nuevo sujeto social idealizado, qué corta y efímera fue su vida!

Pero muchas y prodigiosas señas dejó por el camino. Por ejemplo, el movimiento democrático que logró encarnar, a fuerza de golpes sacó al gobierno del control de la organización del proceso electoral, con un costo de más de 500 muertos, esa larga reforma siempre obstaculizada por el PRI y por el PAN, la misma que hoy permitió el voto libre y transparente, la misma que hoy logró la alternancia en el poder. Contuvo la escalada militar en Chiapas; también la privatización de la industria eléctrica. Sólo para citar algunas de sus conquistas. ¡Ah!, y también mandó al cajón del olvido el modelo bipartidista, aunque en el empeño casi le va la vida al partido que de ese movimiento nació, pero esa agonía precoz constituye otra historia sobre la que en algún momento habrá que recapitular.

O quizá nada de esto es cierto y el viejo topo de la historia empezó a cavar, el mismo dos de julio la transición a la democracia; nada conforme con la simple alternancia. Porque ciertamente no hay que regatear la importancia de desplazar al PRI después de siete décadas de poder, pero ¿con esto se acaba el régimen de partido de Estado o sólo cambian las siglas en el poder? ¿Fin al presidencialis-

mo? ¿Al autoritarismo? ¿Auténtica división e independencia de poderes? ¿Rendición de cuentas? ¿Fin a la corrupción? ¿A la descomposición de las instituciones del Estado por el narcotráfico? Porque, de lo otro, de los derechos sociales, no hay duda: los pocos que quedan están más que amenazados, lo mismo la tolerancia a todas las expresiones culturales, a la diversidad sexual, al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. También lo que queda del patrimonio nacional, del histórico; mientras que el delgado hilo de la contenida guerra en Chiapas puede romperse en quince minutos.

Porque es cierto, de muchas maneras se disfraza Minerva antes de alzar el vuelo para dejar las tinieblas atrás. Hoy tuvo que disfrazarse de foxista para enterrar al PRI. Pero no logró romper con las tinieblas, inteligente como es, confundió el amanecer con el crepúsculo. Ya rectificará. ¡Largo camino le queda al topo!

#### APUNTES PARA EL CAMINO

12/07/00

Antes del triunfo de Fox, parecía que el PRD no necesitaba de los ángulos de la geometría para determinar su identidad política. A pesar de que en su Cuarto Congreso quedó definido, sin gran discusión, mucho menos pasión, como un partido de izquierda, lo cierto es que siguió caracterizándose como un partido en lucha por la democracia y la justicia (de ahí su lema: ¡democracia ya, patria para todos!). Después de la alternancia lograda el pasado dos de julio, el riesgo es que se ponga la casaca de izquierda sin saber bien de qué se trata.

Convertirse en un partido de izquierda, democrático y moderno, es el gran desafío del PRD. Lo enfrentó desde la pasada elección



de su dirigencia nacional, y lo que quedó claro es que la generación que venía de la amplia gama de la izquierda se dió el lujo de usar todas las trapacerías de la cultura priísta para disputar y acceder a la dirección nacional. Ese gran fracaso de la izquierda aún no se asimila dentro del PRD, en primer término porque se prefiere la simulación y la autocomplacencia, antes que el reconocimiento de ese fracaso y la autocrítica necesaria para superarlo.

El asunto es grave y yo no sé si tenga solución en el corto plazo. Hablo de la generación que venía de la amplia gama de la izquierda, porque de ese tamaño es el problema. Las personas que la constituyen por supuesto tienen nombres y apellidos y encabezan grupos, pero con ser importantes, muy importantes las responsabilidades de cada quien en ese gran fracaso (yo asumo las que me corresponden), el gran drama para el PRD; el que explica parte de su derrota electoral y que condiciona su desarrollo futuro trasciende a las personas para ubicarse en un fenómeno más complejo.

Si hacemos un recuento somero de los haberes con los que llegó esa izquierda al PRD, ciertamente no eran pocos: los comunistas con la tradición de su heroica lucha clandestina antes de la reforma política de Reyes Heróles y su acompañamiento a las luchas campesinas y estudiantiles; los troskistas con su antiestalinismo y su vocación internacionalista; los "maos" con sus luchas populares; los "hebertos" con su nacionalismo de izquierda; los cívicos con su cristianismo radical; los exguerrilleros con su sana desconfianza al poder establecido; en fin había razones para pensar que del nacionalismo revolucionario de los expriístas y de la combinación de todas las tradiciones de lucha de la izquierda mexicana, resultaría una síntesis que las superase a todas. No fue así, en lugar de esa síntesis hegeliana, la izquierda miró hacia atrás para colocarse como la heredera convencida de las bondades inmediatas de la cultura del régimen priísta que decía combatir.

Si lo que digo es cierto, entonces tendríamos que aceptar que la izquierda mexicana, hasta la más heroica y abnegada, era sólo un PRI excluido del ejercicio del poder, que después de la Revolución de 1910 el país nunca generó condiciones para sentar las bases de esa izquierda moderna y democrática, sólo para luchas significativas aunque aisladas, cuya experiencia, junto con la escisión del PRI de 1987, alcanzó para concluir con el ciclo abierto por la Revolución Mexicana.

Para refundar el PRD, habría entonces que reconocer que se está cerrando un ciclo histórico de lucha; y en ese ciclo histórico quizá el PRD fue la expresión política de las fuerzas sociales del más amplio espectro, quienes fueron tocadas en algún momento por el ala redistributiva de los gobiernos posrevolucionarios y para quienes quedaba pendiente una parte del ideario de la revolución de 1910: el sufragio efectivo, el ideario de Madero. Cien años después lo han conseguido. Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD fueron su instrumento para lograrlo; ¡Enhorabuena!

Que la culminación de esta etapa histórica signifique el cumplimiento de las demandas de Madero y no el contenido social de la lucha de Zapata o los Flores Magón, por ejemplo, habla bien de la intuición perredista de no haberse definido como un partido de izquierda; porque efectivamente no fueron de izquierda las tareas que le correspondió asumir en sus once años de vida. Ojalá esa misma sabia intuición se tenga para refundar al partido, como algunos lo concebimos en 1988: con los pies en la historia y la mirada en el siglo XXI; ahora sí como un partido de izquierda. Mi gran desazón es que mientras el sujeto social de ese cambio democrático, moderno y justo ya está emergiendo, la fuerza política que tendría que proyectarlo hacia el futuro sigue en las tinieblas de un pasado muy remoto. ¡Ojalá me equivoque!

## CARTA AL PRD

19/07/00

Durante las dos últimas semanas en este espacio he estado haciendo una reflexión sobre los resultados del 2 de julio. Dentro de ese proceso y del que inicié después de las elecciones internas del PRD para renovar la dirección nacional, es que tomé la decisión de separarme de la misma. En tanto forma parte de una discusión que trasciende al PRD, mi colaboración semanal es justamente la carta que envío a la Mesa Directiva del IV Consejo Nacional del PRD cuyo VIII pleno se realizará los días 21-23 del presente mes, en la cual comunicó mi decisión. Me separo de la dirección, no del partido. Sigo considerando que es un instrumento de lucha –sobre todo si logra refundarse– valioso para la consecución de los objetivos de libertad, justicia y democracia. Digo refundarse porque hemos entrado a otro ciclo histórico de lucha, y si en el nuevo ciclo el PRD no logra constituirse como la opción de izquierda, democrática y moderna que el país necesita, entonces continuará la estrepitosa caída que inició el pasado 2 de julio. Para fortalecerlo en la nueva etapa, es momento de hacer un profundo balance de la experiencia de la última década. El diálogo con la realidad puede algunas veces prescindir de las direcciones partidarias.

A la Mesa Directiva del IV Consejo Nacional: Estimados compañeros y compañeras:

He faltado a varias sesiones del pleno del IV Consejo Nacional. Tantas como para hacerme merecedora de las sanciones que nuestro Estatuto prevé: separación de ese órgano de dirección. Agradezco la advertencia de esa mesa directiva y la cordial petición de justificar mis faltas. Pero resulta que reviso y reviso mi agenda y no encuentro motivo importante alguno que me haya distraído de mis responsabilidades de asistir a ese Consejo, que no sea una especie

de rebeldía frente al cinismo imperante después de la vergonzosa jornada del 14 de marzo de 1999. De tal hecho me había ya percatado desde hace varios meses, sin embargo, en consideración al proceso electoral federal decidí en aquel momento no hacerles llegar esta carta. Pero hoy que nos encontramos en plena revisión partidaria (espero), y como parte de ella, es que me separo de la dirección nacional del partido, después de haber participado en la misma desde su fundación. Me separo de la dirección, no del partido. De esta dirección en cuya planilla acepté participar después del fracaso de mi convocatoria a que nadie que hubiera participado a la cabeza de planillas ese 14 de marzo, lo hiciera de nuevo; después de mi fracaso también a que la constitución de esa planilla unitaria se hiciera en una convención democrática previa. Pero ya la auto-complacencia se había adueñado de los espíritus y mi manera de cuidar el partido entonces, fue aceptar participar en la planilla de la que surgió este Consejo.

Hoy mi manera de cuidar al partido es tomar la distancia necesaria para tratar de asimilar la riquísima experiencia de los últimos 11 años, para reflexionar. Mi tradición marxista me dice que efectivamente, las condiciones objetivas de desarrollo de nuestra lucha no dieron para más en esta etapa, y me sirve también para reconocer y congratularme con lo mucho que hemos logrado. Pero esa tradición no me alcanza para entender, mucho menos para justificar, la soberbia, la autocomplacencia, y la simulación, de quienes participaron en ese atentado a la lucha democrática. Por más condiciones explicativas a conductas que se riñen con los principios de izquierda, siempre hay la posibilidad de decir ¡no!

Soy muy escéptica sobre los resultados de reflexión que seguramente hoy se iniciará. Ojalá me equivoque. No se cómo, si la autocrítica que ni siquiera se ha verbalizado, mucho menos traducido en el restablecimiento de la legalidad interna y en la construcción de la institucionalidad partidaria, pueda encarnar un proyecto

de izquierda, democrático y moderno, para encauzar las luchas del pueblo en la etapa histórica que apenas inicia.

Digo no a esas prácticas pero sí apostando a las ideas y a los principios. Junto con esta carta les hago llegar mis artículos publicados en *El Universal* después del 2 de julio y también los avances de una reflexión inicial sobre las perspectivas del PRD. Ojalá les sean de utilidad.

### ¿HACIA EL BIPARTIDISMO?

26/07/00

El triunfo de Fox y del PAN junto con la profunda crisis que vive el PRD, trae a la mente el modelo bipartidista que –copiado de Estados Unidos– Salinas impulsó con la campaña de hostigamiento al PRD durante su sexenio.

De aquella campaña el PRD se puso a salvo gracias a varios factores:

- a) la fuerza histórica de la demanda no cumplida de respeto al voto, levantada noventa años atrás;
- b) la racionalidad de ese proyecto implícito en la defensa del Estado de Derecho, contra la dominación tradicional que el PRI pretendía seguir imponiendo a través de decisiones casuísticas en materia electoral (con apoyo del PAN). Esto es, una perspectiva histórica moderna frente al interés inmedatista de una clase política por mantenerse en el poder a toda costa (también asesinando candidatos a la presidencia y virtuales coordinadores de diputados). Ese interés inmedatista amenazaba la gobernabilidad del sistema en su conjunto. Además de la descomposición de esa clase política, piénsese en la falta de con-

fianza del capital frente a la ausencia de certidumbre y previsión en un régimen en donde las reglas generales de la ley se hacen a un lado.

- c) El liderazgo político de Cuauhtémoc Cárdenas que sostuvo una oposición real, no funcional al sistema. La no cooptación de un líder y un movimiento como hecho inédito en la larga tradición seductora del Estado mexicano.
- d) La organización de un partido, el PRD, que a contrapelo de sus limitaciones, durante el gobierno de Salinas mantuvo presente la oposición democrática.
- e) Lo más importante, el surgimiento de un movimiento ciudadano que hizo patente su hartazgo de 71 años de régimen priísta con el triunfo de Fox. Un movimiento que hace apenas doce años era casi inexistente: ¿a quién le importaban las elecciones en este país antes del 6 de julio de 1988?

Que no se haya realizado hasta ahora el proyecto salinista de un sistema de dos partidos con relativa homogeneidad ideológica, PRI y PAN, fue gracias a esos factores. Pero ojo, esos elementos ya no están presentes en el escenario político actual, y contra lo que pudiera suponerse, el triunfo de Fox no abre necesariamente una época de alternancia. En realidad podemos estar presenciando el inicio de una larga época de un partido en el poder (el PAN), o de una alternancia según el modelo de Estados Unidos, en donde el cambio de siglas en el gobierno hace poca diferencia en cuanto al proyecto que se aplica.

La realización de elecciones transparentes y creíbles y la derrota del PRI han eliminado del panorama político una de las banderas de lucha fundamentales del PRD. Nunca el logro de una demanda se había vivido de manera tan dramática. La alternancia no equivale por sí misma a transición a la democracia, apenas es un requisito indispensable. El problema es que muchos factores están jugando a que el triunfo de la ciudadanía se quede en eso, en alternancia en el

poder. Hoy no se ve en el escenario aquel partido lleno de energía social y política que sin tregua luchó por el respeto al voto y que hoy tendría que estar emplazando al gobierno de Fox a cumplir con la reforma democrática del Estado, reinstalándose en la lucha social y actualizando su programa. En lugar de ello vemos una clase política perredista aferrada a los puestos de dirección y un partido que en tiempos extraordinarios toma decisiones rutinarias.

Si años atrás el PRD hizo todo lo posible porque el proyecto bipartidista de Salinas no se realizara, hoy en cambio hace todo lo posible porque aquella profecía se realice. O la del bipartidismo y medio, como pronostica Iván García (hijo) en el artículo que publica en el próximo número de *Coyuntura* (en edición). Como siempre, espero equivocarme.

## LOS SIGNOS DE LA POLÍTICA SOCIAL

02/08/00

Antes, mucho antes del triunfo de un candidato y un partido de derecha, los gobiernos del PRI ya habían desmantelado el pacto social plasmado en la Constitución de 1917. Dicho pacto social estaba articulado en dos artículos fundamentales de la Carta Magna: el 123 y el 3º; y también en una política de gasto social para atender necesidades sociales básicas como alimentación, salud, vivienda y educación. Dos principios rectores guiaban la política derivada de ese pacto social: que para un mundo de desiguales como es el mundo del trabajo lo más justo es un marco jurídico que tutele los derechos de los más vulnerables, y segundo que los derechos sociales son universales.

Como a la política neoliberal que empezaron a aplicar los gobiernos priístas desde diciembre de 1982, el carácter tutelar del ar-

tículo 123 constitucional y su Ley reglamentaria, constituía un obstáculo para la desregulación y flexibilización de los procesos de trabajo, sin reformarlo, simplemente hicieron de dicho artículo letra muerta. No es que antes de 1982 todo haya sido miel sobre hojuelas para los trabajadores, pero lo cierto es que la administración de las grandes centrales sindicales de las conquistas laborales y la funcionalidad que tuvieron para legitimar al Estado, hacía una diferencia entre niveles de vida y condiciones de trabajo entre los sindicalizados y no sindicalizados. A partir del gobierno de Miguel de la Madrid, esta diferencia se borró, de manera que el deterioro salarial, la inestabilidad en el empleo y la disminución de prestaciones sociales, afectó a los agremiados de la misma manera que aquellos que estaban fuera del control de esas centrales sindicales.

Muy pronto (1988) los asalariados cobrarían en las urnas la ineficacia del sindicalismo oficial para protegerlos de las consecuencias de la nueva estrategia económica del gobierno: hacer recaer todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Reclamar en las urnas lo que no les era permitido reclamar en sus centros de trabajo por la ausencia de libertad y democracia sindicales, finalmente logró su objetivo: echar abajo siete décadas de dominación priísta.

Lo que quizá no sepan los asalariados que votaron por Fox, es que el nuevo gobierno seguramente impulsará una reforma laboral que junto con la benéfica libertad de asociación legalice un pacto laboral que abandone el principio de la tutela sobre los derechos de la parte más débil en la relación de trabajo. Con los resabios decimonónicos de la derecha, cualquier tutela del Estado que aspire a eliminar la desigualdad entre trabajo y capital, constituye una "distorsión" en el mercado, una ofensa a la mano invisible de Adam Smith que deja al libre juego de la oferta y la demanda la mejor asignación y pago de los recursos.

Sin duda, durante el gobierno de Fox se abrirá una batalla para preservar el carácter tutelar del derecho laboral y apoyar las refor-



mas por la libertad y democracia sindicales. Los resultados de esa batalla, depondrán en buena parte de la capacidad de sindicatos y fuerzas políticas de la izquierda para entender que la libertad de asociación no constituye “un embate de la política neoliberal contra los sindicatos” sino que dicha libertad es condición necesaria para defender los derechos laborales como derechos sociales básicos.

Por su parte la modificación al artículo 3° de Carlos Salinas, que pretende circunscribir al nivel de secundaria la obligación del Estado de impartir educación gratuita, junto con la reducción del gasto social, constituyen cambios en la política social de los gobiernos priístas que tratan de mercantilizar un derecho social básico y en lugar del carácter universal de estos derechos derivado del pacto social de 1917, reducir la cobertura de los mismos a la población en pobreza extrema.

Hacer de un derecho una mercancía forma parte también de la ideología de derecha que comparte Fox; atender sólo a quienes han caído en condiciones extremas de pobreza, concuerda con el carácter asistencialista de la política social en ese marco ideológico. Por eso no extraña que Fox esté proponiendo aumentar al doble los recursos de Progreso y además gravar a alimentos y medicinas hasta ahora con tasa cero.

Entre este enfoque y uno de izquierda para el diseño de la política social, varias tendrían que ser las diferencias, en tanto que expresión de las diferentes concepciones subyacentes en torno al pacto social que da vida al Estado. Aspirar a la igualdad social como responsabilidad de la acción del Estado, en lugar de promover la igualdad de oportunidades, –que en un mundo de desiguales, sabemos dicha promoción está destinada a profundizar los abismos sociales– tendría que ser una de esas diferencias básicas. Conjuguar los derechos del ciudadano frente al Estado con aquellos del mundo del trabajo, para sumar y no divorciar la política social a la política laboral; tendría que ser también otra diferencia básica. Preservar

los programas asistencialistas sólo en su carácter de emergencia para los grupos más vulnerables y aplicar una política social basada en la cobertura universal de los derechos sociales básicos; es también otra diferencia importante, entre las estrategias de distinto signo político.

## ABORTO: DAR LA BATALLA

09/08/00

La acreditación de Vicente Fox como presidente electo de la República en la sesión pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se da con malos augurios sobre su gobierno.

Por lo pronto, la aprobación por el PAN en el Congreso de Guanajuato de reformas al Código Penal del Estado, que impone de tres meses a seis años de prisión a las mujeres que decidan recurrir al aborto para interrumpir un embarazo producto de una violación, constituye una seria afrenta a la sociedad y un gran riesgo de que dichas medidas en materia de aborto se conviertan en la línea a seguir durante su mandato. La reforma jurídica en cuestión, atenta gravemente contra los derechos y garantías individuales de las mujeres de México y significa un serio atropello a las que sufren violación, ya que ahora de víctimas pasarían a convertirse en flagrantemente infractoras de la ley.

Además, como ya ha sido señalado en diversos medios, significaría un gran retroceso a los avances registrados en los demás estados de la República en donde el derecho al aborto por violación constituye una prerrogativa ciudadana.

Pero sin duda el mayor agravio, de aceptarse dicha reforma jurídica y ser retomada por el gobierno de Fox, sería para la ciudadanía que el pasado 2 de julio votó por el cambio político en México.

Un cambio que en lugar de avance, puede convertirse en un gran retroceso con medidas que como las que pretende imponer el PAN en dicha entidad, constituyen una seria amenaza a nivel nacional que puede llevar al país a épocas históricas ya superadas, dominadas por el oscurantismo y la intolerancia, borrando de tajo las luchas sociales que dieron paso al México actual.

El rechazo enérgico de amplios sectores de la sociedad a que dichas reformas jurídicas sobre el aborto en el estado de Guanajuato se avalen y pudieran regir también a nivel nacional, es justo y necesario. Como también lo es, su reclamo insistente para que en temas tan cruciales de la agenda nacional como el aborto, no se impongan por ningún motivo la voluntad y la visión de los sectores más conservadores y retrógradas del país.

La batalla que hoy día están dispuestos a librar diversos sectores de la sociedad, en especial las mujeres, organismos no gubernamentales y sociales, entre otros, de claro y franco rechazo a dichas medidas, tiene que ser ampliamente respaldada y no puede ni debe ser soslayada por Vicente Fox. No entender la dimensión y los alcances de este justo reclamo ciudadano, significaría un grave retroceso para el respeto a los más elementales derechos de las mujeres.

A DIOS LO QUE ES DE DIOS

16/08/00

El triunfo de Fox pareciera haber despertado la intolerancia de los sectores más conservadores de la sociedad. Antes de que tome posesión de la primera magistratura del país, como cruzados en busca del grial, estos sectores pretenden imponer normas de conducta pública sancionadas por el Estado en donde sólo caben definiciones que atañen a la conciencia individual. Por fortuna se han alza-

do las voces, sobre todo de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, para alertar sobre estas actitudes oscurantistas de la que han hecho gala sectores del PAN, la Iglesia y organizaciones civiles como Pro-Vida.

Frente a esta estampida de los cruzados, producida por el triunfo de su candidato, es urgente que el PAN asuma una posición clara frente a la despenalización del aborto en casos especiales y frente a la censura de la libertad de expresión. Sin embargo, hasta ahora de los panistas –excepción hecha de la Senadora Carmen Bolado– sólo hemos escuchado el argumento de lo inoportuno de la medida tomada por los legisladores de Guanajuato, lo que de suyo remite el tema al terreno del pragmatismo. Tratar de limitar el espacio de las libertades al de las conveniencias suena por lo menos hipócrita.

Por su parte Vicente Fox ha declarado que no repetirá la experiencia de sus correligionarios de Guanajuato. No obstante hace falta una postura más firme del presidente electo. Sería más sencillo empezar a definirse con claridad en torno a estos temas para conocer la identidad política de su programa de gobierno, antes que sus barrocas declaraciones –como las que hizo en su reciente gira a Sudamérica– para intentar ubicarse en las coordenadas de la geometría política.

Yo estoy a favor de la legalización del aborto en cualquier circunstancia. Ello no impondría ninguna norma de conducta sobre los demás, simplemente crearía las condiciones para eliminar un problema de salud pública por el cual pierden la vida miles de mujeres al año. Que el aborto no sea un delito, no obliga a nadie a abortar, lo que el Estado hace al despenalizarlo es simplemente reconocer a la mujer el derecho para tomar la decisión en las mejores condiciones, con la protección legal y sanitaria necesarias. Sería absurdo hacer del aborto una medida de control natal, sin embargo es una realidad social que enfrentan en las peores condiciones las mujeres de más bajos recursos. Proteger la vida de quien tiene el don de dar la vida, tendría que ser un principio elemental de amor

a la vida. Quienes no respetan el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo hacen del castigo y sufrimiento una razón de vida. ¡Allá ellos!

Someter a consulta el derecho elemental de las mujeres a decidir en qué condiciones traen hijos al mundo me parece tan aberrante como preguntar si existe el derecho a la libertad, el derecho a votar, el derecho a ser iguales. Lo que tendrían que hacer los partidos, incluido por supuesto el PRD, es asumir posiciones claras sobre el tema en sus plataformas políticas, de manera que a la hora de legislar, los representantes de cada partido tengan muy claro su compromiso con la ciudadanía. En el reciente proceso electoral el único partido que tuvo una definición clara al respecto fue Democracia Social.

Es evidente que la batalla por conquistar ese derecho elemental de las mujeres aún no está ganada, no sólo en México sino en muchas partes del mundo. Despenalizar el aborto en algunas circunstancias de la gestación sería apenas un paso para su legalización. Tiene razón Marta Lamas cuando afirma que la decisión de los legisladores panistas de Guanajuato, tuvo la virtud de colocar en la discusión nacional un tema hasta ahora clandestino.

Y lo más importante en esta discusión es ubicarla en sus justos términos. Tanto quienes están a favor o en contra de la despenalización del aborto colocan en el centro el derecho a la vida, el más elemental de todos. Cada quien tiene su definición en torno al momento en que empieza la vida, si en la concepción o en el nacimiento. Sobre este asunto es imposible que haya acuerdo, en lo que sí puede haber acuerdo es en la tolerancia para que cada quien lo decida según sus creencias; en el respeto para que nadie imponga principios ni conductas sobre otros. Y como el Estado mexicano es laico este es un asunto que se define fuera del ámbito de las religiones. Y como además de laico por definición es democrático, este es un asunto que define cada quien según su conciencia y en plena

libertad. El papel del Estado es sólo garantizar que esa libertad se ejerza. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.

## UN PRI QUE NO RESISTE

23/08/00

El triunfo de Pablo Salazar Mendiguchía constituye un fuerte golpe a los intentos de recomposición priísta y tiene un importante significado para la solución del conflicto armado en Chiapas. El triunfo de la oposición en un estado en donde hasta 1988 el PRI "triunfababa" con el 112% de la votación, trató de evadirse a unas horas de concluída la jornada electoral por la dirigencia nacional priísta y su candidato a gobernador, sin embargo las cifras de su derrota fueron contundentes. Ninguna derrota es fácil de aceptar, mucho menos esta que hace más patente aún la nueva realidad de un PRI sin cabeza.

Después de esta derrota, se viene abajo el proyecto de reconstituír el poder del ex partido de Estado *alrededor del sindicato de los gobernadores del sureste*. Queda claro que sin el apoyo del poder central encabezado por el otrora líder nato del PRI, el Presidente de la República, este partido seguirá naufragando. Convertirse en un partido real, esto es expresión política de una parte de la sociedad, pareciera un empeño difícil de lograr.

Por eso la idea de seguirle dando vida artificial desde el poder de los gobernadores tiene el tino de seguir la inercia de su naturaleza: un partido que para existir depende del poder establecido –léase recursos públicos–; pero tiene el desatino de ir a contrapelo de una realidad política que ya no corresponde al régimen de partido de Estado. El dos de julio empezó la debacle del PRI y el pasado 19 de agosto se confirmó.

Por su parte la refriega entre priistas en Chimalhuacán, México, con un costo de más de diez muertos evidencia que esta debacle puede llegar a una guerra civil al interior de ese partido. Sin la disciplina que se veía aceptada por la distribución de pequeñas y grandes cuotas de poder, hoy los grupos huérfanos de esos recursos pueden llegar a atentar seriamente la gobernabilidad en los estados en donde los grupos caciquiles son más fuertes. Hasta dónde pueda llegar esa ingobernabilidad depende de la capacidad del próximo gobierno foxista para hacer una realidad el régimen de derecho, y más allá de su legitimidad electoral, de su capacidad para dismantlar los cotos de poder regionales.

De la mano de la imposibilidad de reconstitución del poder priista se abren las condiciones para solucionar el conflicto de Chiapas. El triunfo de la oposición en ese estado, no garantiza automáticamente que se logre la paz, pero ciertamente hace más cercana esa situación. Haber dejado sin cumplimiento los Acuerdos de San Andrés Larrainzar por parte del gobierno de Ernesto Zedillo se explica por la falta de voluntad para dar pasos firmes en la democratización del país.

Esta falta de voluntad sin duda ha estado bien alimentada por los intereses de los grupos caciquiles de la entidad, para quienes el cumplimiento de dichos Acuerdos, esto es el respeto por la autonomía de los pueblos indígenas, significa ceder espacios no sólo políticos sino también económicos para la reproducción de su sistema de control regional.

El hecho de que Pablo Salazar sea no sólo el candidato triunfante de la oposición, sino un miembro destacado de la Cocopa, con un conocimiento profundo de la problemática del EZLN, elimina cualquier pretexto de parte del próximo gobierno federal para no allanar la solución al conflicto. Su clara posición de no caer en reduccionismos frente a lo que representa el EZLN, quita un apoyo para cualquier estrategia foxista que pretenda continuar la que se ha aplicado para desgastar a ese movimiento una vez aprobada la

Ley de Concordia y Pacificación, sobre todo después de la firma y no cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

Que la realidad política nacional ponga al desnudo la debacle del PRI y evidencie la falta de anclas para reproducir el entramado de poderes caciquiles locales, coloca a Fox sin asideros para tratar de cambiar todo sin que nada cambie. Lo que no resiste tampoco apoya.

### DE HIPOCRESÍAS PANISTAS

30/08/00

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de resolver la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo entregue a esta la información relativa a los fideicomisos del Banco Unión cuya existencia presupone que el Fobaproa rescató créditos bancarios que se utilizaron para el financiamiento de campañas priistas, sin duda constituye un hecho histórico en la vida del país.

Hacer intervenir al poder judicial para dirimir la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo en esta materia, permitió documentar que la independencia entre los poderes se empieza a abrir paso, un paso fundamental para la sana vida de la República. Pero, si bien este hecho habla de cambios profundos en el funcionamiento del sistema político mexicano, analizándolo un poco más, las inercias que imponen las complicidades entre las clases políticas entrantes y saliente en el poder le otorgan menores consecuencias a la decisión de la Suprema Corte.

Habiendo sido el grupo parlamentario del PAN el promotor de esta demanda ante el Poder Judicial, ese partido tendría que explicar por qué se limitó a exigir la información de los fideicomisos del



Banco Unión, cuando las irregularidades e ilegalidades del rescate bancario abarcaron a todos los bancos. Enfocar las baterías sólo a esos fideicomisos, para, y de acuerdo a la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, hacer pagar al PRI el monto de lo destinado a sus campañas por parte de ese Banco, es sin duda importante. De comprobarse el supuesto destino de dichos recursos, haría evidente y punible el uso del poder detentado por el PRI durante décadas en su propio beneficio. Además de esa evidencia política, sería muy meritorio aplicar la ley para honrar al régimen de derecho.

Pero todos esos méritos de la histórica decisión de la Suprema Corte se quedan a menos de la mitad, repito, cuando gracias a ella, apenas se ataca la punta del iceberg del fraudulento rescate bancario cuyo costo fiscal es del 20 % del Producto Interno Bruto. Para que el costo de un rescate necesario llegara a tal magnitud fue necesaria la complicidad de PAN y PRI para aprobar la ley del IPAB a ciegas, esto es para legalizar como deuda pública pasivos privados constituídos para beneficio de unos cuantos. En su momento la exigencia del PRD para que antes de aprobar cualquier normatividad se depuraran esos pasivos de todas las irregularidades e ilegalidades, y así disminuir sustantivamente el costo fiscal del rescate bancario, se topó con la negativa del gobierno, del PAN y del PRI.

Que posteriormente el PAN haya promovido la controversia constitucional para obligar al Ejecutivo a entregar la información sólo de Banco Unión, subraya que este partido está muy lejos de pretender esclarecer las condiciones del rescate bancario y mucho menos hacer pagar a los grandes beneficiarios del mismo lo que hoy tenemos que pagar todos los habitantes del país. Aquello de privatizar ganancias y socializar pérdidas, continúa siendo una divisa compartida por el PAN.

El mismo objetivo guió al PAN, cuando junto con el PRI aprobaron un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que los resultados de la investigación hecha por Mackey se mantuviera en secreto. El argumento que ambos partidos utilizaron para encriptar

la información de Mackey es el mismo que ahora echa abajo la Suprema Corte: no puede haber secreto bancario en materia de deuda pública. Habría que recordar además que el informe de Mackey no pudo ser una auditoría porque las autoridades no le entregaron toda la información para realizarla. Habría que recordar también, que ni siquiera las operaciones detectadas y denominadas como "reportables" por Mackey (a la fecha alrededor de 120 mil millones de pesos), esto es que tendrían que ser investigadas a fondo, fueron separadas del cálculo del pago del servicio de esa deuda aprobada por la Cámara de Diputados, por supuesto con el apoyo del PAN.

En fin, una decisión histórica del Suprema Corte cuyos alcances se ven disminuídos por el interés panista de continuar manteniendo en secreto operaciones irregulares e ilegales del rescate bancario. Mientras no se demuestre lo contrario, seguiremos sospechando que en ese rescate que hoy pagamos todos, hubo grandes beneficiarios del PAN. El expediente sobre el Fobaproa sigue abierto y el próximo gobierno tiene la palabra.

## ENTRE FAMILIA

06/09/00

Pareciera consustancial al poder tender un velo sobre la realidad, y nunca ejercer la autocritica. Ni siquiera sobre el evento que mereció el consenso de todos en el sexenio de Zedillo, los incontrovertibles resultados electorales, mereció la generosidad de reconocer su origen. La reforma electoral que permitió comicios creíbles y confiables no fue una concesión graciosa del gobierno, tampoco fue producto de algún impulso o vocación democratizadora del régimen priista, como en más de una ocasión los personeros del mismo han afirmado y el Presidente Zedillo repitió en su VI Informe de

Gobierno, al referirse a los resultados de la jornada electoral del 2 de julio. Ni siquiera fue, a pesar de las luchas panistas por la democracia electoral, un producto del empuje de ese partido. La conquista del –finalmente– sufragio efectivo fue resultado de la organización y movilización de la sociedad por la defensa del voto, que se desarrolló de manera inédita a partir de 1988.

Antes, había sido el PAN el principal promotor de esa defensa, sin embargo, en el régimen de Salinas los panistas prefirieron acuñar la tesis de que un gobierno puede legitimarse por sus actos, sin importar que ese gobierno emergiera de un fraude. A partir de ahí el PAN se convirtió en un aliado histórico –como lo llamó Salinas– para frenar los alcances de las sucesivas reformas electorales. Pero ni las piedras que priístas y panistas pusieron en el camino a lo largo de los últimos doce años, fueron suficientes para hacer fracasar la lucha de millones de ciudadanos por la defensa del voto. El resultado fue el triunfo de Vicente Fox.

“Unos ganaron y otros perdimos”. Esa gris expresión es la que usó el Presidente Zedillo para referirse al triunfo de Vicente Fox. Como si fuera un evento común en la vida política del país, como si no se estuviera refiriendo al fin de 71 años de años de hegemonía priísta. Los fuertes aplausos que arrancó la Dip. Beatriz Paredes a sus correligionarios con su intervención contrastaron con el mutis que hicieron al escuchar el discurso de Zedillo. Mientras la Dip. Paredes hizo gala de orgullo priísta y tejió toda una elegía de esas décadas en el poder, el Presidente Zedillo simplemente dijo “perdimos”.

Aunque pensándolo bien, quizá Zedillo tenga razón y no sea necesario hacer tanta alharaca por el cambio de partido en el poder, cuando no hay diferencia entre los proyectos económicos de ambos partidos. Otros serán los que lleven adelante el liberalismo económico que profesó Ernesto Zedillo, o el liberalismo social acuñado por Salinas, otra será la clase política en el poder, pero los programas que regirán los destinos nacionales no serán muy dife-

rentes. En el fondo de las tranquilas palabras de “unos ganaron y otros perdimos” está la certidumbre de que, para bien de los intereses defendidos por el régimen priísta, las cosas seguirán por el mismo rumbo.

La expectativa de que el último Informe de Gobierno se distinguiera de los demás no sólo por ser el último, sino por la alternancia en el poder después de tantos años de monopolio priísta, se estrelló con el tono que dio al evento el Presidente Zedillo. Seguramente la certidumbre de que lo esencial no sufrirá cambios, hizo también que Zedillo no se sintiera obligado a rendir cuentas sobre el estado que guarda el conflicto en Chiapas, tampoco lo sucedido en la UNAM, mucho menos las matanzas de Acteal, de El Bosque y de Aguas Blancas, el asesinato de Colosio, el fraude del Fobaproa, la corrupción de sus colaboradores, la complicidad con el narcotráfico. Nada de ello fue digno de explicación para el Presidente Zedillo. Quizá pensó que no era necesario, que después del triunfo de Fox, todo queda entre familia.

### DEJAR ATRÁS LA IMPUNIDAD

13/09/00

Si en lo económico el sexenio de Ernesto Zedillo está cerrando con una aparente estabilidad, en lo político continúa la descomposición ya evidente desde el gobierno de Salinas. La ausencia de credibilidad y confianza alcanza ya a instituciones como las Fuerzas Armadas mientras que en los mandos civiles sigue saliendo a la luz pública los casos de corrupción. De lo que haga o deje de hacer el próximo gobierno, las fuerzas políticas y la sociedad, frente a este profundo proceso de descomposición, depende en buena medida

que la alternancia conquistada por el voto ciudadano se convierta además en transformación democrática.

Una de las manifestaciones de la evidente crisis del régimen político la constituye el papel que las Fuerzas Armadas han debido jugar durante los últimos sexenios como protagonistas en tareas que no les corresponden, como es el caso de la lucha contra el narcotráfico y la creciente militarización del país a partir del surgimiento del EZLN. Sacar a los militares de sus cuarteles para funciones del gobierno civil, ha provocado que la descomposición de este llegue a las filas de las Fuerzas Armadas con la consecuente vulnerabilidad de las mismas y sus graves consecuencias para la soberanía nacional. Por su parte, las detenciones de los generales Acosta y Hermosillo por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, abren la posibilidad de que finalmente se ventile la responsabilidad del Ejército en la masiva violación de derechos humanos durante la guerra sucia de la década de los setentas.

Así, lo que pareciera un ajuste de cuentas interno en el Ejército para el relevo de mando con el próximo gobierno foxista en un contexto de profunda crisis, está creando las condiciones para, a partir de un amplio debate nacional, iniciar una reforma de las Fuerzas Armadas que permita, además de su saneamiento, un acotamiento de sus funciones de manera de no hacerse partícipes y corresponsables de tareas y decisiones que sólo competen al gobierno civil.

La voluntad para dar pasos hacia esta reforma y saneamiento de las Fuerzas Armadas, además de la profunda investigación sobre las complicidades con el narcotráfico y el estricto apego a Derecho en su castigo, la veremos muy pronto en el Congreso en torno a la suerte que corra la oportuna iniciativa *perredista* para tipificar como delito grave e imprescriptible la desaparición forzada.

De la violenta represión a la complicidad con el narcotráfico hubo sólo un paso. Bastó que los miembros del Ejército experimentaran que la ley se podía violentar impunemente en la sucia tarea de ga-

rantizar la gobernabilidad a toda costa, para inmediatamente seguir infringiendo el Estado de Derecho, ya no en beneficio de una gobernabilidad no democrática, sino en beneficio económico propio. Seguramente la investigación sobre las responsabilidades en esa guerra sucia llevará de la mano a esclarecer las complicidades en la rentable industria del narcotráfico.

Nada de ello hubiese sucedido sin la descomposición de la clase política priísta que muy pronto entregará las riendas de mando. Sanear las instituciones republicanas requiere de algo más que el simple cambio de esa clase política. Requiere de la voluntad para esclarecer hechos que hasta ahora continúan sin resolverse: asesinatos políticos, presuntos suicidios, masacres, corrupciones, etcétera. Toda una cadena de acontecimientos, el más reciente: el escandaloso caso del Renave, que, para perjuicio de la salud política del país, han minado de manera grave la credibilidad y la confianza en las instituciones.

### ALGO MÁS QUE PERDÓN

20/09/00

En su reciente visita a Centroamérica, Vicente Fox pidió perdón a los residentes de esa región por el maltrato que reciben los trabajadores que cruzan nuestra frontera sur por parte de las autoridades mexicanas. Pedir perdón supone reconocer los errores, en este caso en la política migratoria mexicana, reconocimiento que no ha hecho el gobierno federal saliente. La actitud de Vicente Fox es entonces un buen inicio. Ojalá no se quede sólo en eso y efectivamente su política en la materia empiece por respetar los derechos humanos de quienes transitan por nuestro territorio en busca de mejor desti-

no. Hacerlo le permitirá además tener autoridad moral para defender los derechos humanos de nuestros connacionales, tan violentados por la patrulla fronteriza de EUA.

Para que su petición de perdón se convierta en una política efectiva de defensa de los trabajadores migratorios que cruzan nuestro país y los nuestros que cruzan la frontera norte, el gobierno de Fox tendría que definir una política en la materia en la que se ponga por delante el interés nacional, en lugar de seguir con la política subordinada a los intereses de Estados Unidos, como hasta ahora han hecho los gobiernos priistas.

Esta subordinación, que se traduce en la ausencia de una política migratoria propia, es la que explica que las autoridades mexicanas no sólo sean incapaces de defender a nuestros compatriotas de los abusos de la patrulla fronteriza y de los rancheros supremacistas, sino que se han convertido en cómplices de la estrategia de Estados Unidos para detener a la mano de obra barata en su país de origen (la que les resulta sobranante a sus necesidades, por supuesto).

Debido a la aceptación del gobierno mexicano de esa estrategia, y para colaborar con la misma, es que se instalaron retenes a lo largo y ancho de nuestro territorio, los que sirven para desalentar el tránsito de nacionales y centroamericanos hacia Estados Unidos. Sobra decir que esos retenes se convierten en un *via crucis* para los trabajadores migratorios de cualquier origen y fuente de corrupción y violación de sus más elementales derechos. La reciente participación de la Policía Federal Preventiva en dichos retenes, subraya el trato policiaco que se le otorga a un complejo problema social que por lo demás crece de manera notable.

Junto con el perdón solicitado por Fox –en el documento escrito y distribuido en la reunión pero no tan claro en su discurso– otro perdón esta siendo solicitado, ahora para los trabajadores indocumentados residentes en Estados Unidos. Este perdón se traduciría en un olvido, en una amnistía a su condición de indocumentados y

esta siendo promovido por la AFL-CIO en un cambio de su política sindical hacia ese sector iniciado a finales del año pasado.

Se trata de un cambio importante si recordamos que las organizaciones sindicales de Estados Unidos han visto a los trabajadores migratorios como una amenaza y una presión hacia la baja de sus salarios. En este cambio de actitud se hace presente la crisis de afiliación de la AFL-CIO, la más grande organización sindical del país, la que se expresa en que para mantener la misma tasa de afiliación – de por sí baja– necesita aumentar sus agremiados en al menos 800 mil anuales. Obviamente una reserva importante para el aumento de su membresía lo constituyen los trabajadores migratorios.

Mucho más débil aparece la propuesta –apoyada por debajo de la mesa por el gobierno mexicano– de reeditar el programa bracero de la postguerra, porque no atiende la complejidad del problema. Lo mismo las visas especiales para trabajadores de alta calificación.

En otras ocasiones he documentado en este espacio la complejidad del creciente problema migratorio. Los destellos que hasta ahora ha dado Vicente Fox sobre el asunto, sobre todo la propuesta de revisar el TLCAN para permitir la libre circulación de trabajadores – como la de capitales, como la de mercancías– que formuló en su visita a EUA y esa petición de perdón (a medias) a los trabajadores migratorios centroamericanos, son interesantes y podrían apuntar a los cambios necesarios en un tema que define mucho del futuro de nuestro país. Por el contrario, si nos quedamos con aquella frivolidad de la campaña de capacitar a los jardineros, los destellos quedarían en simples golondrinas que no hacen primavera.



## ¿DESMANTELAR O REFUNCIONALIZAR?

27/09/00

Después del triunfo ciudadano del pasado dos de julio, la gran tarea para la democratización del Estado la constituye el logro de la libertad sindical. Es impensable una reforma democrática del Estado sin la existencia de sindicatos libres de las ataduras corporativas y autoritarias del sistema político mexicano. La conquista de comicios transparentes y creíbles necesitó del desarrollo previo de un largo ciclo de luchas sociales que a partir de 1988 lograron sintetizarse en la lucha por la defensa del voto; para que esa conquista no se quede en la simple alternancia, ese respeto a la libre elección de los gobernantes hoy tendría que traducirse en la libertad de los sindicalizados para elegir a sus representantes.

El triunfo de Vicente Fox no significa, por supuesto, la garantía de que la democracia electoral se traduzca automáticamente en el desmantelamiento del aparato corporativo de control sindical, aunque ciertamente ese triunfo puede facilitar el desarrollo de relaciones laborales basadas en la existencia de sindicatos libres, sin más legitimidad que aquella que le otorguen sus afiliados. Sin embargo tampoco puede descartarse que el gobierno de Fox trate de refuncionalizar ese control sindical corporativo.

La derrota del PRI en los comicios presidenciales ha dado la puntilla a la estructura sindical corporativa que inició su agonía desde 1988, cuando quedó claro que las viejas centrales sindicales ya no podían seguir cumpliendo con su determinante función del control electoral de los sindicalizados. Detrás de aquella "caída del sistema" del seis de julio de 1988, asomaba con claridad el fracaso de esas centrales para continuar otorgando la necesaria legitimidad electoral al PRI.

Que hoy la legitimidad electoral le venga a Fox del libre voto ciudadano, hace que aquella relación siamesa entre la estructura sindical corporativa y el Estado, ya no encuentre sostén en el ámbito de lo político-electoral. No es casual que el Secretario General de la CTM, Rodríguez Alcaine, se haya apresurado a entrevistarse con Fox para darle sus parabienes, esto es para ofrecerle los servicios de un control que, en lo electoral, ya no es necesario. Ésa evidente obsolescencia sólo hace más patético el servilismo de los burócratas sindicales, quienes durante décadas fueron piezas indispensables del régimen de partido de Estado.

Sin los espacios políticos en el aparato del Estado que las organizaciones sindicales del PRI recibían como cuotas de poder a cambio de sus servicios, hoy esa burocracia sindical navegará en el ocaso del régimen que con tanto esmero apuntaló.

Además, ese deterioro del control electoral de sus afiliados, fue resultado de su incapacidad para oponerse a la estrategia económica aplicada por la tecnocracia desde 1982. En efecto desde que la legitimidad de esas organizaciones nunca provino de sus afiliados, sino de aquella que el Estado les otorgó desde arriba para administrar los derechos laborales, bastó que el Estado cambiara su política económica para que al sindicalismo oficial aceptara pasivamente que el costo de la reconversión económica recayera sobre los trabajadores de manera dramática.

Por otro lado, si nunca habían sido interlocutores de los empresarios en los espacios de la producción, sino simples gestores de una política laboral definida desde arriba, menos habrían de serlo cuando a partir de los ochentas los retos de la productividad y la globalización pasaron a formar parte de la agenda de un nuevo sindicalismo.

Sin embargo, y a pesar de los estertores del aparato sindical priísta, la funcionalidad de su control corporativo para una estrategia económica que ha castigado las condiciones de trabajo y de vida de los asalariados, sobre todo a partir de 1982, es sin duda un buen

argumento para que el próximo gobierno sólo refuncionalice esa estructura, sin tratar de desmantelarla.

A partir del próximo diciembre tendremos indicios ciertos de la estrategia del gobierno foxista en materia de relaciones laborales. Tanto el proyecto de reforma laboral del PAN, como el anteproyecto del PRD, coinciden en la necesidad de realizar los cambios legales para hacer una realidad la libertad sindical, que por lo demás México ha adoptado como compromiso con su ratificación del Convenio 87 de la OIT. Lo que suceda en el Congreso de la Unión con esas propuestas será un buen indicador de la estrategia del nuevo gobierno en materia laboral.

### ¿DÓNDE QUEDÓ LA TRANSICIÓN?

04/10/00

Mi amigo Arturo Anguiano me invitó a participar en un seminario de la UAM-Xochimilco con ese título al que se agrega "una visión desde la izquierda". Con gusto acepté participar y aquí comparto con ustedes algunas notas para esa exposición. Para empezar reconozco que la pregunta es buena, oportuna y si no nos tomamos demasiado en serio, hasta simpática. Tanto esperábamos de nuestra transición a la democracia, que una vez que se registra el primer evento a todas luces de esa transición, la derrota electoral del PRI en los comicios presidenciales después de 71 años en el poder, con cierto sentido de orfandad nos preguntamos, ¿dónde quedó la transición?, cuando quizá la pregunta que tengamos que hacernos, es: ¿dónde estamos nosotros en la transición?

Hay quienes ven los resultados del 2 de julio pasado como una derrota. Depende de cómo los analicemos. En términos electorales por supuesto que fue una gran derrota para la Alianza por México

y de manera particular y dramática para el PRD. Pero no necesariamente en términos políticos, porque paradójicamente, perdiendo, el PRD hizo realidad el objetivo con el que nació: reivindicar la dignidad de los ciudadanos, hacer una realidad el respeto a la voluntad popular para elegir a sus gobernantes. Por supuesto también fue una derrota para el PRI, y en esa derrota pienso que no hay matices, es contundente: se lo derrotó electoralmente y ello significó también una gran derrota política.

Antes del 2 de julio todavía podíamos caracterizar el régimen político de nuestro país como un régimen de partido de Estado. Durante siete décadas en este país un partido hegemónico gobernó casi de manera única; las organizaciones sociales fueron creadas desde arriba como piezas de un sistema de dominación autoritario y corporativo; el poder presidencial fue omnímodo, la independencia entre los poderes una bonita parrafada constitucional; el pacto federal una burla; y la sociedad civil un arabesco mosaico sujeto a los controles del corporativismo autoritario con destellos de rebeldía constantes y profundos pero sin capacidad de cambio democrático generalizado, –hasta la reciente elección federal.

Ahora con ese triunfo en el bolsillo de la ciudadanía, las cosas ya no son ni serán como antes. Para darle seriedad a este descubrimiento del hilo negro basta con acercarnos a la nueva realidad:

- a) en lugar de partido único: dos partidos y medio. En lugar del asfixiante partido de Estado, la ubicación de las fuerzas políticas de acuerdo a su peso real, un importante signo de modernidad que tenemos que celebrar.
- b) en lugar de presidencialismo autoritario, presidencialismo acotado por una independencia entre los poderes creciente.
- c) en lugar del centralismo a ultranza, mayor fuerza de los poderes regionales, entre otras cosas por la presencia de grupos locales de poder representados por el PRI y el PRD.

- d) en lugar de una sociedad civil que otorga el consenso pasivo, una sociedad actuante alrededor de los derechos libertarios y democráticos. Nadie detendrá la defensa de la tolerancia, la laicidad, la pluralidad, el respeto por los derechos de las minorías.
- e) en lugar del control corporativo de las organizaciones sociales..... lo que tenemos son grandes interrogantes. La gran pregunta es si después del triunfo ciudadano, la sociedad, en este caso los trabajadores, se movilizarán para dismantelar la estructura de control corporativo, en una palabra para lograr la libertad sindical.

De esta revisión inicial en torno al significado de los resultados electorales para el cambio institucional y de régimen, es necesario reconocer que gracias a la conquista del respeto al voto y la independencia de la organización de los procesos electorales, la representación política de la sociedad ha avanzado. Para que la alternancia en el poder no signifique nuevas formas de control autoritario, es necesario pasar a una gobernabilidad democrática y para ella, la democratización y autonomía de las organizaciones sociales es indispensable; así también un nuevo pacto federal que ponga en el centro la autonomía de los pueblos indios. El presidencialismo acotado y la auténtica división de poderes parecen no tener retorno; mientras que el sistema de partidos se irá consolidando, no con la presencia de la izquierda que quisiéramos, pero al fin sistema plural de partidos.

## LA DIFÍCIL MODERNIZACIÓN

11/10/00

No he leído el libro de Carlos Salinas, pero estoy segura que no reconoce que la principal dificultad en su proyecto de modernización es que le sobran más de 60 millones de habitantes. En ese proyecto que fielmente ha continuado Ernesto Zedillo y que seguramente profundizará Vicente Fox, dentro de los millones de habitantes sobrantes están los ejidatarios y pequeños propietarios del campo, para quienes la tal modernización les llegó con la apertura indiscriminada de las fronteras y con la eliminación de cualquier apoyo gubernamental, entre ellos los crediticios. Sin importar que en economías desarrolladas como la de Estados Unidos –nuestro gran “socio comercial”–, el monto de los subsidios anuales a la producción agropecuaria sea de 50 mil millones de dólares.

Por razones que nunca ha explicado Herminio Blanco, más allá de los supuestos equilibrios de mercado, a esa apertura indiscriminada hay que sumar la autorización de cuotas de importación por encima de lo acordado y firmado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La reforma al artículo 27 constitucional promovida por Carlos Salinas que eliminó el carácter de imprescriptible e inembargable a la propiedad ejidal, esto es que legalizó la mercantilización de esas tierras, se fundamentó –en ese proyecto de modernización– en la necesidad de otorgar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra y con ello alentar al capital privado –también al foráneo– a invertir en el campo. Gracias a esa reforma, aseguraron priistas y panistas, arribaría una etapa de prosperidad en el campo. Seguramente esa prosperidad del sector rural es la que diariamente motiva a los campesinos a emigrar a Estados Unidos, aún con el riesgo mortal que ello implica

Acorde con el proyecto de despojo a los campesinos, contenido en el nuevo artículo 27 constitucional, se ha agudizado la ausencia de apoyos al campo que mencionábamos arriba. No es casual, por ejemplo, que la Secretaría de Hacienda haya determinado que al Banco de Crédito Rural le sobraban 5 mil 600 millones de pesos para su ejercicio durante el presente año. "Hay exceso de capitalización en Banrural" argumentó Martín Werner en noviembre de 1999 durante una reunión con comisiones del Congreso de la Unión. Por tal motivo, dentro de los ingresos no recurrentes (18 mil 600 millones de pesos en total) considerados en la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2000, encontramos esos 5 mil 600 millones de Banrural. A los señores de Hacienda del gobierno de Zedillo, cumpliendo con la modernización salinista les pareció que había exceso de recursos para los productores del campo!

Por eso tampoco sorprende que la subgerencia de recursos de servicios bancarios del Banrural del Noroeste, esté circulando entre los pequeños propietarios y ejidatarios una lista de 21 requisitos! para la solicitud de crédito de avío C-2000/2001. En esa lista de requisitos, los solicitantes deben entregar a Banrural, "poder amplio y general para pleito, cobranzas, actos de administración y de dominio inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el comercio".

En otras palabras el endoso anticipado de la propiedad. Ah, pero con todo cinismo Salinas argumenta que el rechazo de la gente le viene de la campaña armada por su sucesor! El mismo rechazo que experimentará Zedillo por haber seguido fielmente *la difícil modernización* de Salinas.

## EL CONTINUISMO ECONÓMICO DE FOX

18/10/00

Con la presentación de las metas económicas para el 2001, muy rápido quedaron atrás las promesas de campaña de Vicente Fox. En pos de una reducción del déficit fiscal y del control inflacionario, el equipo foxista de transición anuncia un crecimiento del Producto Interno Bruto casi de la mitad en relación al 2000, en lugar del prometido crecimiento del 7%, un recorte presupuestal de aproximadamente 40 mil millones de pesos, y por supuesto no recuperación salarial, tampoco del empleo. Tres factores inciden en esa modesta proyección del crecimiento económico: menor dinamismo de la economía de Estados Unidos, menores ingresos petroleros y aunque no lo reconocen públicamente, el tercer factor es la voluminosa deuda escondida que hereda el gobierno de Ernesto Zedillo.

Contra las condiciones internacionales poco puede hacerse en el corto plazo. Pero valdría la pena que esa fuerte dependencia de la economía norteamericana empezara a neutralizarse, lo cual implicaría una revolución económica en nuestro país, tan importante como para hacer de la economía nacional una realmente competitiva. No se avizora en los planteamientos foxistas ningún elemento que pudiera al menos sentar las bases de un cambio de estrategia para, en lugar de seguir la ruta de la globalización que reduce al país al triste papel de anfitrión más que complaciente con la inversión extranjera, -dentro de los succulentos platillos ofrecidos al huésped está por supuesto la mano de obra barata-. Por lo tanto, de la misma manera en que los gobiernos priístas, de manera obsecuente, fueron profundizando la supeditación de la economía nacional a



nuestros vecinos del norte, el gobierno de Fox seguirá la misma ruta.

La determinante de la caída de los ingresos petroleros, tiene también una salida que es importante empezar a construir: se trata de desarrollar una estrategia de industrialización del crudo, como lo hace cualquier economía que se precie de moderna e integrada. Pero no, lo único que se le ocurre al equipo foxista frente al pronóstico de la reducción de precios del crudo, es ¡aumentar la plataforma de exportación!, para así seguir la torpe ruta de sus antecesores. Ciertamente, para uno de los principales recursos nacionales, el petróleo, no hay estrategia, solamente una política reactiva frente a condicionantes externos, política que la experiencia ya evidenció que no sólo no resuelve la situación sino que la empeora.

Pero eso sí, muy orondo, el coordinador del sector petrolero del equipo de transición, Fausto Alzati, declara que "el Estado ya no tiene nada que hacer en la industria petroquímica y tiene que encontrar de inmediato la manera de salirse, eliminando la división artificial entre básica y secundaria...".

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química, Amado Cavazos informa que la importación de petroquímicos en 1999 representó el 87% del total de las exportaciones de crudo, esto es casi anuló los ingresos petroleros, gracias a la ausencia de inversiones. Frente a esta desoladora realidad, el argumento de Alzati seguramente será, que precisamente por esa falta de inversiones es necesario privatizar la industria petroquímica y desaparecer la "artificial" diferencia entre básica y secundaria, mientras que los países de donde viene esa teoría y que a pie juntillas ha seguido el gobierno y por lo visto seguirá, hacen justamente lo contrario: una política de industrialización que integra el sector petrolero. Estamos pues en los dinteles de la privatización de segunda generación; ojalá en el 2006 podamos experimentar también el voto de segunda generación, el que no se queda en la simple alternancia.

Recapitulando: si en torno a estos dos factores determinantes del menor ritmo de crecimiento para el 2001, los foxistas se quedan impávidos y hasta orondos, en relación al tercer factor, la enorme deuda escondida –sobre la que sí podrían actuar de inmediato para evitar los recortes presupuestales, simplemente no dicen nada, por la sencilla razón que los beneficiarios de la misma: Fobaproa, Pidiregas, rescate carretero, deuda de la banca de desarrollo, compromisos por la reforma de la seguridad social, se encuentran muy bien representados en el gobierno foxista y en algunos casos ni siquiera necesitan estar representados, por la sencilla razón de que son ellos mismos.

## TRANSITAR HACIA EL SIGLO XIX

25/10/00

Si como se rumora, Carlos Abascal Carranza será nombrado Secretario del Trabajo y Previsión Social en el gabinete de Vicente Fox, sindicatos y trabajadores tendrían que estar tranquilos: en lugar de conflictos obrero-patronales lo que tendremos en el mundo del trabajo serán “patrones que asumen el desarrollo integral del trabajador, pero estos asumen una responsabilidad igual”. Vale la pena revisar la entrevista que Roberto Garduño hiciera al ex líder de Coparmex, publicada en *La Jornada* del pasado 16 de octubre.

El gran mérito del Sr. Abascal para que actualmente esté coordinando el grupo sobre cuestiones laborales en el equipo de transición foxista, es haber atravesado el muro de Vallarta 6 en sus tiempos de líder de la Coparmex, y convencido a Fidel Velázquez de firmar el famoso documento sobre “Nueva Cultura Laboral” que se presentó en Los Pinos el 13 de agosto de 1996 en ceremonia encabezada por el presidente Zedillo. El carácter de famoso le viene a dicho

documento porque supuestamente expresa el pacto obrero patronal para la tan anunciada reforma laboral. Pero es obvio que de pacto tuvo poco, porque a cuatro años de firmado, el supuesto consenso para esa reforma no se ve por ningún lado.

Si el caso de Tabasco levanta sospechas sobre un posible acuerdo entre Fox y el dinosáurico Madrazo a fin aterciopelar la alternancia en el poder; por su parte el nombramiento de Abascal para los temas laborales hace suponer –casi sin temor a equivocarme– que por lo menos el sector más influyente de la CTM ve con buenos ojos la proyección de Abascal hacia la Secretaría del Trabajo.

Que esto sea así, habla de los profundos estragos del sector obrero como pilar del antiguo régimen. Que su fuerza de negociación les alcance para nombrar a un representante patronal para dirigir los destinos del mundo laboral, lo dice todo. Pero si nos asomamos por otros rincones sindicales, las cosas no andan mejor: todo parece indicar que el mayor sindicato de América Latina, el SNTE ve con agrado al rector del Tecnológico de Monterrey –otro empresario, en este caso de la educación como mercancía– como próximo Secretario de Educación Pública.

Pero bueno, dejemos de lado la profunda crisis del régimen priísta y regresemos a la entrevista con Abascal. El ex dirigente de Coparmex está muy enojado con eso de que existan trabajadores y patrones, y como iluminado recuerda que “lo esencial es ser mujer u hombre y no trabajador”. Para abundar en el tema, y con ese aire que se adquiere cuando se habla desde el púlpito dice: “para mí, ser trabajador o ser empresario es un accidente, ahí está la clave del asunto”. ¿Cómo superar ese pequeño tropiezo, cómo resolver ese accidente de la vida?. Muy sencillo, si entre sus héroes existenciales ya estaba Nelson Rockefeller, ahora basta que agregue a su iconografía a Carlos Absacal, porque tal como confía al reportero “he sido empleado, obrero de un taller de imprenta y mensajero, hasta llegar a director general”. Después de esa maravillosa experiencia, el hecho de que el 98% de la Población Económicamente Activa en

México, se empecine en ser empleado u obrero, jornalero o peón, trabajador por su cuenta, o trabajador familiar sin remuneración; sólo se explica por alguna “distorsión cultural”.

Lo mismo vale para ese accidente de la vida que es que en nuestro país, los 36 empresarios más ricos se apropien del mismo monto del Producto Interno Bruto que 15 millones de asalariados. Si para aminorar un poco esa diferencia abismal “los sindicatos estallan huelgas *a priori* (sic) demandando incrementos salariales de 50 a 100%, cuando la inflación es de 6 a 8 %; el futuro Secretario del Trabajo no titubea: “(eso) Es una brutal distorsión cultural...” Al final, el reportero le pregunta: “¿Qué van a hacer con la gran disparidad en la distribución de la riqueza? La iluminación se le esfuma a Abascal, y parco responde: -“Ese es el gran tema” . Terco, Garduño le replica: -“Pero respóndame”. Accede: “La mejor forma de distribuir la riqueza es mediante círculos virtuosos de democracia...”

El espacio se agotó, quizá en otra colaboración siga con este tema. Mientras tanto usted no se pierda de esa entrevista, en la que el próximo Secretario del Trabajo nos revela que eso de los derechos sociales no es más que una monserga de trabajadores que se olvidaron de su esencia humana. ¡Así de fácil se pretende dar vuelta hacia atrás a la rueda de la historia!

## LA REBELIÓN DE LOS BURÓCRATAS

01/11/00

Como signo de los nuevos tiempos, durante los últimos días se han desarrollado una serie de manifestaciones de trabajadores al servicio del Estado que reclaman, entre otras prestaciones, el bono sexenal que por tradición se les ha entregado. El hecho de que no se hayan aprobado recursos en el presupuesto de egresos para financiar ese

bono, como se los informó el propio Presidente de la República en medio de las protestas de los afectados, pareciera que no surte el efecto que el gobierno de la República quisiera, de manera que los *burócratas insisten en su reclamo*. Frente al uso discrecional de los recursos públicos y frente a los gastos superfinos y partidas no justificadas que, según el análisis del Área de Economía del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado en la pasada legislatura, para el presente año alcanza la cifra de 60 mil millones de pesos, ciertamente la respuesta presidencial no es satisfactoria.

Obviamente el asunto no es la falta de recursos, tampoco la falta de salida legal para una erogación mucho menor a otras que se realizan de manera subrepticia. Con la negativa a pagar esa prestación basada en los usos y costumbres de un régimen político, más bien se pretende desnudar esas prácticas y pasarle el problema al gobierno entrante. Como en la mejor tradición tecnocrática, Vicente Fox ataja la pelota y dice no al bono porque se estaría financiando con el dinero de la gente, pero sí a los siete millones para festejos del cambio de gobierno y sí también a todos los pagos de intereses a los pagarés del Fobaproa, no importa que en ellos se encuentren los originados en las operaciones reportables del informe de Mackey. Al menos eso se entiende de las declaraciones de sus voceros económicos sobre el recorte del gasto público para el 2001, que pudieran más que evitarse con solamente eliminar del costo financiero del rescate bancario las operaciones ilegales e irregulares ya detectadas.

No sabemos en qué vaya a parar el asunto que hoy se encuentra en manos de los legisladores. Pero desde la óptica de la situación laboral de los trabajadores al servicio del Estado, es evidente la cantidad de situaciones irregulares que han vivido. La que más violenta sus derechos: definir sus relaciones laborales por un apartado "B" del art. 123 constitucional que les otorga un carácter discriminatorio en relación a los trabajadores del Apdo. "A". Regularizar su situación en tomo al derecho a recibir la prestación

que hoy reclaman, podría empezar a regularizar su situación hacia el objetivo de ser iguales ante la ley.

El hecho de que el patrón de los burócratas sea el gobierno, en un régimen en donde no hubo diferencia entre partido y Estado, en donde el clientelismo y el corporativismo ha sido uno de los pilares del control político de los trabajadores, ha provocado que su condición de asalariados quede poco clara y aparezcan más bien como siervos del partido, del sindicato, del gobierno, del Estado y de la Nación. Por eso el bono sexenal aparece, no como una prestación legal, sino como la concesión graciosa del Señor en turno en el Poder. La rebelión que hoy han emprendido por esa prestación, junto con la dura respuesta presidencial (del saliente y del entrante), puede empezar a quitar los velos a una relación muy cercana a la servidumbre y permitir que emerja el verdadero rostro de los burócratas: asalariados con derechos iguales al resto de los trabajadores. Para empezar tendrán que reclamar el derecho a constituir libremente sus organizaciones sindicales y elegir, también libremente, a sus representantes.

#### CUATES QUE SE APOYAN

08/11/00

La semana pasada tuvo días muy agitados para el secretario general del SUTERM Leonardo Rodríguez Alcaine, alias La Güera, además secretario general de la CTM y presidente en turno del Congreso del Trabajo. Junto con el vocero de la CTM, Netzahualcóyotl de la Vega, tuvo un encuentro con el presidente electo Vicente Fox. Días después, estuvo acompañado por el Presidente Ernesto Zedillo en la inauguración del Congreso del SUTERM. Horas más tarde sería reelecto

por sexta ocasión como líder de los sesenta mil trabajadores electricistas de la CFE.

En la entrevista con Vicente Fox, este le anunció que se abriría un diálogo nacional para reformar la Ley Federal del Trabajo con trabajadores, empresarios, especialistas, académicos y el Poder Legislativo. La Güera respondió que era priísta, que moriría priísta, pero que colaboraría con el gobierno de Fox. La circunstancia para colaborar la encontraría en el respaldo del Presidente Zedillo y en la votación que a mano alzada emitieron los delegados al Congreso del SUTERM; así después de veinticinco años al frente de ese sindicato seguirá siendo su dirigente por seis años más, si otra cosa no dispone la transición.

Que Fox necesita la colaboración de Rodríguez Alcaine para aprobar la privatización de la energía eléctrica es indudable, de manera que la sexta reelección del líder colaborador seguramente fue vista con buenos ojos por el presidente electo. La información que se dió después de la entrevista entre ambos, nada dice de los compromisos mutuos para la privatización y para la permanencia del dirigente frente a uno de los más grandes sindicatos nacionales y uno de las más fuertes expresiones del corporativismo del viejo régimen. Sin embargo, las condiciones para esa mutua colaboración son óptimas y de nuevo refuerzan la hipótesis de una posible refuncionalización de ese corporativismo por parte del próximo gobierno. Aunque al final, serán los trabajadores por supuesto quienes tengan la última palabra.

Pero aún con la refuncionalización de por medio, de aprobarse la reforma al sector eléctrico anunciada por el equipo de transición, ello traería consecuencias fuertes para el sindicato. Si como se ha informado, con esa reforma se pretende permitir la entrada de capital privado en la distribución de la energía eléctrica –y no sólo en la generación que ya la reforma de 1992 permite, siempre y cuando sea para el autoconsumo mientras que los sobrantes tienen que ser distribuidos por la CFE–; las empresas constituidas para ese efecto

quitarían materia de trabajo importante al SUTERM y con ello terminarían debilitándolo, a menos que esas nuevas empresas entren en el esquema de los contratos de protección tal como lo hacen los empresarios de la industria maquiladora, y entonces las promesas de libertad sindical en la reforma laboral anunciada por Vicente Fox, quedarían en eso, en simples promesas.

El respaldo del SUTERM a la privatización del sector eléctrico no sería más que la culminación de un proceso de despilfarro del patrimonio nacional, que se inició apenas nacionalizada la industria eléctrica con el contubernio del sindicato. La mejor vigilancia de ese patrimonio es la que pueden hacer los mismos trabajadores especializados, a través de una participación democrática en la gestión sindical. Eso se habría conseguido de haber permitido el gobierno la organización de un sindicato nacional unificado; sin embargo el apoyo a Rodríguez Alcaine para golpear a la Tendencia Democrática de los electricistas encabezada por Rafael Galván en 1976, fue decisivo para continuar con el control de los trabajadores y con la impunidad de líderes corruptos.

Muchos favores le debe el régimen a La Güera. Y todo parece indicar que muy pronto el próximo gobierno estará en la misma situación.

## PRECARIEDAD EN EL EMPLEO

15/11/00

La precariedad define al empleo en nuestro país. En las zonas urbanas, el 40% de los ocupados perciben ingresos menores a 2 mil 107 pesos mensuales, el 45% de ellos no tiene prestación alguna y el 43.9% trabaja jornadas por encima o por debajo de las 48 horas semanales. Pero a estas características hay que agregar la irracionali-



dad de que el desempleo abierto sea menor en aquellos grupos que no tienen instrucción o que apenas tienen primaria incompleta (1.8%) y mayor para quienes completaron la primaria (2.0%), o estudiaron algún grado de secundaria (2.9%), o tienen estudios medios y superiores (3.5%). Estos datos del INEGI (*Cuaderno de Información Oportuna*, junio del 2000) nos sirven para trazar a grandes rasgos las condiciones de vida de los trabajadores de las zonas urbanas del país, en las que habita el 75% de la población total. La situación del 25% restante de la población que vive en las zonas rurales, sabemos que es peor.

Los datos arriba citados son bastante ilustrativos de las condiciones en las que se emplea fuerza de trabajo en el país: con ingresos que no alcanzan para la manutención del trabajador y su familia, que son por lo tanto inconstitucionales, también por la ausencia de las mínimas prestaciones; y con jornadas de trabajo que por su diferencia con la jornada legal significan un derroche para la economía, sea por el subconsumo o por la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Pero si a ello agregamos el hecho de que a mayor nivel educativo mayor riesgo de cesantía, ciertamente las distorsiones del mercado de trabajo son alarmantes.

Ninguno de estos fenómenos es producto del azar o de la mala fortuna de los millones de trabajadores que se encuentran en esa situación. Lo que tenemos a la vista es el resultado de la política económica y laboral del gobierno durante los últimos 23 años. La caída del salario real iniciada en enero de 1977 fue uno de los primeros recursos –junto con la renta petrolera– que el gobierno utilizó para financiar la crisis de la deuda externa que se hizo inmanejable y estalló en 1982. Al respecto siempre vale la pena recordar que el anterior ciclo de caída salarial (1940-1952) duró doce años, y dieciseis más para que en 1968 el salario mínimo real alcanzara el valor que tenía en 1940. En total 28 años, una generación perdida en términos de bienestar. Lo alarmante del ciclo actual es que la fase de caída ya lleva 23 años, sin que aún empiece la recupe-

ración. Cálculos conservadores hacen suponer que de iniciarse esta recuperación el próximo año de manera sostenida, tendrían que transcurrir al menos otros 23 años para situarnos en el nivel de 1977.

El deterioro del salario real y del empleo generó el crecimiento de la economía informal. En ausencia de un seguro contra el desempleo, muy pocos se pueden dar el lujo de estar desocupados, de ahí que las ocupaciones precarias crecieran tanto que ahora esa economía informal constituye casi el 60% de la Población Económicamente Activa. En estas condiciones no es extraño que el grado de instrucción vaya en relación inversa a la probabilidad de quedarse sin empleo.

Si la alternancia en el poder no sirve para empezar a cambiar estas condiciones sociales de existencia de la fuerza de trabajo, entonces sólo habrá significado cambio de siglas y de personas. Son muchas las reformas económicas y laborales que tendrían que aplicarse para detener ese deterioro. Sólo para citar una: Cambiar el régimen salarial que deja en manos del Ejecutivo la determinación del salario mínimo y al Banco de México actuar como juez y parte en la medición del índice de precios, para establecer un sistema objetivo y autónomo de la medición de la pérdida de capacidad de compra de los salarios. Para un régimen realmente protector de los salarios la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tendría que desaparecer. Mientras la iniciativa de reforma laboral del PAN en el Senado deja el tema intocado, en el anteproyecto del PRD se establece que será la Cámara de Diputados la que trimestralmente determine los salarios mínimos en función del resultado de los estudios del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades. Después de 38 años de vida de la CNSM, y frente al deterioro salarial, su obsolescencia es más que obvia.

Muy pronto tendremos noticias sobre la integración del gabinete de Fox. No sabemos qué tan "gabinetazo" será, pero sin duda la calificación le vendrá de su capacidad para resolver problemas tan

ingentes como el de las condiciones de existencia de millones de trabajadores en el país.

## LA REBELIÓN DE TEPITO

22/11/00

Mientras Tepito, además de barrio histórico lleno de tradiciones, sea un espacio privilegiado para la operación de bandas criminales, continuará siendo territorio de operativos policiales más o menos eficaces para el decomiso de mercancía ilegal y la detención de delincuentes, como el que se realizó la semana pasada. Estas acciones no le quitarán ni una ni otra característica: la bravura y la sobrevivencia en un mundo en donde las fronteras entre lo ilegal y lo legal son muy débiles.

Sin embargo en este paisaje cotidiano de Tepito, lo sucedido en el operativo de la semana pasada rompe con los precedentes: la respuesta contra la acción policiaca convirtió a ese barrio en territorio sin ley durante diez horas, y los habitantes se dedicaron a desvalijar camiones con mercancía. Como un ejército de hormigas y al mando de jóvenes avezados en el oficio, hombres, mujeres y niños se dieron a la tarea de descargar las mercancías –alimentos– de algunos transportes secuestrados en el territorio recién liberado. No se trató de una protesta contra la inflación, tampoco contra los bajos salarios o el desempleo, como ha sucedido durante los últimos veinte años en diversas ciudades de América Latina. El origen fue la protesta contra un operativo policiaco, que en términos legales puede ser inobjetable; lo que no puede pasar desapercibido es el hecho inédito del saqueo como respuesta social.

Después expulsar a los policías, a los habitantes de Tepito no se les ocurrió por ejemplo, acudir al presidente electo para presentar

sus quejas por lo que consideran abuso de autoridad, tampoco frente a otras instancias legales, de manera que la desconfianza tepiteña hacia las instituciones parece proyectarse al gobierno foxista. Pero no sólo desconfiaron de la legalidad establecida, además de ello, las imágenes de saqueo de los camiones no dan la impresión de que los directores de la operación forzaran a la población participante; más bien se alcanza a vislumbrar un ambiente de regocijo en una operación de justicialismo elemental que parecía decir: ¿"si es legal que unos pocos se apoderen del 20% del PIB para rescatar a los bancos, por qué nosotros no podemos apropiarnos de algunas toneladas de pan?

Sin duda como relatan algunas crónicas, "nunca se había visto a tantos rateros juntos"; pero también es cierto que nunca se había visto tal poder de convencimiento de unos delincuentes sobre los ciudadanos honestos. ¿O el oficio de delincuente ya alcanzó a toda la población tepiteña? Cualquiera que sea el caso, la revuelta popular de Tepito está expresando un profundo deterioro de las instituciones de la mano de un alto grado de irritación social, que tendría que atenderse desde sus raíces.

La credibilidad en la legalidad de las acciones se estrella contra la presencia de judiciales federales y capitalinos que se encontraban resguardando la bodega para la que se llevaba orden de cateo. La historia de corrupción de los aparatos policiacos es añeja, y mucho los esfuerzos del gobierno actual del D. F. por erradicarla, pero obviamente no han sido suficientes. Seguramente ningún esfuerzo para sanear a la policía será suficiente si no se empieza por restaurar las mismas relaciones sociales, de las cuales el 50% se tejen en la llamada economía informal- economía de la que Tepito es expresión paradigmática-. Mientras el país no sea capaz de generar empleos suficientes con salarios dignos, la necesidad de sobrevivencia seguirá mercantilizando todo, también la ley.

Del mundo tepiteño que por unas horas libera su territorio de las fuerzas del orden establecido para en su lugar colocar al pillaje

como norma de acción común, seguramente no se puede construir una sociedad mejor que aquella contra la que se están rebelando; pero seguramente a los tepiteños no les interesa levantar ningún proyecto alternativo de sociedad, tampoco es su responsabilidad hacerlo. Lo único que están expresando es su profunda irritación social contra los cateos policiacos que alteran su vida cotidiana. Quizá la irritación sería menos y con una menor capacidad de convocatoria, si en el entorno social en que se da, prevalecieran los valores de la justicia, la honestidad y la legalidad. No es el caso.

Pero si los tepiteños no son los encargados de presentar alternativas frente al profundo deterioro en todos los órdenes de la vida nacional, ojalá que a quienes sí les corresponde: partidos y gobierno, no reduzcan el análisis de los resultados del operativo al éxito o fracaso de la acción policiaca. Por su parte, a las buenas conciencias que quisieran reducir así la inconformidad tepiteña, tendría que bastarles la subversiva imagen del saqueo –la sacrosanta propiedad privada trasegada de unas manos a otras por la simple voluntad popular–, para en lugar de sofocar el hecho con la consigna del “no debería ser así”, aceptar que sucedió y sacar sus conclusiones. El campanazo de alarma de la rebelión de Tepito difícilmente se puede soslayar.

#### GABINETE *HABEMUS*

29/11/00

Una vez conocido el gabinete de Vicente Fox, ya no queda duda sobre la representación de los intereses empresariales en el gobierno, de manera directa, sin intermediarios; a diferencia de la clase política priísta que se nutrió y expresó la complejidad del desarrollo de la estructura social del país a los largo de siete décadas.

De esta representación directa ya teníamos antecedentes, cuando en 1988, Vicente Fox reunió a los diputados panistas que se oponían a aprobar la conversión de pasivos bancarios en deuda pública. Mientras los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y los legisladores del PRI aparecían como los empleados de los banqueros a la hora de abogar y votar a favor de la socialización de las pérdidas bancarias, Fox y los más activos legisladores del PAN actuaban como los interesados directos en esa aprobación.

La coincidencia entre ser empresario y ejercer el poder político, habla del proyecto de derecha que triunfó el pasado dos de julio, por lo demás un triunfo legal y legítimo. Que este triunfo de un candidato y un partido de derecha sea un obstáculo para convertir la alternancia en transición, se debe a que esa derecha es portadora de un proyecto para el cual la democracia es un estorbo. Para el régimen priísta la democracia también fue un estorbo, la diferencia es que mientras los priístas se constituyeron en términos generales como los servidores de los empresarios (lo que no niega a la política como fuente de acumulación y de creación de empresarios, v.gr: Carlos Hank); la nueva clase política foxista forma parte de las filas empresariales. Si antes el velo ideológico trataba de ocultar esa representación, en el gobierno de Fox esos velos no serán necesarios.

Dos siglos atrás, y en algún país europeo, el triunfo de un partido y un candidato que representaran directamente los intereses empresariales pudo haber significado el ascenso de una burguesía progresista y democrática que triunfa sobre el oscuro sistema feudal. No es el caso en el México globalizado del siglo XXI; menos aún cuando en este país ya se vivió esa revolución social y el papel del burgués radical le tocó cumplirlo a las masas campesinas contra la oligarquía terrateniente del profiriato. No es el caso tampoco cuando la burguesía mexicana se desarrolló bajo el ala protectora del Estado, muy lejos del espíritu arriesgado e innovador con el que Joseph Schumpeter caracteriza a la clase empresarial.

No, la burguesía representada por Fox y su partido no quiere arriesgar nada, sólo pide seguir haciendo del aparato estatal el mejor espacio para la protección de sus pingües ganancias que otorga la información privilegiada a la hora de las privatizaciones y las devaluaciones; también a la hora de usufructuar recursos públicos para negocios privados y a la hora de violentar derechos sociales para una más jugosa explotación de la fuerza de trabajo.

En las caras empresariales del nuevo gabinete no se vislumbra por ningún ángulo el carácter progesista y democrático de la nueva clase política. Creyentes a pie juntillas en los beneficios del mercado, han sido los primeros en violentar sus leyes para beneficio de sus ganancias. Las privatizaciones son el mejor ejemplo de cómo el neoliberalismo que pregonan ha servido simplemente para que unos cuantos acumulen ganancias fabulosas, baste recordar el caso de la privatización bancaria. Y si los señores empresarios resultaron malos administradores, ahí están instituciones como el Fobaproa-IPAB para ponerlos a buen resguardo de esas leyes del mercado, que de haberse aplicado como a cualquier changarro, ya habrían pasado a las filas de los proletarios.

Con ese antecedente del Fobaproa tampoco se vislumbra que el reino de la legalidad, de la previsión y la certidumbre vaya a empeorar en las relaciones económicas que antes que nada son relaciones sociales, de esas de las que se nutre el país cotidianamente. Cuando Fox termina la presentación de su gabinete dice, alzando los brazos como desde el púlpito: "Que Dios los bendiga a todos". Desde algún rincón alguien dice en voz baja "...y que nos agarre confesados!"

## LOS PRIMEROS PASOS

06/12/00

*Para Rosario Robles, con mi profundo reconocimiento por su labor.*

A partir del 1º de diciembre se han registrado tres hechos que, más allá de la alternancia, pueden sentar las bases de un nuevo sistema político en México: la desacralización del poder en la toma de posesión de Vicente Fox, el anuncio del envío de la propuesta de la Cocopa sobre Derechos y Cultura Indígenas como iniciativa de ley, y el rompimiento del prolongado siencio que había mantenido el EZLN.

Vicente Fox llegó vestido de color claro y saludó a sus hijos antes que ceñirse al protocolo de la ceremonia de la transmisión de poderes y alteró las frases en su toma de protesta. Ello ha bastado para que los partidos de oposición armen un revuelo digno de mejor causa. En el país de las tradiciones hieráticas bienvenidos sean los rasgos de frescura en el ejercicio del poder, sobre todo cuando ese poder ha usado todos los símbolos de que dispone para hacer sentir su lejanía respecto de los gobernados. Si más adelante es necesario mantener a raya cualquier tentación fujimorista del nuevo presidente, seguramente el origen de esa tentación no estará en el desenfado de su manera de gobernar, sino en el vacío que ofrezcan las propuestas políticas para fortalecer la institucionalidad democrática de la República.

Son las carencias de proyectos democráticos enraizados en la sociedad las que pueden llenarse de autoritarismo; así que más vale llenar esas ausencias en lugar de sobredimensionar la importancia de los protocolos. Por lo demás, entender la Constitución como un protocolo, estos es como el conjunto de reglas que norman una ceremonia, es realmente disminuir el significado de la Ley Suprema que constituye la expresión jurídica del pacto político de la socie-



dad, la voluntad general en Rousseau. En cambio, me parece más riesgoso para la tolerancia y la pluralidad de cultos, su alarde de visitar la Basílica de Guadalupe y recibir el crucifijo de manos de su hija.

Por su parte, el envío de la iniciativa de la Cocopa es un gesto de buenos augurios para la paz en Chiapas. Contenidos en esa propuesta los Acuerdos de San Andrés, la decisión del Presidente Fox documenta la voluntad política de cumplir el compromiso que el ex-Presidente Zedillo ignoró. Ese gesto no es cosa menor para reconstruir el proceso de diálogo, de la misma manera el retiro parcial de los destacamentos de las Fuerzas Armadas.

Sin duda esa decisión constituye una prueba en la relación entre Fox y su partido el PAN, el que tendría que hacer a un lado la iniciativa sobre las Cartas Municipales presentada en el Senado de la República en 1998. Constituye también una prueba para el PRI, que en su momento apoyó la iniciativa de Ernesto Zedillo, si bien nunca se abrió la discusión en Comisiones, entre otras razones por la acertada decisión del PRD de no participar en un proceso legislativo que implicara el desconocimiento de los Acuerdos de San Andrés.

La suerte de la paz con dignidad en Chiapas queda ahora en manos del Legislativo, y por supuesto en el cumplimiento, por parte del Ejecutivo, de las condiciones que el EZLN ha definido para reanudar el diálogo. Por su parte, el rompimiento del silencio junto con el anuncio de su viaje a la capital de la República para convencer al legislativo de las bondades de la iniciativa de la Cocopa, recupera a esta fuerza como lo que es: un factor imprescindible para el proceso de transición a la democracia en el país.

Por lo pronto una nueva coyuntura se abre a partir del 1º de diciembre: una nueva forma de hacer política, un nuevo estilo que independientemente de las intenciones escenográficas de Vicente Fox, recuerde a la gente la necesidad de hacer de la política el interés de todos y ello implica la desacralización del poder; la obligación de mandar obedeciendo que es también cumplir los acuerdos

pactados con los gobernados; y la necesidad de reformar a fondo al Estado mexicano, rehacer el pacto federal con la inclusión de los siempre olvidados, mediante el otorgamiento de la autonomía a los pueblos indios. Sin echar las campanas al vuelo, con cautela, no hay que perder de vista estos primeros pasos.

## MÁS SOBRE LA IZQUIERDA (I)

13/12/00

En un país de ancestrales y profundas desigualdades como es México, nunca han faltado causas para las luchas de la izquierda, y sin embargo ello no ha sido suficiente para que la izquierda encuentre una identidad ideológica y un proyecto propio. Si hacemos una revisión de las movilizaciones sociales encabezadas por la izquierda, antes de 1988, la casi totalidad fueron en torno a demandas de justicia social por las que se hizo la primera revolución social del siglo xx, la revolución mexicana. En esas luchas la izquierda adquirió la identidad que proyecta un programa de reivindicaciones populares, en un contexto en el que el discurso oficialista del gobierno también las reivindicaba como propias, y quien hasta fines de la década de los setentas llevó adelante una política redistributiva, que si bien no fue suficiente para disminuir los altos parámetros de concentración del ingreso y desigualdad, sí alcanzó en cambio para promover una fuerte movilidad social, sobre todo en torno al acceso a la educación.

Por su parte, las luchas sindicales en las que también participó la izquierda no alcanzaron a imprimirle el sello de una izquierda con sentido de clase, porque a pesar de la importancia de movimientos sindicales como el de mineros, ferrocarrileros, maestros y electricistas, estos movimientos no constituyeron una masa crítica

de oposición a la política autoritaria y corporativa del régimen, como para plantear el reto a la izquierda de convertir este eje de lucha como el central.

Sin dejar de reconocer las heroicas luchas sindicales de la izquierda, que pudieron haberle otorgado un perfil de clase distinto al popular, perfil que le marcaba una amplia desventaja frente al gobierno, lo cierto es que la eficacia del control corporativo por parte del Estado fue lo suficientemente fuerte como para sofocar y marginar las luchas del sindicalismo independiente de la década de los setentas. Esta eficacia se fundamentaba no sólo en la represión y el autoritarismo, sino también en las ventajas que en términos de salarios, prestaciones y estabilidad en el empleo, les significaba a los trabajadores estar afiliados a los sindicatos oficiales. Se explicaba pues, también por su legitimidad social. Si a ello agregamos la importancia de la población rural hasta fines de la década de los sesentas y la política de retención de la mano de obra en minifundios improductivos; ciertamente la estructura social de la fuerza de trabajo aún permitía la nostalgia de un pasado campesino y la lucha por la tierra como un elemento central de sus reivindicaciones.

Todas esas condiciones, las condiciones específicas del desarrollo capitalista en México, impidieron que la izquierda pudiera desarrollar un programa de clase, distinto al programa de reivindicaciones que había emergido de la Revolución Mexicana. Así fue como en México se desarrolló una izquierda populista y nacionalista.

Y esta fue la izquierda, porque no había otra, que fundó el PRD, junto con los sectores del nacionalismo revolucionario que venían del PRI encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas. Y también fue esta izquierda nacionalista, popular y no clasista, la que sufrió la derrota el pasado dos de julio. La derrota del PRD el pasado dos de julio se explica en buena medida por la ausencia de una izquierda democrática y moderna en el PRD, porque la que le ha dado vida es una izquierda anclada en el pasado, cuya radicalidad y mérito histórico

durante los últimos once años es haber levantado la bandera del sufragio efectivo, esto es, la consigna maderista no cumplida por los gobiernos priistas. Una vez conquistada esta demanda con el triunfo ciudadano del pasado dos de julio, el ciclo histórico de luchas iniciado con la Revolución Mexicana se ha agotado.

Hoy el desafío de la izquierda es construir un programa de clase, ese que tanto espanta a Carlos Abascal; poner en el centro las demandas de democracia y libertad sindicales; también las de autonomía de los pueblos indígenas; modernizar su nacionalismo que significa, entre otras cosas, reivindicar los derechos de los trabajadores migratorios. Mientras no se enfrenten los retos de la realidad, el PRD –candidato natural por no demasiado tiempo para encabezar las luchas de la izquierda– seguirá derrochando largas horas de discusión en torno a las obligaciones de sus militantes en relación al gobierno de Fox, como en el reciente pleno de su Consejo Nacional.

### MÁS SOBRE LA IZQUIERDA (SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE)

20/12/00

Si no encuentra su propio perfil, su propia identidad, la izquierda perredista corre muchos peligros:

- a) Seguir por el camino de confundir partido con maquinaria electoral, que implica suponer que el destino del país es la democracia sin apellidos y los ciudadanos entes abstractos cuya corporeidad se manifiesta sólo en las urnas. La voracidad de votos que se despierta en esta ruta hace proclive al PRD a aliarse con quien sea. Bajo el lema de “enfrentemos al conservadurismo”

- mo de Fox" y al grito de ¡Viva Juárez!, es muy fácil confundir lucha de izquierda con nostalgia del pasado.
- b) El populismo de derecha encabezado por Fox, pero al fin populismo, puede convertirse para la izquierda –aunque parezca el colmo– de nuevo en la tragedia de no encontrar su propia identidad y por lo tanto de convertirse en una izquierda marginal y testimonial. Las justas demandas de conservar como patrimonio nacional las industrias estratégicas; de defender el Estado laico y la educación universal laica y gratuita; la tolerancia y los derechos de las minorías; no se avizoran suficientes para levantar un movimiento social que dé sustento a una nueva opción de poder desde la izquierda. Esas demandas articulan una importante lucha de resistencia frente a las consecuencias de la profundización del modelo neoliberal encabezado por Vicente Fox, pero las alternativas de poder se desarrollan no sólo por su capacidad de resistencia frente al otro, sino y sobre todo por la capacidad de propuesta logre subordinar a la del contrincante.

A pesar de la importancia de estas luchas, ellas no son suficientes para poner a la izquierda a buen resguardo de la marginalidad política. Pero de ello no toda la culpa es de la izquierda como sujeto político, la falta de madurez del proyecto de izquierda democrático y moderno tiene que ver sobre todo con la estructura social del país: con más del 50% de la PEA en el sector informal, es difícil no continuar con un discurso populista y no clasista, y sin embargo es necesario levantar ese programa que pone en el centro la demanda de que el trabajo se apropie del valor que le corresponde, demanda imposible de cumplir sin la disolución del corporativismo, sin la libertad sindical; cuando lo que se avizora desde el foxismo es la refuncionalización del control de los sindicatos. La política de la redistribución desde arriba sin la participación del ciudadano y de la sociedad, es un paternalismo que puede caer de nuevo en el autoritarismo.

- c) Cuando los zapatistas arriben a la Cd. de México el próximo febrero, el PRD estará a punto de realizar un Congreso que de nuevo se avizora rehén de los grupos de interés. Ciertamente la autoridad moral y capacidad de convocatoria del EZLN puede colocar en serios aprietos al PRD, una vez que esta se despliegue en su mismo territorio. No sabemos cuál sea el resultado para el PRD de esta movilización zapatista, lo que sí sabemos es que para la construcción de esa izquierda que el país necesita, la decisión del EZLN es muy positiva.

Si el PRD ancló su proyecto de nación en una política redistributiva desde arriba y en la demanda radical de respeto al voto, no cumplida hasta el el dos de julio, pero levantada 90 años atrás, el EZLN ha levantado un proyecto cuya realización implicaría la democratización radical del Estado mexicano. Cuando el EZLN reclama autonomía para los pueblos indios en realidad está prefigurando las bases de un nuevo Estado Nación; una nueva relación entre ciudadanos y Estado basada en el respeto a la pluralidad y una nueva relación entre las organizaciones sociales y el Estado basada en el respeto a la autonomía de las primeras, también un nuevo pacto federal. La consecución de estas demandas en apariencia sencillas, vendrían a revolucionar el pacto social del Estado Mexicano. De lo que suceda con la propuesta de la Cocopa y el diálogo de la dirigencia zapatista con el Congreso de la Unión, se definirá en gran medida el futuro de la izquierda en México que es también el futuro del país.

Una parte de la izquierda en México, la zapatista ha sido congruente con esa modernidad, la otra parte la perredista ha sido congruente con la defensa de la dignidad ciudadana, que también es un requisito indispensable pero no suficiente para construir esa modernidad desde la izquierda. Los enormes rezagos sociales que las políticas de derecha de los gobiernos priístas produjeron, más los que se acumularán por las políticas foxistas mantienen vigentes las demandas de justicia social enarboladas en aquella revolución de

1910 y en las luchas sociales que siguieron a lo largo de este siglo que termina; lo que ya no es vigente es suponer que basta un cambio de personas en el gobierno, una política redistributiva para acabar con esas injusticias. No, lo que es necesario es que la democracia electoral conquistada por la ciudadanía el pasado dos de julio, empiece a tener apellidos.

## LOS SALADOS SALARIOS

27/12/00

En la Antigüedad, durante el Imperio Romano, a los soldados se les pagaba con sal, el camino que llevaba el preciado bien desde el puerto de Ostia hasta Roma, la capital, aún existe, es la Vía Salaria. Sus cualidades para conservarse sin alteraciones, conservar los alimentos, y dividirse en partes alicuotas, le hicieron adquirir las propiedades que hoy tiene el dinero como medio de pago.

El pago a los trabajadores desde que el capitalismo existe se denomina salario, seguramente como herencia de los haberes de los soldados romanos. No sabemos qué tan bien remunerados hayan estado quienes se encargaban de mantener y expandir el poder de aquel Imperio; sin duda la sal no era su única retribución y esta se complementaba con el producto del pillaje que toda conquista llevaba consigo.

Con el paso del tiempo la sal dejó de ser medio de pago y durante la Edad Media se le descubrieron nuevas cualidades: ahuyentar a los vampiros por ejemplo, pero también materia prima para sustentar las maldiciones, para “echar la mala suerte”, tanto que hasta la fecha se dice de una persona que está “salada” cuando lo acompaña la mala suerte. Todo parece indicar que esta es la acepción que se adoptó cuando en el capitalismo se incorporó el concepto

salario para denominar las retribuciones de quienes nada poseen sino su fuerza de trabajo.

Y también todo parece indicar que la fantástica alternancia en el poder en nuestro país, dejará inalterada esa acepción. En la primera reunión del Acuerdo de Cooperación y Consulta entre los Sectores Productivos, Carlos Abascal, Srio. del Trabajo, reiteró que no se adoptarán medidas "populistas" y que en lo que va del nuevo gobierno, "no se cambiarán las variables macroeconómicas ni se recuperará el rezago de 27 años que lleva el salario en México" (El Universal, 20 de diciembre del 2000). Pero el Sr. Abascal no sólo siguió repitiendo lo que hemos venido escuchando hace dos décadas, sino que además afirmó que "el salario mínimo ya no es un salario mínimo, en realidad es un indicador, el cual está siendo discutido por los representantes obreros y patronales...".

Una cosa es que los mil cincuenta y tres pesos con sesenta centavos a los que equivale el salario mínimo promedio nacional, no cumplan con el concepto constitucional de que este deberá ser suficiente "para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos" y otra que el responsable de la política laboral lo decrete desaparecido y convertido en un simple indicador.

Lo que el Sr. Abascal tendría que estar planteando a la Nación es la estrategia del gobierno foxista para que el salario mínimo cumpla con los requisitos que le define la constitución. Ciertamente el rezago de 24 años (no de veintisiete como dijo el Srio. del Trabajo, ¿será que 24 le parecen pocos?) no puede resolverse de la noche a la mañana, lo que sí puede hacerse es establecer un plan de pago a la deuda social acumulada por la pérdida del poder adquisitivo del salario, un plan de pago que defina montos y ritmos de la recuperación del ingreso de los trabajadores. Si por ley se ha obligado a la ciudadanía a pagar los quebrantos bancarios, si por ley se manda pagar la deuda pública, ¿por qué dejar al arbitrio de funcionarios que ganan ciento ocho salarios mínimos al mes el destino de los



millones de trabajadores que viven ya no con un salario mínimo, sino con un indicador del mismo?

Pero si las declaraciones del Srio. del Trabajo son lamentables para la suerte de los trabajadores (para la de los grandes empresarios mucho menos), las expresiones de nuestros representantes populares no lo son menos. En un programa televisivo en donde se entrevistó a legisladores del PRI y del PRD éstos afirmaban que el monto presupuestado para el pago del servicio de la deuda (más de 200 mil millones de pesos) no se podía tocar porque está en el rubro del gasto no programable (ellos entendieron intocable). Pero claro tuvieron el buen gesto de desear a todos los televidentes -a pesar de las precariedades, dijeron-, una feliz navidad y un próspero año nuevo.

# 2001

## BIENVENIDO EL SIGLO XXI

03/01/01

DICE SÁBATO QUE LOS HOMBRES (y las mujeres por supuesto) deberíamos vivir siglos, y así por ejemplo "dedicar nuestros primeros cuatro siglos a juegos propios de la infancia". Mientras eso sucede, los países nos llevan ventaja y miden su edad por largos períodos. Así podemos constatar que durante los últimos cien años México estuvo empeñado en grandes transformaciones. Los habitantes del país (no todos) iniciaron el siglo con la convicción de echar abajo una dictadura y lo clausuraron (no todos) echando abajo otra. Para lograrlo se dieron a la tarea de realizar la primera revolución social de ese siglo. Noventa años después cerraron ese ciclo con el triunfo ciudadano en las urnas del 2 de julio del 2000. Los millones de muertos que quedaron en los campos de batalla y los que después se sumaron a lo largo de las luchas protagonizadas para hacer realidad el programa de la revolución de 1910, no fueron en vano.

Fueron muertos que optaron por la vida. Por eso, en lugar de que la esperanza de vida al nacer sea de 45 años como en 1900, ahora es de 74 años; los tecnócratas que no se hicieron cargo de este triunfo lo tratan de revertir con la descapitalización de los fondos de pensiones, pero resulta que hoy los viejos luchan por su pensión

como antes los jóvenes por aumentar su esperanza de vida. El siglo XXI será testigo de estas luchas.

Aquellos muertos también lucharon por la tierra y lograron que esta fuera de quien la trabaja. Pero esa conquista duró muy poco. A otros les pareció que si ya no tenían los latifundios sí tenían el capital del que los campesinos carecían. Así mediante el rentismo se convirtieron en patrones y a los ejidatarios y minifundistas los transformaron en jornaleros. Hoy los expulsados de sus tierras emigran a EUA, y esos trabajadores migratorios van labrando nuevas luchas para que la pomposa integración económica de la globalización empiece a abatir las fronteras entre los países. El Siglo XXI conocerá de estos afanes.

El siglo xx mexicano reconoció a los asalariados como una clase en lugar de la suma de desaharrapados que eran en el siglo XIX. El carácter tutelar del art. 123 constitucional y su Ley reglamentaria recogió la aspiración a la igualdad social y estableció como inequitativo dar trato de iguales a los desiguales. Hoy el Srio. del Trabajo que inaugura el Siglo XXI nos dice que todos somos iguales ante Dios y que asalariado y capitalista sufren al parejo. Los trabajadores del siglo XXI tendrán que ubicar al Sr. Abascal y de paso conquistar la libertad y democracia sindicales de las que nunca han gozado, porque la ley se las impide.

En el siglo XX se desarrolló la conciencia nacional al grado de recuperar para la Nación lo que antes se adjudicaba a los propietarios privados. La expropiación petrolera y de la industria eléctrica fueron pilares de un sólido desarrollo que se fueron desmantelando por la corrupción. Hoy los quieren cortar de tajo mediante la privatización, bajo la absurda tesis de que el interés privado será coincidente con los intereses nacional y social. En el siglo XXI la viabilidad del país como nación independiente dependerá en buena medida de la suerte de las industrias estratégicas para el desarrollo nacional.

El siglo XX también presenció la conquista del pueblo mexicano de una educación laica, gratuita y universal. Hoy esta conquista también se pone en duda. Dicen los gobenantes (del PRI y ahora del PAN) que el dinero no alcanza y que lo mejor sería convertir a la educación en mercancía y reducir la obligatoriedad del Estado en la materia hasta el nivel de educación básica, que para trabajar en las industrias maquiladoras no se necesita más. Pero hay muchos otros que piensan distinto. La razón habrá de imponerse por la fuerza de las mayorías, siempre y cuando las mayorías no se pierdan en los espejiismos de la alternancia.

En fin, gracias a las luchas del pueblo mexicano, el siglo XX fue testigo de grandes transformaciones, sociales, políticas, económicas. También del espíritu, ahora pocos comparten aquel optimismo positivista que concebía el desarrollo de la humanidad como el progreso lineal e indubitable. No, pareciera que *la historia es un poco más complicada*, para retener lo que ya se conquistó y para hacer realidad lo que aún se ve como utópico: la justicia, la libertad, la dignidad, la democracia. Eso de lo que hablan unos encapuchados que pronto visitarán la Cd. de México *para tratar de convencer a los representantes populares de que globalización incluida*, siempre es posible construir un mundo mejor, un mundo para todos. Para empezar un siglo, no está mal.

## LOS ILUSIONISMOS SALARIALES DE FOX

10/01/01

Como si el país fuera la pista de algún circo, y el presidente el ilusionista principal, el miserable aumento de 6.9% a los salarios mínimos le sirve a Vicente Fox para, sin pudor alguno, convertirlo en una recuperación del 30% en los salarios contractuales y de medio

punto en los mínimos. De paso machaca en la tesis de que sólo el quince por ciento de los trabajadores reciben el mínimo y que el 85% restante recibirá aumentos contractuales de entre 9 y 9,5 por ciento, esto es 30% por encima de la inflación programada. En términos de salarios, los malabarismos de Fox se parecen a los mitos geniales de aquel Secretario de Hacienda del gobierno de Carlos Salinas.

La reducción del salario mínimo a la quinta parte del valor que tenía en enero de 1977 ha generado una especie de hegelianismo que argumenta: si el salario mínimo no alcanza para vivir, entonces ese salario ya no existe, es "sólo un indicador" resume el flamante Secretario del Trabajo. Pero la terca realidad, los empecinados millones de miserables que sobreviven con ese salario y los que norman sus ingresos por su evolución, nos refutan que el salario mínimo sí existe, y que en lugar de continuar por la vía de su desaparición lo que urge es regresarle su sentido constitucional.

Esa tozuda realidad se asoma por ejemplo en los datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano del INEGI. Efectivamente, de acuerdo a esta fuente podemos estimar que el 15% de los trabajadores reciben el mínimo, esto es la significativa cantidad de casi 5 millones de personas que a Fox le parecen pocos. En ese malabarismo olvida que además el 10% de los ocupados tiene ingresos por debajo del mínimo y que 5% trabaja sin remuneración. En suma, el presidente está borrando del mapa nacional a casi 10 millones de personas más sus dependientes económicos. Si la encuesta levantara datos para las zonas rurales, obviamente los resultados serían peores. Pero aún limitándonos a ese mundo urbano, la realidad salarial no responde al simplismo foxista del 85% que se rige por salarios contractuales y un 15% que recibe el salario mínimo.

Pero la importancia de los salarios mínimos no estriba solamente en el monto de trabajadores que reciben ese ingreso, sino también en su impacto sobre el movimiento de la constelación del resto de los salarios. El achatamiento del abanico salarial no podría ex-

plicarse sin el anclaje de los salarios a la austeridad de los mínimos durante los últimos 23 años, a beneficio de las ganancias de los grandes grupos empresariales y sobre todo de la ganancia especulativa que se da el lujo de prosperar con un mercado interno deprimido y una pobreza creciente y generalizada.

Por otro lado, que el 70% de los ocupados tengan ingresos por encima del salario mínimo, no significa que reciban el beneficio de la revisión contractual. Según datos de la STYPS, en 1999 se dieron 38 mil 747 revisiones salariales y contractuales en todo el país, mismas que involucraron a casi 2 millones y medio de asalariados, esto es aproximadamente al 8% del total. (Datos citados por Enrique de la Garza Toledo, en su excelente artículo, "El sindicalismo mexicano frente a la transición política", publicado en la revista *Trabajo y Democracia Hoy*, nov-dic del 2000). Quizá el flamante Secretario del Trabajo no haya informado al Presidente de la República de esta lamentable realidad.

No sabemos qué tan duradero sea el beneplácito que el gobierno foxista ha despertado entre la ciudadanía, pero lo cierto es que cuando el regocijo empiece a esfumarse, ahí estará el pesado lastre de la decisión gubernamental de continuar golpeando a los salarios, como parte de una política económica inaugurada hace 23 años. Ciertamente no es posible, de la noche a la mañana, recuperar la pérdida acumulada en ese prolongado ciclo, lo que sí puede hacer el gobierno, en menos de quince minutos, es dejar claro que el salario tiene que iniciar su período de recuperación. Para ello uno de los mejores instrumentos, en el marco de la legalidad actual, es la definición del salario mínimo. La decisión de aumentar dichos salarios en 6.9% es el mensaje claro de que los ingresos de los que dependen más de treinta millones de trabajadores junto con sus familias seguirán siendo castigados.

Frente a esta realidad y las funestas decisiones del gobierno foxista sobre los salarios, es urgente que el Congreso de la Unión, las organizaciones sindicales y los trabajadores abran un debate

nacional que conduzca a las reformas que logren el inicio de la recuperación salarial. Para iniciar este debate y estas reformas es necesario tener presente que la realidad nacional es mucho más que Tabasco, algo que los partidos parecen olvidar.

### ¿CUÁL REFORMA FISCAL?

17/01/01

A unos cuantos días de haber iniciado el año, pocos analistas dan por buenos los pronósticos de inflación del 6.5% y de crecimiento de 4.5%, presentados por el gobierno ante el Congreso y que sirvieron de base para presupuestar gasto e ingreso públicos. En los hechos y de manera implícita el gobierno también empieza a dejar en el aire las metas económicas para el 2001 que ya estaban por debajo de las promesas de campaña. La disminución del crecimiento en EUA, la caída del petróleo y la pesada carga de la deuda gubernamental son las razones que explican el pronosticado desaceleramiento económico. Estos elementos ya los habíamos tratado en este espacio (El continuismo económico de Fox, 18 de octubre del 2000) por la sencilla razón de que estuvieron presentes antes de la presentación del programa económico para el 2001, pero para no amargar la luna de miel del triunfo foxista, el gobierno prefirió obviar la situación real. Ya vendría la cuenta de enero y con ella el ambiente propicio para hablar de la cruda realidad.

Así, la novedad de los últimos días es que contra las cultivadas expectativas de cambio, el 2001 será un año complicado y la manera de resolver esas complicaciones será la de siempre: que aquellos que menos tienen carguen con los costos. Como si apenas estuviera descubriendo el país, que él mismo ha colaborado a dismantelar, el Srío. de Hacienda habla de la abultada deuda pública, aunque se

queda corto en su cuantificación; además reconoce que en grado de pobreza, México se lleva la medalla de oro a nivel mundial; y a la hora de buscar remedios para tantos males señala que el gobierno no propondrá gravar las utilidades generadas en la bolsa de valores, pero sí eliminar la tasa cero de IVA en alimentos y medicinas. Para consolarnos del costo que esto significará para los más pobres nos dice que esos recursos se regresarán a los pobres vía Progres y Procampo.

Y por supuesto en la más pura ortodoxia, política monetaria y fiscal irán de la mano para eliminar cualquier tentación de déficit, por lo que restricciones monetarias, alzas en tasas de interés y recortes en el gasto –como el de empleados de gobierno no sindicalizados según declaración de Gil Díaz, entre ollas y sartenes del suntuoso Club de Industriales, o simplemente el subejercicio en relación a lo aprobado por la Cámara de Diputados– serán el menú que nos espera en este año.

Obviamente la situación económica amerita una serie de medidas urgentes entre las que se encuentra de manera relevante, la reforma fiscal integral. Pero ya el avance que nos da el Srío. de Hacienda, de que a la hora de reformar el esquema tributario no se tocarán las ganancias que genera el simple tráfico de papel en la bolsa de valores, pero sí el consumo de básicos como medicinas y alimentos, nos ilustra por dónde va el proyecto gubernamental en la materia.

Como en los países desarrollados está de moda gravar el consumo para no desalentar la inversión, y como el Banco Mundial y el FMI dicen que si esto se aplica en los países ricos, con mayor razón tiene que hacerse en los países pobres, a los señores del gobierno (los de antes y los de ahora), les parece una blasfemia que la reforma fiscal pudiera afectar el ingreso de los que más tienen. Las diferencias existentes entre los países ricos y los pobres y pretenciosos como el nuestro que pertenece a la OCDE, son abismales. Por ejemplo en términos de carga fiscal (porcentaje de ingresos tributarios en



relación al Producto Interno Bruto) el ejercicio recaudatorio de aquellos es del triple en relación a México, no se diga en cuanto a ingreso y producto per cápita, volumen de producción, productividad, exportaciones, etcétera. Es larga la tradición de copiar de realidades que no nos corresponden, sobre todo cuando esa calca sirve para sustentar la tesis de que a los ricos no hay que tocarlos ni con el pétalo de un impuesto, porque se espantan y no invierten, y entonces hay que seguir dando vuelta a la tuerca de gravar el miserable consumo de los cautivos y pobres ciudadanos.

Discutir la reforma fiscal integral, para que sea eficaz a la hora de fortalecer finanzas públicas, pero también para redistribuir el ingreso y reactivar la economía, es una necesidad urgente. Empezar, como está haciendo el gobierno a “vender” sus propuestas como mercancías de estanquillo, habla muy mal de la seriedad y responsabilidad con la que debe tratarse esta delicada relación entre el Estado y los ciudadanos. Es necesario que el Ejecutivo Federal convoque a una convención fiscal nacional, para elaborar y acordar el proyecto de reforma fiscal que habrá de aprobar el Legislativo. De otra manera se cierne la amenaza de una reforma fiscal al vapor.

## LA HIDRA DEL NARCOTRÁFICO

24/01/01

El fin de la luna de miel del cambio gubernamental se ha agotado, no sólo por las complicaciones económicas comentadas en este espacio la semana pasada, a ellas hay que agregar el desafío del crimen organizado al nuevo gobierno, tema del editorial de este periódico el pasado lunes. En efecto, en menos de una semana y de manera puntual se han registrado una serie de hechos sólo

explicables por la voluntad concertada de grupos criminales para probar los sistemas de seguridad del recién estrenado gobierno. El atentado al gobernador de Chihuahua, una de las entidades con mayor presencia del narcotráfico; el estallamiento de dos paquetes bomba en los domicilios de quienes pensaron se trataba de un regalo; el asesinato de una familia en el Istmo de Oaxaca y la fuga de el Chapo Guzmán, capo del narcotráfico en Sinaloa, aun cuando fueran hechos aislados se constituyen en un desafío a la política de seguridad nacional del gobierno.

No es fácil cortarle la cabeza a la Hidra de la más rentable de las industrias, el narcotráfico. *El Universal* (22/01/01) reseña que el pago por la fuga del Chapo Guzmán habría sido de dos millones y medio de dólares, un buen indicador de los cuantiosos recursos de esa industria. El volumen de dinero que entra en circulación como producto de esa actividad, explica en buena medida que una economía tan vulnerable y precaria como la mexicana en los últimos veinte años, no haya sido escenario de estallidos sociales como en otros países. Regiones enteras, pueblos enteros, se mueven al ritmo que les determina las diferentes fases de la producción, distribución y venta de los diversos tipos de drogas. El control del territorio implica el control de esas fases, que deriva en una integración económica digna de mejores objetivos.

Frente a los atónitos ojos de la sociedad, la red del narcotráfico atrapa a todos aquellos que ven ganancias fáciles y exorbitantes en donde la economía legal sólo les ofrece la pobreza extrema, los salarios de miseria, la inestabilidad, y en el mejor de los casos la posibilidad de cruzar la frontera norte poniendo en riesgo sus propias vidas. Otros, los *juniors*, entran a la red como quien practica los deportes de alto riesgo. Al final todos terminan siendo piezas prescindibles de una maquinaria implacable que no perdona errores, mucho menos la traición. Las narco bandas y los narco corridos, los juglares de la cultura desarrollada alrededor de esas redes económicas, expresan y legitiman los valores que sustentan que si la vida

no vale nada, mejor ponerle el buen precio que determinan los capos de las mafias. Si para algo sirve la ilegalidad de esa industria es justamente para tener altísimas tasas de rentabilidad, en donde el precio de mercado del producto está reflejando el costo de articular redes que terminan por suplantar al Estado legalmente constituido.

Porque esa es justamente la esencia de la actividad del narcotráfico: para reproducirse tiene que penetrar a las instituciones del Estado de manera que termina por suplantarlas. La generalización del narco determina y a la vez expresa la profunda descomposición del Estado que cada vez se muestra más incapaz de hacer frente a los desafíos que en materia de seguridad nacional le plantea esta actividad, convertida como está en un Estado dentro del Estado. La capacidad de fuego de los cárteles de la droga cuestiona seriamente el supuesto monopolio de la fuerza que un Estado legalmente constituido posee.

No es menor el inventario de los costos de haber generado las condiciones sociales y económicas para que el narcotráfico se convirtiera en una atractiva actividad para la población. No es casual tampoco que esas condiciones proliferaron de la mano de la aplicación de la política económica neoliberal. La alternancia en el poder con Vicente Fox a la cabeza, encontró al país y a sus instituciones muy averiadas por esa rentable industria. De la manera como el gobierno enfrente a la Hidra dependerá en buena medida la regeneración de las instituciones del Estado. Quizá la huída del Chapo Guzmán pueda servir de campanazo de alerta, para, si no con un espejo como hizo Perseo contra la Hidra que terminó petrificada con su propia mirada, sí con todas las medidas inteligentes y necesarias, el gobierno empiece a resolver este grave desafío.

Por lo pronto es buena noticia que el Presidente Fox, por primera vez desde que tomó posesión de su cargo, el pasado fin de semana no lo haya dedicado a visitar su rancho y la iglesia del lugar. El asunto, además de oraciones, requiere de mucho, mucho más.

## CHIAPAS: HISTERIAS Y FOBIAS

31/01/01

La campaña contra el viaje de los zapatistas a la Cd. de México sigue firme. Si durante la semana pasada compitieron por aberrantes las declaraciones del líder de la Coparmex, del Presidente de la Cámara de Diputados y del inefable representante de la Iglesia Católica, Onésimo Cepeda, en los días recientes han tomado la estafeta otros representantes empresariales, para en el mismo tono y con las mismas torpezas descalificar el viaje de 24 representantes del EZLN a esta ciudad.

Por fortuna, los resultados de la encuesta de Alduncin y Asociados publicada en *El Universal* (29/01/01), sobre la percepción de los habitantes del Área Metropolitana del Distrito Federal del conflicto en Chiapas, revelan mesura y sensatez donde la clase dirigente da fe de sus fobias e histerias. Aunque casi la totalidad (94,5%) piensan que los zapatistas no deben venir a la ciudad de México, al 90% el conflicto le preocupa por lo menos un poco, el 60% piensa que es un movimiento justo y más de la mitad que es un movimiento legal. Las dos terceras partes simpatizan o admiran por lo menos un poco al Subcomandante Marcos; además la percepción de que es un movimiento manipulado ha disminuído significativamente respecto a 1998 (del 80% al 60%), y el 70% cree que el conflicto se resolverá durante este sexenio.

Los datos ilustran varios fenómenos. Por un lado, la existencia de una amplia expectativa de que el conflicto se resolverá en el corto plazo, lo que seguramente está relacionado con las promesas de Vicente Fox en la materia. Por otro lado, a pesar del aislamiento en que estuvo el movimiento del EZLN durante los últimos años, a la mayoría de los ciudadanos les preocupa su existencia y lo tienen presente como un movimiento justo, legal y no manipulado. Si bien

no están dispuestos a hacer mucho porque se resuelva (sólo el 17.5% afirmó que asistiría a marchas en su apoyo), la percepción ciudadana está muy lejos de las reacciones histéricas de dirigentes del PAN, de la Iglesia y de los empresarios.

El Presidente Fox, en su campaña europea para “vender a México” tuvo que hacer frente a las demandas de potenciales inversionistas europeos, a quienes no les parece muy seguro invertir en un país con un movimiento armado y un conflicto que después de siete años sigue sin resolverse. La prisa de Vicente Fox por reiniciar el diálogo con el EZLN tiene que ver con su promesa de campaña de resolver el conflicto en 15 minutos, pero sobre todo trata de responder al reclamo de los inversionistas de garantizar la seguridad para sus capitales.

El riesgo del nuevo Presidente de la República es que en sus prisas no logre conducir el proceso a buen término y por el contrario el conflicto se prolongue, lo que disminuiría en mucho el nivel de popularidad con el que llegó al gobierno y lo que es peor: para sus representados, Chiapas quedaría como un espacio desperdiciado para hacer crecer sus capitales ávidos de explotar los riquísimos recursos naturales de la región.

El drama de Vicente Fox es que intentando representar los intereses históricos de los capitalistas de fuera y de dentro del país al prometer resolver el conflicto para dar seguridad jurídica a sus inversiones, se ve envuelto en el inmediateista interés del abarrotero que con la máscara de legislador o de inefable cura o de dirigente empresarial, se espanta ante la sola idea de la presencia de encapuchados en espacios propios de la gente de bien. Quizá fue ese espíritu abarrotero el que traicionó al presidente Fox, cuando desdeñó la denuncia del Subcomandante Marcos contra el Secretario de Relaciones Exteriores y el Coordinador de Seguridad Pública Nacional (*El Universal* 29/01/01) de actuar con protagonismos que ponen en riesgo la iniciativa de paz. En su respuesta el presidente dio a entender que el protagonismo está del lado del EZLN y

en un regateo ocioso, llamó por su supuesto nombre (Sebastian Guillén) a un Subcomandante Marcos de un movimiento armado reconocido por el gobierno como interlocutor en la Ley de Concordia y Pacificación aprobada por el Congreso de la Unión.

Con tantas muestras de fobias e histerias, no estaría mal que la encuesta de Alduncín y Asociados se aplicara a la clase dirigente del país para ilustrar las diferencias con la sensatez ciudadana frente al conflicto de Chiapas.

## NUEVA CONSTITUCIÓN, NUEVO PACTO SOCIAL

07/02/01

Cuando pensábamos que el Presidente Fox estaba rebasando los límites del desenfado en su estilo de gobernar al asumir el personaje de un comediante en su programa radial del sábado pasado, por fortuna, dos días después se coloca como estadista y propone una revisión integral de la Constitución "capaz de contemplar y encauzar los cambios que el país requiere y que la ciudadanía ha exigido mediante el sufragio". Su legitimidad y amplia popularidad pueden así ponerse al servicio de causas republicanas y no quedar derrochadas en actos de dudosa jocosidad, por decir lo menos.

Efectivamente para que la alternancia en el poder no quede sólo en eso, y pueda convertirse en una profunda reforma democrática del Estado, es necesario como propone el Presidente Fox, abrir un gran debate nacional en torno a las necesarias reformas a nuestra Carta Magna. La revolución silenciosa y pacífica que los ciudadanos llevaron adelante, sobre todo a partir de 1988 por la defensa del voto, hasta derrotar a un anquilosado régimen con más de setenta años en el poder, hace ahora necesario adecuar la Constitución a las nuevas relaciones entre el ciudadano y el Estado.

Juicio político para el Presidente en caso de faltas graves a la Constitución; ratificación de los secretarios de Estado por parte del Congreso; establecimiento de las figuras del plebiscito y el referendun; aprobación del voto de los mexicanos en el extranjero; y el reconocimiento de las autonomías étnicas, son algunos de los principales temas que se propone incluir en la reforma y constituyen sin duda importantes demandas de la sociedad para dar vida a un auténtico sistema republicano. Si a ello agregamos el compromiso del Jefe del Ejecutivo en el sentido de no renunciar a los principios como la no reelección del Ejecutivo; el carácter laico del Estado; la educación laica y gratuita; la división de poderes; el régimen federal; el compromiso con la justicia social y la soberanía; ciertamente la propuesta es no solamente interesante sino adecuada para iniciar el debate nacional al que se está invitando.

La Revolución Mexicana, primera revolución social del siglo XX, plasmó su programa en el nuevo orden jurídico sancionado por el Constituyente de 1917. Las reformas a la Constitución de 1857 agregaron a las garantías individuales de la tradición liberal, el programa social que reconoce que más allá de ciudadanos aislados, la sociedad se constituye en clases, unas que todo lo tienen y otras que nada poseen. Así con la Constitución de 1917 se legaliza y legitima un nuevo pacto social en el que el Estado reconoce su obligación de procurar la igualdad en una sociedad de desiguales.

Ese pacto social permitió al país gozar de un desarrollo estable a lo largo de tres décadas, caso inédito en América Latina. Para lograrlo fue necesario romper con las trabas que la oligarquía terrateniente imponía al desarrollo económico del país mediante el establecimiento de la propiedad originaria de la Nación y el reparto agrario; fue necesario también integrar una cultura nacional a través de la enseñanza laica y gratuita, y fue necesario, por supuesto, establecer un pacto laboral a través del reconocimiento de los derechos de los trabajadores.

La crisis y descomposición del régimen de partido de Estado fue expresión de la dilución paulatina de ese pacto a partir de la década de los cuarentas y de su violenta ruptura a partir de 1982. Hoy es necesario tejer de nuevo un gran acuerdo, un gran pacto social y político para lograr en el siglo que se inicia, hacer realidad la conjunción de las garantías individuales y los derechos sociales, demandas que han nutrido nuestras raíces históricas.

Hace nueve años escribí: "...un pacto social, para que sea duradero, debe ser legítimo; por lo tanto es necesario satisfacer primero la demanda de respeto al voto, iniciar la transición a la democracia, para posteriormente hacer los cambios constitucionales que la sociedad defina. Esta es la única base para restablecer el pacto social que nuestra país necesita en su tránsito a una modernidad con soberanía, democracia y justicia social." ("La Constitución de 1917 de cara al siglo XXI" en La Constitución y el futuro, LV Legislatura, Cámara de Diputados, México, 1992.) Bienvenida la propuesta para abrir el debate en torno al nuevo pacto social del siglo XXI, a la reforma integral de nuestra Carta Magna.

#### LA ESTRATEGIA DE LA FOTO

14/02/01

Vicente Fox abraza al Subcomandante Marcos. El escenario, algún lugar de la selva chiapaneca o algún punto del recorrido del contingente zapatista que visitará la Cd. de México el próximo mes. ¿Cuánto daría el Presidente de la República por atrapar ese momento y reproducirlo hasta el infinito en los medios de comunicación nacionales e internacionales? Si Andrés Pastrana, el Presidente de Colombia pudo tomarse la foto con el jefe rebelde Manuel



Marulanda *Tirofijo*, ¿por qué yo no?, pensará Vicente Fox. ¿Cuánto aumentaría su popularidad?

Y sin embargo frente a la insistencia del Presidente para realizar una entrevista con el Subcomandante Marcos a la brevedad, la respuesta de este ha sido clara: no se iniciará el diálogo directo con el EZLN si antes no se cumplen las tres condiciones para su reanudación: liberación de los presos zapatistas; retiro de los siete retenes militares, no menos; y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, esto es de los resultados de la primera mesa del diálogo sobre derechos y cultura indígenas iniciado cinco años atrás y suspendido, precisamente por el incumplimiento del gobierno zedillista.

La estrategia que está siguiendo Vicente Fox frente al EZLN, es muy semejante a la que en su momento siguió Carlos Salinas con Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD. Avalado –después del fraude del 6 de julio de 1988– por la dirigencia del PAN con aquella triste sentencia de que “un gobierno también puede legitimarse por sus actos” aunque esa legitimidad no fuera producto de la voluntad ciudadana en las urnas electorales, a Salinas siempre lo persiguió la sombra del no reconocimiento del PRD y de Cuauhtémoc Cárdenas. El tan traído y llevado diálogo con el gobierno para la reforma del Estado y la transición a la democracia, era, desde la óptica del gobierno de Salinas, sólo la argucia para tomarse la foto con Cuauhtémoc, la pieza faltante para proyectar la imagen de un Presidente con el pleno reconocimiento de todas las fuerzas políticas, reconocimiento que habría dejado atrás su ilegal e ilegítimo origen.

El PRD, no sin fuertes discusiones internas, optó por la línea de la intransigencia democrática, que a los demócratas leves y ligeros de ese partido les parecía una absurda contradicción. Esto es, sí al diálogo pero con garantías previas de la voluntad política del gobierno para no quedar en un diálogo cosmético. Esas garantías, nunca se dieron, y sí en cambio se desarrolló la campaña de hostigamiento y de calumnias al PRD como el partido violencia. De aquella campaña salinista el saldo fue de 239 militantes perredistas asesinados.

Gracias a esa intransigencia democrática, en las batallas sobre las reformas electorales se obtuvo finalmente el triunfo de arrancar la organización de los procesos electorales de manos del gobierno y dejarlo en consejos ciudadanizados. De otra manera todo habría quedado definido en el horizonte de lo funcional y posible para la alianza histórica entre Salinas y el PAN. Y también gracias a esa intransigencia democrática se siguió abanderando al movimiento ciudadano que finalmente logró la alternancia en el poder.

Evidentemente Fox no tiene los problemas de legitimidad de Salinas, pero sin duda la más fuerte oposición a su gobierno la enfrenta en el EZLN. ¿Cómo documentar un cambio mientras se mantenga la presencia de un movimiento que es la más eficaz denuncia de los devastadores resultados de una política económica que su gobierno continúa? ¿Qué explicaciones dar a los inversionistas nacionales y extranjeros para que borren a Chiapas de sus cálculos para expandir sus capitales? ¿Cómo contrarrestar la eficacia mediática del EZLN en los medios internacionales?

Un demócrata intransigente le aconsejaría a Fox que no se pierda en vericuetos, que documente su voluntad política plena para reanudar el diálogo que finalmente logre la paz con dignidad en Chiapas, esto es que cumpla, para empezar con las tres condiciones del EZLN, condiciones que por cierto no son ningún capricho, sino simplemente los medios para recuperar la confianza entre los interlocutores. Seguir la estrategia de Salinas con el PRD le puede dar resultados en el corto plazo, pero más temprano que tarde terminaría por toparse con su dos de julio del 2000.

## LA TERCERA ETAPA

21/02/01

No es un buen augurio para nuestra soberanía, que la visita de Bush a México se haya dado simultáneamente al nuevo bombardeo a Irak por parte de EUA, tampoco lo es el nombramiento de cuatro empresarios prominentes en el Consejo de Administración de Pemex. La política de EUA en Medio Oriente ha seguido la estrategia de garantizar el abasto oportuno y suficiente de petróleo a su economía, en esa estrategia, el control geopolítico de la zona que no descarta el uso de las armas como en reiteradas ocasiones lo ha hecho, es un ominoso mensaje para su vecino justo en el día de la visita.

Por su parte la decisión del Presidente Fox de incluir a empresarios en el Consejo de administración de la principal industria paraestatal constituye un hecho que subvierte las bases constitucionales en torno a la soberanía de la Nación sobre sus recursos energéticos. La historia de los grandes empresarios en México ha sido la de servirse del paraguas del Estado, para, bajo su sombra, hacer pingües negocios, negocios muy lejanos de la capacidad emprendedora que va derramando beneficios a la sociedad por el empleo, los salarios y la capacidad competitiva generada.

Primero fue la llamada etapa de desarrollo hacia adentro en donde los empresarios industriales se sirvieron de una política económica que puso en su mesa un mercado cautivo por la protección comercial a ultranza; oferta abundante de mano de obra; bajos salarios; oportunas y suficientes divisas y materias primas gracias al excelente desempeño del sector agropecuario, e infraestructura y bienes subsidiados (como los enérgicos) a cuenta de la política gubernamental. Además en esa etapa ser alto funcionario de go-

bierno era sinónimo de ser un empresario en potencia (las finanzas públicas al servicio de una acumulación originaria permanente).

Esa vía de desarrollo llegó a su límite con la crisis de 1982; pero el paraguas del Estado siguió generosamente abierto. Sin cancelar totalmente algunas vías de apoyo de la etapa anterior, en los ochentas se inauguró un gran subsidio a la clase empresarial (además del abatimiento del salario real y del uso indiscriminado de la renta petrolera): la privatización de bienes públicos. En este proceso se usaron recursos públicos para sanear empresas que después se vendieron a precios bajos y con información privilegiada. Así, el patrimonio nacional sirvió para recuperar la tasa de ganancia empresarial, sin más esfuerzo que suscribir la tesis de que el mercado es siempre mejor que el Estado; aunque a la hora de la compraventa, las leyes del mercado no hayan estado siempre presentes. El sexenio de Salinas fue paradigmático al respecto, con la creación de un estamento de banqueros a quienes se les vendió la patente de corso de elevar el margen de intermediación gracias a la desregulación financiera y a quienes a los pocos años se los rescató con un costo fiscal del 21% del Producto Interno Bruto (Fobaproa).

La semana pasada el Presidente Fox inició una tercera etapa en esta relación con los empresarios: privatizar empresas vía la composición de los Consejos de Administración, en otras palabras poner a disposición del capital privado un bien estratégico de la Nación sin recurrir a la reforma constitucional. Porque en realidad no se trata sólo de cuatro prominentes empresarios que tendrán la información privilegiada en el lugar de origen, que además tendrán voz y voto, que ya sería mucho riesgo en el manejo de la principal empresa pública del país; a esos cuatro votos hay que agregar la visión empresarial del mismo director general de Pemex que proviene de ese sector y la del Secretario de Hacienda del mismo origen.

En resumidas cuentas, el Consejo que aprobará estrategia, líneas de acción y objetivos de Pemex está conformado por una mayoría de empresarios. Los representantes sindicales, estarán como

siempre, al servicio de la dirección a cambio de sostener las prebendas que otorga el control del sindicato. ¿Cuánto aumentará la fortuna de los cuatro empresarios que estrenan su entrada a Pemex? ¿Cuánto aumentará la pobreza de la Nación?

## LA DERROTA COMO TRIUNFO

28/02/01

“(La marcha) es una señal clara de diálogo, y si tiene éxito será una derrota para el EZLN como opción armada”, considera el Subcomandante Marcos en entrevista con Ricardo Rocha, publicada en *El Universal* el pasado lunes 26. La derrota como triunfo. El EZLN ha venido a revolucionar la política porque –entre otras cosas– asume que las organizaciones son sólo un instrumento que la sociedad se da para transformarse y no como otros piensan, un fin en sí mismas.

Qué lejana esta concepción de aquella que se sintetiza en la frase: “El Partido es Eterno”, que algunos usan como razón de Estado y otros, sin hacerla explícita, simplemente la alientan y trabajan como una franquicia. Muchas críticas se han hecho al stalinismo desde el centro, la izquierda o la derecha; pero lo cierto es que, cualquiera que sea el lugar que ocupen en la geometría política, los partidos políticos terminan por repetir la vocación de eternidad stalinista y olvidan que su máximo anhelo tendría que ser diluirse en la sociedad, –dejar de ser una parte de ella para convertirse en el todo– porque es esa la mejor prueba de su triunfo, aunque en ello les vaya la extinción.

Es esa la tesis que sostengo en relación al PRD: en su derrota electoral está el gran triunfo del proyecto que le dio origen: lograr el respeto al voto, la legalidad en los procesos electorales; jápenas a

diez años de su nacimiento! Pero a mis amigos y amigas perredistas no les gusta esa tesis, les parece tramposa, se imaginan que con ello trato de disculpar al partido, a su dirigencia y a sus candidatos por no haber ganado las elecciones del 2000. O piensan que en esa tesis hay una gran complacencia por el triunfo de Vicente Fox.

Nada de eso. Sólo que para hacer el diagnóstico de la situación política del PRD, parto de la pregunta más sencilla: ¿cuánto del proyecto con el que nació el PRD se ha cumplido? Yo digo que todo, porque a pesar de que la patria sigue siendo de unos cuantos, ¡la democracia ya! que fue la esencia de la actividad partidaria se ha cumplido. Ahora, para que la ¡patria para todos! sea una realidad, y para que la legalidad electoral no se pierda en nuevos vericuetos, el PRD que nació el 6 de julio de 1988 tiene que morir para que otro nazca. Puede morir transformándose a sí mismo, refundándose, lo que implica autocritica y diagnóstico muy objetivo de cara a la realidad. Esa práctica no la veo camino a su Congreso, sí veo en cambio diagnósticos muy subjetivos de cara a sus documentos internos, de cara al contrincante interno y de cara al poder de Fox. Y esta ruta de los espejos laberínticos es la más eficaz para alcanzar la marginalidad política que no es otra que una larga agonía.

El radicalismo maderista del PRD ya tuvo sus frutos el pasado dos de julio, y todo parece indicar que el populismo nacionalista con el que nació se instaló para quedarse. Ese populismo sirve para resistir la hegemonía de la derecha empresarial, también sirve para cosechar votos, pero es poco eficaz para vencer a ese proyecto de la derecha hoy en el poder con otras siglas y otros personeros. Para preparar la derrota de ese proyecto es necesario construir un programa desde el punto de vista de los trabajadores, de los asalariados, y en el centro de ese programa se encuentra la libertad, la autonomía y la democracia sindicales, un proyecto poco apreciado por el PRD sustentado como está en prácticas clientelares y corporativas que lo aceitan como maquinaria electoral.

Pero como siempre la astucia de la realidad se disfraza con muchos ropajes, así resulta que la modernidad y la democracia de nuevo la levantan quienes vienen de las profundidades del país, del atraso ancestral con su demanda de autonomía para los pueblos indígenas, que de hacerse realidad revolucionaria no sólo al pacto federal del Estado Nación, sino al Estado mismo, porque esa autonomía tendría que abarcar también a las organizaciones sociales.

La modernidad del siglo XX se dibujó en la bandera zapatista de Tierra y Libertad. Los proyectos nacionales modernos siempre surgen y los sustentan los que nada tienen, porque los otros que mucho poseen sólo tienen ojos para cuidar lo suyo, su mezquino interés particular. Hoy, reconocer como sujetos políticos autónomos a los que tienen el color de la tierra es quitar los candados a la libertad, la justicia, la igualdad, y la democracia con apellidos; es llenar de contenido un nuevo proyecto de nación. ¡Bienvenidos los zapatistas del siglo XXI!

## LLEGARON PARA QUEDARSE

07/03/01

No se cuántos días permanezca la comandancia del EZLN en la Cd. de México, de lo que estoy segura es que los zapatistas están llegando para quedarse como protagonistas centrales de las transformaciones políticas del país. Si el movimiento ciudadano que irrumpió el 6 de julio de 1988 en la historia del país; el PRD; el viejo PAN (el de los principios, el de antes de la alianza histórica con Salinas); Fox y su campaña de medios, lograron la alternancia en el poder; el movimiento indígena del EZLN está abriendo las puertas a una auténtica transición democrática. Derrotado el obsoleto parti-

do en el poder, la caravana zapatista está derrumbando los muros para iniciar la transición.

¿Y quién los invitó, dicen los partidos? ¿Qué no teníamos ya nuestra agenda, reclaman sorprendidos? ¿Qué no estaban ya preparados los recintos, el Palacio de Covián, la Cámara de Diputados, de Senadores, los Pinos? Ahora resulta que en lugar de la política de salón –cualquiera sea el recinto–; con políticos de oficio por supuesto, la tan ansiada reforma democrática del Estado se va tejiendo, se va construyendo al paso de la caravana zapatista. ¿Lo preveían los politólogos, los transitólogos; el gobierno; los partidos; la vieja y la nueva clase política; los empresarios? No, evidentemente no. Aún teniendo el hecho frente a sus ojos, se resisten a aceptarlo.

Son muchas las fuentes de esa resistencia, pero seguramente la podemos sintetizar en dos: miedo y racismo. Miedo de los partidos a perder sus cotos de poder; el tradicional miedo de los intelectuales orgánicos al poder a las definiciones claras y por supuesto a superar su cómoda y aparente neutralidad; temor de la clase política a perder el reino de la alternancia bien acotada, esa que no se desborda más allá de las urnas, más allá de la democracia electoral; el miedo de los empresarios expresado por Sánchez Navarro cuando, en relación a la caravana zapatista declara: “Se va a descargar la gente humilde que está en el límite de la miseria y esto es un problema de orden público que quién sabe en qué pueda parar”. Todos estos miedos se suman, condimentados con el ingrediente del racismo.

Sí, el júbilo de las masas al paso de la caravana zapatista, la firmeza en la demandas del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, el retiro de siete posiciones del Ejército y la liberación de los presos zapatistas ahora apoyadas por 46 etnias en el Congreso de Nurió Michoacán, cuestiona todas las certidumbres en que se ha reproducido el sistema político del país, esas certidumbres que apenas alcanzaban para cambiar a las personas y a los partidos en el



poder, pero no para compartir ese poder, no para mandar obedeciendo, no para dar voz a los otros, no para reconocer autonomías, libertades. No, solamente para cambiar escenografías, para cambiar de siglas, para cambiar de personas.

Alguien se adelanta y me dice: la manera de hacer política en el país no cambiará por la participación de los zapatistas; al final todo terminará en un fortalecimiento de la política parlamentaria de izquierda, con el EZ transformado en partido o con el EZ al frente de una gran coordinadora de movimientos sociales. ¡La mirada cansada frente a la historia! ¡El gradualismo que sólo ve continuidad donde ya hay rupturas!

Y en esta visión de la continuidad, temeroso de los cambios profundos después de haber conquistado el gran cambio de la democracia electoral; presuroso, también se cuele el PRD: si ambos luchamos contra la desigualdad y por la justicia social, ¿por qué no entrevistarnos? Desde las alturas se escucha una voz: “que sea aquí en Monterrey 50”. Es cierto, tanto el PRD como el EZLN luchan por la igualdad y por la justicia, la gran diferencia es que para el primero esta se consigue con buenos gobernantes, con una política redistributiva y desde arriba, mientras que en la demanda del EZLN de reconocimiento de la autonomía a los pueblos indígenas el destino de la igualdad y la justicia queda en manos, no de los gobernantes, no de los partidos, sino de los gobernados. ¡Una elemental, sencilla y gran diferencia!. No es casual que el PRD aún no haga suyo el proyecto de reforma laboral que reivindica la autonomía y libertad sindicales.

En algún momento, algún teórico perredista o más de uno, trató de encasillar a los indígenas zapatistas como “cardenistas radicalizados” (me imagino que por aquello de las armas). Ojalá que ese exceso haya desaparecido (el del canibalismo teórico), en pos de la buena relación de una vieja izquierda, la que nació en la Revolución Mexicana, cristalizó y se agotó en el PRD, y la moderna izquierda que viene cabalgando con el EZLN.

## UN NUEVO PROYECTO DE NACIÓN

14/03/01

Qué bueno que el EZLN haya decidido no sumar más banderas a su causa que la bandera indígena, porque en ella están contenidas las demás. Qué bueno que el EZLN sepa la diferencia entre sumar y sintetizar. En fin, qué bueno que tenga la claridad de entender que en la demanda de autonomía indígena se encuentra alojado el nuevo proyecto de Nación, el de la Nación moderna y democrática hacia la que es necesario transitar.

A lo largo de su trayecto, la caravana zapatista fue escuchando las voces de muchos sectores excluidos: campesinos, asalariados, trabajadores por cuenta propia, pequeños empresarios, mujeres, jóvenes, ancianos, los que han sido despojados de su patrimonio, de su salario, de su derecho a la vida digna, a la diversidad. Cualquier partido aspirante a ocupar el lugar de la izquierda en la escena política, habría hilvanado todas esas demandas para darle contenido a un proyecto por la igualdad y la justicia social. Y de la suma de ese mosaico de luchas sectoriales habría resultado un viejo proyecto de izquierda y no un nuevo proyecto de Nación.

La explicación de la aparente paradoja es muy sencilla: dibujar la Nación hacia el futuro requiere de proyectar una realidad que rompa con lo existente. El derecho a la autonomía indígena rompería con la naturaleza excluyente del Estado para dar vida a la inclusión no sólo de los indígenas, sino también del resto de sectores excluidos. Esa es la gran virtud del movimiento que se levantó en la selva chiapaneca, está lleno de las semillas del México moderno y democrático.

Hay un punto de quiebre entre la vieja izquierda y la izquierda moderna contenida en el proyecto del EZLN. A la igualdad y a la justicia social se puede llegar por dos vías: una política redistributiva

desde arriba o la conquista de los derechos sociales desde abajo. La primera fórmula fue el secreto de la larga legitimidad del populismo priísta, con las relaciones clientelares y corporativas de por medio, por supuesto. De ese esquema que funciona tan bien en una realidad donde los excluidos son la inmensa mayoría, no se ha querido despegar Fox, tampoco la izquierda. En el círculo de la refuncionalización del populismo, la derecha y la vieja izquierda están empeñadas en permanecer. El desgaste de la oposición de izquierda que se ubica en el mismo círculo es el costo de sólo ver al adversario, pero no a sí misma, tampoco a la realidad.

La segunda vía, lograr la justicia social desde abajo, crear una nueva relación entre organizaciones sociales y Estado para que de ahí surga un Estado incluyente, es la que esta construyendo el EZLN y el Congreso Nacional Indígena que le dió su respaldo. No es casual que en la entrevista del viernes pasado con Julio Scherer, Marcos plantee por ejemplo: "Pretendemos que cada sector social tenga las posibilidades de levantarse como tal; *no queremos limosnas*, (subrayado mío) sino la oportunidad de construirnos dentro de este país como una realidad diferente". El EZLN es moderno, no sólo porque usó las armas para cambiarlas por las palabras, lo es también porque en lugar de colgarse de la ideología se llenó de realidad.

El caso de la empresa turística comunitaria del Tephé con el que Marcos ilustra la pretensión, deja claro que una economía tiene opciones distintas al capital privado o al estatal; también hay sector social, no sólo en la imaginación colectiva, también en la Constitución vigente. Que el pastel de la riqueza nacional se esté generando sólo con el motor del capital privado ha sido una decisión política de los fundamentalistas en el gobierno. Y aquí va otra paradoja: esa decisión se tomó justamente cuando se elevó a rango constitucional la economía mixta y con ella, al sector social. (art. 25 constitucional creado en dic. de 1982). Pero a esa historia podemos volver después.

Por lo pronto atendamos el curso que tenga el emplazamiento que el EZLN hace al Estado para iniciar la transición democrática, para construir el proyecto de Nación moderno, democrático y justo. Tan moderno que además de los indígenas, las movilizaciones se empiezan a poblar de los grandes ausentes en los últimos años: los jóvenes, ¡ya era hora!

## CONGRESO EN CRISIS

21/03/01

A cien días del gobierno de Vicente Fox, este empieza a enfrentar desafíos difícilmente superables sólo con la popularidad del presidente y que por el contrario ponen a prueba de manera seria la capacidad política del Ejecutivo Federal para resolverlos. Tanto la falta de cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés como el desastre de las finanzas públicas federales, son problemas heredados de las administraciones priistas, sin embargo, las expectativas generadas y la urgencia objetiva para su solución, los colocan como la prueba de fuego para el nuevo gobierno.

La decisión del EZLN de regresar a las montañas del sureste mexicano constituye un gran revés para Vicente Fox. La ausencia de apoyo del PAN en la materia ha dado frutos. El partido que se vió obligado a respaldar una candidatura presidencial que se le impuso, hoy se encuentra nostálgico del poder que compartía con Carlos Salinas y le pone piedras al camino para lograr la paz con dignidad en Chiapas. El regateo del PAN ha servido además para exhibir al Congreso como el espacio donde se expresa de manera nítida la crisis de la plural clase política en el poder.

No sé si los legisladores se den cuenta, pero tanto la propuesta –anónima por lo demás!– que hizo llegar la Cocopa al EZLN, como el

protagonismo de personajes caricaturescos como Fernández de Cevallos, debilitan enormemente a una institución que como el Congreso, tendría que estar ocupando el lugar que le corresponde para finalmente dar el banderazo de salida a la transición democrática. No se avizoran liderazgos en el Congreso de la Unión que faciliten salir del empantamiento de las mezquindades y el racismo. Estas debilidades hacen mucho daño, no sólo al proceso de paz, también al mismo Congreso.

Además de la responsabilidad de cumplir con los Acuerdos de San Andrés, el actual período legislativo tendrá que entrar a la discusión de la reforma fiscal tantos años pospuesta. Aunque de naturaleza distinta, el destino de ambas propuestas se encuentra cruzado. El gobierno de Fox sabe que la aprobación de la iniciativa de la Cocopa debilitaría las posibilidades de aprobar una reforma fiscal regresiva como la que proyecta su Secretaría de Hacienda. El triunfo de otorgar la autonomía a los pueblos indígenas se percibiría no sólo como una conquista de los indígenas, sino de todos los sectores golpeados por una política económica excluyente de la cual, la reforma fiscal foxista sería una pieza más. Y sin embargo el Ejecutivo no puede, sin cargar con fuertes costos políticos, dejar de apoyar la reforma indígena.

En esta situación es previsible que los personeros de Vicente Fox en el Congreso, intenten hacer el trueque entre una autonomía indígena moderada y una reforma fiscal regresiva. Así, la gran alharaca de priistas y panistas en torno al formato de las pláticas entre EZLN y Congreso estaría cumpliendo con la función de ganar tiempo y un pretendido desgaste para el EZLN, pero además se estarían preparando las condiciones para ese mercadeo. Una estrategia así, podría ser exitosa en el corto plazo, pero con un altísimo costo para la estabilidad social y política del país. El fracaso del diálogo sería un mensaje de guerra para quienes han optado ya por la vía armada.

Pero todo parece indicar que para los señores legisladores no hay más realidad que la de su cerrado recinto. Y ahí pueden quedarse, cavando la tumba de su preciada institución.

## DERRUMBANDO MUROS

28 /03 / 01

En la antesala mexicana de la transición a la democracia todo cruje. El presidencialismo antes tan eficaz para la gobernabilidad autoritaria se resquebraja en los aspavientos de Fernández de Cevallos, la honra trasnochada de su discípulo Felipe, y los desaires del Consejo Nacional del PAN a Vicente Fox en Guadalajara. El PRI sin rumbo fijo hace a un lado su disciplina ancestral y a regañadientes acepta el liderazgo inteligente de Beatriz Paredes. Finalmente la Cámara de Diputados se percata de que el país no cabe en los muros cerrados de su recinto, 220 legisladores salen de su marasmo y recuerdan que están ahí porque son representantes populares y como tales con un mandato ciudadano; y lo que parecía imposible se logra: el recinto del pleno se abre para recibir a los dirigentes del EZLN.

Un muro se ha derrumbado y todavía quedan muchos más para que la transición a la democracia se instale de lleno en el país. El signo de que eso haya ocurrido lo veremos cuando los Acuerdos de San Andrés se plasmen en las reformas constitucionales conducentes; y a pesar de que muchas puertas se han derrumbado -¿o Ud. ha visto que alguna se haya abierto por gentileza del Estado?-, apenas nos encontramos en la antesala del cambio de régimen político. El antecedente inmediato es el portazo histórico de la derrota electoral del PRI del pasado dos de julio.

Muchos quisieran que todo quedara en ese triunfo electoral de la ciudadanía, muchos quisieran que las puertas se abrieran sólo en

los momentos electorales para después hacer como si nada hubiera pasado; seguir rescatando bancos con recursos públicos; hipotecando nuestros energéticos; disminuyendo los salarios reales; aumentando impuestos a los que menos tienen; reduciendo el presupuesto en gasto social; refuncionalizando el corporativismo sindical; en fin cambiando siglas y personas en el poder para que nada cambie. Por eso el crujir de muros del sistema político frente a la tozudez de los zapatistas.

El pasado 22 de marzo la democracia representativa que delega el poder del pueblo en los legisladores, ha debido hacer las cuentas con la democracia participativa. ¡Cuántos legisladores molestos e indignados ví en el Congreso por el atrevimiento de los diversos movimientos sociales de ir a manifestarse a las puertas de los recintos camarales! Legisladores sin distingo de partidos. Después de este triunfo del EZLN, los recintos tendrán que seguirse abriendo. En la ira de quienes se opusieron al uso de la tribuna central está no sólo el racismo contra los indígenas, también el miedo a escuchar las voces de los excluidos. La nostalgia de legislar cómodamente sentados en su curul sin saber qué están votando, empieza a invadir a esos representantes populares.

Son siete los artículos constitucionales que se reformarían para hacer una realidad los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno de Zedillo y el EZLN el 16 de febrero de 1996. Con esas reformas se cumpliría además con el Convenio 169 de la OIT aprobado por el Senado el 11 de julio de 1990 y publicado en el Diario Oficial el 24 de enero de 1991. Y son siete también las dimensiones de esa autonomía plasmadas en las reformas al art. 4.: para decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural; para respetar sus usos y costumbres; para elegir a sus autoridades; para fortalecer su participación y representación política; para acceder de manera colectiva al uso y disfrute de sus tierras y territorios; para preservar y enriquecer su cultura e identidad y para adquirir, operar y administrar sus pro-

pios medios de comunicación. Toda esta autonomía en el reconocimiento de que forman parte del Estado mexicano.

Esas siete dimensiones de la autonomía de los pueblos indígenas contenida en el artículo 4, se despliega en las reformas conducentes a los artículos 18, 26, 53; 73; 115 y 116, constitucionales. La mejor forma de combatir la campaña contra esas reformas es conocer la propuesta de la Cocopa, desarrollada por cierto en menos de cuatro cuartillas. Lo esencial siempre viste los ropajes de la sencillez.

Hoy miércoles 28 de marzo quienes han resistido una guerra de aniquilamiento por quinientos años harán escuchar su voz desde la más alta tribuna de la Nación. Después de su intervención esa tribuna empezará a ser republicana, y en el Congreso habrá conquistado un espacio la dignidad.

## LA HORA FISCAL

04/04/01

Una vez que la dignidad indígena hizo uso de la tribuna en la Cámara de Diputados, y que la comandancia del EZLN regresa a las montañas del sureste con el logro de haber sido escuchados por el Congreso de la Unión, toca ahora a la reforma fiscal ocupar los espacios de la atención nacional. Pero como decíamos semanas atrás, el futuro de esa reforma fiscal estaría definido en buena medida por la manera en que la caravana zapatista colocó a los diversos actores políticos en el escenario nacional. Y contra lo que podría esperarse, de los saldos de esa caravana no resulta un fortalecimiento de la izquierda política.

Es evidente que los triunfadores de la movilización del EZLN fueron el propio EZ y Vicente Fox. Frente a la opinión pública, el reinicio



del diálogo para la paz suspendido cinco años atrás, es mérito no sólo de los zapatistas sino también del Jefe del Ejecutivo Federal, quien recibió todo tipo de críticas de su propio partido, por su apertura a la caravana. Pero si los zapatistas no regresaron con las manos vacías, Vicente Fox logra la suficiente solidez política para, en la opinión pública, colocar su propuesta de reforma fiscal regresiva como si se tratara de una reforma redistributiva.

Gravar bienes básicos y medicamentos que antes tenían tasa cero además de disminuir el ISR para quienes se encuentran en la punta de la pirámide de los ingresos, es sin duda una reforma regresiva. Sin embargo, a diferencia de la torpe medida del gobierno de Zedillo, que en 1995, en plena crisis económica aumentó el IVA 50%, con los costos políticos registrados de manera inmediata para el PRI en las elecciones de 1997; la propuesta de Vicente Fox tiene una serie de matices, que de la mano de su legitimidad y popularidad, pueden hacer pasar esa reforma sin altos costos políticos.

En esos matices se encuentra por ejemplo, la desgravación del ISR a ingresos de hasta 50 mil pesos anuales, el aumento del universo poblacional de Progresos de 2.6 millones de familias a 5 millones; la eliminación de los regímenes fiscales especiales para los grandes consorcios agroindustriales y del transporte, y el beneficio a las clases medias de la disminución del ISR a 32%. De todos estos matices hará uso el gobierno federal para su campaña a favor de una reforma que insiste en gravar el consumo –en un país con grandes carencias en sus satisfactores básicos– en lugar de los altos ingresos de los que más tienen. Además es altamente probable que el gobierno negocie una aplicación gradual del 15% del IVA, lo que le permitiría el apoyo del PRI y explotar la imagen de flexibilidad en la reforma.

Regresar 100 miserables pesos mensuales a 5 millones de familias en extrema pobreza constituye un insulto a la dignidad, frente al costo del rescate bancario que compromete las finanzas públicas por más de 60 mil millones de pesos al año, rescate que tendría que

revisarse a fondo. Sin embargo, más allá de lo adecuada de la denuncia y de la justeza de las demandas, el problema para la izquierda parlamentaria es cómo generar en la sociedad una fuerza equivalente a la que el EZLN logró movilizar, ahora para derrotar una reforma fiscal regresiva y hacer aprobar otra que además de fortalecer las finanzas públicas redistribuya ingresos y riqueza y dinamice la actividad económica.

El asunto no es para nada sencillo, menos aún en un contexto en donde sectores pobres de la población pueden percibir la reforma foxista como benéfica. Frente a la astucia del gobierno, vemos por desgracia, ingenuidades políticas del PRD como la de, semanas atrás, legitimar la estrategia de reforma del Estado foxista sin pruebas previas de que se trata de un diálogo real. Que uno de los temas de esa reforma del Estado –el fiscal– lo coloque el gobierno de manera unilateral en sus tiempos y con sus contenidos, habla de los resultados de esa ingenuidad que por lo demás la vimos también en aquel Pacto de Los Pinos con Ernesto Zedillo en 1995. El desafío que la reforma fiscal foxista plantea a la izquierda política del país, pareciera que apenas encontrará denuncias y propuestas, pero no la fuerza necesaria para transformar esa reforma regresiva.

## EL SÍNDROME DE SANTA ANNA

11/04/01

Que las finanzas públicas del país andan mal queda claro con el solo dato de la baja carga fiscal: 11% del Producto Interno Bruto, una de las más bajas de América Latina, mientras que en otros países –desarrollados– por supuesto, dicha carga llega hasta el 40%. La cantidad de recursos que un gobierno recauda en proporción a la riqueza producida, es un buen indicador del grado de confianza

que los ciudadanos depositan en él. Además, esa carga fiscal se asocia directamente al grado de desarrollo del país, en donde el volumen de recursos fiscales son condición y efecto del mismo desarrollo; esto es, para que el país crezca son necesarias las finanzas públicas robustas y unas finanzas de esta naturaleza hablan de una economía sólida.

Así, la baja capacidad recaudatoria en México habla de la poca confianza de los contribuyentes en el gobierno y del círculo vicioso entre finanzas públicas pobres y nivel de desarrollo bajo. Cómo generar confianza en la ciudadanía y cómo romper ese círculo vicioso es uno de los retos del nuevo gobierno a la hora de aprobar la nueva reforma fiscal. Para ello se necesita cambiar el síndrome de Santa Anna, el inefable presidente del siglo XIX que cobraba hasta por el número de ventanas en las casas para financiar sus gastos militares. Hoy no se trata de financiar gastos militares –aunque últimamente el gasto en seguridad ha aumentado significativamente– pero sí de financiar los costos de la deuda pública hasta ahora escondida: rescate bancario, que incluye al carretero, programas de inversión con registro diferido en el gasto (Pidiregas), reforma a la seguridad social; y deuda de la banca de desarrollo.

El síndrome de Santa Anna que en realidad nunca ha abandonado a los gobiernos que emergieron de la revolución mexicana, y que por lo visto acompaña también al gobierno llamado del cambio, no cobran por las ventanas de las casas, pero sí se han ido por el recurso fácil de gravar a los contribuyentes cautivos vía el consumo; esto es aumentar el impuesto indirecto, el IVA. Además de la facilidad del cobro, los gobiernos han contado con el aval de los organismos financieros multilaterales como Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI) quienes recomiendan justamente que se grave el consumo y no el ingreso.

El gobierno de Fox, fiel a la tradición priísta y fiel a las recomendaciones del BM y del FMI, propone generalizar la tasa de IVA a todos los bienes, sean estos básicos o no, con el agravante de que dismi-

nuye la tasa del Impuesto sobre la Renta del cuarenta al treinta por ciento. La preferencia del BM y del FMI para gravar consumo en lugar de ingreso se basa en la idea de no afectar a los inversionistas.

Pero resulta que los esquemas del BM y del FMI se diseñaron en países en donde el porcentaje de inversión respecto al PIB es alto, en donde por consecuencia el volumen de riqueza nacional es alto, y ese volumen de riqueza está bien distribuido de manera que el alto nivel de ingreso por persona refleja también un alto grado de bienestar social de la población. En esos países de altos niveles de consumo, aplicar impuestos indirectos no significa una catástrofe como lo es para países como México, en donde para la mayoría de los estratos sociales el deterioro en el consumo afecta seriamente los niveles de su precario bienestar.

Además, que en esos países la recomendación de que los nuevos aumentos de impuestos sean al consumo, parte de que ya el ingreso está suficientemente gravado.

Por supuesto no es el caso de México, en donde el 20% de la población con los más altos ingresos concentra el 60% del mismo, que ahora pagará menos. De manera que si ya era injusto que una persona con 10 mil pesos de ingresos mensuales pague lo mismo que Carlos Slim con 6 mil millones de dólares anuales, ahora lo será mucho más.

Mi perspectiva es que con todo y síndrome de Santa Anna, la propuesta de Fox se aprobará, seguramente con modificaciones a la generalización del IVA en 15% y que en relación al tamaño del daño, los costos políticos de esta reforma no serán aquellos que el PRI tuvo con la "roqueseñal". Para una reforma que además de elevar la carga fiscal, redistribuya ingreso y riqueza y aliente el desarrollo del país, hace falta todavía recorrer un largo trecho.

## LA INTOLERANCIA DE ABASCAL

18/04/01

*Contra el canibalismo, mi solidaridad con Rosario Robles.*

Al Secretario del Trabajo, Carlos Abascal, le pareció que la lectura de *Aura* de Carlos Fuentes y algunos cuentos de Gabriel García Márquez atentan contra la moral en la educación de su hija que cursa la secundaria en el Instituto Felix María Rougier. Su queja contra la maestra Georgina Rábago Pérez de la materia de Español que ha incluido esos textos en su curso, motivó un acta administrativa por parte de la dirección del plantel que la coloca en riesgo de rescisión de contrato. Así, a la cifra de 355 mil empleos perdidos en lo que va del año (Centro de Estudios Económicos del Sector Privado), habrá que sumar el promovido por el propio Abascal en contra de la maestra.

A la pérdida de empleos originada en la desaceleración de la economía de los Estados Unidos, ahora tenemos que sumar la que se puede motivar por la censura e intolerancia del Secretario del Trabajo. Neutralizar los efectos de la disminución de la actividad económica de nuestro vecino del norte, requiere de medidas inteligentes para disminuir nuestra ancestral dependencia de ese país; entre otras promover una relación de equidad entre trabajadores y patrones, un nuevo pacto laboral. Para el desarrollo de esas nuevas relaciones laborales no puede estar al frente de la dependencia responsable de las mismas, una persona que antepone su estrechez moral a la libertad de cátedra, de pensamiento, de expresión.

El Sr. Abascal tiene todo el derecho a ser un retrógrada, a estar orgulloso de su conservadurismo y a ser un militante activo y beligerante de sus creencias, pero su rango de miembro del gabinete presidencial lo obliga a abstenerse de sus intolerancias o a abandonar su función pública. Si leer a un premio nobel de literatura o a

uno de los más prestigiados escritores mexicanos le parece atentatorio a la moral, ¿qué esperanza le queda a una discusión incluyente sobre la reforma laboral en puerta?.

Pero además es sumamente grave que el Secretario del Trabajo promueva la violación al artículo tercero constitucional, que para la educación que impartan las instituciones privadas señala que, "el criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios".

Seguramente la vocera presidencial, Martha Sahagún, desconoce el artículo tercero de nuestra Carta Magna, de otra manera no habría declarado que la censura del Secretario contra obras de la literatura universal y contra la maestra Rábago, "es un asunto estrictamente personal del secretario que no tiene nada que ver con su desempeño como servidor público".

No es la primera vez que el Secretario Abascal hace gala de sus creencias personales en el ejercicio de su función pública, sin respeto alguno por las que profesen sus interlocutores y en desmedro del carácter laico del Estado mexicano. Por fortuna el Presidente Vicente Fox ha desistido de sus profesiones de fe en público, a las que tiene todo el derecho, pero en privado. Hasta ahora el Sr. Abascal no parece entenderlo así. Tampoco es la primera vez que el Secretario del Trabajo se asume como cruzado en la defensa de causas oscurantistas, como la protagonizada recientemente con motivo del Día Internacional de la Mujer, cuando señaló que esta debe preservar su femeneidad resguardándose en el hogar y no masculinizarse en el mundo del trabajo.

El mérito del exlíder de Coparmex que se atrevió a entrar a la sede de la CTM a encarar personalmente a Fidel Velázquez y a lograr aquel acuerdo sobre la Nueva Cultura Laboral (1996), a estas alturas, visto su desempeño, se ha diluído, no es suficiente. Flaco favor hace el Secretario Abascal con tanto desatino y tanto desgaste. Es la hora de hacer otra designación.

## EL VI CONGRESO DEL PRD

25/04/01

El PRD llega a su VI Congreso Nacional con algunos puntos en su haber: las resoluciones a favor de sus demandas en las controversias constitucionales en Tabasco y Yucatán; el apoyo a la caravana zapatista y al uso de la tribuna de la Cámara de Diputados por la comandancia del EZLN; y su posición en contra de la reforma fiscal regresiva de Fox. Independientemente de los resultados de su Congreso, las causas de la legalidad electoral y de una política incluyente son parte de la esencia del PRD. No importa que dirigentes y militantes no respeten la legalidad interna, el PRD nació para hacer una realidad la democracia representativa en el país, lo logró el pasado dos de julio, y donde quiera que haya una lucha en torno a esa demanda ahí estará el PRD, es parte de su racionalidad histórica. Y también, cualquiera que sea la corriente que hegemonice el poder a su interior, el PRD estará siempre a favor de una política incluyente. Así dice la segunda parte de su lema "Patria para Todos", y aunque no formara parte de su divisa, la ideología de la Revolución Mexicana bajo la cual nació, así lo reclama, y que yo sepa esos principios no están a discusión en el PRD.

Lo mejor que le podría pasar al PRD durante su Congreso es tomar conciencia de que tienen condiciones para la unidad que tanto se invoca. Podrán ser tres, cuatro o hasta siete grupos los que se disputan el partido, lo cierto es que en términos programáticos todos abrevan de la ideología que emergió de la Revolución Mexicana; con acentos distintos, pero al final todos comparten ese viejo proyecto de la izquierda mexicana. El de la izquierda moderna no está en las filas perredistas, embrionariamente se encuentra en el EZLN con su demanda de autonomía y en los sindicatos que no temen a la libertad y a la democracia, que vistas las reacciones frente

a la reciente resolución de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión, son casi inexistentes. Entonces, ¿por qué no vivir a fondo ese viejo proyecto? ¿Será porque el desgaste del mismo hace imposible la convivencia plural y ese sea el origen del canibalismo político, y del barroquismo a la hora de acentuar las diferencias?

En todo caso esas diferencias, que las hay, no son sustantivas, no significan opciones diversas al interior del partido. Lo que hay, sí, en ese proyecto de la vieja izquierda, es una división del trabajo que como tal tendría que asumirse como complementaria. En esa división del trabajo, los llamados Chuchos y Amalios priorizan las tareas electorales y parlamentarias, con pocos vínculos con las luchas sociales pero no por ello lejanos de las demandas que emergen de esas luchas, llamésmole la izquierda política. Por otro lado está López Obrador que es la expresión más acabada de la izquierda social en el PRD, y en ese sentido el heredero del cardenismo de la década de los treintas. Y por último pero *no menos importante* están Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, dos figuras que han labrado su liderazgo por sus propias trayectorias, que trascienden al partido, y que en cuanto a proyecto estarían asentados –sobre todo Rosario– en la tradición de la izquierda política y la izquierda social.

Cada expresión aislada tiene el riesgo de exacerbar sus vicios. La izquierda política de llegar hasta el co-gobierno con Fox cuando no hay condiciones para ello; la izquierda social de profundizar los vicios del clientelismo y del corporativismo y como gobierno, la política asistencial y populista; la de CCS y RR hacer valer sus figuras sin contribuir a la autocrítica y la reflexión. Pero unidos pueden prolongar la vida de ese viejo proyecto de izquierda mientras en la sociedad se desarrolla uno nuevo, tarea que puede necesitar de muchos años.

Sin embargo, queda la gran duda de si la vejez del proyecto (casi 100 años) no empiece a producir un síndrome suicida. Por



ejemplo el embate contra Rosario Robles desde el Gobierno del Distrito Federal del que no puede ser ajeno AMLO y en el que participó también la dirección nacional: “se vale meter la pata pero no la mano” (Amalia García). Proyectar una sombra de duda sobre la gestión de Rosario Robles, golpea no sólo a esta sino al PRD en su conjunto y a sus gobiernos, incluido el de AMLO. Cuando lo que se está jugando es la sobrevivencia de un viejo proyecto que puede alcanzar para vivir en los márgenes de la democracia representativa, el lujo de pegarle a una figura partidaria es, repito, suicida. La legalidad no se riñe con la confianza y la fraternidad. No veo riesgos de fractura en el PRD, nada más los derivados del canibalismo.

## INDÍGENAS Y TRABAJADORES

02/05/01

Da la impresión de que en materia de cambios que definen la sustancia política del Estado, durante los últimos cinco años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido acreditando su voluntad de dismantelar contenidos jurídicos que atentan contra la libertad y la autonomía sindicales. Esa voluntad se acreditó de nuevo, días atrás, cuando declaró la inconstitucionalidad de los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo. El primero señala: “En el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante...” mientras que el segundo extiende ese señalamiento a los contratos-ley. Se trata efectivamente de la cláusula de exclusión, que ha sido uno de los pilares del sistema del corporativismo autoritario, y que tan buenos servicios ha dado al régimen, junto con la “toma de nota” y el monopolio de la organización sindical para los trabajadores del Apdo. “B” del art. 123 constitucional.

Si bien la sentencia de la Corte aún no es suficiente para sentar jurisprudencia, sin duda se convierte en un precedente difícil de ignorar a la hora de que las autoridades laborales elaboren y apliquen sus criterios en la materia. La mayoría de las reacciones sindicales fueron de reconocimiento a la importancia de la decisión de la Corte, pero también de temor por la posibilidad del desmembramiento sindical que dicha resolución puede provocar y con ello el fortalecimiento de la patronal. Si bien es cierto que la declaración de inconstitucionalidad elimina una fuente de poder para el sindicato, es importante tener claro que ese poder ha servido a las dirigencias sindicales y no a los trabajadores y que ello ha pervertido la naturaleza de sus organizaciones. La única manera de fortalecer a los sindicatos es haciéndolos realmente representativos de los intereses de los trabajadores.

Esa voluntad de cambio de la SCJN en asuntos que democratizan al Estado, no se ha registrado en el Poder Legislativo. Los cambios importantes en la materia han sido las reformas electorales que culminaron con la ciudadanización de los órganos electorales que finalmente dieron vida a procesos electorales legales y transparentes. Pero después de estas reformas, el Congreso de la Unión continúa en deuda con la sociedad. Esa deuda aumentó significativamente, con la aprobación de una reforma indígena que está por debajo de los Acuerdos de San Andrés. Para muestra basta un botón: en el art. segundo transitorio del texto aprobado se establece que "Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado." Se deja pues a la voluntad de las legislaturas locales la posibilidad de ejercer los derechos de los pueblos indios.

Quizá no es casual que precisamente en los asuntos de la democracia participativa sea donde el Congreso de la Unión esté mostrando mayores rezagos, si pensamos que los partidos mayoritarios

representados en las Cámaras se sienten muy cómodos en un sistema que delega la representación en ellos, y además de manera monopólica. Recuérdese que la ley no permite las candidaturas ciudadanas, tampoco la iniciativa popular, ni el referéndum, ni el plebiscito, que son formas de democracia directa, y que debilitarían el monopolio que hasta ahora ostentan los partidos y que por otro lado fortalecerían la participación de la sociedad en la toma de decisiones.

Lo cierto es que a siete años del surgimiento del EZLN, y después de la caravana zapatista a la ciudad de México, en donde la razón de la autonomía de los pueblos indios estuvo acompañada por la fuerza de su movilización, el Congreso da marcha atrás en el contenido de la propuesta de la Cocopa y con ello se desanda el camino que durante las últimas semanas se había avanzado para reiniciar el diálogo por la paz en Chiapas. Esta es la torpe respuesta del legislativo a la demanda de inclusión –como sujetos de derecho público– de los pueblos indígenas en el Estado nación. Dejar en el aire, sólo como una intención, la autonomía de los pueblos indígenas, no es solamente una grave responsabilidad histórica por las puertas que se cierran para la paz con dignidad, se trata además de una falta de voluntad para lograr la efectiva democratización del Estado.

Pero todo pareciera que a los legisladores sólo les interesa la democracia que se ejerce cada tanto en las urnas, la otra, la que permite la participación de los sujetos sociales a la hora de tomar decisiones que los afecten, prefieren mantenerla secuestrada en partidos poco representativos.

## DESTINOS ENLAZADOS

09/05/01

Sin reforma fiscal y con una reforma indígena muy lejana del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, el pasado 30 de abril el Congreso cerró su primer período ordinario de sesiones. Estos resultados significan un fuerte revés para el gobierno de Vicente Fox, empeñado como está en resolver la crisis de las finanzas públicas con altos costos para la población de bajos recursos, y comprometido, como se declaró, en cumplir con las condiciones para el reinicio del diálogo con el EZLN. Del desenlace final de ambos hechos depende en buena medida el éxito o el fracaso del gobierno foxista, y para el país, la posibilidad de convertir la alternancia en transición a la democracia.

Pero además, la suerte de la reforma fiscal está ligada a la suerte de la reforma indígena. En este espacio señalamos (Congreso en Crisis 21-03 01) que si esta salía adelante, la oposición a la reforma fiscal crecería por el fortalecimiento del movimiento popular, pero a la vez, un logro en la materia, haría crecer la autoridad moral y política del Presidente, autoridad y popularidad que aprovecharía para empujar su reforma hacendaria. Lo que presenciamos las semanas recientes fue la confrontación en torno a la reforma fiscal entre un Presidente que trataba de prolongar la fuerza política con la que salió de la caravana zapatista y los límites que le impone la pluralidad en el Congreso y la apertura de los medios a las críticas a su propuesta fiscal. Al cierre del período de sesiones del Congreso lo que tenemos es un empantanamiento profundo: ni la reforma indígena necesaria para la paz con dignidad, ni la reforma fiscal que ha empujado el Presidente.

El riesgo de que ambos temas no se resuelvan de manera adecuada los empieza a cobrar la misma realidad. Por un lado está la

respuesta de rechazo a la reforma indígena por parte del EZLN y el CNI y el rompimiento del contacto entre el EZLN y el Gobierno y con ello la posposición del reinicio del diálogo entre ambos. Por otro lado está la situación económica que exige soluciones a fondo, cuando la desaceleración de Estados Unidos ya ha hecho perder 200 mil empleos en lo que va del año, según informes de la Secretaría del Trabajo. La gravedad de ambas situaciones tendría que hacer reflexionar a los actores políticos. Pero no es precisamente la reflexión y mucho menos el compromiso para lograr la plena democratización del país lo que caracteriza la actuación de las fuerzas políticas y del mismo gobierno.

El empecinamiento del Ejecutivo para continuar deteriorando las condiciones de vida de la población, como uno de los recursos para resolver el desatre de las finanzas públicas es realmente atroz. Pensar que una costosísima campaña de publicidad a favor de la reforma hacendaria es la clave para convencer a la población, olvida la larga caída de los niveles de bienestar, el profundo empobrecimiento de amplísimos sectores de la población y también el gran enriquecimiento de unos cuantos. Olvida también el agravio de socializar las pérdidas bancarias para seguir privatizando sus ganancias especulativas, y la ofensa a la ciudadanía de los gastos superfluos y suntuarios del gobierno. El recorte anunciado por 30 mil millones de pesos al gasto público tendría que ser justamente en esos renglones, asunto que no está claro. Intentar financiar el gasto con una reforma tributaria que golpea brutalmente a los sectores más empobrecidos, es profundizar una estrategia económica que políticamente ha servido para poner en riesgo la estabilidad social.

Si esa es la estrategia económica, por el lado de la reforma indígena los resultados son también riesgosos, y en este tema la mayor responsabilidad cae sobre el Legislativo. En entrevista con *El Universal* (07-05-01), Pablo Salazar Mendiguchía, Gobernador de Chiapas, declara: "Los acuerdos de San Andrés son acuerdos de Estado....Involucraron a los tres poderes e intervino la sociedad mis-

ma... Así era imperativo que las partes le dieran a los Acuerdos de San Andrés ese rango de acuerdo de Estado, y los sacaran por encima de diferencias ideológicas." Tiene razón. Lo que hizo el Legislativo al aprobar una reforma constitucional muy lejana de la iniciativa de la Cocopa, fue desconocer un acuerdo de Estado.

Así, con un Ejecutivo que insiste en golpear económicamente a los sectores más empobrecidos y con un legislativo que desconoce acuerdos de Estado, poca esperanza queda en el país a la justicia y a la paz con dignidad. Poca esperanza también a la democracia.

### LOS MISMOS VICIOS

16/05/01

El recorte presupuestal anunciado por el gobierno federal el pasado viernes trató de matar dos pájaros de un tiro: no alejarse de la meta del déficit de 0.65% del Producto Interno Bruto y abonar a su campaña a favor de la reforma fiscal atorada en el Congreso. Para el primer propósito, además de anunciar la disminución del gasto en 3 mil 375 millones de pesos, el Secretario de Hacienda Gil Díaz adelantó que en la medida en que los ingresos presupuestales continúen disminuyendo, la nueva modalidad es que los recortes al gasto serán mensuales. Además, para fortalecer su alicaída campaña por la reforma hacendaria, el Ejecutivo Federal deja caer el mensaje de que los responsables de esos recortes serán los legisladores, mientras mantengan congelada su iniciativa.

Ciertamente, como lo hemos ilustrado en este espacio en otras ocasiones, la situación de las finanzas públicas es desastrosa, lo que hace urgente la aplicación de una reforma fiscal integral. Por desgracia, tanto la iniciativa de reforma hacendaria del gobierno de Vicente Fox, como la campaña publicitaria que la apoya, no sólo no

atiende las causas del ancestral problema sino que repite los vicios de los gobiernos priístas. Es, al viejo estilo priísta, una campaña tramposa.

El primero de los vicios que está repitiendo el gobierno foxista es la falta de transparencia en las finanzas públicas. Desde 1998 los grupos parlamentarios del PRD en el Congreso de la Unión estuvieron alertando sobre el uso discrecional de los recursos públicos para cubrir la transferencia de recursos, que sin aprobación del Congreso, el Ejecutivo destinaba –entre otros usos– al rescate bancario. Quizá porque algunos beneficiarios importantes de ese rescate pereneaban a las filas panistas, fue de ese partido de donde emergió el aval a los funcionarios de Zedillo para convertir esos enormes pasivos en deuda reconocida por el Congreso, en tanto los ingresos petroleros habían caído en tal magnitud que impedían continuar con la transferencia ilegal de esos excedentes. Si ahora el gobierno de Fox quisiera ser congruente con su compromiso de campaña por la transparencia, tendría que impulsar la reapertura del expediente indebidamente cerrado del Fobaproa. Ahí se encontrarían recursos más que suficientes para evitar los recortes anunciados.

El segundo vicio que hace suyo el gobierno foxista es continuar con la ofensiva e inmoral práctica de los gastos superfluos y suntuarios en el presupuesto público. ¿A título de qué, en un país de abismales injusticias sociales como el nuestro, los altos funcionarios del gobierno de Fox continúan percibiendo salarios y prebendas que significan, según las investigaciones del Dr. Juan Moreno Pérez, exasesor del PRD en el Congreso, más de 10 mil millones de pesos? Es evidente que la exigencia de eliminar esos gastos superfluos y suntuarios sigue vigente.

Corregir el desastre de las finanzas públicas empieza por erradicar los vicios del régimen priísta que hicieron del presupuesto gubernamental el espacio de la discrecionalidad, la corrupción y el patrimonialismo. Hechos concretos sobre el cambio de esas viejas prácticas empezarían a generar la confianza y legitimidad neces-

rias para discutir y acordar la reforma fiscal integral. Pero nada de ello se avizora en el panorama nacional y sí en cambio el desarrollo de una discusión y una propaganda que evade los problemas de raíz en las finanzas públicas. Si la democracia participativa no sirve para combatir y eliminar esos lastres, la pregunta de la ciudadanía será sin duda: y entonces, ¿para qué el cambio?

## LAS DOS ECONOMÍAS

23/05/01

Con una caída en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a 1.9% en el primer trimestre del año, semejante al que tenía en 1996, y con una pérdida de puestos de trabajo de más de 200 mil, la economía que impacta a los hogares está sufriendo un deterioro significativo. Muy lejos de esta esfera donde se define la suerte de millones de familias, los mercados cambiario y financiero se encuentran en pleno auge. Este auge llegó a la euforia después de la compra de Banamex por el *Citigroup*, con una elevada recuperación del índice de la Bolsa Mexicana de Valores y un fortalecimiento de la moneda que llevó al dólar a cotizarse por debajo de los nueve pesos. Por si fuera poco el entusiasmo en los mercados financieros, dos días después de la venta de Banamex, el Banco de México anunció que suspende sus operaciones cambiarias, *en tanto no considere necesario seguir acumulando reservas* (llegaron a la cifra récord de 40 mil 732 millones de dólares); y el mismo día informó que amplía la oferta monetaria diaria en 50 millones de pesos.

Esa euforia cambiaria y financiera, no cambia sin embargo los pronósticos para el segundo trimestre del año en torno a la llamada economía real: existe consenso entre los diversos *analistas* y *corredurías* que será peor que el primer trimestre, esto es su nivel



de crecimiento estará por debajo de ese 1.9% de enero a marzo. Y aunque a diferencia de otras crisis del país, la que hoy se está registrando es producto de la desaceleración de la economía de Estados Unidos y no de factores endógenos; sin embargo, y a la hora de la economía de los hogares, a las familias poco les importa si los despidos y la reducción de su ingreso estuvieron motivados en causas externas o internas, el daño es el mismo. Daño que acumulado a lo largo de las recurrentes crisis de los últimos veinte años, significa la profundización del deterioro en los precarios niveles de vida. Basta recordar que en nuestro país 40 millones de personas son pobres.

Este dato seguramente se le escapó al Presidente Vicente Fox, cuando frente al alza del peso, el 17 de mayo pasado declaró. “una moneda como la que hoy tenemos, fuerte y sólida, le da poder adquisitivo a cien millones de mexicanos. Una moneda fuerte tiene sus beneficios muy importantes para los consumidores, para los ciudadanos”. Seguramente pensó que los cien millones de mexicanos –en los que se contabilizan bebés y menores de edad, por supuesto– tienen fuertes inversiones en pesos que les permitirán salir de compras al mercado de bienes importados.

La fortaleza del peso no se debe a que la economía sea más competitiva que en años anteriores, no, la reapreciación de la moneda se explica por la masiva entrada de capital extranjero, casi 11 mil millones de dólares en el primer trimestre del año. De este volumen, el 34% es inversión extranjera directa; casi 20% es inversión en cartera, 30% es endeudamiento mayoritariamente privado, 20% es repatriación de capitales. Esto es, el 65% de los recursos que en el presente año han apuntalado al peso son recursos volátiles. Frente a cualquier elemento que disminuya la confianza de los inversionistas –por ejemplo que la reforma fiscal siga empantanada en el Congreso– o frente a cualquier indicador de que las tasas de interés reales ya no sean tan atractivas, esa masiva entrada de capitales, en tanto no tiene compromiso con proyectos productivos, puede revertirse.

Justamente esta volatilidad del mercado de capitales hizo que el anuncio de la venta de Banamex se recibiera con tanto beneplácito. Pero ojo, la búsqueda de la alta rentabilidad financiera por parte de Citibank, no se basa en la masiva oferta de créditos que piensan poner a disposición en el mercado nacional, por el contrario, sus expectativas se basan en los 1400 millones de dólares de recursos públicos que el IPAB les entregará este año por el rescate bancario aprobado por PAN y PRI, y se basan también en el alto margen de intermediación bancaria (diferencia entre tasas activas y pasivas) del que ahora podrán gozar.

En fin, la bonanza del sector bancario y financiero se fundamenta en el deterioro de las inversiones que generan empleo y de las condiciones de vida de la población. La estabilidad de una economía que amplía cada vez más la brecha entre las dos esferas de la actividad no puede sostenerse por mucho tiempo. Pero mientras tanto, todo es beneplácito para los especuladores.

## BANCOS Y MIGRANTES

30/05/01

A pocos días del anuncio de la fusión de Banamex con Citibank, 14 migrantes mexicanos originarios de Veracruz, la mayoría menores de 30 años, perdieron la vida en el desierto de Arizona. Así, mientras el capital financiero y bancario se concentra y ahora se arroja en brazos del capital extranjero, la economía mexicana sigue haciendo prescindibles a miles de trabajadores que prefieren arriesgar sus vidas frente a las nulas esperanzas de encontrar empleo en su país de origen.

Si hacemos un recuento rápido del rezago en la creación de empleos en México, bastaría recordar que en el sexenio de Miguel de

la Madrid, no sólo no se crearon, sino que se destruyeron 4 millones de puestos de trabajo, la misma cantidad que se había generado en el sexenio de López Portillo. En el gobierno de Salinas de Gortari la situación mejoró de manera raquítica: 300 mil empleos promedio al año; mientras que en el sexenio de Zedillo esta cifra se elevó a 400 mil. Esto es, la aplicación de la política neoliberal coloca al país en los niveles de empleo de hace 25 años. Me refiero por supuesto a trabajos de la economía formal con al menos el salario mínimo como ingreso. Si pensamos que cada año es necesario crear 1 millón 200 mil empleos, nos explicamos el voluminoso déficit acumulado y junto con ello el crecimiento de la economía informal y de la migración hacia EUA. Según datos de Conapo, de cada 100 mexicanos que nacen, 8 emigran.

Ese déficit en la creación de empleos, y no los llamados polleros, es la razón que explica el crecimiento en la emigración y con ella el drama de las muertes cotidianas en lugares inhóspitos de la frontera norte, por donde los migrantes son obligados a cruzar debido a la política estadounidense en la materia. A partir de 1994 esta política ha cobrado más de 600 vidas porque ha concentrado sus recursos justamente en los cruces fronterizos, y no como anteriormente, en el interior de Estados Unidos.

Pero de la misma manera en que ha crecido la incapacidad de la economía para generar los empleos suficientes, así también se ha desarrollado su eficacia para generar mucha riqueza en pocas manos. Una de las fuentes principales de esta riqueza es el capital financiero y bancario. Después de una re-privatización bancaria que le dio un ingreso al erario público por casi 12 mil millones de dólares, más alto que el valor contable de los bancos desincorporados, del que muy pronto se resarcieron los nuevos banqueros con la patente de corso dada por el gobierno a través de la desregulación del sistema bancario y financiero, desregulación que les permitió hacer crecer la diferencia entre tasa de interés activa y pasiva (margen de intermediación) en un nivel que rebasó el de cualquier economía.

No conformes con este jugoso negocio, y una vez que su voracidad llevó a sus instituciones al riesgo de quiebra, ellos encontraron el gran respaldo gubernamental de convertir al Fobaproa en el refugio de operaciones irregulares e ilegales a través del intercambio de cartera por pagarés que después se legalizarían como deuda pública con el apoyo de PRI y PAN a la iniciativa del IPAB en el Congreso de la Unión. Contar ahora con recursos públicos para financiar ese rescate que implica 20% del PIB, es uno de los negocios más jugosos de los banqueros, y seguramente un atractivo para la entrada de capital extranjero a ese sector.

Los cuantiosos recursos dedicados al rescate bancario, más las jugosas ganancias que otorga una rentabilidad bancaria que se ha definido por el encarecimiento del crédito, son recursos que se escamotean a la promoción de la inversión generadora de empleo. Y a pesar de esta corta pero jugosa historia en términos de ganancias financieras; el presidente del grupo Bancomer, declara a *El Universal* (28-05-01) que todavía pasarán algunos años para llegar a los niveles de crédito de principios de los noventas. Como si se tratara de un barril sin fondo. ¿Dónde está el beneficio para el país de ese rescate bancario? También lo preguntan los migrantes que arriesgan su vida al cruzar la frontera.

## Y LA HUELGA SE HIZO

06/06/01

La huelga de la combativa Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) que se desarrolló a lo largo de dos días, concluyó con un acuerdo salarial y sobre prestaciones que permite calificar a ese movimiento como triunfador. Pero el triunfo no solamente consiste en haber conseguido un aumento salarial de 9.5% y

mejoras significativas a sus condiciones de trabajo, más alentador aún, es que el derecho de huelga haya sido respetado después de que el mismo se había hecho nugatorio a través de las figuras de la inexistencia o de la requisa. En este caso, ni la Secretaría del Trabajo ni la de Comunicaciones y Transportes utilizaron esos subterfugios legales que invariablemente se aplicaron por los gobiernos priistas a las huelgas en el sector de comunicaciones y transportes. Lo que tendría que ser el respeto irrestricto a un derecho social conquistado por los trabajadores –la huelga–, se convierte así en motivo de celebración y de reconocimiento a los titulares de las Secretarías respectivas.

Quizá en la negativa a aplicar la requisa o la inexistencia, estuvo el cálculo de no golpear a un sindicato que como parte de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), puede convertirse en uno de los interlocutores que el gobierno necesita frente a la muy documentada inoperancia de la CTM para responder a los nuevos desafíos del sindicalismo. Cualquiera que haya sido el cálculo –si lo hubo–, lo cierto es que llevar adelante una negociación sin la amenaza de diluir el derecho de huelga, sienta un precedente muy saludable para el nuevo esquema de relaciones laborales que el gobierno foxista quisiera impulsar. En el caso, por supuesto, de que realmente exista un nuevo proyecto de relaciones Estado-sindicatos y no solamente la refuncionalización del viejo corporativismo priista.

Ciertamente una golondrina no hace verano, pero frente a las recientes recomendaciones que en materia laboral hizo el Banco Mundial (BM) al gobierno de Fox, respetar el derecho de huelga tiene un valor indiscutible. Para que México ascienda a una economía de primer mundo, la Agenda Integral de Desarrollo para México, elaborada por el BM y dada a conocer el 23 de mayo pasado, señala que nuestro país debe eliminar el sistema de pagos por despido, los contratos colectivos, y el reparto de utilidades. A los señores de ese organismo financiero multilateral les parece que esas conquistas encarecen la operación de las empresas y desalientan la inversión.

Al día siguiente de que se diera a conocer la mencionada Agenda del BM, el presidente Fox declaró en Cd. Juárez, Chihuahua, que las recomendaciones de ese organismo, “están muy en la línea de lo que nosotros contemplamos”. Aunque en las recetas del BM, además de las correspondientes a la materia laboral, está también la apertura a la inversión privada en el área de energéticos, que fue el tema al que en esa ocasión se refirió el Presidente Fox, lo cierto es que la ausencia de definiciones claras por parte de su gobierno en materia de reforma laboral, junto con un continuismo económico muy apegado a los recetarios del FMI y del BM, hacen caer la sospecha de que el esquema de esa reforma *vaya precisamente por el lado del desmantelamiento de conquistas laborales*. Una razón más para congratularnos con el trato dado al conflicto laboral en Aeroméxico.

Cambiar la interlocución del gobierno con los viejos dinosaurios sindicales del régimen priísta como la CTM, hacia sindicatos como ASSA caracterizados por nuevos liderazgos y con activa participación democrática de sus bases, sin duda podría ser un proyecto adecuado para los nuevos tiempos. Sin embargo, en ese esquema no habría que olvidar la experiencia salinista con la Fesebes, y sobre todo con el sindicato de Telmex. En el intento de Carlos Salinas por debilitar aún más al ya muy vapuleado Congreso del Trabajo y su pivote la CTM, se privilegió la relación con la Fesebes bajo el supuesto de que el excelente vínculo con el Presidente de la República podría sustituir las complejas relaciones de poder y de representatividad desarrolladas por el sindicalismo oficial a lo largo de décadas. Más allá de esa relación personal, la Fesebes no logró el reconocimiento oficial y hoy buena parte de las organizaciones que la constituían, participan en la UNT, sector muy importante del nuevo sindicalismo al que pertenece ASSA.

Hacia el futuro, aquella experiencia deja en claro que el nuevo esquema de relaciones Estado-sindicatos no puede eludir el reto de que su legitimidad tiene que residir en la amplia representatividad

del mosaico social que es la clase trabajadora y en la amplia participación de las bases en cualquier definición gremial o política. Cualquier otra fuente de legitimidad en esa relación la hace precaria y vulnerable.

## EL ELEFANTE EXISTE

13/06/01

Los 19 millones de personas de origen mexicano que residen en Estados Unidos representan el 7% de la población total de ese país. De ese total, el 56.6% nacieron en Estados Unidos. De los nacidos en México, el 18% (3.5 millones) son ilegales. El flujo anual de migrantes mexicanos a ese país es de aproximadamente 350 mil, de ellos sólo el 12% cruzan la frontera de manera legal. En los últimos veinte años, la migración ilegal de mexicanos a Estados Unidos ha aumentado en 42%. Para tratar de controlar ese fenómeno, en 1994 el gobierno de Estados Unidos inauguró una política migratoria (de manera unilateral, por supuesto) que ha significado multiplicar por más de dos los recursos humanos y materiales para proteger la línea fronteriza. Este intento por sellar la frontera ha costado la vida a más de 600 migrantes.

El fenómeno migratorio México-Estados Unidos existe desde los orígenes de ambos países, y ha pasado por algunos vaivenes. Siempre con datos censales y de Conapo, por ejemplo, a consecuencia de la Revolución Mexicana de 1910, entre ese año y 1930 los mexicanos residentes en Estados Unidos se multiplicaron por 2.8. para llegar a representar el 3.7% de la población total de aquel país. Pero una vez que la política económica y social del Gral. Lázaro Cárdenas coloca en el centro la mejoría en las condiciones de vida y de trabajo de la población, esa presencia de mexicanos en Estados

Unidos se reduce a 1.88 (1940). Con el debilitamiento del sector agropecuario, ya en la década de los sesentas, la emigración empieza a aumentar, pero el salto brusco lo da en la década de los ochenta, cuando se multiplica casi por tres en relación a la década de los setentas, aumento que se acelera y mantiene hasta nuestros días.

Sin duda la población ha vivido los estragos de la política económica inaugurada en los ochenta de manera semejante a los que produjo el conflicto armado en 1910; con la gran diferencia de que durante el deterioro económico de 1910-1930 se estaba gestando un nuevo país que mejoró las condiciones de vida de la población a lo largo de cuarenta años, mientras que en el horizonte de la revolución de los neoliberales sólo se proyecta más pobreza.

Pero visto desde otro ángulo, el acelerado aumento de la migración mexicana a Estados Unidos ha significado una revolución silenciosa que se asoma en diversos ámbitos de la vida de ese país y que reclama los espacios que le corresponden y su reconocimiento legal e institucional. Así fue como Antonio Villaraigosa candidato de origen mexicano a la alcaldía de Los Angeles, California, estuvo a punto de triunfar en las recientes elecciones para ese cargo (*El Universal*, 7 de junio) con un total de 46.46% de los votos. Villarraigosa es uno de los 10,5 millones de mexicanos nacidos en Estados Unidos y a ese resultado electoral contribuyó el hecho de que votantes de origen hispano participaran en una proporción de uno a cuatro en las urnas del pasado 5 de junio. El fenómeno Villarraigosa se inició años atrás con su participación en el movimiento para derrotar la iniciativa 187 que pretendía eliminar el derecho a servicios de salud y educativos para la población de origen hispano. El total de mexicanos residentes en California es de 8 millones 200 mil, esto es, el 44% del total en ese país.

Así, mientras los mexicanos en Estados Unidos reclaman el reconocimiento político a su presencia y a su contribución a la riqueza de ese país, a los políticos de ambos países no les queda más remedio que incluir en la agenda binacional el tema migratorio.



Pero pareciera que en este reconocimiento a la importancia del tema migratorio no se encuentra la voluntad real de ir hacia el reconocimiento pleno de los derechos políticos, laborales y humanos de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. A reserva de volver sobre el tema en este espacio, sirva para ilustrar mi escepticismo, los resultados de la XIX Conferencia de gobernadores fronterizos, celebrada en Tampico, Tamps, la semana pasada.

El resultado se puede sintetizar en una frase del mensaje que el Presidente Fox envió desde China para dicho evento: "créanos, nuestros paisanos no tendrán que emigrar" en medio de la apología al fortalecimiento de la economía mexicana, de su programa de créditos y de los planes de capacitación de la mano de obra. Algo así como el chiste del economista, quien para sacar del agujero a un elefante inicia su propuesta diciendo "supongamos que el elefante no existe".

## EL ESCUÁLIDO NEO POPULISMO

20/06/01

Una vez que el gobierno foxista siguió la misma estrategia económica que sus antecesores priistas, era esperable que sus medidas económicas cayeran en el terreno de lo patético. No se puede calificar de otra manera el llamado Programa Nacional de Financiamiento para la Microempresa anunciado la semana pasada. Doscientos millones de pesos para 40 mil beneficiarios con créditos que van de los quinientos a los cuatro mil pesos, con tasas de interés del 7% mensual, 84% anual (!) significa realmente una burla a la gravedad de la situación económica de millones de familias que han sido víctimas del desempleo y de los bajos salarios.

El programa, presentado por el mismo presidente Fox con bombo y platillo, constituye una burla por la insuficiencia de su cobertura. Sólo el pasado mes de abril quedaron sin empleo 50 mil personas en el sector formal de la economía (*El Universal*, 18 06 01 con datos de la STyPS). También es una burla por la escasez de sus recursos; dotar de esa miseria a los microempresarios no hace otra cosa que ensanchar las filas de la economía informal. Y una burla por la tasa de interés usuraria que se hará pagar a los acreditados, tasa que equivale a un margen de intermediación de 72 puntos porcentuales en un país en donde ese margen es de los más altos del mundo; tasa doce veces más alta que la inflación esperada y casi tres veces más alta que la tasa que cobran los bancos por las tarjetas de crédito.

Los minicréditos serán otorgados por las microfinancieras inscritas en el mencionado programa; entidades que con esa patente de corso en el bolsillo muy pronto abultarán sus ganancias de operación. En lugar de fortalecer a la banca de desarrollo para el abaratamiento del crédito, como parte de una nueva política bancaria y financiera, el gobierno crea esos pequeños vampiros sociales. Y si los "beneficiarios" en un futuro muy próximo caen en cartera vencida, seguramente el mismo gobierno rescatará a las microfinancieras con un mini Fobaproa.

Más allá del gobierno, no he escuchado, tampoco leído, un comentario favorable a este programa. El calificativo que más se le ha endilgado es el de "populista". Pero incluso ese término que se utiliza en forma peyorativa le queda grande. En todo caso estaríamos frente a un neo populismo escuálido y trasnochado.

Populismo escuálido por el monto raquíutico de sus recursos, también por la naturaleza de esos recursos. Hasta 1982 el régimen priísta fue populista, porque su legitimidad se basaba en el apoyo popular generado en su política de reparto agrario y en la política social del Estado benefactor que concebía los derechos sociales como universales. Los bienes que el régimen priísta hacía llegar a la población

significaban no solamente bienestar social, sino recursos que expandían el mercado interno de manera masiva (tierra, salarios, educación, salud, alimentación y vivienda). Es de todos conocido el uso electoral que se hacía de esa distribución de beneficios, y no es esta la ocasión para discutir sobre su agotamiento y fracaso. Pero sí lo es para dejar claro que ni la cantidad ni la naturaleza de los recursos de programas como el que comentamos, podrían hacer aspirar al gobierno foxista a concebirlos como base de una significativa manipulación electoral, tampoco como fuente de legitimidad.

Pero además de escuálido, sería un populismo trasnochado. El populismo priísta que forma parte de la tipología clásica de este fenómeno político en América Latina, se dio, como otros, en la etapa de transición de una sociedad rural a una urbana; cuando las instituciones de participación política no existían y cuando el nacionalismo era la ideología que aglutinaba la relación Estado-sociedad. Nada de eso existe ahora. Hace rato somos un país eminentemente urbano; la democracia electoral ya no puede ser suplantada y al nacionalismo se lo está tragando la globalización. Ciertamente la masa popular ubicada en la economía informal, en la pobreza y en la pobreza extrema, podría ser la fuente de la reedición del populismo del viejo régimen. Sin embargo, para que funcionara como fenómeno de masas para la legitimación del nuevo gobierno, un neopopulismo de 200 millones de pesos no alcanza.

## NI GUERRA NI TREGUA

27/06/01

El 20 de junio, cuando apareció la información sobre las compras de toallas a precios estratosféricos para las chozas (sinónimo de

cabaña, según el diccionario Larousse) del Presidente y de su hija, Andrés Manuel López Obrador, después de la crítica sistemática durante seis meses a Fox, sorprendió a los periodistas quienes al preguntarle sobre el tema, respondió: "No voy a hablar sobre el asunto, porque tenemos que pensar en la situación difícil por la que se está atravesando y no debemos socavar la investidura presidencial..." Agregó: "estamos en una situación muy difícil en materia económica...tenemos que darle confianza al Presidente en estos momentos aunque representamos dos proyectos de nación distintos y contrapuestos, hay fronteras, hay límites, y por encima de esas diferencias está el interés general". Dijo también que lo más importante es que no haya nerviosismo o incertidumbre en la conducción del país porque eso lo advierten los inversionistas extranjeros "y si no existe autoridad, las cosas se pueden descomponer más". Por ello es que hizo un llamado a "que haya una tregua y que todo mundo se ponga a trabajar. Está de por medio la economía del país".

No estoy tan segura de que el interés general de la Nación esté demandando una tregua en las críticas al Presidente, o si por el contrario lo que ese interés general demande a todos los actores políticos y sociales sea orientar sus acciones para que la alternancia conquistada por la ciudadanía logre llevar a buen puerto el barco de la transición democrática. Y con la transición como objetivo, las guerras y las treguas aparecen como instrumentos de una lucha maniquea cuando en realidad estamos frente a un proceso político que rebasa cualquier esquematismo.

Si se trata de anteponer el interés general de la sociedad y de la Nación frente a la desaceleración económica, más que guerra y más que tregua lo que tendríamos que estar exigiendo es la redefinición de la estrategia gubernamental que sigue los mismos pasos -con los mismos funcionarios- que los gobiernos priistas. Y sobre este asunto la mayor fortaleza del Presidente se logrará cuando este reconozca que su proyecto de reforma fiscal es atentatorio a ese interés general y en consecuencia lo modifique. Y para obligar al

Presidente a esa modificación, no es necesario desgastarse en una guerra cotidiana, tampoco hacer mutis de repente. En cambio sí es necesario hacer acopio de toda la inteligencia y de toda la fuerza política.

Poner como condición el fortalecimiento de la figura presidencial para resolver los graves problemas económicos del país es suponer que ese factor actúa por su cuenta cuando en realidad son fenómenos absolutamente imbricados, como siameses. No se los puede disociar ni en el tiempo, tampoco en el espacio de la política. La institución presidencial se fortalecerá cuando las definiciones económicas del Ejecutivo Federal pongan sobre bases firmes el crecimiento económico del país, no cuando sus opositores sean más piadosos.

Una vez lanzada la tregua por AMLO, el PAN, ni tardo ni perezoso resolvió cerrar filas con Vicente Fox y propuso a todas las fuerzas políticas la construcción de un nuevo pacto político para México en torno a una agenda en materia política, económica y social. En materia económica, se trata –dijo el presidente del PAN durante la reunión de su Consejo Nacional–, (de) “una profunda reforma que impulse el desarrollo del país, resolviendo de inmediato la reforma hacendaria”, la primera pregunta es ¿cuál reforma hacendaria? ¿la del Presidente Fox? ¿o la que se logre por consenso entre los partidos en el Congreso escuchando las voces de la sociedad? Por último, Bravo Mena confió en que AMLO responda al llamado en torno al nuevo pacto político.

Sin duda se necesita de ese pacto, pero no para fortalecer a Fox, sino para fortalecer al país. No un pacto entre las cúpulas partidarias, no un pacto tras bambalinas, sino uno transparente, sustantivo y de cara a la Nación. Y mientras tanto, ¿la tregua seguirá?

## COLABORACIONISMO MIGRATORIO

04/07/01

Siete meses son pocos para exigir resultados a un gobierno federal, pero son más que suficientes para apreciar el rumbo que toman sus acciones. Durante los últimos días, ha estado ocupando la atención de la opinión pública nacional el acuerdo en materia migratoria entre México y Estados Unidos plasmado en el "Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza" del pasado 22 de junio, acuerdo que por su importancia vale la pena contrastar con las promesas de campaña foxista en la materia.

Durante su campaña y en la primera visita como presidente electo a Estados Unidos, Vicente Fox propuso el libre tránsito de los trabajadores migratorios entre ambos países, propuesta que sin duda ataca el problema desde su raíz. Una vez establecido el libre tránsito de capitales y mercancías entre ambos países con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, la exclusión para incorporar en ese tratamiento al trabajo sólo se explica por el interés estadounidense de regular a su conveniencia la entrada de trabajadores.

El argumento de los gobiernos priistas para explicar esa exclusión en términos de que se negociaba sólo un tratado comercial y no la unión económica entre ambos países, además de formalista, pretendía ignorar que una de las transacciones económicas más importantes entre ambos países es justamente el desempeño de la fuerza de trabajo mexicana para la producción de riqueza en aquel país. Obviamente el importante trasiego de ese trabajo salta por todos los poros de la relación bilateral, el paso de trabajadores sin documentos que amparen su situación laboral, la cantidad de estos que mueren en el intento de cruce, y la importancia para la economía

nacional del monto de las remesas familiares, son tres ejemplos que ilustran esa realidad insoslayable.

Sin embargo, el rumbo que ha ido tomando la política migratoria del gobierno de Fox, no guarda relación con la importante y atinada propuesta inicial y a pocos meses de su mandato es idéntica a aquella que siguieron los gobiernos priístas: aceptar de manera subordinada la definición unilateral que los Estados Unidos están haciendo de su estrategia migratoria regional que abarca a Centroamérica, y convertirse en coadyuvantes de esa estrategia. A esa subordinación respondieron las reformas a la Ley General de Población durante el gobierno de Carlos Salinas en la que se aprueba el establecimiento de retenes a lo largo del territorio nacional, violatorios a la garantía constitucional del libre tránsito de personas, pero muy útil para detectar y cuando conviene, detener el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, también para esquilmar a los migrantes mexicanos.

El “Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza” constituye un paso más en esa estrategia de colaboración del gobierno de México con el de Estados Unidos para detener el flujo de trabajadores migratorios, ya que se compromete a disuadir el paso en los cruces de zonas de alto riesgo. Así, el apoyo que México ya otorgaba a las autoridades migratorias del vecino país del norte con el establecimiento de los retenes mencionados, ahora se reforzará en la franja fronteriza norte, para continuar violentando las garantías constitucionales. Por otra parte, la participación del gobierno federal en la “Operación Encrucijada” diseñada por el Servicio de Migración y Naturalización de EUA y el FBI realizada entre el 4 y el 20 de junio y en la que se detuvieron a casi ocho mil personas de 12 países que trataban de entrar a EUA es una muestra más de esa subordinación.

La única forma de reducir los riesgos que enfrentan los trabajadores migratorios es que Estados Unidos haga a un lado su política de criminalización de este tipo de trabajo y elimine su operación de

sellar la frontera que ha causado casi 700 muertes desde su inicio en 1994. En lugar de ello y para seguir con la tradición priísta, el gobierno de Vicente Fox signa un acuerdo que deja intacta esa política de criminalización para profundizar en su colaboracionismo. Vale la pena preguntarse el papel que puede jugar este tipo de política para, en un futuro, lograr abrir las fronteras al libre tránsito de los trabajadores. Una promesa más incumplida.

## ESPIONAJE

11/07/01

La semana pasada, la Procuraduría General de la República descubrió una red de espionaje privado con sede en el Estado de México. Con equipos rudimentarios, algunas decenas de personas se habrían estado dedicando a intervenir teléfonos de funcionarios y de políticos de diversas filiaciones. Más allá de las reacciones iniciales de los diversos actores políticos y de las responsabilidades que más adelante se puedan fincar a los autores intelectuales y materiales de estas actividades, lo cierto es que el descubrimiento de esta red de espionaje es un signo más del debilitamiento de las instituciones en estos tiempos de la alternancia que se resisten a convertirse en tiempos de transición.

Cualquiera que sea la forma en que el Estado se organice, el espionaje ha sido siempre uno de los instrumentos que el poder establecido utiliza para su propia salvaguarda. La legitimidad del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, ha generalizado también la aceptación del derecho de éste a espiar las actividades de las personas y de las organizaciones que son, o pudieran convertirse en una amenaza para la seguridad nacional. De ahí que a esa actividad se le haya llamado también "de inteligencia", tér-



mino que convoca tanto a la razón de Estado en que dichas actividades se basan como a la claridad y la racionalidad que, supuestamente, la misma arrojaría sobre los oscuros intereses que atentan contra la estabilidad social y la seguridad nacional.

Sabido es, sin embargo, que los llamados servicios de inteligencia al servicio del Estado, muy pronto se convierten en un poder en sí mismos. La multiplicación de ojos y de oídos que transgreden el ámbito de lo privado, transforman, a quien detenta esa información, en un poder fáctico. Al respecto, es paradigmático el caso de Joseph Fouché, organizador de la policía francesa, quien pudo sobrevivir a los cambios de régimen desde la Convención Nacional después de la revuelta de la Comuna, pasando por el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte y el regreso de la monarquía, gracias al poder que le otorgaba la información levantada por una amplísima red de espías. Sabido es también que existe una correlación directa entre la amplitud de los servicios de inteligencia y el carácter autoritario de los Estados, ahí están los casos de los gobiernos de Stalin, Hitler, y de todos los regímenes militares.

La discutible legitimidad del espionaje, así sea un derecho del Estado, se pone en evidencia en la sistemática violación a las garantías individuales, como el derecho a la privacidad. Para salvaguardar esas garantías, a partir de una reforma de la década pasada, en México es necesario que la autoridad posea la autorización de un juez para la intervención de líneas telefónicas. Sin embargo, la aprobación de esa reforma coincide con la proliferación de casos de espionaje junto con la cada vez menor credibilidad al respeto a la ley en la materia.

Dos factores parecieran estar incidiendo en esta generalización del espionaje: el desarrollo tecnológico que masifica la producción de instrumentos para realizarlo y la pérdida del control institucional sobre estas actividades, que va de la mano con la caída del régimen priísta. Así, tanto el desarrollo tecnológico como la alternancia en el poder, estarían generalizando el desarrollo de una actividad an-

tes reservada al Estado. Pero como esta “democratización” en realidad es una perversión de los espacios que la sociedad tendría que reclamar para sí frente al Estado, quienes terminan ganando con ella son los pequeños grupos de poder.

Pasar del espionaje como actividad reservada al Estado, al espionaje como actividad privada no democratiza el ejercicio del poder público. Conciliar el interés general de la sociedad con el derecho individual a la privacidad pasa por una auténtica reforma democrática del Estado, en la cual, efectivamente el espionaje se ejerza mediante permiso de la autoridad judicial y en medio de una investigación que lo amerite. Pero la reforma más importante sería otorgar poder de decisión a la sociedad, que es la mejor garantía para que el interés general coincida con el interés privado, y para que el espionaje como instrumento de control empiece a formar parte del pasado.

#### POR LA SENDA DE LA DESIGUALDAD

18/07/01

El pasado 10 de julio, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), dio a conocer los resultados de su Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del 2000. De acuerdo a esos datos México sigue profundizando la desigualdad entre pobre y ricos. Si comparamos esos resultados con los correspondientes a la ENIGH de 1984, tenemos que en ese año, el 10% de los hogares más ricos se apropiaba del 32.7% del ingreso global, y el 60% de los hogares más pobres percibía el 28.6%; para el año 2000 estos porcentajes fueron de 38.7% y de 25.1% respectivamente.

Así, durante los últimos dieciseis años, el 10% de las familias que se encuentran en la cúspide de la pirámide han aumentado en

6 puntos porcentuales su participación en el ingreso global, mientras que el 60% de los hogares más pobres han disminuido esa participación en 3.5 puntos porcentuales. Si en 1984 la distancia entre la cúspide de la pirámide de ingresos y la base era de diecinueve veces, para el 2000 esta aumentó a veinticinco.

Que en México haya muchos pobres y pocos ricos y que la brecha entre unos y otros se vaya ampliando no es obra del Espíritu Santo, sino del constante esfuerzo de los gobernantes. Ese esfuerzo constante viene de muy atrás pero se profundizó a partir de 1982, cuando se decidió que el país saldría de la crisis sólo si los ricos tenían condiciones para recuperar sus ganancias, las que empezaron a caer en la década de los setenta, no por el crecimiento salarial, sino por la escasa productividad originada en la baja tasa de inversión privada.

Esa decisión que eufemísticamente el gobierno bautizó como política de cambio estructural, significó acelerar la caída del salario real que se había iniciado en 1977; disminuir el gasto social; rematar el patrimonio nacional con la venta de empresas estatales; dejar que los dueños del capital financiero determinaran el precio del dinero; eliminar subsidios a los productores del campo; eliminar controles de precios y cualquier regulación en el mercado; abrir las puertas a la inversión extranjera; y como todo esto lograba aumentar ganancias pero también la inflación, entonces se decidió hacer de la economía mexicana la más abierta del mundo para después negociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Con estas medidas las ganancias para el capital privado efectivamente se recuperaron; pero como en el camino de esa recuperación el mercado interno se redujo drásticamente por el empobrecimiento generalizado de la población y la concentración aguda del ingreso, el sector que más se benefició de esa recuperación fue el financiero, mientras que las ganancias industriales fueron para el capital extranjero, en tanto la inversión privada nacional se engolosinó con la desregulación del sector financiero y la

reprivatización bancaria que les produjo pingües ganancias, incluida la deuda del Fobaproa convertida en pública. Una vez que socializaron las pérdidas bancarias y privatizaron las ganancias; ahora ese sector se ha abierto también al capital extranjero, quien viene no a masificar y abaratar créditos, sino a aprovechar los privilegios de los que ha gozado ese sector en nuestro país.

Ahora México no es sólo un país más injusto, sino también más incapaz de recuperar la senda del desarrollo económico. Con tantos pobres y tan pocos ricos, no hay mercado interno que sirva de base a las economías a escala para las empresas. Con tantos privilegios a los bancos –ahora extranjeros– tampoco hay créditos accesibles para la inversión que genere empleos. Con tanta apertura, es difícil revertir el camino de la desindustrialización. Sin apoyos para un sector agropecuario que compite con productores de otros países plenos de subsidios, la dependencia alimentaria aumenta, también la pobreza y la migración.

Ciertamente en el camino de la aplicación del llamado neoliberalismo las ganancias se recuperaron, pero el país se extravió. Desandar ese camino para reencontrar el crecimiento con equidad, es una decisión urgente...pero en esta república de los empresarios, una decisión muy lejana.

## EL CAMPO, VOCES DE ALARMA

25/07/01

A pesar de la creciente urbanización del país, del campo siguen llegando las voces de alarma sobre los riesgos de estallidos sociales por las consecuencias devastadoras de las políticas económicas de los gobiernos priistas y panistas. El levantamiento del EZLN se dio dos años después de la aprobación de la contrarreforma al artículo

27 constitucional que legalizó la privatización del ejido y dio por concluido el reparto agrario, y coincidió con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) que abrió a la competencia internacional la producción agropecuaria. Hoy, la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas coincide con la extensión de las protestas de los productores del campo por la destrucción de sus mercados. Pero los tecnócratas de antes y los empresarios de ahora convertidos en gobernantes, no se inmutan frente a los alzamientos armados y las protestas sociales, suponen que todo es un conflicto entre privados, tratan de comerse una torta frente a los reclamantes, les piden no olvidar la filosofía de “ganar, ganar”, dejar atrás esquemas del pasado y convertirse en exitosos empresarios.

Pero es evidente que la estrategia para resolver los problemas del campo y de la economía nacional, poco tiene que ver con la aplicada para aumentar las ventas de Coca Cola. Y sin embargo, ese es el tratamiento que se le da. Para su tranquilidad, los panistas ya no tienen que preocuparse por aprobar reformas constitucionales y legales que permitan gobernar al país como si fuera una empresa, a partir de 1982 los gobiernos priístas empezaron a ponerles la mesa para que así fuera; para cerrar el ciclo de esas reformas estructurales sólo faltan los sectores laboral y energético, pero en el resto, la tarea de privatización y desregulación está completa. La del desastre también.

Como no se necesita aprender historia para tener un título de economista en las universidades extranjeras, tampoco para vender Coca Cola, tanto los tecnócratas priístas –en su momento– como ahora los gobernantes panistas, ignoran que si algo explica el largo período de crecimiento sin inflación (1952-1976) y la estabilidad política en México, fue la reforma agraria que incluyó el reparto y las políticas de fomento a la producción agropecuaria. Mientras en el resto de los países en América Latina se vivían las crisis económicas recurrentes y los golpes de Estado, México pudo sobrellevar

su dictadura perfecta que incluía las políticas de bienestar social, gracias al desarrollo del sector agropecuario. Divisas para la importación de la maquinaria industrial; oferta oportuna de mano de obra; bajos salarios; abundancia de bienes básicos y mercado para los productos industriales fueron las funciones que puntualmente cumplió el sector agropecuario y la llave del éxito de ese crecimiento sin inflación. Una experiencia inédita en América Latina agotada en la década de los setentas.

Esa exitosa política no fue concesión graciosa de ningún gobernante, sino producto de la Revolución Mexicana de 1910. Y como no se aprende de la historia, pareciera que los gobernantes en México quieren reabrir el ciclo de los cambios por la vía de los estallidos sociales. Piensan que la gran lección democrática que dio el pueblo de México el pasado 2 de julio al derrotar al PRI por la vía pacífica, es un cheque en blanco para que el nuevo gobierno siga con la política económica en beneficio de unos cuantos. El puerto seguro que la señora Fox anuncia, no se ve por ningún lado. La alternancia pacífica en el poder, no garantiza que el cambio social se de también por esa vía.

Con la mayor insensibilidad se sigue jugando con fuego. A estas alturas es evidente que es necesario reabrir la negociación del TLCAN en donde las consecuencias de la apertura aporten evidencia del daño provocado a la economía nacional. El mismo TLCAN así lo prevé. No fue un capricho de la oposición política y de las organizaciones no oficiales de los productores agropecuarios, exigir, durante la apresurada negociación del TLCAN, dejar fuera a los productos que no estuvieran en condiciones de competir con los subsidios y la mejor tecnología de EUA y Canadá. La gradualidad en la apertura que se negoció para el sector, finalmente fue una burla. Los sobrecupos de importación sin aranceles para los granos y la creciente importación de la fructuosa que destruye el mercado nacional del azúcar así lo demuestra. No son Coca Colas lo que se deja de vender, es la vida de millones de familias campesinas la que se

tira a la basura. ¿Se puede seguir con esta política sin afrontar los costos políticos?

## DOS CULPABLES

01/08/01

El pasado lunes, el Banco de México dio a conocer su segundo Informe Trimestral sobre la Inflación del año en curso. En este documento el organismo proyecta un crecimiento de menos (no dice de cuánto menos) del 2% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que mantiene en 6.5% la meta de inflación al cierre del año. En otras palabras, en relación al crecimiento del año 2000 (6.9%), el Banco Central estima una caída de más del 71% y respecto a la meta definida en el documento de Criterios de Política Económica enviado al Congreso por el Ejecutivo, la caída es de más del 56%. El costo social de este ajuste a la baja ya lo están sufriendo los trabajadores para quienes ha habido una pérdida de 430 mil puestos de trabajo, de noviembre del 2000 a junio del 2001.

Para el Banco de México hay dos culpables de esta situación. Uno externo: la desaceleración de la economía de Estados Unidos, y otro interno: las "revisiones de los salarios incongruentes con el objetivo de la inflación y con la productividad esperada". Contra el culpable externo nada se puede hacer, pero contra el supuesto responsable interno la receta que se aplicará es la de siempre: de un aumento salarial promedio de 10.7% a mayo del presente año, se proyecta una disminución a 8.6% al mes de agosto. De manera que la ligera recuperación salarial de los primeros meses del año será efímera, las revisiones contractuales del segundo semestre serán a la baja.

Mientras la caída de la actividad económica en Estados Unidos hará crecer la tentación para el gobierno de Bush de alentar algún conflicto en algún lugar del planeta para repetir la historia de la recuperación vía el crecimiento de la industria de armamentos, el gobierno de México que no goza de tal hegemonía intensifica su guerra económica en contra de los más vulnerables: los asalariados.

El problema es que esta guerra empezó desde 1977, y golpear de manera sistemática los niveles de vida de la población a lo largo de un cuarto de siglo es jugar con fuego.

Frente a esta guerra abierta, los asalariados han desarrollado una lucha de resistencia que abarca diversas formas para lograr la sobrevivencia. Una de ellas es aumentar la jornada de trabajo familiar; así lo consignan los resultados de las diversas Encuestas de Ingreso y Gasto de los Hogares del INEGI que informan del aumento de miembros de la familia en actividades remunerativas. Que más miembros de la familia trabajen para mantener iguales o menores niveles de vida implica el gran sacrificio de eliminar la educación superior de su horizonte de vida. Hoy apenas el 14 % de los jóvenes acceden a las universidades. Después, los funcionarios del Banco Mundial y sus hijos los del Banco Central, vendrán a sermonearlos diciéndoles que son pobres porque no estudian.

Otra lucha de resistencia contra la caída salarial y del empleo es la migración, cuya tasa ha aumentado al doble precisamente a partir de la década de los setentas. El costo de la misma lo sabemos: cientos de muertos (más que en la guerra del Golfo Pérsico) a partir de 1994 cuando Estados Unidos decidió sellar su frontera sur. Para sobrevivir las familias también optan por la economía informal (56 % de la Población Economicamente Activa) caracterizada por la precariedad. Una estrategia más es la delincuencia y dentro de ella el crimen organizado como el narcotráfico y los secuestros.

Pero como todas estas formas de resistencia las observan los gobernantes desde los cristales de sus lujosas oficinas o desde sus



Mercedes Benz, imaginan que pueden reproducirse hasta el infinito mientras ellos (antes del PRI ahora del PAN) siguen ensayando su estrategia de dar una vuelta de tuerca más a los ya paupérrimos niveles de vida.

Antes de que la capacidad imaginativa de la resistencia familiar se agote, sería conveniente, si en algo se aprecia la gobernabilidad además de la popularidad, inducir a los dueños del capital a bajar sus exigencias a la hora de obtener ganancias; a lograr competitividad vía las mejoras tecnológicas y no mediante la disminución de los costos unitarios del trabajo. La perversión de aumentar productividad y competitividad vía el abatimiento salarial la hemos vivido por más de dos décadas y los resultados desastrosos están a la vista. La reforma fiscal es una excelente oportunidad para empezar a cambiar los términos de la relación entre los que mucho han acumulado y los que nada tienen. Pero por lo que se ve, será otra oportunidad perdida.

## EL PACTO SILENCIOSO

08/08/01

Mientras en las orillas del sistema el PRD promueve un gran pacto político, o por lo menos un acuerdo nacional, o ya de perdida acuerdos por temas –según declaraciones de su dirigencia nacional–, el gobierno va tejiendo los entendimientos con los actores políticos que después de la derrota del régimen priísta siguen detentando algún poder, esto es con los gobernadores. La negociación con los partidos y por lo tanto en el espacio del Congreso de la Unión, en torno al tema más importante y urgente para el Ejecutivo, la reforma fiscal, se está postergando hasta lograr los acuerdos básicos en el territorio de los gobernadores.

El triunfo del candidato priísta en Tabasco el pasado domingo abona esa estrategia y a la vez es resultado de la misma. No sabemos cuánto haya influido el soterrado interés foxista en el triunfo del candidato de Roberto Madrazo en la entidad, lo cierto es que esa elección será definitiva para destrabar el *impasse* en el que se encuentra el proyecto de reforma fiscal de Vicente Fox, también, aunque la presidenta nacional del PRI lo niegue, para el futuro de ese partido.

La construcción de un nuevo régimen democrático supone la gobernabilidad, pero no al revés. El acuerdo que el gobierno teje con los restos del régimen priísta no es para que la *alternancia* se convierta en transición a la democracia, sino apenas para la supervivencia, para la gobernabilidad. En el centro de este proyecto de corto alcance se encuentra resolver la crisis de las finanzas públicas, que desde el punto de vista del gobierno significa captar más recursos para continuar pagando la onerosa deuda del rescate bancario, heredada por el gobierno priísta y aceptada sin reparo alguno por el gobierno foxista. No podía ser de otra manera. La verdadera reforma fiscal que consistiría en hacer pagar a los causantes del quebranto bancario lo que hoy se está pagando con las contribuciones de la ciudadanía, ni siquiera entra en la discusión.

Así la amplia legitimidad del Ejecutivo Federal obtenida por el respaldo electoral se derrocha en apuntalar el *proyecto económico* excluyente heredado del régimen priísta y los costos de este derroche son muy elevados. Por ejemplo la impunidad que el Secretario de Gobernación y el de la Contraloría fueron a garantizar a los priístas en la sede nacional de ese partido (*El Universal*, primera plana, 25 de julio del 2001), fue un espectáculo bastante bochornoso para el Estado de Derecho.

Escoger la sede nacional del PRI para presentar el programa del gobierno federal para la Transparencia y el Combate a la Corrupción y ahí garantizar que no habrá comisión de la verdad y que en cambio "cualquier conducta que presuponga una irregularidad o

un delito registrado en el pasado se tratará por la vía jurídica de las instituciones" raya en el cinismo. Lo importante de esa reunión, lo dijo el mismo Srio. de Gobernación, es que con ella se inaugura "una nueva modalidad de diálogo y una nueva época entre el gobierno y el PRI."

Pero ese derroche de legitimidad que se ha querido suplantar con una estrategia para mantener la popularidad, empieza a hacer estragos en los resultados electorales en donde el efecto Fox brilla por su ausencia. Así lo evidencia el alto abstencionsismo en los comicios locales del año en curso, y en los celebrados el pasado domingo, la notable recuperación priísta. De esta manera se va perfilando la alternancia como el simple trueque de actores en el escenario político, pero con los mismos papeles. Antes el PAN como oposición leal, hoy el PRI. Para los sectores del PRD que quisieran que su partido cumpliera con esa función, es bueno alertarlos: ya no hay vacantes.

#### ACUERDO MIGRATORIO: SIN PRISA

15/08/01

El pasado jueves, Jorge Castañeda y Santiago Creel se reunieron con el Secretario de Estado Colin Powell en Washington para continuar discutiendo las modalidades y los tiempos de un posible acuerdo migratorio entre ambos países. Al final dieron una conferencia de prensa en la que Powell declaró: "No tenemos prisa, lo tenemos que hacer correctamente". Por su parte Castañeda señaló que "Estamos logrando avances importantes" y que la meta es "alcanzar un buen acuerdo en el tiempo que sea necesario, tomando en cuenta las necesidades de la economía en Estados Unidos y los derechos

que necesitan los mexicanos" (*El Universal*, viernes 10 de agosto del 2001).

Si de los derechos de los mexicanos se tratara, es evidente la urgencia de llegar a un acuerdo migratorio; así lo reclama diariamente la violación sistemática al derecho más elemental de todo ser humano: la vida. Más de mil muertos en la frontera norte por la política de criminalización de los indocumentados que el gobierno de Estados Unidos ha aplicado de manera unilateral desde 1994 (Operación Guardián), tendrían que ser suficientes para que los representantes de ambos gobiernos llegaran a un acuerdo de manera urgente. ¿Se requiere más razón que esa?

Sin embargo pareciera que para los gobiernos de los dos países, esa no es una razón suficiente, de manera que para la reunión que celebrarán los presidentes Fox y Bush, el próximo mes de septiembre, aún se estará discutiendo sobre el tema. Ciertamente el asunto no es sencillo, y ya el hecho de que el gobierno de EUA reconozca la necesidad de llegar a ese acuerdo, significa un gran avance. Pero por lo pronto, el anuncio de que "no hay prisa" en la materia, significa un grave tropiezo para la diplomacia mexicana. Más aún cuando desde la campaña de Vicente Fox, se crearon grandes expectativas de solución para este tema que involucra la suerte de millones de trabajadores mexicanos.

Como un rasgo de buena voluntad hacia el gobierno mexicano, y en la perspectiva de llegar a un acuerdo bilateral, el gobierno de EUA tendría que suspender la macabra Operación Guardián. En realidad para que cualquier acuerdo significara un vuelco en la política migratoria de EUA, esa suspensión tendría que convertirse en condición para continuar con las negociaciones en la materia. De otra manera, cualquier acuerdo que se logre entre ambos países, podría ser un simple parche a esa política criminal. ¿De qué otra manera podría calificarse el eventual acuerdo al que se llegará sin prisa alguna? Esto es, en el largo plazo keynesiano en el que todos estaremos muertos.

En la misma conferencia de prensa Powell anunció lo que llamó un “compromiso compartido” para aplicar una política migratoria “humana y amistosa”. El problema es que en la frontera norte no hay evidencia de ese compromiso, tampoco de ese tipo de política. De lo que sí existe evidencia hasta ahora, de parte del gobierno mexicano, es del contraste entre la fuerza con la que el tema se metió a la agenda de discusión bilateral y la debilidad con la que ahora se aceptan las limitaciones con las que se está tratando. Porque no sólo es cuestión del tiempo que se alarga para llegar a ese acuerdo, sino también del tipo de acuerdo. Hay una enorme distancia entre aquella demanda de abrir las fronteras a los trabajadores migratorios, y el tipo de acuerdo que hoy se está negociando: por un lado la ampliación de visas temporales para trabajadores huéspedes y por otro la legalización de una cierta cantidad de indocumentados que residen en el vecino país del norte. De llegar a pactarse de esa manera ¿qué sucedería con los indocumentados que seguirán llegando a aquel país, que según datos de Conapo son 300 mil en promedio anual?

En esta materia, como en la mayoría de las que se pactaron en el TLCAN es necesario retomar la negociación de raíz. A estas alturas, frente a la magnitud del fenómeno migratorio, ¿para qué ha servido el Acuerdo Paralelo en Materia Laboral? ¿No es tiempo de que se inicie la discusión para incorporar el tema al cuerpo mismo del Tratado?

### ¿PACTO ENTRE PARTIDOS?

22/08/01

Durante las últimas semanas, el gobierno y las fuerzas políticas representadas en el Congreso han estado planteando la necesidad de

un pacto entre ellos. Hasta hace pocos años era defendible la tesis de que la transición a la democracia en este país, esto es la reforma democrática del Estado que abra las puertas a la participación de la sociedad en la toma de las decisiones fundamentales, requería de un pacto entre las fuerzas políticas. Un acuerdo transparente, con la participación de las fuerzas sociales y de cara al país podía prefigurarse entonces como la mejor expresión política del México de fin de milenio para transferir hacia los otros poderes y hacia la sociedad, el poder que de manera casi monopólica y discrecional ha usado el Ejecutivo.

La expresión civilizada la dio la ciudadanía sacando al PRI de Los Pinos con la fuerza de su voto. Sin embargo, para que la democracia en México no se redujera a los procesos electorales y abarcara otros ámbitos de la vida pública esenciales, como el cambio de política económica; era casi obligado suponer una mesa de diálogo entre las principales fuerzas políticas representativas del país en donde se discutiera la agenda nacional, y de la cual surgieran los acuerdos fundamentales para construir ese México democrático, moderno, incluyente, plural.

Antes del 2000 y después de 1988 los tiempos daban para eso, para suponer que la razón se montara en la fuerza política y así obligar al Estado a llegar a ese gran acuerdo nacional. Pero ese período ya pasó. Era la etapa en la que el PRD era representativo de las fuerzas progresistas y de izquierda del país, la etapa en la que su demanda por el respeto al voto aglutinaba a la mayoría de la sociedad. Pero el PRD ya no tiene esa representatividad, y la ciudadanía logró lo que buscaba: que se la tomara en cuenta a la hora de elegir gobernantes. Para eso alcanzó la fuerza social y política construida a lo largo del siglo XX. Fue un largo y afanoso proceso, y la lucha que dio el PRD, crucial.

Hoy pensar que es necesario un pacto entre los partidos, para continuar empujando la rejega transición, es tanto como suponer que lo que se necesita es un acuerdo que mire hacia atrás, que con-

serve las exiguas fuerzas de los partidos que emergieron de la revolución mexicana de 1910 y que fortalezca al partido de la ideología empresarial que ganó la elección presidencial el año pasado. Por eso es tan penoso ver a la dirigencia del PRD clamar, suplicar por ese pacto.

Si ese pacto se lograra, el resultado sería el engendro que acabo de describir. La razón es muy sencilla: en un pacto nadie regala nada, del pacto se obtiene lo que al pacto se lleva, si a esa negociación se llega con la fuerza necesaria para arrancar lo que se visualiza como el interés general de la sociedad, será eso lo que se obtenga. Pero si por el contrario, a la negociación se llega con descrédito moral y con debilidad política, como es el caso actualmente del PRD, a lo sumo el resultado será algún beneficio para la institución partidaria y sus funcionarios políticos, y para el país el retroceso de haber apuntalado a los restos del viejo régimen y a las fuerzas de derecha.

Frente a esa situación yo me pregunto: ¿sería muy difícil que la izquierda organizada en el PRD hiciera un alto en el camino, dejara de lado sus lamentos porque nadie hace caso de sus exigencias para lograr un pacto político y con la poca fuerza que aún le queda se volcara hacia los movimientos sociales, dejando de lado los cálculos electorales, también los cálculos sobre prerrogativas? Para ello tendría que valorar que lo más importante para llevar la alternancia a buen puerto es la organización de la gente por la vía legal y pacífica desde abajo. Mientras tanto el *glamour* de un pacto entre las fuerzas políticas puede esperar tiempos mejores.

## ¡NO HAY QUE APANICARSE!

29/08/01

Para los menores de treinta años en México, quizá la palabra crisis ya no les diga nada porque el país ha vivido crisis recurrentes desde 1976, para ser precisos cinco desde entonces. Cada una por razones distintas, pero al fin, crisis. Por eso a Ernesto Zedillo le dio por presumir que a la entrega de su mandato ya no se repetiría ese fenómeno. Otra mentira más porque la economía empezó a caer desde noviembre del año pasado y esa caída aún no se detiene. Y frente a esa caída, nuestro flamante Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz nos dice que la situación es crítica aunque no sabe si se trata de una recesión, para remediar su ignorancia nos promete concluir una metodología adecuada para hacer esa valoración. Por su parte Eduardo Sojo nos dice que el futuro es promisorio y el Presidente Fox que sólo los timoratos se apanican, y que no está nada mal crecer a menos del uno por ciento.

El verbo apanicar no existe, pero no importa, lo que el Presidente Fox no quiere es que nos asustemos como las ninfas del bosque que se paralizaban de sólo escuchar la flauta del dios sátiro Pan, mitad hombre mitad cabrío. Y no, la verdad es que no es la crisis la que nos hace entrar en pánico, pero sí las declaraciones del Presidente Fox y de sus funcionarios cuando la economía ya está en franca recesión –tres trimestres al menos de disminución en el crecimiento del PIB– y el gobierno no lo reconoce y en consecuencia tampoco lo enfrenta.

Porque declaraciones van y declaraciones vienen pero lo cierto es que de nuevo nos encontramos en una crisis sexenal. No igual a la de 1995, no por las mismas causas pero al fin crisis, esto es disminución drástica del crecimiento: de 6.9% a menos de 1%, también aumento en el déficit de empleos, además de los 400 mil puestos de



trabajo destruidos a lo largo del año, habría que sumar los que no se han creado para los jóvenes que por primera vez entran al mercado de trabajo, esto es un millón doscientos mil.

Como esta crisis nos llegó porque más del ochenta por ciento de nuestras relaciones con el exterior son con la economía en recesión de nuestros vecinos del norte, y no por turbulencias financieras como en 1982, 1987 y 1995, la novedad de la crisis del 2001 es la combinación de recesión con estabilidad de precios y del tipo de cambio. Se trata pues de una situación en la que se pone a prueba la capacidad de la economía nacional para resistir los embates del exterior, en un contexto en que la globalización es la norma.

Y si las crisis recurrentes se han instalado como la manera de ser de la economía, habría que atacar sus más profundas raíces y simultáneamente aplicar los instrumentos de la política económica que combatan la recesión, que hagan salir al país de la fase de estancamiento en que se encuentra. Pero en lugar de eso se continúa, como en los gobiernos priistas, poniendo por delante siempre la lógica del equilibrio fiscal, como dijo Gil Díaz. Por eso al gobierno le parece necesario no ejercer, contra lo aprobado por el Congreso, 70 mil millones de pesos, y por eso su prioridad sigue siendo la aprobación de la iniciativa de reforma fiscal que trata de gravar lo que en un país con los enormes rezagos sociales de México, es un crimen, esto es los alimentos. Eso sí el Fobaproa no se toca porque, como dijo el mismo Secretario, eso es cosa del pasado.

Pero a Gil Díaz la crisis y la aplicación del IVA a alimentos lo tienen sin cuidado. La semana pasada trató de contagiarnos su tranquilidad y declaró que con esa medida la gente no va a dejar de comer, lo único que sucederá es que cambiará las categorías o calidades de los artículos que compra para comer. Seguramente para aminorar el impacto del IVA Gil Díaz, como el resto de los mortales no dejará de comer, simplemente optará entre caviar o langosta. Y si el país es el que los funcionarios tienen en la cabeza, ese de ingre-

sos personales de 200 mil pesos mensuales, entonces, como dijo el Presidente Fox: "¡No hay que apanicarse!

## EL INFORME Y LA TRANSICIÓN

5/09/01

El pasado primero de septiembre presenciamos una ceremonia cuya esencia se ubicó en el lenguaje gestual entre los poderes y no en la reseña de acciones narrada por el Ejecutivo. Con ello pudimos atisbar la división entre los poderes, pero como ese fortalecimiento de las instituciones republicanas fue apenas un esbozo, el futuro del país continúa siendo incierto.

Si el presidencialismo del pasado constituyó un obstáculo al desarrollo democrático del país, en el Informe vimos un Ejecutivo débil pero también una transición que se evapora. El Informe de Vicente Fox fue la evidencia del gran derroche político de un presidente cuya legitimidad le viene sin duda del voto ciudadano, una legitimidad que ha estado despreciando en pos del mantenimiento de su popularidad, de la búsqueda de esa aceptación veleidosa que abona los resultados de las encuestas, pero que no puede sustentar proyectos de largo plazo.

Escuchar a un Presidente que de manera cansina narra una serie de acciones que no se ven, mientras que el país demanda definiciones políticas claras es la muestra palpable de ese derroche. En términos administrativos sólo podía informar de lo poco que se ha hecho, y en ese poco es justo reconocer el tratamiento apegado a derecho a las huelgas estalladas en el presente año. Mientras que el posible crecimiento salarial, la estabilidad del peso y la baja inflación, es mejor no celebrarlos demasiado cuando sigue la vulnerabilidad de un peso sobrevaluado y el gran costo social del desempleo.

Las definiciones políticas que desde el Ejecutivo podrían transformar la alternancia en transición democrática se encuentran en el campo de la autonomía indígena, de la reforma fiscal y del rescate bancario. En relación a la primera el Ejecutivo podría enviar de nuevo la iniciativa de la Cocopa, para documentar con hechos su compromiso con los pueblos indios; respecto a la reforma fiscal, el Presidente Fox puede hacer las modificaciones pertinentes a su iniciativa para conciliar fortalecimiento de las finanzas públicas con equidad social; y en relación al oscuro rescate bancario, en lugar de considerarlo cosa del pasado como ha declarado Gil Díaz, el Ejecutivo puede llevar adelante las investigaciones conducentes a castigar a los responsables de las irregularidades e ilegalidades, con mayor razón ahora que se pueden sumar las cometidas por los dueños de los ingenios expropiados.

Dejar atrás el presidencialismo significa fortalecer la institución presidencial a través de decisiones respetuosas de los otros poderes y del precepto constitucional de que el poder dimana del pueblo. Ninguna decisión de Estado apareció en un Informe de rutina frente al estado excepcional del país.

Por su parte, si el discurso de la presidenta de la Cámara de Diputados esboza la necesaria independencia de un Poder Legislativo que funcionó como ventanilla de trámites para las iniciativas del Ejecutivo, la talentosa pieza oratoria queda sólo como un gesto, pues a ese Poder también es necesario reclamarle la acreditación en hechos de su voluntad democrática. Si recordamos la confusión del Congreso de la Unión entre política asistencial y política de Estado a la hora de legislar sobre la autonomía de los pueblos indígenas, el balance por esos rumbos es tan deficitario como el del Ejecutivo.

Falta todavía la aprobación que se de sobre reforma fiscal en la que podríamos presenciar el bochornoso espectáculo del cambalache por espacios políticos para el ex partido oficial. Para que el discurso de Paredes no quede en palabras, y realmente se fortalezca el Legislativo en bien de la República, el PRI tiene la palabra. Con el

estreno panista como partido oficial suscrito por Calderón Hinojosa esa palabra ya está dada, mientras que, por desgracia, el PRD no tiene la fuerza necesaria para incidir en esa decisión.

Por su parte, el Poder Judicial ha dado muestras de independencia en los últimos años, pero falta aún mucho trecho por recorrer para que se consolide como tal. Por lo pronto distinguir la presencia de los ministros (y no sólo del Presidente de la Suprema Corte) en el estrado al mismo nivel que los otros poderes, es un gesto saludable para la construcción de un auténtico régimen republicano. Pero como el discurso de Beatriz Paredes, apenas un gesto.

## ANTEPONER LA RAZÓN A LA BARBARIE

11/09/01

A la hora de escribir estas líneas ninguna organización ha asumido la autoría de los atentados en Estados Unidos. Sin embargo, lo que es evidente es la capacidad del nuevo terrorismo internacional para hacer temblar a la nación más poderosa del planeta y junto con ello al mundo en su conjunto. La naturaleza de los objetivos, la precisión con que se alcanzaron, la acción en vivo frente a las cámaras de televisión y la cantidad de elementos involucrados hacen suponer un poderío nunca desplegado por ninguna organización extremista. Después del fin de la guerra fría, la fantasía estadounidense sobre la amenaza de cualquier signo contra la seguridad de su país y la del mundo queda absolutamente rebasada. Hoy la realidad superó cualquier fantasía.

No basta la condena unánime contra la locura suicida que se desplegó a los ojos del mundo. Esta nueva forma de terrorismo reclama de parte de todas las naciones y de Estados Unidos en particular hacer acopio de inteligencia y sensatez. Responder a este tipo

de acciones con terrorismo de Estado en naciones donde supuestamente podrían localizarse las organizaciones responsables de los atentados, sería tanto como entrar en una escalada de violencia mundial de consecuencias difícilmente controlables.

Si el Siglo XX pudo cerrar el capítulo de la guerra fría y con ello poner fin a la división del mundo por las fronteras ideológicas, hoy se hace urgente recrear un nuevo orden mundial que ponga en el centro el respeto a la pluralidad y la tolerancia frente al otro, en donde no haya espacio para el odio y la irracionalidad. Ello requiere de la conciencia de parte de quienes detentan el poder económico y militar en el mundo de las consecuencias de sus acciones, cuando las acciones del nuevo terrorismo internacional hacen a todo el mundo vulnerable.

Cada conflicto regional signado por las intolerancias étnicas y religiosas ha sido el espacio para la barbarie que amenaza la paz mundial, amenaza que hasta ahora, aunque de manera precaria ha podido ser neutralizada por la acción de las instituciones internacionales surgidas de la segunda guerra mundial. Pero siempre con un gran desgaste. La ausencia de la ONU en el conflicto en Medio Oriente durante las últimas semanas hace dramático ese desgaste y debilidad, mientras Israel se ha convertido en el espacio en donde cotidianamente se ensaya el fin de la esperanza para la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes y en donde se pone en riesgo la paz mundial.

La única manera de combatir las acciones del nuevo terrorismo internacional que ya hizo acto de presencia es mediante la construcción de un nuevo orden internacional que ponga en el centro la lucha a fondo contra el armamentismo, a la globalización como instrumento de desarrollo y no como medio de subordinación para los más pobres; en el orden social la lucha a fondo contra la pobreza, y en el orden político y cultural el respeto y la tolerancia.

La posibilidad de la convivencia pacífica en el mundo y la erradicación de la barbarie requiere de parte de todas las naciones, el

esfuerzo concertado para la construcción de una nueva institucionalidad internacional que haga posible la convivencia pacífica entre los pueblos. Mientras la globalización económica se convierte en una realidad en todos los rincones del mundo y mientras esa globalización y hegemonía la viven los pueblos de los países pobres como una guerra de aniquilamiento y de exclusión, siempre habrá espacio para el terrorismo y hoy vimos de lo que es capaz esa barbarie. A la locura de la destrucción es necesario poner por delante la fuerza de la razón, que no puede ser otra que hacer realidad la utopía de que el mundo puede ser la casa para todos.

### TRIUNFO OBRERO

19/09/01

Después de 18 días de huelga, la empresa y el sindicato de Volkswagen pactaron un acuerdo de aumento salarial de 14.7%. Sin duda la solidaridad de los sindicatos agrupados en la Unión Nacional de Tabajadores con los trabajadores de la empresa alemana radicada en Puebla fue decisiva para que la empresa cediera en su ofrecimiento inicial, y fue decisiva también la combatividad de los trabajadores que obligaron a que las negociaciones se realizaran en estricta y permanente consulta con las bases de parte de los dirigentes sindicales, hecho que provocó que la empresa suspendiera las pláticas en varias ocasiones a lo largo del conflicto.

Una vez más, durante el gobierno de Vicente Fox, las autoridades de la Secretaría del Trabajo se *condujeron con cautela*, a pesar de las presiones para declarar al movimiento ilegal y a pesar de la campaña de las autoridades financieras y monetarias para disminuir los aumentos salariales bajo el argumento de los posibles presiones inflacionarias. Esta política de respeto al derecho de huelga con-

trasta ampliamente con la postura proempresarial de los gobiernos priistas, quienes mediante las figuras de la requisa (para el caso del sector de comunicaciones), de la ilegalidad y la inexistencia, hicieron nugatorio ese derecho, y con ello dejaron en el desamparo a los trabajadores.

Por su parte las manifestaciones de solidaridad de la UNT se dieron no solamente en la Cd. de México, sino que las movilizaciones de apoyo de los integrantes de la central se extendieron a Colima, Culiacán, Guanajuato, Jalisco, Sonora y Veracruz. Precisamente el día que se firmó el acuerdo entre sindicato y empresa, estaban programados bloqueos a diversos aeropuertos internacionales del país. Telefonistas, pilotos aviadores, sobrecargos, tranviarios, electricistas, trabajadores de la industria nuclear, del Seguro Social y productores agrícolas hicieron manifiesto su apoyo.

Si como arengó Hernández Juárez, líder de la UNT, durante el bloqueo realizado frente a la Secretaría del trabajo el martes 4 de septiembre “Los trabajadores no vamos a aceptar sumisamente los techos salariales que desean imponer. ¡Ya basta! Necesitamos demostrar que estamos dispuestos a luchar unidos hasta que cambien la política económica y a respetar a los trabajadores y al sindicalismo”, seguramente existe beneplácito en la UNT pues el precedente que deja esta movilización para las siguientes revisiones salariales es muy importante. La política económica no cambia de golpe, pero es así como empieza a cambiar.

Romper la imposición de topes salariales; obligar a negociar a la empresa con el conjunto de los trabajadores; el respeto al derecho de huelga por parte de las autoridades laborales; y una combativa y eficaz solidaridad de otros gremios, arrojan un balance positivo de la huelga en Volkswagen. Y seguramente es este fortalecimiento del movimiento de los trabajadores el que provocó el chantaje por parte de la empresa alemana. Como resultado del conflicto y según declaraciones de los representantes en México, la compañía dejará de invertir mil quinientos millones de dólares programados para

los próximos 5 años, inversión que será trasladada a China. Lo que no dicen es que frente al emplazamiento de huelga no hicieron ofrecimiento salarial y que seguramente el paro de labores les ayudó a aminorar inventarios acumulados por la caída del mercado estadounidense.

Si bien al día siguiente de estas declaraciones, el gobernador de Puebla las desmintió, lo cierto es que el capital se solidarizó con la empresa alemana y provocó una caída semanal en el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores de 7.39%, aunque en esa caída estuvo presente también la molestia empresarial por el anuncio de la expropiación de veintidós ingenios azucareros. Sin duda cada quien se solidariza con quienes representan sus intereses, lo importante es que en esta ocasión no se coartó la libertad de los trabajadores para ejercer dos derechos laborales fundamentales: el de huelga y el de solidaridad.

## LA GUERRA Y LOS TRABAJADORES

19/09/01

Después de la huelga de los trabajadores de Volkswagen, cuyo balance fue el tema de mi colaboración del sábado pasado en este espacio, estuvo a punto de estallar la huelga en Mexicana de Aviación por parte del sindicato de sobrecargos (ASA). Minutos antes de que se cumpliera el plazo, se firmó un acuerdo de aumento salarial del 8.5% y la promesa de que si otro gremio de las líneas de aviación lograba un aumento superior al pactado, esa diferencia tendría que ser abonada al salario de los sobrecargos.

Lo cierto es que el ambiente y el resultado de este movimiento de trabajadores fue muy distinto al que se vivió en Volkswagen, pues mientras que en el caso de la empresa automotriz el balance



de la huelga, desde mi punto de vista, fue positivo para el conjunto de los trabajadores, en el caso de Mexicana de Aviación, aunque se consiguió un aumento por encima del ofrecimiento de la empresa del 5.5%, este no rompe significativamente con los topes salariales, que fue el camino que dejó abierto la huelga en Volkswagen.

Una vez pactado el acuerdo, Alejandra Barrales dirigente del sindicato reconoció que dicho acuerdo no los hacía felices, que habían recibido presiones y anónimos, que la correlación de fuerzas había cambiado y que ahora se trataba de salvaguardar el empleo. Dentro de esas presiones, el apoderado legal de ASA relató el mensaje de Vicente Fox al sindicato, vía el Srio. del Trabajo, Carlos Abascal: "que nos atengamos a las consecuencias si estallamos la huelga". Evidentemente la actitud de las autoridades no fue de cautela como en el conflicto de Volkswagen.

La explicación para un manejo y un resultado tan diferente entre movimientos de trabajadores de empresas fundamentales para la economía del país y con sindicatos cohesionados y liderazgos legitimados por sus bases, movimientos que además se realizaron con apenas diez días de distancia (del cinco al quince de septiembre), se encuentra en los atentados del once de septiembre en Nueva York y Washington. El eco de las declaraciones de George W. Bush de caracterizar a dichos atentados no como actos terroristas sino como actos de guerra, y la consecuente afirmación de que con esos hechos se ha iniciado la primera guerra del siglo XXI, ha repercutido ya en las relaciones laborales en nuestro país. Al respecto es necesario recordar que en un contexto de guerra, los primeros que pierden son los trabajadores; antes que las demandas para mejorar su situación, se ponen por delante las consignas de la unidad, en este caso no de la unidad nacional contra el enemigo con rostro y ubicación geográfica, sino la pretendida unidad mundial contra el fantasma del terrorismo.

Ciertamente el sector de la aviación es uno de los más afectados de manera inmediata por las consecuencias de los atentados. En

primer término la medida de cerrar los vuelos internacionales por parte del gobierno de EUA trajo pérdidas importantes para las compañías nacionales con rutas hacia ese país, entre ellas la emplazada a huelga, y en segundo, la propia reacción de temor de parte de la población ha reducido el tráfico comercial. Una vez abiertas las bolsas de valores de EUA y México el pasado lunes, las empresas cotizantes que mayores pérdidas registraron fueron precisamente las compañías de aviación y las aseguradoras, lo que ilustra con claridad una de las diferencias entre el momento de la negociación en Volkswagen y en Mexicana de Aviación, que jugó en contra del sindicato de sobrecargos.

Así el primer impacto de los atentados en Estados Unidos sobre el mundo laboral en México ya lo vivieron los sobrecargos de Mexicana de Aviación. La situación es preocupante, sobre todo para un país con niveles salariales de los más bajos de América Latina y con un rezago de cuarenta años, según las declaraciones de la OIT el pasado 5 de septiembre en Monterrey. Cuando parecía que para los salarios contractuales se empezaban a romper los topes y podría registrarse un crecimiento después de aquel efímero de 1991-1993, y cuando el salario mínimo podía crecer por primera vez después de 24 años, hoy la unidad contra el terrorismo empieza a exigir nuevos sacrificios para los trabajadores. Evidentemente sería aberrante que las autoridades laborales se dejaran llevar por ese espíritu antes que definir un plan de emergencia para la recuperación del poder adquisitivo del salario, precisamente cuando se abren muchas grietas en el mercado externo.

## GIGANTE CON PIES DE BARRO

26/09/01

A partir de la respuesta del gobierno de EUA a los atentados en Nueva York y Washington, el destino del mundo se encuentra entre dos escenarios: la hecatombe o la reorganización del orden internacional para una convivencia pacífica y duradera. El primer escenario lo está construyendo la irracionalidad con la que EUA está emprendiendo la campaña contra el terrorismo. En lugar de llevar adelante la investigación y la respuesta policiaca que corresponden a la violación de la legalidad cometida por quienes planearon y realizaron los atentados, se contesta con la declaración de guerra al enemigo invisible y a las naciones que lo encubran.

En un mundo donde la posesión de la bomba atómica se ha democratizado (India, China, Paquistán) y donde las armas bacteriológicas y químicas también han proliferado, es evidente que nos encontramos frente al riesgo de una cadena de respuestas con estas armas de parte de grupos o naciones vulneradas. Seguramente alguna novela de ciencia ficción que no he leído ya se habrá encargado de relatar el fin del mundo no en un solo acto, sino en una cadena de explosiones nucleares de magnitud moderada (¿?) de la mano de contaminación criminal de agua, alimentos, aire; todo ello en pocos años. Sí, la realidad podría de nuevo superar a la fantasía, sobre todo cuando se trata de destruir la vida.

Pero los habitantes de este planeta también podemos manifestarnos por la vida y detener la respuesta bélica que ha emprendido EUA. No legitimar la primera guerra del siglo XXI, como la denominó Bush, no significa aceptar la barbarie del terrorismo. Se trataría de entender las razones que están alimentando estos actos en cuya raíz encontraríamos una larga historia de agravios de los po-

derosos contra los débiles, encabezados durante el último siglo por EUA y atacar las causas desde esa raíz.

Por otra parte, que una de las religiones monoteistas como es el islamismo sea el fundamento de Estados cuya debilidad social se compensa con su radicalidad ideológica, no es más que la respuesta desesperada a la marginalidad a que han sido conducidos en la llamada globalización. Cuando se tiene un ingreso per cápita de 2.50 dólares diarios como es el caso de los afganos cualquier guerra santa es posible. No hay que olvidar que en otra etapa histórica, cuando Europa se encontraba sumida en la oscuridad de la Edad Media los países árabes fueron la cuna de la civilización. Hoy, dar oportunidad a la constitución de estados nacionales con sociedades democráticas en el mundo islámico requiere necesariamente, de que otros que se dicen campeones de la democracia como EUA, redimensionen su presencia y reconstruyan su liderazgo a partir de principios como el respeto y la tolerancia.

Habrà que esperar quizá algunas semanas para que la prudencia se haga presente en las decisiones de los gobiernos de los países europeos, por mencionar a los más influyentes, y el entusiasmo con el que hoy se responde a la convocatoria de guerra lanzada por Bush se modere. Al respecto, es necesario reconocer el mantenimiento de la posición del gobierno mexicano en la reunión de la OEA, en el sentido de cuestionar la obsolescencia del TIAR.

Las guerras han sido siempre la solución a las crisis capitalistas y un formidable mecanismo, no sólo para recuperar las economías, sino también para reorganizar la hegemonía mundial de manera violenta. Con las dos guerras mundiales del siglo XX se enterró el imperio inglés, se inició la debacle de los colonialismos y surgió hegemónico EUA. Pero desde la década de los setentas su economía ha sido incapaz de seguir el dinamismo de la productividad de los países asiáticos y de los principales países europeos y no por ello ha perdido hegemonía política. La explicación a esta aparente contradicción está en el privilegio de ser el único país que puede

pagar su enorme deuda externa con moneda nacional gracias a la aceptación del dólar como divisa mundial, y por otro lado su enorme poderío militar.

Pero lo que el mundo necesita no son gigantes con pies de barro sino presencias políticas internacionales que correspondan a la fortaleza de sus realidades nacionales. Después de la extinción de la URSS, EUA se ha empeñado en construir un mundo unipolar bajo su dominio. Nada se corresponde con esta pretensión: su pérdida de competitividad frente a otros bloques económicos y su falta de liderazgo moral cuando en cualquier situación ha hecho gala de su fuerza bélica para aplastar al más débil. Quizá el sacrificio salvaje de los miles que murieron el 11 de septiembre pasado se pueda convertir en el último eslabón de la larga cadena de barbaries y finalmente se abran paso la cordura y la sensatez. Hasta ahora los gobiernos se niegan a emprender ese camino. Para el segundo escenario el de la convivencia pacífica y civilizada, son los pueblos quienes tienen la palabra.

## COSAS VEREMOS

03/10/01

*Así es: el dos de octubre no se olvida.*

Mientras la paz mundial continúa amenazada por la convocatoria bélica del gobierno de EUA para acabar con el terrorismo, las consecuencias de los ataques del 11 de septiembre pasado a los símbolos del poder económico y militar de ese país van más allá de ese simbolismo y empiezan a minar las bases del funcionamiento de la globalización económica, cuya divisa ha sido la salvaguarda del sacrosanto mercado. Me refiero a la inyección de recursos presupuestales por parte del gobierno de EUA para salvar de la

crisis a las líneas aéreas y a las compañías de seguros quienes fueron las primeras empresas afectadas por los atentados, pero sobre todo me interesa subrayar la importancia que para el futuro de la globalización tiene la orden de Bush dictada la semana pasada para congelar los fondos financieros de la organización de Osama Bin Laden como parte de la guerra iniciada contra el terrorismo.

En una perspectiva de plazo muy corto la medida tiene sentido. Evidentemente sin recursos financieros cualquier organización terrorista estaría destinada al inmovilismo y por ende al fracaso. Sin embargo es difícil atacar las bases financieras de organizaciones que crecieron justamente al calor de la internacionalización de los capitales financieros: como el capital que las financia son volátiles e invisibles. La respuesta inmediata de Bin Laden a esa medida fue en el sentido de que no lo afectaba en tanto tenía muchos fondos más y jóvenes muy preparados para proteger esos recursos. Seguramente un yemenita que creció en Arabia Saudita en los años en que el mundo se inundaba de petrodólares, sabe del poder del capital financiero y cómo usarlo; si además –como lo informan los medios– fue entrenado por la CIA en la guerra contra la URSS en Afganistán, la combinación es ciertamente riesgosa para la seguridad mundial.

Pero si a Bin Laden el congelamiento de cuentas no lo afecta mayormente, en cambio Bush, además de cargar con la ineficacia de su medida, más temprano que tarde deberá pagar el costo político de haber abierto la puerta a una medida que los opositores a la globalización en marcha han estado exigiendo: la regulación del capital financiero internacional. Si la razón de la seguridad nacional es hoy suficiente para afectar el interés privado de ciertos capitales financieros, la pregunta que los opositores a la globalización pueden lanzar en el planeta es: ¿por qué el interés social no puede estar a la par de ese interés de Estado, sobre todo cuando el mismo Estado se arroga el derecho de afectar intereses privados?

Por otro lado, a partir del intervencionismo económico de Bush, no sólo se abona el campo de la lucha de los opositores a la globalización. Los mismos propietarios de los capitales financieros y las corredurías de inversión que los mueven a lo largo y ancho del mundo pueden sentir afectados sus intereses, al enterarse de que una parte de esos capitales ansiosos de valorizarse han sido paralizados por una orden discrecional, fuera del cumplimiento de las reglas abstractas que para su certidumbre ha exigido siempre el capital. Incautar bienes del enemigo ha sido un recurso usual en los conflictos bélicos, así sucedió en las dos guerras mundiales del siglo XX. La diferencia con la actualidad es que hoy el enemigo no tiene rostro como tampoco lo tiene el capital financiero, y difícilmente se podrán detectar los límites de la afectación de intereses privados distintos de las organizaciones que se pretende combatir.

Bush podría estarse enfrentado a las dos caras de Dios: la de Alá y la del dinero. Pudo haber sido la del Dios de otra religión monoteísta, pudo haber sido la del dinero en otra etapa histórica, pero que en su guerra contra los radicales islámicos se enrede en una lucha contra el capital financiero precisamente ahora cuando esa forma del capital hegemoniza a las otras; es realmente no saber en qué mundo está viviendo. Muchas riesgos para la vida y para la paz se abren a partir de la declaración de guerra de Bush, pero también muchas contradicciones en un mundo donde los ideólogos del capitalismo ya habían decretado el fin de la historia. Cosas veremos.

## PRD: OPOSICIÓN LEAL

10/10/01

Una vez alcanzada la alternancia en el poder, la política en México navega con el síndrome de la ausencia de acuerdos básicos para lograr el tránsito a la democracia. De esa carencia da muestras el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional firmado por los ocho partidos representados en el Congreso y el Poder Ejecutivo. Mientras la realidad del país va a tumbos en todos los órdenes y mientras EUA arrastra al mundo en la torpe venganza bélica contra los presuntos autores de los atentados del 11 de septiembre pasado, al Ejecutivo y a los partidos no se les ocurre mejor cosa que firmar un acuerdo "con el propósito de impulsar el avance y cumplimiento de la ...agenda encaminada a satisfacer las demandas ciudadanas de seguridad, de bienestar social y de democracia".

Acordar una agenda sobre los problemas nacionales más relevantes ciertamente constituye el primer paso en la construcción de un acuerdo nacional. Sin embargo, para que una agenda sea significativa sobre los alcances de dicho acuerdo tiene que ser incluyente de la pluralidad de las visiones políticas del país. Sin duda rubricar una agenda nacional constituye la primera medición de fuerzas de las representaciones políticas, en este caso, los partidos. La novedad en esta agenda es que en esa medición de fuerzas la visión de la izquierda se evaporó, todo parece indicar que por decisión propia de quienes dicen representar a la izquierda en el país.

La primera evidencia de esta vaporosa mutación de la izquierda partidaria es que el tema indígena no aparece en la agenda pactada, de manera que en la visión del PRD la demanda de autonomía de los pueblos indígenas está ya resuelta con la aprobación de la iniciativa de derechos y cultura indígena por el Congreso de la Unión, no importa que esa reforma no haya respetado los Acuer-



dos de San Andrés entre el gobierno y el EZLN y no importa tampoco que la promulgación de esa reforma esté sometida a más de cuatrocientas controversias de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

En más de una ocasión, en este y otros espacios, he insistido, como muchas veces más, en el carácter fundamental de la autonomía de los pueblos indios para lograr una auténtica democratización del Estado en nuestro país. Después del reconocimiento del derecho al sufragio, noventa años después de que se hiciera una revolución que inició con esa demanda, la gran tarea pendiente para alcanzar un régimen plenamente democrático es el reconocimiento a la autonomía –esto es la no injerencia del Estado, en la vida de las organizaciones sociales.

Pero como estas organizaciones, sobre todo los sindicatos han sido duramente golpeados por las políticas neoliberales de los últimos años, y como ese mundo sindical aún guarda las inercias del corporativismo, tuvieron que ser los pueblos indios, concretamente el EZLN el que se levantara con esa bandera moderna y democrática, al reclamar como sujetos políticos constitutivos del Estado mexicano su derecho a existir y ser reconocidos según su libre determinación. De reconocerse ese derecho, nadie podría negar el reconocimiento de autonomía, libertad y democracia para los sindicatos y las organizaciones sociales. Con ello quedarían abiertas las puertas a la democracia participativa y se iniciaría un régimen plenamente democrático.

Pero todo parece indicar que los intereses del PRD no andan precisamente por los rumbos de la reforma democrática del Estado, seguramente esos intereses son mucho más cortos, por ejemplo el de obtener la credencial de oposición leal y funcional al sistema, con la que se pueden obtener muchas prebendas. Porque aunque el documento firmado es apenas una agenda, no se limita a eso, sino, como lo calificó el Secretario de Gobernación: “(el acuerdo) ya es un hecho en sí mismo importante desde el punto de vista político

(....) los mexicanos fuimos capaces de ponernos de acuerdo en el orden de prioridades de los distintos asuntos de la agenda política nacional”.

Tiene razón Santiago Creel, el Acuerdo constituye un triunfo político para el gobierno, seguramente para las burocracias de los partidos también. Pero no por mucho tiempo. Un acuerdo que proyecta un país con la exclusión de los indígenas nació en el limbo y sin legitimidad.

## VOCES CRÍTICAS

17/10/01

Por razones de seguridad nacional, y en medio de la guerra emprendida contra el terrorismo internacional, el gobierno de EUA está solicitando la autocensura a los medios de información. Lo que evidentemente no puede hacer es acallar las voces que señalan la responsabilidad de ese gobierno en el conflicto en el que hoy trata de colocarse como el paladín del bien en la lucha contra el mal. Porque esas voces no vienen solamente de sectores que tradicionalmente han sostenido una actitud crítica, sino también de gente muy cercana al gobierno de ese país o de organismos que hasta ahora habían servido de caja de resonancia para sus políticas. Es el caso de los análisis recientes de Joseph Stiglitz presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente W. Clinton, quien además obtuvo el Premio Nobel de Economía la semana pasada, y de las declaraciones de James Wolfensohn actual presidente del Banco Mundial, las que ahora se levantan como serias críticas contra la política de EUA y las consecuencias de las políticas neoliberales.

En un breve artículo publicado la semana pasada, “El reequilibrio de las prioridades”, Stiglitz pone en el banquillo de los acusados al

gobierno de EUA por varias decisiones que estarían haciendo patente la hipocresía y el fundamentalismo neoliberal con la que se toman una serie de medidas, que hoy, después de los atentados del 11 de septiembre, adquieren su real dimensión. La primera de ellas tiene que ver con las consecuencias de haber privatizado la seguridad aeroportuaria “un área vital de interés público”, que si bien generó fuertes ganancias para las empresas privadas por los bajos salarios pagados a los agentes, las consecuencias de esa medida se vieron en el horror del 11 de septiembre. En el mismo artículo Stiglitz señala la hipocresía del gobierno de ese país quien exige transparencia en los mercados emergentes mientras los Secretarios del Tesoro de Clinton y Bush han protegido a los bancos *offshore* para resguardar los fondos de Wall Street, y mientras se rechazaba el acuerdo sobre lavado de dinero de la OCDE.

Pero la llamada de atención de Stiglitz no se queda ahí: también arremete contra las consecuencias de la privatización de USEC, la Corporación Enriquecedora de Estados Unidos, empresa que enriquece uranio para la fabricación de bombas nucleares y en cuyas manos se dejó la responsabilidad de concentrar el material nuclear de las ojivas soviéticas y convertirlo en uranio enriquecido para plantas de energía. Sin embargo, la ganancia privada, razón a la que ahora obedece esta empresa, le dictó que era mejor mantener ese material fuera de control, mismo que ahora constituye un serio riesgo para la proliferación de armas nucleares.

El análisis de Stiglitz concluye diciendo que los errores de EUA ponen en riesgo a todo el mundo. “EUA ha sido el heraldo de la globalización, pero ahora debe reconocer que con la globalización viene la interdependencia, y con la interdependencia viene la necesidad de tomar decisiones colectivas en todas las áreas que nos afectan colectivamente”.

Por su parte, el presidente del Banco Mundial, organismo financiero multilateral que ha puesto en el centro de sus recomendaciones de política económica a los llamados países emergentes todas

las recetas neoliberales, ahora declara, a propósito de los atentados del 11 de septiembre pasado, que "Si no tendemos una mano a la gente que vive en la pobreza y no creamos una mejor distribución de la riqueza, no habrá paz." Como si los aviones estrellados en las Torres Gemelas le hubieran abierto la mente, Wolfensohn dijo que la fuerte concentración de la riqueza en el mundo es la causa de las protestas contra la globalización y también de los atentados en Washington y Nueva York y que "Los dos mundos han desaparecido. Hay un solo mundo...." porque la pobreza en otro continente, a miles de kilómetros puede significar la muerte de los que viven en países desarrollados.

Ciertamente las visiones sobre las consecuencias de ese capitalismo salvaje que ha tenido como emisaria por el mundo a la globalización y a las políticas neoliberales que la sustentan, están empezando a cambiar desde las entrañas mismas de quienes las han prohiado. Ojalá no sea demasiado tarde.

#### EN MEMORIA DE DIGNA OCHOA

24/10/01

Ser digna y leal a las causas que se defienden en este país puede tener como precio la vida. A pesar de todos los avances que en materia de defensa de derechos humanos se han logrado durante los últimos treinta años en México, hoy tenemos que lamentar la pérdida de una valiosa defensora de esos derechos, Digna Ochoa. El hecho no sólo es reprobable sino ominoso para el futuro político del país, de ahí la generalizada demanda de que este crimen no quede en la impunidad y que se esclarezca de inmediato.

El artero crimen de Digna, proyecta una larga sombra sobre la alternancia. Y más allá de exigir la rigurosa y expedita investigación

judicial para encontrar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato, es preciso que los responsables de la conducción política del país, entiendan que la muerte de Digna Ochoa constituye un serio mentís a las cómodas visiones de que todo marcha bien. Es evidente que quienes concibieron, planearon y perpetraron la desaparición de Digna, están percibiendo vacíos de poder significativos como para realizar este atentado.

La primera pregunta que surge es: ¿se habría cometido este asesinato si el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional firmado por todos los partidos y el poder Ejecutivo hace algunos días, realmente hubiese constituido un cierre de filas de todas las fuerzas políticas sobre los principales puntos de la agenda nacional y sobre la manera de empezar a adelantar soluciones en torno a ellos? Evidentemente no. La puerilidad de ese Acuerdo queda en evidencia cuando no sabemos qué poderes fácticos se atreven a lastimar y amenazar de manera tan contundente a los sectores progresistas del país y su lucha por la vigencia de la ley; cuando no sabemos quiénes perciben debilidad y fragilidad en las instituciones republicanas, donde el Ejecutivo y los partidos sólo ven unidad y fortaleza. Por supuesto en mi argumentación no se encuentra ni remotamente –sería absurdo–, la idea de que si el Acuerdo no se hubiese firmado, entonces nadie se habría atrevido a perpetrar el asesinato de Digna Ochoa, mi alegato trata simplemente de ilustrar la banalidad del acuerdo, su carácter cosmético, de relumbrón.

Seguramente habrá quienes piensen que esta tesis peca de esquemática y simplista, y no dudaría en pensar que son los mismos quienes conciben a la política como la trivial actividad de salón realizada por aquellos que suponen representar a la sociedad, no importa que la realidad tome su propio cauce, y por lo que vemos un cauce no siempre civilizado.

Ciertamente el reto fundamental del país continúa siendo el logro de los acuerdos fundamentales para transformar la alternancia en el inicio de un régimen plenamente democrático; el problema es

que cuando se llega a acuerdos, como el recientemente suscrito por todos los partidos en donde se dejan fuera temas nodales para la transformación democrática del país como la reforma indígena y la reapertura del expediente del Fobaproa; lo que se está haciendo es legitimar políticamente la impunidad y la transgresión del Estado de Derecho. Y entonces el resultado es contraproducente porque por un lado se alimentan las expectativas para la buena marcha del país, mientras otros interpretan que reina el desgobierno.

Sin duda la última semana sucedieron una serie de acontecimientos cuya combinación parece recordarnos de manera brutal que nadie garantiza que la alternancia sea el primer paso para la transición a la democracia y que más bien podría ser el inicio de un retroceso. Forman parte de esa combinación las acciones de una clase política que crea su realidad virtual llena de castillos, viajes, conciertos, yerros lingüísticos, ramos de novias, pleitos internos, aeropuertos mal ubicados, partidos políticos que se tropiezan con las mismas piedras...en fin. Ojalá que la muerte de Digna Ochoa, una valerosa joven veracruzana que dedicó su vida a luchar por el respeto a los derechos humanos para lograr una convivencia civilizada entre gobernantes y gobernados, baje de las nubes a esa clase política dirigente y se empiece a trabajar realmente por la construcción de un país justo y democrático.

## MIGRACIÓN Y AGENDA LABORAL

31/10/01

Según declaraciones recientes del Secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda y del vocero de la Casa Blanca, próximamente se retomará la discusión sobre la agenda bilateral entre ambos países en materia migratoria. Sin embargo el anuncio del propio go-

bierno de EUA de cierre de fronteras como parte de su política antiterrorista no permite buenos augurios sobre los acuerdos que se podrían alcanzar en torno de este fenómeno que constituye la principal transacción económica entre ambos países.

Antes del 11 de septiembre pasado, las opciones que se habían manejado para el tratamiento del fenómeno migratorio México-EUA iban desde la emisión de mayor cantidad de visas para trabajadores calificados, hasta un acuerdo para la amnistía de aproximadamente 3 millones de trabajadores mexicanos indocumentados (cuando la cifra real alcanza los cinco millones), pasando por una nueva versión del Programa Bracero hoy denominado de Trabajadores Huéspedes.

En el mejor de los casos, cualquiera de estas tres opciones –o una combinación de las mismas– estaría aún muy lejos de la propuesta de campaña foxista de abatir las fronteras para los trabajadores, que de aplicarse sería la única que resolvería el problema de raíz y cambiaría la esencia del TLCAN hasta ahora benéfico solamente para las grandes empresas.

Por si esas limitaciones fueran pocas, es necesario no perder de vista que el impacto del tema migratorio tiene repercusiones no solamente en la naturaleza de nuestras relaciones exteriores con EUA y de nuestra inserción en el mercado internacional que en realidad se encuentra determinado por esa relación particular, además de ello las consecuencias impactan directamente en el futuro de los trabajadores residentes en nuestro país.

A pesar de todos los obstáculos a los trabajadores migratorios, a pesar de la política de criminalización y del sellamiento de la frontera lo cierto es que la fuerza de trabajo mexicana se ha ya transnacionalizado. Sin las ventajas y privilegios otorgados al capital en cualquiera de sus formas, lo cierto es que al menos un 20% de nuestra Población Económicamente Activa desarrolla sus actividades en aquel territorio, de manera que la suerte de los asalariados

residentes en México depende en buena medida del reconocimiento de los derechos de los trabajadores mexicanos en EUA.

De ahí que el tema migratorio no sólo tendría que formar parte de la agenda gubernamental en materia de relaciones exteriores y de seguridad nacional, sino también de la agenda laboral. Pero este confinamiento del tema migratorio no sólo es una política gubernamental. A excepción de algunas organizaciones sindicales de ambos lados de la frontera, lo cierto es que la tónica general de la importante lucha que han dado los sectores progresistas y democráticos de la sociedad, ha formado parte de la defensa de los derechos humanos sistemáticamente violentados por las autoridades migratorias de ambos países, y no como parte de la agenda laboral.

El asunto cobra mayor relevancia si recordamos que en México se ha iniciado la discusión sobre la reforma laboral. Sería muy grave que el tema de los trabajadores migratorios, *con toda la importancia que tienen para la economía nacional y para la misma forma de existencia social de la fuerza de trabajo en nuestro país*, estuviera fuera de esa discusión.

Asumir con seriedad la globalización implica no solamente correr presurosos a cumplir con las nuevas disposiciones antiterroristas que está diseñando e imponiendo el gobierno de EUA al resto del mundo, sino también recordar los intereses nacionales y sociales que es necesario hacer valer. Sería un craso error suponer que la agenda laboral se agota en los confines de nuestro territorio.

## HERENCIAS Y COMPLICIDADES

07/11/01

Con la presentación del Informe sobre Finanzas y Deuda Pública para el tercer trimestre del año, la Secretaría de Hacienda anunció



un recorte más al gasto público por un monto de 3 mil 45 millones de pesos, que sumados a los anteriores arrojan un total de 16 mil 820 millones en lo que va del año. Como lo sostenía el editorial de *El Universal* del lunes pasado, el gobierno foxista sigue el círculo vicioso de responder a la menor recaudación de ingresos públicos motivada por la caída en la actividad económica con más recortes en el gasto, que a su vez alimentan la recesión que ya vive el país.

El anuncio de este tercer recorte efectivamente tiene como trasfondo la caída de los ingresos presupuestales, pero sin duda le sirve también al gobierno para preparar el terreno de la discusión sobre las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos que en los próximos días enviará al Congreso y presionar a los partidos ahí representados a que aprueben la iniciativa de reforma hacendaria que se centra en aplicar un 15% de IVA a medicinas y alimentos que hoy tienen tasa cero, o aceptar un presupuesto más austero que el del 2001.

La pretensión gubernamental de arrinconar a los partidos opositores para aprobar su iniciativa de reforma fiscal, ó hacerlos responsables de esa mayor austeridad, puede resultar exitosa para el gobierno. Seguramente no se aprobará la iniciativa en los términos en que la ha enviado el Presidente Fox, pero las modificaciones que se logren no dejarán de cargar el peso de la mayor recaudación sobre los que menos tienen a través de la aplicación del IVA.

En todo caso la discusión de los partidos en el Congreso a la reforma hacendaria foxista no se ha movido de los marcos definidos en la estrategia del mismo Fox que es suponer que existen finanzas públicas transparentes y que todo se reduce al problema de cómo aumentar ingresos frente a una demanda creciente de atención a los grandísimos rezagos sociales; cuando en realidad el problema es que dicha transparencia no existe y que de ese lastre heredado por los gobiernos priistas el gobierno de Fox se ha hecho cómplice.

Aún cuando la reforma hacendaria foxista fuera aprobada por el Congreso, la austeridad en el gasto programable y en el gasto social continuaría por la sencilla razón de que el aumento de los ingresos públicos se iría a cubrir la deuda contraída por la legalización de los pasivos del Fobaproa, junto con el rescate carretero, la reforma al sistema de seguridad social, los programas de inversión con registro diferido en el gasto (Pidiregas) y los fiedicomisos ubicados en la banca de desarrollo. El maquillaje de las finanzas públicas que el GPPRD en el Senado en la LVII Legislatura denunció desde 1998, gracias a las excelentes investigaciones de su asesor en economía, el Dr. Juan Moreno Pérez, hoy se hace público por el FMI (*Proceso*, 1305, 4 de nov. del 2001), ciertamente con la anuencia –por primera vez– del gobierno de México.

Sin embargo el cambio en el manejo de las finanzas públicas no puede reducirse sólo a aceptar la publicación de informes como el del FMI que anteriormente se mantenían en secreto, sino asumir plenamente las consecuencias de la realidad sobre la que se informa. Y esa realidad lo que señala es que por cada peso de aumento en los ingresos públicos resultado de la reforma fiscal, sólo 20 centavos se dedicarían al gasto programable, el resto iría al pago de esa deuda escondida. De manera que toda la propaganda de que la reforma fiscal serviría para aumentar el gasto social es una gran mentira.

Pero el informe del FMI, ahora público, documenta además la manipulación y el maquillaje para ocultar el saqueo de los recursos públicos. Durante años se mintió al país sobre los niveles reales de endeudamiento y déficits públicos, sin embargo los autores de ese engaño siguen en la impunidad y la discusión sobre la reforma fiscal que el país necesita se desarrolla sobre esa falsedad.

Antes que aceptar cargar más impuestos sobre los que menos tienen para hacer manejable ese desastre financiero, lo que tendría que hacerse es abrir la investigación y fincar las responsabilidades conducentes a los responsables de ese quebranto. Dejar esos delitos en la impunidad y además usar ese quebranto como arma de pre-

sión para la aprobación de una reforma fiscal regresiva, hace al gobierno de Fox cómplice de las irregularidades e ilegalidades cometidas por sus antecesores. En la misma situación se encontrarían los legisladores que acepten los términos de la discusión que el Ejecutivo trata de imponer.

## DESPACIO PORQUE LLEVAMOS PRISA

14/11/01

Apenas se conoció la caída del avión de American Airlines las bolsas de valores en el mundo hicieron lo propio. Aún cuando la nueva catástrofe ocurrida en Nueva York se haya debido a un accidente y no a un atentado, lo cierto es que el ambiente que el propio gobierno de EUA ha creado en su guerra contra el terrorismo ha generalizado el nerviosismo, la incertidumbre y la quebradiza confianza de los inversionistas. Esta respuesta económica seguramente profundizará la recesión de ese país y la de su hermano siamés, México.

No sabemos por cuánto tiempo más se prolongue la absurda guerra por la libertad duradera, lo cierto es que esa condición de incertidumbre está pasando a formar parte de la nueva naturaleza de la globalización, con consecuencias bastante serias sobre las llamadas economías emergentes del mundo, entre las que por supuesto se encuentra nuestro país. Esta situación obliga al gobierno y a los partidos representados en el Congreso a hacer un alto en el camino y diseñar una estrategia específica para enfrentar la nueva situación. Obviamente tendría que hacerse acopio de todas las medidas de política económica que fortalezcan el mercado interno y las capacidades competitivas de nuestro país.

No es lo mismo enfrentar la nueva situación internacional con una economía que se ha convertido en el cabús del ferrocarril cuya locomotora es el vecino país del norte, a hacerlo en un mundo abierto con un país democrático y transparente que coloca el eje del crecimiento en los propios recursos y capacidades. La peor opción es suponer que nada sucede y continuar en la rutina de una supuesta normalidad que no existe. Así pareció desprenderse de aquel Acuerdo para el Desarrollo Político Nacional firmado por el Ejecutivo y los partidos en el que no se incluyeron los dos temas de los que sin lugar a dudas depende el futuro de la democracia en el país: la reforma indígena y el rescate bancario. Sin embargo, después de esa firma y después de los atentados en Nueva York, todo se enredó en frivolidades y en declaraciones desafortunadas del Presidente.

Por fortuna ya no todo depende del Presidente de la República como sucedía en el régimen priista, en tanto empieza a esbozarse cierta independencia en la actuación de los otros poderes. Esos esbozos permiten colocar cierta esperanza en que el Poder Judicial declare inconstitucional la reforma indígena aprobada por el Congreso en abril pasado. La falta de cumplimiento de los requisitos mínimos para su aprobación en las legislaturas de los estados podría ser la pauta para su revocación por parte de la Suprema Corte de Justicia, y con ello desmontar el camino para el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

La importancia de ese cumplimiento es tal, que con esa simple aprobación bastaría para sentar las bases de un nuevo pacto político hacia un Estado moderno, democrático e incluyente. No sería la panacea para garantizar la transición democrática del país, por supuesto con su aplicación emergerían nuevos problemas, pero sin duda pasaríamos de la endeble alternancia, a la fortaleza de una democracia participativa. La resolución de la Corte no tiene un plazo fatal, pero de acuerdo a los trascendidos en la prensa, la decisión podría anunciarse en el primer trimestre del próximo año.

Lo que sí tiene un plazo perentorio es la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que normarán las finanzas públicas del próximo año. Todos sabemos que la discusión para su aprobación en el Congreso se encuentra condicionada a la suerte de la iniciativa de reforma hacendaria enviada por el Presidente Fox, tanto que el Senador perredista Demetrio Sodi declaró a la prensa que no tiene caso analizar el paquete económico del ejecutivo "porque va a depender (de) si sale o no la reforma hacendaria", para agregar que si los partidos políticos no se ponen de acuerdo para resolver "de manera urgente la reforma fiscal" ... "va a haber muy pocas posibilidades de exigirle al gobierno un mayor gasto" (*El Universal*, 12 11 01).

¿Se enterarían los legisladores de que aún aprobando esa reforma sólo podrían exigir al Ejecutivo veinte centavos de cada peso recaudado para gasto programable, porque los ochenta restantes se irían al pago de la enorme deuda escondida y heredada por el gobierno de Zedillo? Basta revisar el informe del FMI de agosto pasado sobre México para enterarse. Entonces, si la prisa es de los delincuentes que han atentado contra las finanzas públicas sanas con su fraudulento rescate bancario, ¿por qué hacerse cómplices de ellos? Si el Ejecutivo quiere solapar esos delitos e irregularidades, también lo hará el Legislativo? ¿Por qué no tomar las cosas con calma, ahora que llevamos prisa y así empieza a conducirse el país con transparencia? Es lo menos que exigen los nuevos tiempos.

#### LA ASAMBLEA DE UN PARTIDO INOCENTE

21/11/01

Al escribir estas líneas, la XVIII Asamblea Nacional del PRI aún no concluye, sin embargo todo parece indicar que la corriente de Ro-

berto Madrazo saldrá fortalecida con la muy probable ratificación en plenaria del resolutivo que niega la posibilidad de postularse para la dirigencia del partido a quienes tengan un cargo de elección popular, en este caso léase la dedicatoria especial de esa iniciativa contra Beatriz Paredes y Rodolfo Echeverría.

La anterior asamblea nacional de ese partido constituyó una rebelión de las bases priístas contra la tecnocracia, en tanto impuso el candado de que los candidatos a la presidencia de la República cumplieran con el requisito de haber ganado algún puesto de elección popular, requisito de difícil cumplimiento por parte de quienes habían accedido a la Presidencia de la República con alguna afiliación al PRI pero antes que nada, con todas la credenciales de alguna universidad del extranjero en donde se hubieran graduado haciendo loas al fundamentalismo de mercado.

Así, después que los priístas vieron llegar a la presidencia de la República al gris Miguel de la Madrid; al fraudulento Carlos Salinas y a su heredero Ernesto Zedillo, gracias a los candados impuestos por ellos, a la hora de escoger candidato para el 2000 la selección de Francisco Labastida no sólo resultó incapaz de contrarrestar el fenómeno Fox, sino tampoco de aparecer como un candidato lejano a los tecnócratas contra los que el partido había tirado lanzas. En la perspectiva de una renovación partidaria, el *candado de la XVII Asamblea* parecía acertado, sin embargo haberlo aprobado con quince años de atraso, cuando ya estaba consumado el daño de la política de los tecnócratas sobre el país y cuando la complicidad de los cuadros dirigentes era generalizada y notoria, ese candado nació como una medida totalmente ineficaz. Así pagaban los priístas su subordinación al Presidente en turno a lo largo de toda su existencia como partido de Estado; así pagaban también el precio de haber sido no un partido, sino apenas una dependencia gubernamental.

El nuevo candado de eliminar a representantes populares o gobernantes en ejercicio de sus funciones como candidatos a la presi-

dencia nacional del PRI se inaugurará con el próximo cambio de dirigencia en marzo del 2002 y por supuesto incidirá en la postulación al candidato a la presidencia de la República para el 2006. Todo ello en un contexto de recuperación electoral para el PRI, caída del PAN y estancamiento del PRD –excepción hecha de Michoacán, gracias al candidato triunfante y no al partido.

A pesar del carácter tardío de la imposición de candados de las Asambleas XVII y XVIII, pareciera que el PRI estaría fortaleciendo sus posibilidades para obtener el control de la Cámara de Diputados en el 2003.

La falta de cumplimiento de las promesas electorales de Vicente Fox le otorga una ventaja relativa, junto con la pérdida de credibilidad del PRD por los fraudes internos –sobre todo el de marzo de 1999– estarían explicando que el PRI haya podido remontar sus resultados electorales en los procesos locales.

Pero sobre todas estas razones, el fortalecimiento del PRI se explica por la impunidad permitida por el llamado gobierno del “cambio”. El pacto silencioso entre la nueva clase política foxista-panista y el priismo para no esclarecer, en consonancia con el Estado de Derecho, los fraudes de gobernantes y funcionarios que permitieron enriquecimientos inexplicables y el saqueo del patrimonio público, le ha dado oxígeno a una vieja clase política que sin duda sabrá capitalizar el oficio desarrollado a lo largo de sus setenta y un años en el poder, frente a la novatez del foxismo. Recuérdese la visita a mediados de año, de los Secretarios de Gobernación y Contraloría en la sede priísta en torno al tema de la transparencia.

Con esa holgura, el PRI y la clase política que se desarrolló durante los años del mayor saqueo para el país, pudo darse el lujo de realizar su Asamblea Nacional en el limbo de la inocencia, sin rendir cuentas a nadie. Sí, con la impunidad de por medio cualquier recuperación política es posible, también el estancamiento de la transición.

## ¿REELECCIÓN LEGISLATIVA?

28/11/01

Durante los últimos meses y cada vez con mayor frecuencia se ha venido discutiendo el tema de la reelección legislativa, abrogada en nuestro país desde 1933. A falta de voluntad por parte del Ejecutivo y de las principales fuerzas políticas del país para acordar una auténtica e integral reforma democrática del Estado, ocasionalmente se lanzan ideas aisladas de lo que debería constituir esa agenda de reforma. En ese contexto la propuesta sobre la posibilidad de que los legisladores se reeligan es una idea más; sin embargo, bastante ilustrativa de los intereses de la clase política en el poder y muy lejana de las necesidades del país para iniciar esa tan pospuesta transición democrática.

Los argumentos que se dan a favor de la reelección legislativa van todos encaminados hacia la necesidad de hacer valer el juicio ciudadano sobre el desempeño de los legisladores y con ello mejorar el funcionamiento de las Cámaras del Congreso de la Unión. Sin duda uno de los factores que inciden en el fortalecimiento del poder legislativo es la capacidad, el oficio del legislador para hacer las mejores leyes, esto es aquellas que propicien el bienestar del pueblo y para lograrlo, la experiencia legislativa es una condición necesaria pero no suficiente.

Según la propuesta, aquellos legisladores que fuesen reelectos estarían recibiendo el premio del voto ciudadano por haber desarrollado de manera satisfactoria sus tareas legislativas, cuando en realidad podría tratarse del fortalecimiento de mecanismos corporativos poco visibles a cuyos intereses estaría sirviendo esa reelección.

Sin duda el fortalecimiento del poder legislativo es una necesidad imperiosa para lograr un auténtico equilibrio entre los poderes



en nuestro régimen republicano, pero ese fortalecimiento no necesariamente se daría con la reelección. Son varias las etapas que es necesario agotar antes de recurrir al expediente de la reelección legislativa para mejorar el desempeño de los diputados y senadores, sobre todo en un país que hizo una revolución en contra de la reelección, y precisamente cuando tuvieron que transcurrir noventa años después de iniciada esa revolución para que el voto ciudadano se respetara, esto es, apenas el año pasado.

No se trata de mantener un tabú ideológico sobre un tema particularmente sensible de la historia política del país, pero a nadie escapa que una vez incluida en nuestra Constitución la reelección de legisladores, inmediatamente se abriría el camino al tema de la reelección del Poder Ejecutivo y de ahí a la legalización de los caudillismos apenas habría un paso.

Antes que la reelección legislativa como mecanismo para hacer eficaz el trabajo en el Congreso de la Unión, tendría que pensarse en la profesionalización del apoyo técnico en el trabajo de las comisiones legislativas a través de la creación del servicio civil de carrera parlamentaria, el que fuera de todo signo político proporcionara los elementos necesarios, suficientes y oportunos para el diagnóstico de los problemas que una iniciativa trata de resolver. Así cada legislador y grupo parlamentario podría ofrecer –de acuerdo a su perspectiva política– la alternativa que mejor convenga. Ese cuerpo de asesoría técnica sería el que acumularía el conocimiento y la experiencia, que en términos políticos y legislativos tendría que traducir el representante popular.

De esta manera la profesionalización del cuerpo de asesores insertos en el servicio civil de la carrera parlamentaria sería la garantía para la calidad del trabajo legislativo. Junto con ello, habría que aprobar los cambios jurídicos necesarios para que de manera obligatoria, todas las dependencias del Ejecutivo Federal hicieran llegar al Congreso de la Unión, toda la información necesaria para el mejor desempeño de sus funciones. Al respecto baste recordar los

artilugios sin fundamento que la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores adujeron para no entregar la información nominal sobre los créditos bancarios rescatados por el Fobaproa y convertidos en deuda pública; o la que seguramente ahora –como siempre– se está escamoteando para el diagnóstico y la discusión sobre las diversas propuestas de reforma fiscal.

La necesidad de dotar de recursos humanos y técnicos por la vía de ese servicio civil –y no de la asignación de recursos a grupos parlamentarios y a legisladores en particular– salta a la vista a la hora de discutir el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (que se desglosa en 31 tomos de información) y la Ley de Ingresos que se aprueban cada año, siempre en absoluta desventaja para el legislativo, si además tomamos en cuenta la escasa disponibilidad de tiempo para hacerlo.

Otro elemento importante para mejorar el trabajo de los legisladores sería la obligación de los partidos para seleccionar y preparar adecuadamente a sus legisladores, antes incluso de ser candidatos. Sin duda antes que hablar de reelección legislativa, hay muchas otras vías para fortalecer y dignificar el trabajo del Congreso de la Unión.

## EL INFORME DE LA CNDH

05/12/01

El pasado martes 27 de noviembre el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe a la sociedad y una recomendación al Presidente de la República referente a las desapariciones forzadas de personas durante la década de los setentas y ochentas, el período de la llamada guerra sucia. Después de treinta años, este hecho constituye un triunfo de las organizacio-

nes defensoras de los derechos humanos en el país, principalmente de las constituídas por los familiares de los desaparecidos políticos quienes no han cejado en su lucha por el esclarecimiento de esos crímenes de Estado.

Sin duda el informe de la CNDH es incompleto, sin embargo el valor político del documento es el reconocimiento por parte del Estado de haber actuado fuera de toda norma legal en la persecución y aniquilamiento de quienes en aquellos años optaron por la vía armada. La esencia del informe se resume en las siguientes frases del documento: "No hay razón de seguridad nacional que justifique la desaparición forzada de personas. No hay razón de Estado que pueda estar por encima del estado de derecho".

Cerradas como estaban las opciones legales de participación política para la transformación del país después de las masacres de estudiantes de 1968 y 1971, el sacrificio de quienes cayeron en aquella lucha no fue en vano. La reforma política de 1978 para el reconocimiento legal de los partidos de oposición no podría explicarse sin la osada decisión de aquellos jóvenes urbanos y campesinos de enfrentar al Estado con las armas en la mano. La culminación de aquella etapa de lucha la vivimos apenas el año pasado con la conquista del respeto al voto ciudadano. Cerrar esa etapa de manera institucional significa abrir los expedientes de la guerra sucia, investigar a fondo y castigar a los culpables. No existe otra manera de fortalecer la vía pacífica y legal para la transformación democrática del país que no sea erradicar la impunidad, que no sea hacer valer el estado de derecho por el que optaron millones de ciudadanos en las urnas para terminar con el viejo régimen. De otra manera los asesinos de Digna Ochoa seguirán al acecho.

El Presidente Fox acató de inmediato la recomendación para crear una fiscalía especial por parte del Procurador General de la República. El escepticismo en torno a esa figura tiene fundamento en el fracaso de las creadas para los casos de los homicidios de Colosio y Ruiz Massieu, también en la desconfianza de que un miem-

bro de las Fuerzas Armadas haga el nombramiento idóneo para las investigaciones que en muchos casos conducirán a miembros de ese sector. La única manera en que esa designación genere confianza en la sociedad es que el nombramiento se haga en consulta y con el consenso de los organismos defensores de los derechos humanos. Así también la designación de quienes conformarán el comité de apoyo de la fiscalía para la investigación de los hechos.

El Informe de la CNDH y la recomendación al Presidente de la República abre nuevos cauces para hacer una realidad la transparencia en los actos de gobierno. Si la sociedad desdeña el valor político de ese documento, si no lo reconoce como producto de sus luchas democráticas, entonces lo más probable es que continúe prevaleciendo la razón de Estado por encima del estado de derecho.

En la racionalidad del Estado, la del Gatopardo siempre será la mejor opción: aparentar un cambio para que nada cambie. Son muchos los vericuetos en los que se puede diluir el valor político de ese Informe y recomendación, por ejemplo: que el fiscal especial y el comité de apoyo no sean los idóneos; que a la fiscalía se le regateen autonomía y recursos; que la tipificación de delitos se haga en función de su prescriptibilidad; que la orientación de las indagatorias sea discrecional para fortalecer o debilitar a sectores del PRI en la interlocución y alianzas con el nuevo gobierno. En fin, la única garantía para que el Informe no caiga en manos del Gatopardo es la vigilancia que la sociedad democrática desarrolle sobre el esclarecimiento de los hechos, para lo cual primero necesita reconocerlo como un merecido avance en su lucha por erradicar la impunidad.

## LA HORA DEL PODER JUDICIAL

12/12/01

*Con mis felicitaciones para Claudia Smith por el premio Digna Ochoa que le otorga Amnistía Internacional.*

No son pocos los cambios que ha experimentado el sistema político mexicano en los últimos quince años. Seguramente los más importantes sean haber pasado de un régimen de partido de Estado a un sistema tripartidista; del control del proceso electoral por parte del Estado a la ciudadanización de los órganos electorales y la transparencia del voto; del control hegemónico del Poder Legislativo por parte del PRI a un Congreso de la Unión plural; del control gubernamental sobre los medios de comunicación a una mayor libertad de prensa; y del monopolio priísta en la Presidencia de la República por 71 años a la alternancia en el poder.

La naturaleza de estos cambios han impactado la relación de la sociedad con el gobierno, el funcionamiento de los poderes ejecutivo y legislativo y la relación entre ambos para llegar a un poder presidencial más acotado y a una opinión pública más influyente. Y si bien esa opinión pública sigue presente de manera vigorosa, es evidente que los poderes ejecutivo y legislativo se encuentran estancados frente a la necesidad de profundizar la reforma democrática del Estado; esa que apenas cristalizó en la reforma electoral.

Por el lado del legislativo quizá la muestra más palmaria sea el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y mantener cerrado el expediente del Fobaproa. No es casual que hoy la reforma fiscal se encuentre empantanada, cuando la importancia del tema rebasa a los partidos encerrados en el recinto legislativo. Pero ese fue el destino que buscaron quienes hoy dicen estar en contra de la iniciativa del Ejecutivo pues cuando pudieron cambiar la correlación de fuerzas en la sociedad con la aprobación de la iniciativa de

la Cocopa, su racismo e ignorancia les dictaron que no y la inteligencia les alcanzó apenas para dar la palabra al EZLN en la tribuna de la Cámara de Diputados; sólo la palabra para que después regresaran a la selva con las manos vacías.

La necesidad y la discusión de una reforma fiscal que fortalezca las finanzas públicas y a la vez redistribuya el ingreso y aliente el crecimiento tiene más años en nuestro país que la política neoliberal, y como la reforma indígena, es uno de los temas centrales de la agenda de la reforma democrática del Estado. Pero como el Congreso de la Unión está lleno de partidos con visión partidista, esa agenda y esos temas les quedan grandes. También el Fobaproa. Si fracasaron con la reforma indígena no es raro que lo hagan también con la reforma fiscal.

Por el lado del Ejecutivo la clara evidencia de su rezago para impulsar la transición en el país es continuar de manera obcecada con la misma política económica y social de sus antecesores. Pero sin duda los dos poderes se encuentran atrapados en las limitaciones de los partidos políticos que les dan vida. La escasa simpatía de los cuadros dirigentes del PAN por Vicente Fox como candidato y aún como presidente no exculpan a ese partido de los yerros presidenciales, en todo caso esa falta de apoyo ha agudizado esos errores y con ello han derrochado y mermado la legitimidad y popularidad del Jefe del Ejecutivo que pudo dedicarse a impulsar la transición. Aunque, a descargo del PAN la visión de estadista de parte del Presidente nunca ha sido notoria.

Con tan triste panorama por el lado del Ejecutivo y del Legislativo, la esperanza del cambio sigue estando por supuesto en la sociedad misma que no deja de movilizarse en defensa de sus intereses particulares, que tienen la virtud de coincidir con el interés social y nacional. ¿O qué otro es el significado de las luchas de los ejidatarios de San Salvador Atenco; de los productores de piña, de arroz, de frijol, de caña; de los organismos defensores de los derechos humanos?

Sin embargo, seguramente pasarán muchos años antes que veamos un movimiento social semejante en amplitud y homogeneidad al que se abrió el 6 de julio de 1988 y que culminó el 2 de julio del 2000.

Pero quizá ese movimiento aún no termine de dar sus frutos y en el ámbito de una relación independiente entre los poderes ahora sea el momento del Poder Judicial a la hora de resolver las controversias de inconstitucionalidad sobre la reforma indígena y sobre la construcción del aeropuerto en terrenos ejidales. ¡Ojalá!, por el bien del país.

## PERSPECTIVA SALARIAL

19/12/01

El aumento al salario mínimo en enero de 6.9%, y el probable cierre de la inflación de 5.5% en este año, podrían llevamos a la conclusión que el 2001 es el primer año después de 1976 en que dicho salario tiene un crecimiento real, en este caso de 1.4 puntos porcentuales. Una miseria pero aumento al fin. Sin embargo, ésta que podría ser una buena noticia para los trabajadores, en tanto podría ser el indicador de que después de un cuarto de siglo su ingreso real empieza a recuperarse, inmediatamente se diluye cuando confrontamos ese dato con otros menos alentadores.

En primer lugar tenemos el hecho de que el 2001 pasará a la historia como otro año en que no solamente no se crearon los empleos que están demandando los jóvenes que entran por primera vez al mercado de trabajo, sino que se destruyeron alrededor de medio millón. Obviamente el primer impacto de este aumento en el desempleo es la disminución del ingreso familiar. De tal manera que aún concediendo que el salario mínimo hubiera aumentado 1.4

puntos porcentuales, ese raquítico aumento se evapora por la caída de la masa salarial ocasionada por el mayor desempleo.

Otra de las malas noticias para los trabajadores es que la recesión en la que se encuentra la economía mexicana continuará durante el 2002. La caída del precio del petróleo junto con el estancamiento económico en EUA, definen un horizonte económico bastante gris para México. Ello significa que el empleo seguirá cayendo con las perjudiciales consecuencias sobre los trabajadores y sus familias. Y un mal año para la economía no será un buen año para los salarios, de manera que además de imperceptible, la recuperación del salario mínimo real del 2001 será efímera.

Con esa larga historia de caída salarial, la mini recuperación registrada en el 2001 será como una golondrina que no alcanza a hacer verano.

Para que esa larga y triste historia no continúe, el gobierno tendría que tomar la firme decisión de llevar adelante una política de recuperación salarial. Al respecto es necesario recordar que en los últimos setenta años de historia de los salarios mínimos, el ciclo de caída y recuperación fue de 28 años (1940-1978), casi los que ahora se han registrado sólo de disminución sin que aún inicie el período de recuperación.

Y a pesar de ello, la campaña para abatir de nuevo los salarios se hizo presente a mitad de este año, apenas se empezaron a registrar aumentos en los salarios contractuales por encima de la inflación esperada, con el falso argumento de que el salario no puede crecer porque provoca desempleo, cuando diversas investigaciones han logrado ilustrar que la caída del salario no ha estimulado aumentos en la demanda de fuerza de trabajo.

Pero antes de hacer propuestas para iniciar la tan necesaria recuperación del salario mínimo, la consigna generalizada de empresarios y gobierno es: ¡no más de 4.5% de aumento a los mínimos en el 2002! Efectivamente, ¿cuál cambio?



## JUGAR CON FUEGO

26/12/01

En relación con la revuelta popular en Argentina y las recomendaciones de que “pongamos las barbas a remojar”, el presidente Fox declaró en pasado día 23: “No veo el porqué, aquí no hemos hecho ningún populismo sino una economía responsable. No nos hemos excedido en el gasto, al revés, hemos sido muy cuidadosos en la disciplina fiscal.

Aquí tenemos sólidas reservas internacionales, reducimos la deuda pública sustancialmente durante el año y no hay por qué preocuparse en ese sentido”.

Más que un diagnóstico objetivo de la situación económica de México, estas declaraciones del presidente Fox parecen la respuesta a los formularios de rutina que los organismos financieros internacionales aplican a las economías emergentes. Nivel de reservas, volumen de la deuda pública y del déficit fiscal han sido los parámetros constantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para calificar las políticas económicas de los gobiernos, y en consecuencia otorgar o vetar la entrada al mercado internacional de capitales y a los constantes procesos de renegociación de sus deudas externas.

En pos de la reducción del déficit público, en México el gasto público ha caído mas de siete puntos porcentuales en relación al Producto Interno Bruto (PIB) a partir de 1982, además de haber dedicado más de 50% de ese gasto al servicio de la deuda externa. El sacrificio en términos de inversión pública y de gasto social, que esas prioridades han significado para el país durante los últimos 20 años, está ampliamente documentado.

Por si ese daño fuera poco, la llamada “economía responsable” del presidente Fox, esconde un déficit público de más de 4%, mien-

tras el déficit reconocido es de menos de 1%, y el que se llegó a alcanzar en 1996 de 11%, muy cercano a los niveles con los que cerró el sexenio de López Portillo. El populismo continúa, y el presidente Fox y el FMI lo saben, sólo que ahora se encuentra dedicado a socializar las pérdidas bancarias mediante el voluminoso rescate financiero aprobado por PRI y PAN en el Congreso de la Unión en diciembre de 1998, con la ley del IPAB.

Si el presidente Fox realmente quisiera saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la explosiva situación actual argentina, tendría que analizar el estado en el que se encuentran el campo, la industria, la educación, el empleo, los salarios. Y en esos términos es evidente que el balance no puede sustentar el optimismo presidencial.

Sólo para recordar la situación del campo mexicano, a lo largo del 2001 fuimos testigos de las movilizaciones de los productores de maíz, frijol, arroz, caña de azúcar, pina y de las funestas consecuencias de los sobrecupos de importación a los autorizados sin arancel en un tratado de libre comercio con América del Norte que ignoró la incapacidad de la agricultura mexicana para competir con una de las economías más desarrolladas del mundo. Pero el drama en el campo se mide no solamente por el desmantelamiento de las condiciones de producción para este tipo de productos, sino también por la miseria y sobreexplotación de los jornaleros agrícolas en zonas exitosas para la exportación, como es el caso del valle de San Quintín en Baja California. Productores en crisis y asalariados en condiciones similares a las del porfiriato resumen la situación del campo.

Por supuesto, Argentina y México son dos países con desarrollo histórico muy distinto, pero a la hora de los balances, la violencia social se mide no sólo por los muertos en las protestas callejeras y en los saqueos, sino también por los niños que mueren por enfermedades curables; los jóvenes que optan por la delincuencia frente al cierre de oportunidades de empleo y educativas; por el desarro-

llo del narcotráfico; por los migrantes que mueren en su intento por cruzar la frontera; por la extendida militarización del país; por la discriminación racial acendrada. No, señor Fox, no son tiempos de rendir cuentas a los organismos financieros internacionales, es la hora de enfrentar la cruda realidad nacional.

## DERROTA FISCAL

02/01/02

EL PRESIDENTE VICENTE FOX no logró sacar adelante su iniciativa de reforma hacendaria. Después de casi un año de discusión sobre la propuesta que se centraba en gravar con una tasa del 15% a alimentos y medicinas para aumentar los ingresos federales en casi 130 mil millones de pesos, los legisladores lograron aprobar reformas a varias disposiciones fiscales que evitarán gravar el consumo de las grandes mayorías en esos rubros básicos.

El resultado de la discusión sobre *Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal* ilustra los nuevos tiempos que vive el país. Atrás ha quedado aquella subordinación del Poder Legislativo, cuando en el viejo régimen priista funcionaba de manera vergonzosa como ventanilla de trámites del Poder Ejecutivo. Pero no son estos avances los que ponderan algunos medios de comunicación, por ejemplo Televisión Azteca quien parece lamentar la existencia de un poder que haga contrapeso al Ejecutivo. Bastaba ver sus servicios informativos sobre las discusiones en la materia de fin de año, para percibir su campaña fujimorista contra una institución republicana.

Sin embargo, y a pesar de los nuevos tiempos que vive el país, las reformas fiscales constituyen apenas los primeros pasos para lograr el papel que le corresponde jugar al Poder Legislativo en el fortalecimiento fiscal del Estado mexicano. A este propósito hay

que recordar que la recaudación de ingresos como porcentaje del Producto Interno Bruto en México es una de las más bajas del mundo, apenas cercana al 11%.

La aprobación de las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta y las correspondientes a la Ley del Impuesto Especial sobre productos y servicios no llega a configurarse como la reforma fiscal integral que el país necesita para fortalecer las finanzas públicas, alentar el crecimiento y mejorar la distribución del ingreso. En términos del impuesto sobre la renta, homologar al 35% la tasa máxima de ese gravamen hasta alcanzar una reducción al 32% no es la mejor opción en términos recaudatorios, y tampoco para lograr avances en materia de justicia social.

En un país como México caracterizado por una profunda desigualdad en la distribución del ingreso –de acuerdo a la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares levantada por INEGI, esa desigualdad ha venido aumentando–, el alto porcentaje de ingresos concentrado en el último decil, o para ser más precisos, en el último veintil, hace posible establecer tasas diferenciadas y mucho más progresivas para las personas que se encuentran en la cúspide de la pirámide de ingresos. Los legisladores argumentan que con la reducción de ese gravamen intentan hacer al país más competitivo, pero olvidan los parámetros de profunda desigualdad social que caracterizan a México en el contexto internacional.

No es poca cosa haber logrado imponer un gravamen a las operaciones bursátiles y que el ingreso de las personas físicas sea acumulable a la hora de tasar el ISR, tampoco que el crédito al salario hasta cierto nivel vaya a cargo de los empresarios y no del gobierno, aunque aún queda mucho por hacer en el régimen de consolidación fiscal.

Por otro lado el aumento de impuestos a refrescos es bastante controvertible, si consideramos la importancia que el consumo de esos productos tiene para la población de más bajos recursos. Al respecto vale la pena recordar que México tiene el consumo per

cápita más alto del mundo en este tipo de bebidas. Hace mucho tiempo que los más pobres, que son la gran mayoría de la población, sustituyeron el consumo de productos de calidad por refrescos, de manera que se está aumentando el gravamen a un bien de alta ponderación en la canasta básica. Aunque para mejorar la situación de los productores de caña de azúcar, es de hacer notar que el aumento se aplicará a refrescos elaborados con fructosa. También es bastante discutible la conveniencia del impuesto telefónico, un servicio que de ninguna manera puede ser considerado un lujo.

Pero más allá del análisis preciso sobre cada una de las nuevas medidas fiscales, lo cierto es que las reformas fiscales aprobadas hacen evidente que existen otras vías para fortalecer las finanzas públicas y no las que pretendía el Ejecutivo a través del IVA. Y a pesar de que ese fue el principal mensaje de la decisión de los legisladores, insisto, aún queda mucho camino por recorrer para lograr una reforma fiscal integral. Y en ella la depuración de los egresos no es cosa menor, sobre todo si tenemos muy presente el elevadísimo costo fiscal de haber socializado las pérdidas privadas mediante el oneroso rescate bancario. Un expediente aún abierto.

## ESPEJISMOS

09/01/02

En el mensaje de año nuevo del Presidente Vicente Fox, se presume de la solidez de la economía mexicana que permitirá, según el Jefe del Ejecutivo, reiniciar el crecimiento en cuanto se superen las actuales turbulencias y dificultades internacionales. Y a partir de esa "economía que descansa sobre bases sólidas", el Presidente Fox señala que el reto de esa "futura buena marcha de la economía es reflejarse en el poder de compra de las familias y en el bolsillo de

cada mexicano. Ese es el reto que, para este año que iniciamos, asumimos mi gobierno y yo; y por el que estamos trabajando". Sin embargo, la realidad económica y la política que el gobierno está siguiendo en la materia están muy lejanas del diagnóstico y de la promesa formulada en la salutación de inicio de año.

En primer término la solidez de la economía la mide el Presidente por la estabilidad en el tipo de cambio y por sus bajos índices inflacionarios. Mal punto de partida, sobre todo si, como es el caso de nuestro país, el primer indicador se explica por el aumento de contratación de deuda externa (privada y pública) y por la entrada de inversión extranjera (directa y en cartera), mientras que la verdadera solidez de una moneda está basada en la competitividad de la economía. Todos sabemos que no es el caso de México, cuyas exportaciones se generan fundamentalmente por las empresas transnacionales en un comercio que no puede caracterizarse entre países sino entre empresas. Por su parte el cumplimiento de la meta inflacionaria se explica no por una generosa y abundante oferta de bienes, sino por una depresión en el consumo y un alto contenido de importaciones en el mismo.

Mientras no exista el respaldo de una estructura productiva integrada y competitiva, la estabilidad en las variables monetarias y financieras será siempre un espejismo. Y a la hora de cumplir con las promesas, lo peor es partir de espejismos. Es lo que está haciendo el Presidente Fox. El dismantelamiento de la estructura productiva de todos los sectores durante los últimos veinte años se refleja en las bajas tasas de inversión y en su alta dependencia de insumos importados, de manera que los cortos períodos de auge económico se han visto sucedidos siempre de fuertes devaluaciones provocadas por la adicción a las divisas. Las últimas dos décadas están poniendo en evidencia un nuevo modo de ser de la economía mexicana que dista mucho de la solidez diagnosticada por el gobierno: inestabilidad, alta dependencia de importaciones y bajas tasas de crecimiento.

La drástica reducción de la inversión pública a partir de 1982 no ha sido compesada por la inversión privada y cuando esto ha sucedido, como en el caso de la construcción de carreteras, muy pronto el gobierno entró al rescate de esos inversionistas cuyos adeudos fueron a dar al Fobaproa con los consabidos costos fiscales a la hora de legalizar aquella deuda como pública. Un país que no dedica recursos suficientes al crecimiento futuro es un país inviable; sólo en el 2001 la inversión bruta fija cayó en promedio un 12% en relación al año 2000, mientras que la de maquinaria y equipo lo hizo en 18%. Por lo tanto el optimismo de que una vez iniciada la recuperación de EUA la nuestra se dará de manera automática, es otro espejismo más si consideramos que las bases del crecimiento económico se están desmantelando de esa manera.

Nada sustenta la supuesta solidez de la economía y tampoco la promesa de recuperación del bienestar social. El incremento a los salarios mínimos en el 2001 menos de un punto porcentual por encima del crecimiento de precios durante el año, habla de una recuperación imperceptible en el salario de ese sector de trabajadores, aunque en rigor se trata de un estancamiento, que combinado con el creciente desempleo, el resultado neto es negativo para los asalariados. De igual manera, los insuficientes aumentos en el gasto y la inversión social, siguen cavando el gran abismo entre los que mucho tienen y los que nada poseen.

Así la fragilidad de la economía va de la mano de la profundización de los abismos sociales, de manera que el mensaje de año nuevo habrá sido tan creíble como lo es la existencia de los Reyes Magos.



## MAYORÍA DE EDAD

16/01/02

En la presentación del Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sic) 2001-2006, el pasado 11 de enero, el Presidente Vicente Fox declaró que el trato que el gobierno dará a los campesinos parte del reconocimiento de su mayoría de edad. No es que el Jefe del Ejecutivo haya registrado algún fenómeno demográfico mediante el cual a partir de este mes todos los productores en el campo cuentan con más de dieciocho años y que hasta el 2001 carecían de los derechos y las obligaciones políticas que derivan de haber alcanzado esa edad. No, obviamente el Presidente no se refiere a algún súbito cambio en la edad de quienes se dedican a las actividades del sector primario, sino que la expresión "mayoría de edad" le pareció la más adecuada para definir la esencia de la política de su gobierno hacia los campesinos: el abandono. Un abandono que por lo demás data de al menos 20 años atrás y que según lo anunciado por el actual gobierno, continuará.

Esa es la conclusión que se desprende de un Programa Sectorial que coloca como una de sus metas importantes dejar atrás la cultura de los subsidios y el paternalismo, para sustituirla, como declaró el Presidente Fox, con apoyos que generen agronegocios, capacidades permanentes y capital para la producción. A pesar de que el Presidente Fox no aprendió economía en las universidades del primer mundo como sí lo hicieron sus tres antecesores, De la Madrid, Salinas y Zedillo, pareciera que la Coca Cola es también una buena escuela para aprender el estribillo de que toda medida que atente contra las sacrosantas leyes del mercado es una medida que va en contra de una economía sana.

Para los distinguidos doctrinarios del neoliberalismo, no importa que los gobiernos de los países del primer mundo beneficien con voluminosos subsidios a sus productores agropecuarios para hacerlos competitivos, y no importa que transnacionales como la Coca Cola se beneficien de la importación de la fructosa por encima de los acuerdos del TLCAN en perjuicio de los productores de caña de azúcar. Tampoco que agronegocios como el de la familia Fox se hayan beneficiado de un rescate bancario muy lejano de las transparentes leyes del mercado. ¡Así cualquiera puede ser mayor de edad!. Seguramente esos subsidios no se encuentran en la cultura que el Presidente trata de erradicar.

En la misma ceremonia, el Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, agregó lo suyo y precisó que la definición de ese programa sectorial se hizo bajo la premisa de que el campo "tiene que ajustarse a las nuevas reglas del juego económico" y ya encarrerado, hizo saber que el objetivo es buscar "equilibrios territoriales y nuevas actividades económicas, no necesariamente agropecuarias o pesqueras, para ofrecer a los habitantes rurales otras opciones económicas sustentables..."

Si el abandono del campo, no es novedad alguna y tampoco el imperativo de las nuevas reglas económicas, lo que sí constituye algo inédito es que el programa para el sector primario busque, como señala el Sr. Usabiaga, desarrollar actividades distintas a la agricultura, la ganadería, la pesca (¿y la silvicultura?), que de acuerdo a la clasificación internacional de las actividades económicas son justamente las que definen al sector primario. Tan agobiado se encuentra el titular del ramo por las demandas de los enardecidos campesinos, que de un plumazo prefirió desaparecer al sector y ofrecerles "otras opciones económicas sustentables", por ejemplo, ¿jardineros en California?

Son muchos los años que aportan evidencia sobre el fracaso de una política agropecuaria que en aras de ajustarse a las "nuevas reglas del juego económico" disminuyó significativamente la in-

versión pública en infraestructura, eliminó subsidios, abrió indiscriminadamente las fronteras a economías con productividades mucho mayores y por si fuera poco, de manera discrecional permite los sobrecupos de importación en granos básicos y otros productos. Continuar con la misma política hacia el sector es seguir cavando la fosa para nuestro país como nación independiente.

## EL PRI EN LA ALTERNANCIA

23/01/02

Frente a las elecciones de los tres partidos nacionales más importantes, el Presidente de la República añora la hegemonía de un solo partido en el Congreso de la Unión que tan bien aceptó la maquinaria del poder durante el régimen priísta, hará entonces todo lo posible por hacer conciliar la pluralidad política de los nuevos tiempos con la recuperación de ese control.

Así se lo exige un programa económico que continúa con los mismos lineamientos iniciados por los gobiernos priístas en diciembre de 1982. Como desde el Poder Ejecutivo no existe la visión de Estado que ponga por encima de cualquier otro los intereses nacionales y sociales, y sí la de continuar garantizando los privilegios de los grupos económicos que se han beneficiado con las reformas económicas de la dos últimas décadas, la alternancia en el poder determina pocos cambios en el juego que se ha iniciado entre el gobierno y la sucesión en el PRI. Veamos.

En los tiempos del régimen priísta era el presidente de la República quien definía a los cuadros dirigentes del partido oficial, y la pirámide del poder se reproducía puntual y disciplinadamente gracias a a las lealtades retribuidas con pequeñas parcelas de ese poder. Todo ello con las reglas del juego propias de un régimen

corporativo que se nutría de la organización sectorial del partido. Esta maquinaria para el ejercicio y la transmisión del poder empezó a crujir en 1988 con la rebelión ciudadana en las urnas de aquel seis de julio. El triunfo del PRI nunca demostrado legalmente –pero avalado y legitimado por el PAN– fue leído por Salinas como el agotamiento de los servicios electorales que hasta entonces había garantizado el corporativismo. En 1988 las organizaciones sociales priístas no pudieron aportar su cuota de votos, y en el caso del sindicato de petroleros, esa traición fue cobrada a los pocos meses con el encarcelamiento de sus líderes.

Ese agotamiento de la funcionalidad de la organización corporativa del PRI, llevó a Salinas a fantasear con la sustitución del PRI por otro partido que evitara futuros tropiezos como el de julio de 1988. No lo logró. Lo que sí hizo fue armar una maquinaria electoral paralela alrededor de su recién inaugurado Programa Nacional de Solidaridad, que usó para reforzar el debilitamiento de las burocracias corporativas iniciado con Miguel de la Madrid. Hoy, a doce años de aquel proyecto salinista que algunos llamaron de modernización partidaria, resulta que su suerte se está dirimiendo en la elección de la próxima dirigencia nacional priísta.

Los estertores del poder del régimen priísta hicieron que la candidatura presidencial del 2000 cayera en Labastida, un hombre gris y medio enemistado con Salinas, apoyado por Zedillo quien padecía también algunas pequeñas venganzas del otrora jefe del clan; mientras que su opositor Madrazo era aplaudido por los deteriorados cuadros medios quienes veían en él al abanderado de la rebelión contra los tecnócratas. Fue así como ese proceso sirvió para medir fuerzas entre los salinistas-madracistas apoyados por bases priístas de un partido de ciudadanos que nunca fué, contra los grupos de Labastida-Zedillo atrincherados en la vieja maquinaria priísta de las organizaciones corporativas.

Hoy continúa en el PRI el mismo estira y afloja, con los mismos proyectos, los mismos poderes tras bambalinas y algunos

prestanombres. En términos formales con la próxima elección interna se estaría definiendo con qué partido se trata de recuperar el ejercicio del poder sin intermediarios, si con uno que intenta resucitar a las organizaciones corporativas (Labastida-Paredes), u otro que tira anzuelos a las supuestas bases ciudadanas priistas (Salinas-Madrado).

La diferencia entre uno y otro grupo en la rivalidad interna, no se encuentra en programas o proyectos nacionales. No. Ambos han promovido, se han beneficiado y han sido gestores de la política de empobrecimiento, desmantelamiento de la estructura productiva, corrupción e impunidad. Unos con mayor desprestigio político, pero al final todos cómplices. Y sin embargo ambos con posibilidad de recuperar la Presidencia de la República en el 2006 y la Cámara de Diputados en el 2003. Lo de la alternancia va en serio, lo del cambio hacia un régimen democrático, no.

Por su parte la investigación abierta en la PGR contra funcionarios de Pemex y dirigentes del sindicato de petroleros, dada a conocer la semana pasada, deja claro por dónde andan los apoyos del gobierno de Fox en la pugna interna del PRI. Como en los viejos tiempos. Y todavía un despistado perredista me pregunta: ¿quién será mejor para el PRD? Bueno, espero que sea eso, un despistado.

## EL PRD EN LA ALTERNANCIA

30/01/02

Aunque el proyecto económico del gobierno de Vicente Fox sea el mismo que aplicó el régimen priista durante los últimos veinte años, las condiciones de la lucha del PRD han cambiado de manera significativa. Podrá continuar oponiéndose al proyecto neoliberal del PAN-PRI con mayor o menor éxito; lo que no puede reeditar es la

circunstancia histórica de su crecimiento a partir de la insurgencia de un movimiento ciudadano por el respeto al voto como el que se vivió de 1988 al 2000, por la sencilla razón de que ese movimiento ya triunfó con la derrota del PRI, mientras el que existe para lograr una patria para todos es disperso y limitado, o de avanzada como el EZLN, pero fuera del espectro partidario.

No es fácil para el PRD lidiar con esta circunstancia histórica, menos aún cuando parece que sus dirigentes no tienen claridad sobre el desafío que enfrentan en la nueva etapa de lucha, y entonces prefieren atrincherarse en la esperanza de que los ciudadanos le cobren caro a Vicente Fox el costo social de su continuismo económico en las urnas del 2003 y del 2006, el mismo optimismo que ha guiado al partido desde su fundación, confianza no siempre retribuida por la realidad.

Cuando hablo de dirigentes perredistas me refiero tanto a los del bloque de Rosario Robles como a los llamados *Chuchos* y *Amalios*. A pesar de las diferencias entre uno y otro grupo, el discurso de ambos justifica la necesidad de fortalecer a la izquierda para derrotar ese proyecto económico. En los segundos, sin embargo, se trata de un velo ideológico muy fácilmente rasgable. Acostumbrados como están a la política palaciega, sus grados de libertad para definir lo que conviene o no pactar con el gobierno son muy, muy amplios. No es el caso de Rosario Robles quien ya desplegó un liderazgo de izquierda vigoroso e inteligente en la difícil prueba que es gobernar el monstruo de la ciudad de México.

Por fortuna y a diferencia de 1999, en la elección de su próxima dirigencia nacional el PRD cuenta con un liderazgo de izquierda fuerte como el de Rosario Robles. Esto le da la posibilidad de ganar con el suficiente margen como para no repetir el triste espectáculo de tres años atrás. Ciertamente, tampoco es desdeñable el control del aparato partidario de *Chuchos* y *Amalios* quienes harán lo imposible por reducir el margen de diferencia y de esa manera tener una presidenta nacional acotada, para que el PRD continúe en el limbo poli-

tico o en todo caso con algunos destellos de buen desempeño como fue la derrota del proyecto fiscal de Fox.

Pero por fortuna todo indica que existe una rebelión de las bases perredistas contra la expropiación del partido a favor de unos cuantos, y que ello permitirá que Rosario Robles llegue a la dirección nacional sin mayores problemas. Sin embargo, para que ese triunfo no sea una simple alternancia en el poder –como sucede con el país– y se transforme en la consolidación de un partido de izquierda democrático y moderno, la nueva dirección tendría que orientar sus acciones hacia la refundación del partido en todos los órdenes, empezando por el programático.

El nuevo programa partidario debería tener como objetivo central hacer una realidad la patria para todos, en tanto la democracia electoral constituye ya una conquista ciudadana. Pero mal haría el PRD en pensar a la justicia social como el resultado de una serie de medidas económicas aplicadas desde arriba y no como producto de una nueva relación entre el Estado y la sociedad que se construye desde abajo, y que en el actual período histórico no puede ser otra que el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas y de las organizaciones sociales.

Ni uno ni otro proyecto han sido ejes programáticos en el PRD, para ilustrarlo basta recordar el voto perredista en el Senado por la reforma indígena y el haber guardado en un cajón –para no perder los votos corporativos– su anteproyecto de reforma laboral que reivindica la democracia y autonomía sindicales. Seguramente retuvo algunos de esos votos, pero a cambio renunció al horizonte de la democratización del Estado más allá de los procesos electorales.

Para que el PRD recupere ese horizonte tendría que romper con la ideología del nacionalismo revolucionario al que la izquierda se acogió desde la fundación del partido, y redefinir su proyecto en función del interés de los asalariados y de los indígenas que es la democracia participativa, la autonomía frente al Estado. No tengo

claro que esa sea la pretensión de la izquierda perredista, pero ojalá me equivoque.

## EL PAN EN LA ALTERNANCIA

06/02/02

Como el PRI y el PRD, el partido en el gobierno renovará su dirección nacional en el primer trimestre del año, y como en esos casos, quien quede al frente de ese partido definirá en buena medida el rumbo político del país en los próximos tres años. La decisión del consejo de notables del PAN para elegir entre Carlos Medina Plasencia y Felipe Bravo Mena estará definiendo las posibilidades de ese partido para obtener la mayoría en la Cámara de Diputados en el 2003; el tipo de relación con el gobierno de Fox, y en el mismo paquete, su capacidad de retener el poder en el 2006, todo ello en un ambiente de bastante incertidumbre política.

Para quienes pensaban que la llegada de Fox a la Presidencia de la República abría un largo ciclo de permanencia en el poder del partido tradicional de la derecha en México, dejaban de lado la caracterización del proyecto hegemónico del PAN y de Fox, sobre todo a partir de 1988; la lejanía panista de su candidato triunfante; y las alianzas del gobierno de Fox con algunos sectores del PRI. Esa previsión suponía el apoyo ciudadano a un proyecto distinto al impuesto por el PRI a partir del gobierno de De la Madrid, cuando en realidad la ciudadanía apoyó a Fox en pos de la entelequia del cambio, que después de setenta años del PRI significaba sólo vencer al partido en el poder, pero no necesariamente derrotar su proyecto. El continuismo del programa económico de Fox es la mejor evidencia de que solamente cambiaron las siglas en el poder.



La caracterización del proyecto de Fox y del PAN permite entender la elección de su nueva dirigencia nacional como parte de una disputa que trasciende al mismo PAN y al gobierno de Fox, para dirimir qué grupos de la clase política de la alternancia se colocan al frente de la aplicación de ese proyecto, si el sector que quisiera enarbolar la bandera foxista representado por Medina Plascencia o aquel que demanda mayores posiciones partidistas en el ejercicio del poder representado por Bravo Mena; pero uno y otro tratando de garantizar la permanencia de un programa de gobierno excluyente, concentrador del ingreso y de la riqueza, que encubre la corrupción y hace crecer la impunidad. Y es justamente la naturaleza de este proyecto la que hace trascender la elección de la dirigencia panista de los marcos del partido y del gobierno foxista.

Si de lo que se trata en la elección del PRI –como analizaba en mi colaboración de la semana pasada– y ahora en la del PAN, es cómo garantizar la continuidad del programa económico vigente, es muy importante tratar de esclarecer los lazos con los grupos de poder que implantaron ese proyecto y que de muchas maneras siguen actuando en el escenario político nacional. Me refiero por supuesto a todo el entramado de intereses económicos creados en los últimos tres sexenios priístas cuyo núcleo más fuerte se desarrolló en el gobierno de Carlos Salinas, no sólo porque el monto de las privatizaciones en ese sexenio generó nuevas plataformas de acumulación y de poder económico, sino también por el liderazgo de trascendencia sexenal que encabezó Salinas. Al respecto, vale la pena recordar su fallido experimento de legalizar la reelección presidencial, pero intención al fin; también las seguridades que José Angel Gurría daba a los inversionistas japoneses sobre la permanencia del proyecto por lo menos hasta el 2024.

Para que el PAN retenga el poder en el 2006 necesita con urgencia ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en el 2003, de otra manera no podrá hacer realidad las reformas estructurales pendientes, esto es la laboral y la energética, y si no es capaz de llevarlas

adelante, entonces estará en entredicho su funcionalidad política para los intereses económicos que representa. Pero pareciera que antes de plantearse con visión histórica ese objetivo, el PAN aún se encuentra dirimiendo las reyertas políticas propias de una clase política bisoña: dar esa pelea con el grupo foxista al frente o con los cuadros del partido, y en esa disputa se le puede ir el poder de las manos.

Si así sucede, la derrota del PAN podrá ser una tragedia para el partido pero no para el proyecto que representa; por lo pronto la cercanía de Medina Plascencia con Fox y de este con Madrazo estaría indicando quiénes son los representantes del viejo proyecto salinista; mientras que cada uno por su parte, Bravo Mena y Beatriz Paredes, estarían tratando de recuperar la presencia de los viejos cuadros de sus partidos en esa reyerta por el poder en la cual el país es solamente un botín a repartirse.

## TARIFAS ELÉCTRICAS Y PIDIREGAS

13/02/02

El aumento a las tarifas del servicio de energía eléctrica en el que se traduce la reducción de subsidios finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación del pasado miércoles, es el resultado de una larga historia de abandono hacia uno de los sectores estratégicos para el desarrollo del país y uno de los pasos iniciales hacia su privatización. Ese abandono se evidencia en la caída de los recursos públicos dedicados a la inversión en infraestructura para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica durante los últimos años, y en el crecimiento de los Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto Público (Pidiregas) que como compensación se ha realizado a par-

tir de la aprobación de ese esquema por el Congreso de la Unión en 1995.

En efecto, las reformas a la Ley General de Deuda Pública y a la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal de diciembre de 1995 aprobadas por el Congreso de la Unión (con sólo un voto en contra en la Cámara de Diputados), han permitido al Ejecutivo atenuar –con altos costos financieros– la caída en la inversión pública en paraestatales estratégicas como Pemex y CFE a través de los Pidiregas; capital aportado por los inversionistas privados que hoy en día forman parte de la llamada deuda escondida, esto es aquellos compromisos adquiridos por el gobierno federal que reclaman de manera ineludible recursos presupuestarios y que sin embargo no están contabilizados como parte de la deuda pública y por lo tanto tampoco su impacto sobre el déficit público. Junto con los Pidiregas, en esa elusión contable se encuentran los costos de la reforma a la seguridad social; los que corresponden al rescate bancario que incluye el carretero y el derivado de los fideicomisos ubicados en la banca de desarrollo, los que se estima ascienden a un 80% del Producto Interno Bruto.

El subterfugio para eludir la contabilización de esa deuda, en el caso de los Pidiregas, se apoya en la reforma al artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública que señala que para las obligaciones derivadas de esos financiamientos, sólo se “considerará como pasivo directo...y hasta el pago total del financiamiento, a los montos de financiamiento a pagar durante el ejercicio anual corriente y el ejercicio del siguiente y el resto del financiamiento se considerará como pasivo contingente hasta el pago total del mismo”. Esto es, los pasivos totales adquiridos por el gobierno federal no se registran en el volumen de la deuda pública, aunque esos pasivos exijan cada vez de mayores recursos para su amortización. Por su parte la reforma concomitante al art. 30 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal obliga a la Cámara de Diputados a

que el servicio de esa deuda “se considerará preferente respecto de nuevos financiamientos, para ser incluido en los presupuestos de egresos de los años posteriores, hasta la total terminación de los pagos relativos”.

1997 fue el primer año en que los Pidiregas asomaron la cabeza en el presupuesto de egresos al representar el 1% del gasto neto del gobierno federal y el 23.5% de la inversión presupuestaria. Dos años después, en 1999 ya alcanzaban el 27.6% del gasto neto, y el 38.2% de la inversión presupuestaria. En el 2001 los requerimientos financieros del sector público por concepto de Pidiregas fue de 45 mil 392 millones de pesos, un poco menos que el servicio de la deuda del IPAB cuyos requerimientos fueron de 55 mil 209 millones. Para el mismo año el gasto en proyectos de inversión financiada en CFE representó casi el 20% de los ingresos propios de esa paraestatal.

A pesar de que las reformas mencionadas obligan al Ejecutivo a que en el proyecto de presupuesto de egresos “se hará mención especial” sobre las inversiones bajo la modalidad de Pidiregas, lo cierto es que esa información no siempre es suficiente, además de que el embrionario desarrollo del trabajo legislativo profesional es insuficiente para analizar con detenimiento la evolución y el impacto en finanzas públicas de esos proyectos. Mientras eso ocurre, los Pidiregas siguen creciendo como la cabeza de la Hidra y las obligaciones ineludibles de esos compromisos con la iniciativa privada, provocan que industrias estratégicas como la eléctrica continúen a la deriva, y que para cumplir con esos compromisos el gobierno tome medidas desesperadas como el alza de tarifas que apenas servirá para continuar sirviendo esa onerosa deuda.

## LA FRONTERA QUE SE DESPLAZA

20/02/02

El pasado miércoles, en la ciudad de Monterrey, el Presidente Vicente Fox presentó el Programa de Desarrollo Regional Frontera Norte 2001-2006. El evento fue motivo para que el Presidente hiciera una serie de planteamientos que vienen a reafirmar la política entreguista que los gobiernos del PRI fueron profundizando con el paso del tiempo. Para dar prueba de que la política que su gobierno sigue en la relación con Estados Unidos constituye una etapa más de esa subordinación, Vicente Fox trató temas tan delicados como el energético, el migratorio y el de seguridad pública, como si se tratara de un representante del gobierno del país vecino y no como el presidente de una nación soberana llamada México.

La presentación de ese Programa, sirvió de preámbulo para el séptimo encuentro que Vicente Fox tendrá con George W. Bush el próximo 22 de marzo en la misma ciudad nortea, cuando se realice la Conferencia Internacional para el Financiamiento del Desarrollo (que por cierto coincidirá con la presentación del Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo -Pronafide- del presente sexenio, ¿simple casualidad?). Como si la relación entre los dos países pudiera encasillarse en el estado contable de una tienda de abarrotes, Fox dijo que en esa reunión ambos mandatarios harían “un corte de caja, un recuento de los avances que ha habido en la relación bilateral y a plantearnos soluciones”. Por lo pronto el futuro del programa para la frontera norte quedó supeditado a los resultados de esa entrevista con Bush de la que saldrán, según Vicente Fox, “importantes decisiones para cumplir los propósitos, metas y objetivos de este plan de desarrollo”.

Pero no es solamente ese anuncio el que deja la sensación de que la línea fronteriza se desplaza hacia el sur de manera firme. El Pre-

sidente Fox ubicó al programa para la frontera norte como el complemento del Plan Puebla-Panamá que “pretende arraigar y generar oportunidades para los ciudadanos que viven en esa parte del país”, y poner un freno “al problema creciente de la migración de Centroamérica en su camino hacia Estados Unidos...” Dicho de otra manera, el Plan y el Programa serán los filtros para regular el acceso de mano de obra a los Estados Unidos según las necesidades de ese país.

En materia de seguridad pública, Fox anunció la “elaboración de un protocolo de seguridad conjunto México-Estados Unidos”, además de la coordinación y colaboración para la vigilancia de los puntos de entrada al vecino país del norte. No es la primera vez que tenemos noticia de ese colaboracionismo en *materia migratoria*, que ahora se va convirtiendo en una especie de política de Estado, en la que el gobierno mexicano no sólo se concibe como el “traspasio” de Estados Unidos, sino que además acepta la indigna función de limpiar ese traspasio de cualquier amenaza a los intereses de su vecino. Por su parte el tema de energéticos fue planteado por el Presidente Fox en los amenazantes términos de “interconexiones energéticas en México y con Estados Unidos”, seguramente inspirado en la tesis de su homólogo Bush de que en realidad el petróleo mexicano es propiedad de Norteamérica, y sólo una casualidad el que los yacimientos se encuentren en nuestro territorio, misma que planteó en su primera visita a México y precisamente en el rancho de Fox.

Para Fox, todas estos proyectos harían del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, un Tratado *plus*. “La idea de impulsar el concepto de un Tratado de Libre Comercio *plus*, es esa. Es decir, hay que profundizar en la relación, profundizar en la integración. Esta debe ser una línea estratégica, ...”. No se trata pues de replantear esa integración, no se trata de revisar y modificar los términos del TLCAN para que la apertura económica se transforme en un instrumento de desarrollo y no en uno de subordinación como

hasta ahora. No lo que el Sr. Fox quiere es profundizar ese Tratado mediante el sellamiento de la frontera contra la mano de obra de la región –no sólo la mexicana–; también mediante la entrega de nuestros recursos energéticos; y a través de la política colaboracionista en materia de seguridad. Así la presentación del Programa Frontera Norte fue una buena ocasión para dejar en claro que esa línea fronteriza se está acercando rápidamente a la del sur.

## REFORMA LABORAL Y PRI

27/02/02

Mientras los resultados para elegir a la nueva dirigencia nacional del PRI, se traducen para sus miembros en la disyuntiva entre continuar aglutinados alrededor de su sigla o partirse para engrosar otra organización política, la suerte de ese partido no se define totalmente en las urnas del pasado domingo. En otro flanco, y desde el año pasado, se han ido gestando consensos que de traducirse en reformas legales, vendrían a resquebrajar una de las columnas básicas del poder priísta: el corporativismo sindical. Me refiero a los resultados iniciales de la mesa de trabajo para la reforma laboral convocada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS) (denominada Mesa Central de Decisión –sic–) en la que además de los representantes gubernamentales han estado participando las organizaciones patronales, sindicales (de manera relevante la UNT), y connotados abogados del laboralismo democrático.

De acuerdo con un documento elaborado por la propia STYPS que sintetiza los resultados iniciales de esas discusiones, la visión de la reforma laboral que hasta ahora ha prosperado es limitada en tanto es sólo una reforma a la ley reglamentaria (LFT) y no al artículo 123 constitucional, de manera que temas tan importantes como la justi-

cia laboral y el papel que en ella tienen las juntas de conciliación; la igualdad de los trabajadores ante la ley y la aberrante existencia de regímenes especiales como el apartado "B"; y el mecanismo para la determinación de los salarios mínimos, entre otros temas fundamentales, quedan intocados.

Si el documento de marras se traduce en una iniciativa de reforma a discutir en el Congreso de la Unión, nos encontraremos muy lejos de vivir debates y definiciones como la del Constituyente de 1917 en la que el artículo 123, además de su carácter vanguardista, constituyó uno de los espacios privilegiados en el que se plasmó el pacto social que dio vida al Estado-nación en México. Sin embargo, y a pesar de esas limitaciones esa reforma podría ser determinante para la suerte del régimen político en México, sobre todo por la importancia de temas como el de la libertad y democracia sindicales que hasta ahora se han acordado en dicha mesa de trabajo.

En efecto, las reformas al art. 365 de la LFT que propone la mesa de trabajo, establecen la creación del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos, que de crearse socavaría la existencia de los contratos de protección y eliminaría el requisito de la "toma de nota" aplicada por la STYPS y las Juntas Locales, y que hasta ahora ha constituido uno de los principales mecanismos de control del Estado sobre las organizaciones de los trabajadores y razón de existencia para los sindicatos oficiales. Además, y mediante reformas al artículo 371 de la LFT que norma el contenido de los estatutos sindicales, se establece el requisito de que la elección de los miembros de la directiva sindical, será "mediante voto universal, directo y secreto", que de llevarse adelante crearía condiciones para el ejercicio democrático del derecho de los trabajadores a nombrar a sus representantes, en tanto permitiría la transparencia en las elecciones sindicales y eliminaría la fuente de las represalias de las dirigencias sindicales por el ejercicio del voto abierto -cuando se da el raro caso de votaciones- .



Frente a los fracasos de las reformas indígena, fiscal y energética, al gobierno de Fox le urge sacar adelante la reforma laboral en el presente año en tanto el próximo será electoral con el consiguiente impacto en la dinámica de trabajo del Congreso de la Unión. Por su parte, las fuerzas democráticas del país se enfrentan a la opción de descalificar los resultados de la mencionada mesa, o por el contrario, recogerlos y desarrollar una estrategia que fortalezca la correlación de fuerzas necesaria para una reforma que cumpla con los principios que el documento hasta aquí planteado se propone como adiciones al artículo 5 de la LFT, entre otros, "la libertad, autonomía y democracia sindicales", sin menoscabo de derechos conquistados. Después de desarrollar esa discusión en el ámbito social, y de llegarse a los consensos necesarios, vendría la hora de los partidos políticos en el Congreso.

Difícilmente el PRI daría su respaldo a una iniciativa con reformas como las aquí citadas, pues sabe que su vida depende de la prolongación de todo control antidemocrático sobre las organizaciones sociales; mientras que el PRD tendría que dejar atrás su pragmatismo electorero —el mismo que lo llevó a no respaldar el anteproyecto de reforma laboral elaborado por un grupo de especialistas y presentado al CEN de ese partido en 1998. Sin duda la suerte de la reforma laboral es incierta, como lo es hasta ahora el futuro de la reforma democrática del Estado.

## EFFECTOS COLATERALES

06/03/02

Invitado por la Universidad Iberoamericana a dar una conferencia, el ex presidente Carlos Salinas seguramente aprovecha su estancia en el país para felicitar y hasta celebrar con Roberto Madrazo el

arribo de este a la dirigencia del PRI. Nada más grato a sus aspiraciones de continuar jugando un papel relevante en la política mexicana que acompañar el triunfo de quien llevará adelante un proyecto de continuidad a la política impulsada desde su sexenio. No es que en su caso Beatriz Paredes hubiese impulsado otro proyecto, pero sabemos que en la elección del PRI se estaba jugando el destino de los grupos de la clase política por ahora desplazada del poder presidencial. De haber triunfado Paredes los sectores cercanos a Labastida y Zedillo habrían sido los beneficiarios del ejercicio del poder que aun conservan los priistas y que no es poco. Hoy, con el triunfo de Madrazo vuelven por sus fueros los cercanos a Carlos Salinas.

Pero con el resultado de las elecciones priistas no sólo gana Salinas, gana también Fox, a quien le urge una recomposición de fuerzas en el Congreso de la Unión que le permita hacer pasar alguna de las iniciativas pendientes del llamado ciclo de cambio estructural, iniciado justamente por Salinas en la LV Legislatura (1991-1994). Sin el apoyo del PRI sería imposible que el Congreso aprobase la reforma eléctrica y la reforma laboral, pero ahora que se ha definido al triunfador en ese partido, seguramente el gobierno federal y el PRI trazarán una ruta de negociación que otorgue certidumbre y beneficios a ambas fuerzas: conservación de cotos de poder para el priismo a cambio de fluidez a las iniciativas foxistas. El asunto no es sencillo, porque en la Cámara de Diputados las fuerzas de Beatriz Paredes son mayoritarias; habrá que ver qué resultados tiene la operación cicatriz que han iniciado los diputados Gustavo Carvajal y Samuel Aguilar. Pero todo ello se desarrollará en el campo fértil de las viejas coincidencias entre los intereses del PRI y del PAN que tan bien supo armonizar Carlos Salinas con su declarada alianza histórica, y que los congregados alrededor de Paredes también usufructuaron.

Y porque el triunfo de Madrazo es también el triunfo de Fox, se debilita la necesidad de constituir un partido tercerista que otor-

que al Ejecutivo Federal el apoyo que el PAN no le ha dado. Esas que eran las intenciones de las fuerzas dispersas constituídas por los promotores del voto útil, los amigos de Fox y los membretes de los pequeños partidos a la caza de las prerrogativas electorales, hoy pierden significado. Pero no sólo esas fuerzas verán frustradas sus intenciones, también los sectores del PRD encabezados por Jesús Ortega tendrán que posponer para mejor ocasión la constitución de ese centro tan añorado, por ahora el PRI de Madrazo lo llenará. Y también gracias a esta funcionalidad del PRI los márgenes de maniobra fuera de ese partido se reducen, y con ello las posibilidades de cualquier ruptura significativa al interior de ese partido. En varias ocasiones he sostenido que la ruptura histórica del PRI se agotó en 1987 con la salida de la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. En política las definiciones se toman a tiempo, o no se toman.

Por otra parte, llama poderosamente la atención que las elecciones del PRI con su esperado *cochinero* y *delincuencia organizada* de por medio, expresiones usadas por los diputados priistas, Levín y Moreno, hayan despertado tanto alboroto y expectación en ciertos sectores progresistas del país. Es evidente que los setenta años en el poder de ese partido dejaron huella profunda en la sociedad y que a pesar de todos los lastres de esa cultura política o precisamente por ellos, el otrora partido oficial siga alentando esperanzas de cambio en ese tipo de sectores. Toda ilusión tiene su fundamento, y seguramente esta que se fabricó en torno a que esas elecciones podrían ser democráticas y limpias, o que si ganaba Paredes el país también ganaba, esá tejida con los hilos de la ausencia de un proyecto de izquierda como alternativa de poder. Algo así como "si el PRD no encuentra su rumbo, el PRI podría reconvertirse, regenerarse". Sí, hay muchos que prefieren aferrarse al extravío de que existe un PRI bueno y un PRI malo. ¡Pobres ilusos!

Después del triunfo de Madrazo veremos que crecerá con fuerza la propuesta de reelección de legisladores y presidentes munici-

pales y ya encarrerados, durante la segunda mitad del sexenio se sumará la propuesta de reelección de Presidente de la República. Salinas podría estar frotándose las manos de gusto: aquel proyecto de 24 años en el poder (Gurria *dixit*) podría necesitar de nuevo de sus servicios.

Después de la elección priista, el período ordinario que inicia el próximo quince de marzo será testigo de un mayor desahogo para las iniciativas foxistas, y si en el PAN gana Medina Plascencia, con mayor razón. Fox estará contento, y quizá la caída en picada de su apoyo por la ciudadanía empiece a interesarle menos. *¿Y el país?* Bien, gracias; la transición también.

## CRISIS EN LA IBERO

13/03/02

*Con mi solidaridad con el Exodo por la Vida de las mujeres de Ciudad Juárez, Chih.*

Durante las últimas semanas la prensa ha estado informando del ambiente represivo que se vive en la Universidad Iberoamericana. La historia se remonta a la llegada de Enrique González Torres (EGT) hace cinco años, como rector de esa institución. Ajeno a la comunidad y con limitados antecedentes universitarios, EGT ha venido cuestionando a la comunidad por su lejanía frente a las exigencias de una nueva competencia nacional e internacional. Sin embargo su supuesto carácter renovador rápidamente ha demostrado sus fracasos.

Desde el inicio EGT ha pretendido precarizar el modelo laboral ya que según dicho rector, sólo mediante la subcontratación ampliada, la contratación temporal de académicos y la supresión del sindicato, se podría colocar a la Ibero al nivel de Harvard. Su en-

frentamiento no se limitó al sindicato sino que se amplió al mismo modelo que la Ibero había desarrollado, el que se sustentaba no sólo en la potenciación de un alto nivel académico, sino también en la promoción de los valores humanistas del pensamiento social-cristiano. La actitud de EGT implica un cuestionamiento al modelo del viejo rector Ernesto Meneses, también jesuita.

Hace tres años EGT provocó una huelga al pretender condicionar la revisión salarial al cumplimiento de cincuenta puntos tendientes a la subcontratación, a la ampliación del personal de confianza, a la reducción de la bilateralidad y de los derechos adquiridos. En los últimos tres meses, a raíz de la renuncia de la directiva sindical y del nombramiento de una directiva interina por tres meses –ya que en mayo deben realizarse elecciones– EGT decidió imponer a la CTM. La medida culminaba un largo período de presión en contra del sindicato y la utilización de toda clase de recursos, entre otros, la promoción y financiamiento de trabajadores básicamente académicos para oponerse al sindicato.

Ante el cambio de directiva sindical, los interinos encabezados por el actual secretario general optaron por asesorarse por la CTM a través del secretario general del Sindicato de Escuelas Particulares, además de apoderado del Sindicato de Bares y Centros Nocturnos de la CTM. La reciente oleada de presión se vio acompañada de medidas que violan las más elementales normas de civilidad. Presencia de golpeadores el pasado 30 de enero, día del Convenio Contractual; amenazas telefónicas a familiares; presión para obtener la renuncia de todos los exdirigentes o potenciales competidores del actual comité.

Dentro de esas medidas sobresale el despido de académicos tan distinguidos como la Dra. Florinda Riquer y la maestra Marisela Andrade. Prácticamente se ha despedido a todos los miembros de las últimas dos directivas sindicales, utilizando en la mayor parte de los casos la simple negativa a permitir su acceso a las instalaciones de la Ibero en Santa Fe. Dentro de los recursos de presión se ha

obligado a personas a que firmen contra otras bajo el argumento "tu empleo o el de él". El 90% de los despedidos son mujeres. La Ibero aplica un modelo tan flexible que el 70% del personal académico está contratado por honorarios, sin seguridad social.

Quienes conocen de la historia sindical en la Ibero, recuerdan la disposición del sindicato a colaborar con las autoridades en tiempos de crisis como la que se vivió a raíz de la caída de las instalaciones por un sismo, momento en el que el sindicato aceptó modificaciones temporales a sus Condiciones de Trabajo, para sacar adelante a la institución. Ese ambiente de libertad y colaboración hoy se ha sustituido por un clima de terror, *vigilancia policiaca*, intervención telefónica, intervención en sistemas de cómputo, lista negra de aquellos que por su prestigio en la comunidad puedan ser potenciales competidores.

Es bastante lamentable que la desafortunada estrategia de EGT por aplicar su nuevo modelo, lo haya llevado al fracaso de sus megaproyectos, a la reducción de la matrícula, a constantes cambios en la administración y a un creciente enfrentamiento dentro de la Compañía de Jesús. Ciertamente, la Universidad Iberoamericana se encuentra en crisis.

## EL TRIUNFO DE ROSARIO

20/03/02

La izquierda está de plácemes. Acaba de documentar la existencia del liderazgo político de Rosario Robles Berlanga. No es que antes de la elección interna del PRD a Rosario no se le reconociera su calidad política, dentro y fuera de ese partido. Como Secretaria de Organización del PRD en el periodo en que López Obrador fue su presidente, Rosario contribuyó de manera decisiva a aumentar

significativamente la votación por su partido. Como Secretaria de Gobierno del Distrito Federal y después como Jefa, demostró ampliamente su talento y firmeza para gobernar, tanto que sin esa gestión seguramente el PRD no habría podido retener la plaza de la capital del país. A Rosario no hay quien le regatee todos esos méritos, quizá por eso, desde distintos flancos intentaron encontrarle ilegalidades en su administración al frente del gobierno del Distrito Federal.

La novedad ahora es que Rosario pasó la prueba de fuego de una votación interna perredista con el holgado margen que ese partido sólo había otorgado a los dirigentes que provienen del PRI. En tanto ese partido continúa siendo el más grande esfuerzo organizativo de la izquierda en el siglo XX, es también uno de los espacios políticos más importantes para sancionar la legitimidad de los nuevos liderazgos de ese sector. Los votos que la hacen ganadora son los votos de los perredistas que quieren recuperar al partido para dar la batalla por el país como la ha dado Rosario: con energía, claridad y sin componendas. Algunos, o muchos también, habrán sido votos para lograr o preservar intereses no legítimos. Quizá la suma de grupitos y de corrientes que llegaron del amplio arco de la izquierda del país para construir el PRD, no tengan plena conciencia de que persiguiendo su provecho particular al apoyar a Rosario, han contribuido a legitimar un liderazgo que no existía en el país y que por supuesto los trasciende. Si no pusieron en el centro sus pequeños intereses, mejor aún. Más posibilidades habrá de que ese liderazgo se fortalezca y a la vez se socialice.

Pero no todo es miel sobre hojuelas. Rosario tendrá que resolver muchos retos y desafíos. El primero es remontar la paradoja de haber ganado con tan amplio margen y sin embargo no tener a su favor al Consejo Nacional y la composición del próximo Congreso Nacional; según pronósticos fundamentados. Las ataduras que esto significa para su gestión son obvias.

Como Rosario no es el Gran Houdini nadie le recomendará un gran escape al estilo del mago; lo que sí puede hacer es no olvidar que el PRD es de la sociedad y hacia allá dirigirse. Tendrá que desarrollar todas las iniciativas necesarias para que la gente se sienta representada por el PRD, sin populismos ni paternalismos, también sin el clientelismo corporativo. Eso es muy difícil, sobre todo porque electoralmente no reditúa.

Si el único objetivo de su gestión fuese ganar el proceso electoral del 2003, es posible que su capital político se pierda en esos vericuetos y que no logre sentar las bases de esa izquierda moderna y democrática que el país necesita. Pero Rosario es una mujer inteligente, seguramente sabrá cómo conciliar metas electorales con refundación partidaria.

La primera prueba de fuego de Rosario será la definición del PRD en torno a la reforma laboral. La discusión se ha abierto de nuevo, la Secretaría del Trabajo ha convocado a un Foro de Consulta sobre una serie de temas que se están discutiendo en una mesa central con representantes sindicales y patronales. Independientemente de sus resultados, o de cuándo y qué iniciativa del Ejecutivo llegue al Congreso de la Unión, el PRD debe tomar la ofensiva en un tema que es nodal para el futuro democrático del país. En 1997, el cálculo electorero del partido llevó a arrumbar en un cajón un anteproyecto elaborado en el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática en el que se plantea entre otras, las reformas constitucionales y legales necesarias para lograr la libertad y democracia sindicales. Si la historia de eludir el tema se repite, el PRD seguirá anclado en el pasado, sin proyecto para la democratización del país.

Urge también una propuesta clara sobre reforma energética. Sobre el tema el Senador Sodi está declarando la necesidad de una propuesta intermedia (?) entre la panista y la priísta a cambio de la reforma política del Distrito Federal. Un trueque más. Ya vimos los resultados de esa miopía política con el voto de los senadores perredistas a favor de una reforma indígena muy lejana de los



Acuerdos de San Andrés ¿Así pensará el PRD seguir por la vida? Rosario, y quienes la apoyaron en el PRD, tienen la palabra. Por lo pronto, ¡mis calurosas felicitaciones para la triunfadora!

## EL NUEVO FRACASO PERREDISTA

27/03/01

Si la izquierda está de plácemes porque acaba de documentar el liderazgo de Rosario Robles, como lo señalé en mi colaboración de la semana pasada, también es cierto que está de luto por el fracaso de la elección interna del PRD. A diez días de sus comicios para elegir a la dirección nacional, es fecha en que no se entregan los resultados completos y, hasta el momento de escribir este artículo, tampoco se sabe quiénes serán los dirigentes en el Distrito Federal, la ciudad más importante del país. Si la trayectoria y cualidades políticas de Rosario Robles le permitieron acreditar su triunfo holgadamente, como sólo lo habían hecho los dirigentes de ese partido provenientes del PRI, en cambio el partido recreó los mismos vicios de la elección de 1999, aquella que mereció anularse.

Es difícil pensar que las anomalías no son suficientes como para anular el veinte por ciento de las casillas y con ello declarar la nulidad del proceso en su conjunto, pero a diferencia de 1999, a pesar de esas irregularidades e ilegalidades, el triunfo de Robles ha sido reconocido desde el primer momento por el país y por sus opositores en el partido, porque todo mundo sabe que no fueron las trampas las que permitieron el triunfo de Rosario. Esa legitimidad es lo que pone a buen resguardo al PRD de la necesidad de repetir el proceso electoral y con ello de irse al basurero de la historia. Pero si Rosario está salvando al PRD de esa situación, el PRD en cambio está

llevando la situación al límite. No le vaya a pasar como el aprendiz de brujo.

Cuando el horizonte político se mide por la distancia que existe entre los ojos y la punta de la nariz entonces es claro que la conducta será la del abarrotero: regatear y presionar para vender al precio más alto, no importa que con esa estrategia Manolito, el dueño del tendajo de la esquina, se quede sin mercado. El PRD se llenó de Manolitos. Con la suma de muchos tendajitos, tantos como para armar un servicio electoral nacional, los Manolitos están regateando la validez del proceso electoral en su conjunto, —léase la existencia misma del partido— como arma de presión para quedarse con la secretaría general, con el consejo nacional y con el congreso nacional, y los mini-manolitos con la dirigencia de algún estado, municipios o lo que alcance. Cuando vean más allá de su nariz y recuerden que el país existe será muy tarde; la sociedad los habrá olvidado.

Los Manolitos están empeñados en que el PRD sea una especie de sucursal del PRI. Como tienen el aparato electoral y partidario en sus manos, dejan pasar los días para que la desalificación de sus elecciones se pasee por todos los medios de comunicación, para que no quede duda de que la izquierda forma parte de la cultura priísta, para seguir presionando hasta alcanzar todas las prebendas posibles. No les importa llevarse al partido entre los pies, siempre lo han considerado una franquicia y como tal una propiedad privada sujeta a las leyes del mercado. El día que agoten esa franquicia, se colgarán de otras siglas.

En términos de su proceso electoral, la única diferencia entre PRI y PRD es que el cochinerito de la elección priísta y el fraude como delincuencia organizada fueron los que permitieron el triunfo de Roberto Madrazo, mientras que el cochinerito y el fraude de la elección perredista está siendo la moneda de cambio para presionar al triunfo legítimo y legal de Rosario Robles por mayores espacios.

Ciertamente un espectáculo bochornoso.

Como si los liderazgos se pudieran generar de la noche a la mañana, para derrocharlos de igual manera. ¡Es una lástima! Hay un nuevo liderazgo de izquierda en el país, lo que no existe es un partido de izquierda democrático y moderno, sólo un remedo del viejo PRI.

## MIGRANTES EN LA INDEFENSIÓN

03/04/02

El pasado 27 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América resolvió que la condición migratoria de los trabajadores indocumentados nulifica cualquier derecho laboral. En 1989, Juan Castro demandó a la empresa Hoffman Plastics ubicada en California, por despido injustificado y por el pago de salarios devengados. La Junta de Relaciones Laborales, tribunal de primera instancia resolvió a favor de Juan Castro. Frente a la apelación por parte de la empresa, el tribunal correspondiente desechó el recurso; acto seguido un juez administrativo determinó que el recurso era legal, para que finalmente la Junta de Relaciones Laborales echara abajo la decisión del juez y condenara a la empresa a restituir a Juan Castro en su puesto y a pagar los salarios correspondientes. La empresa apeló esta decisión ante la Suprema Corte de Justicia, con el resultado mencionado.

El despido de Castro fue motivado por su iniciativa de organizar un sindicato para defender los derechos de los trabajadores indocumentados de quienes la empresa abusa de manera sistemática. Hoy, con una votación de cinco a favor y cuatro en contra, la Suprema Corte deja a los trabajadores indocumentados en la total indefensión además de que desconoce los convenios firmados por su gobierno con la OIT en los que se establecen los dere-

chos de los trabajadores migratorios, independientemente de su condición legal, y violenta también la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

La decisión de la Suprema Corte de EUA constituye parte de su política antiinmigrante que atenta contra los derechos humanos de los trabajadores migratorios. Sin ir más lejos, el derecho más elemental que es el de la vida, resulta vulnerado sistemáticamente por el gobierno de ese país a partir de que en 1994 se puso en marcha la Operación Guardián que obliga a los trabajadores indocumentados a utilizar los puntos de cruce fronterizo más inseguros con el resultado de más de mil muertes desde entonces a la fecha.

Claudia Smith directora del organismo defensor de los derechos humanos de los trabajadores migrantes, California Rural Legal Defense ([www.stopgatekeeper.org](http://www.stopgatekeeper.org)) y ganadora del premio Digna Ochoa instituido el presente año por Amnistía Internacional, ha presentado una acusación contra el gobierno de su país frente a la Corte de Derechos Humanos de la OEA, *por la violación masiva de esos derechos a los indocumentados*. Esa acusación se basa en el argumento de que el derecho de soberanía de EUA para controlar sus fronteras, constituye un derecho autolimitado por el significado de la suscripción de la Carta de Derechos Humanos de la OEA por parte de ese gobierno.

Pero la decisión de la Corte obedece no solamente a la política antimigratoria del gobierno de Estados Unidos, sino también a la atmósfera de racismo y xenofobia exacerbados por la política antiterrorista de ese país a partir de septiembre pasado. El problema se agrava por la actitud subordinada del gobierno de México frente a esas conductas prepotentes. En este espacio he señalado en reiteradas ocasiones que el gobierno de Vicente Fox no ha significado cambio alguno en la materia, simplemente se ha seguido siguiendo como sus antecesores priistas, a los designios de la estrategia estadounidense en materia de política exterior, y dentro de ella a la abusiva política antiinmigrante. Un cambio en la materia tendrá

que pasar por la exigencia de la suspensión de la Operación Guardián por parte del gobierno mexicano.

Después de una semana de publicada la decisión de la Suprema Corte de EUA el gobierno de México dio a conocer un timorato comunicado de prensa con el que se responde (¿) a una resolución que alentará mayores violaciones a los derechos laborales de los migrantes.

Mientras suceden estos graves hechos, la agenda migratoria bilateral sigue en el punto en que se quedó unos días antes de los atentados del 11 de septiembre. En lugar de amnistía para los residentes indocumentados; en lugar de programa para los trabajadores huéspedes; y en lugar de sentar las bases para el libre tránsito fronterizo de los trabajadores -bandera de campaña de Fox-Castañeda, ahí está la decisión ilegal y racista de la Suprema Corte de Justicia de EUA. ¿Qué dice el Senado de la República a todo esto?

## CINISMO ECONÓMICO

10/04/02

La lucha antiterrorista de Bush y Sharon en Medio Oriente, ha llevado el precio del petróleo mexicano a 23 dólares por barril, 32 por ciento más de lo programado en la Ley de Ingresos para el presente año, mientras que de acuerdo a la situación internacional, las proyecciones de los especialistas lo ubican en al menos 20 dólares promedio anual. No obstante esta situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un recorte por más de 10 mil millones de pesos en el gasto, y casi simultáneamente informó de un prepagó de deuda externa por 153 millones de dólares, esto es un 15% del recorte anunciado.

Como si la economía nacional estuviera en jaula, el gobierno federal se da el lujo de restringir el gasto sin más argumento que mantener el déficit en el nivel programado para el 2002, a pesar, repito del incremento en el precio del petróleo. Ciertamente todo parece indicar que la economía estadounidense ha dejado atrás la recesión y ese efecto empezaría a sentirse en México quizá desde el segundo trimestre del año. No obstante, el costo de nuestra dependencia respecto a la economía de EUA ha sido muy grande como para continuar uncidos de manera pasiva a sus vaivenes y no echar mano de los instrumentos de la política económica que permitan la reactivación de la planta productiva. Uno de los principales instrumentos es justamente el gasto público. Pero en lugar de utilizarlo para impulsar la demanda, resulta que sobre el ya magro presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, todavía se anuncia un recorte y un prepago de deuda externa.

Para empezar, mantener el déficit en el nivel programado es una falacia que el mismo Secretario de Hacienda habría aceptado cuando hace un año reconoció que el déficit real de las finanzas públicas, considerando la deuda escondida llegaba a 4.5%; déficit que alcanzó el nivel del 11% en 1996 a causa del salto de esa deuda escondida por el ilegal rescate llevado adelante por el gobierno de manera subrepticia. La falacia se nutre del cinismo de alegar austeridad para las grandes mayorías y para las inversiones estratégicas, mientras hay derroche para los privilegiados.

De sobra conocemos las repercusiones sobre el gasto en educación, salud, vivienda, y alimentación de esta política de austeridad aplicada en los últimos veinte años. Repercusiones que implican no solamente el deterioro en los ya precarios niveles de bienestar social, sino también en la capacidad competitiva del país en el mercado mundial ¿Qué fuerza de trabajo puede aumentar los niveles de productividad cuando se deterioran los índices de sus mínimos de bienestar?

Pero además de las repercusiones de la austeridad sobre el gasto programable de los rubros mencionados, tenemos también las muy serias consecuencias de la disminución en inversiones estratégicas. El caso de Pemex es patético: Del total de recursos invertidos en el 2001, el 80% se dedicó a las operaciones de exploración y producción, mientras que a refinación, gas y petroquímica apenas el 20% restante. Por eso no es de extrañar que hayamos vendido petróleo a 18 dólares por barril en ese año, pero hayamos importado gasolina a 38 dólares el barril.

Por otra parte, en tanto la estrategia para enfrentar la globalización se ha plasmado en un TLCAN que ha aumentado nuestra dependencia de la economía norteamericana, en términos de comercio, inversión y flujos financieros; esa estrategia nos ha hecho más precarios y más vulnerables.

Para ilustrarlo basta el dato de que a finales del año 2000 los empleos generados por la industria maquiladora llegaban a 1 millón 300 mil, en números cerrados. A inicios del 2002 esos empleos eran apenas un millón. La razón: casi la totalidad de esa inversión tiene su origen en EUA, de manera que la recesión en ese país tuvo un costo directo de pérdida de 300 mil empleos, sin considerar por supuesto los costos indirectos de la disminución del volumen comercializado con ese país. El costo de la no diversificación de la inversión extranjera directa está a la vista.

Y a pesar de todos los costos sociales y del desmantelamiento de la capacidad productiva del país, vamos en el cuarto sexenio de la misma política económica ¡Qué aguante!

## GLOBALIZACIÓN Y DERECHOS

17/04/02

Según declaraciones del Secretario del Trabajo publicadas el día de ayer, la recuperación económica del país ha permitido una recuperación del empleo durante las últimas semanas que podría alcanzar las 500 mil plazas en el 2002. Por su parte, Jorge Espina Reyes, el dirigente de Coparmex, fue menos optimista al colocar esa cifra en 382 mil empleos, los mismos que se perdieron durante el año pasado. Cualquiera que sea el pronóstico que más se acerque a la realidad, lo cierto es que ambos estarían ratificando la incapacidad de la economía mexicana para generar los empleos suficientes que permitan absorber la entrada de 1 millón 200 mil nuevos demandantes cada año, mucho menos de amortiguar el déficit acumulado de puestos de trabajo durante los últimos veinte años que rebasa los doce millones.

Doce millones de déficit en la creación de empleos es un cálculo grosero de la incapacidad económica para dar satisfacción a la demanda de trabajo, pues contabiliza a los trabajadores de la economía informal –al menos 56% de la Población Económicamente Activa (PEA). Sabemos que los salarios y las condiciones en que se desarrollan los empleos de la economía informal no garantizan salario suficiente, estabilidad y las mínimas prestaciones de ley. Por ejemplo, según datos oficiales, del total de empleos creados en el sexenio de Ernesto Zedillo, el 64% fue con salarios por debajo del mínimo legal, se trató de empleos chatarra. Pero además, el cálculo de los doce millones tampoco considera el déficit acumulado en los años previos a 1982, que era por lo menos del 20% de la PEA. Pero de cualquier manera que se le contabilice, lo cierto es que el colapso del llamado mercado de trabajo está definiendo el destino de millones de mexicanos junto con sus familias.



Estos fenómenos que están definiendo el funcionamiento de la economía y su incapacidad para satisfacer los derechos sociales básicos de la población en México pareciera que forman parte de una especie de fatalismo, de destino inexorable; aunque sean producto de una estrategia económica que se decidió de manera deliberada, una vez que se quisieron expiar todos los pecados del populismo priísta y que se pretendió tener acceso al mercado de capitales después de estallada la crisis de deuda de 1982, para lo cual fue necesario acatar todas las recomendaciones del Fondo Monetario Mundial y del Banco Mundial.

Esa es la globalización económica que conocemos: la que ha agudizado el deterioro salarial; la acumulación del déficit en la creación de empleos; la caída en el gasto social; la concentración del ingreso; el aumento del pago a deudas externa e interna; el desmantelamiento de la estructura productiva. Los foros internacionales, como el de Porto Alegre en donde se sistematiza la crítica a esta globalización y se avizoran los contornos de otro mundo posible apenas empiezan a desarrollarse. No es que la batalla esté perdida, pero ciertamente es muy grande el desfase entre el despliegue de una globalización que protege el interés de los capitalistas y otra que ponga por delante el de los trabajadores. La primera lleva buen trecho andado mientras que la segunda es apenas un balbuceo propositivo.

Pero no todos los rostros de la globalización son perversos. Está también el lado amable que se deriva de una mayor vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los gobiernos. Por eso ha sido posible que el juez Baltasar Garzón exiga y logre la extradición de torturadores para su enjuiciamiento; que Mary Robinson, la Alta Comisionada de la ONU en la materia, visite la frontera norte de nuestro país donde el gobierno de EUA vulnera de manera masiva y sistemática los derechos humanos de los migrantes; por eso también observadores internacionales han estado presentes en distintas etapas en Chiapas aceptados a regañá-

dientes por el gobierno de México; por eso también la Comisión de Derechos Humanos de la ONU reunida en Ginebra ha emitido una condena a Israel por sus ataques al pueblo palestino.

Pero como este rostro amable de la globalización y la expresión que tiene en las resoluciones de la ONU, no alcanza a cubrir la perversidad de los efectos de las políticas económicas definidas al son de ese proceso globalizante, se torna muy difícil aceptar sin más la resolución que se está tomando en Ginebra sobre el caso de Cuba y el voto aprobatorio de México. La visita de un representante de Robinson a la isla sin duda beneficiará a ese país aunque su gobierno diga lo contrario. Sin embargo, muchas dudas quedan en el aire: ¿en qué momento México empieza a desprenderse de la hegemonía de EUA; cuando su anterior relación con Cuba justamente le permitía definir una sana distancia?; ¿a partir de cuándo, la ONU nombra un relator sobre derechos sociales vulnerados por las políticas económicas, y en qué momento el gobierno mexicano promueve activamente esos derechos y además cumple con los derechos humanos? Porque votar así nomás a favor del documento de Uruguay en el caso cubano, siendo un documento bastante mesurado, nos deja de cualquier manera en la indefensión frente al poderoso vecino del norte. A nosotros y a quienes nos rodean.

## EL COLETAZO DEL CAIMÁN

24/04/02

¡El rey va desnudo! No lo grita la inocencia de un niño que ignora de las hipocresías de los adultos, lo dice el viejo caimán del Caribe que se siente traicionado por su otrora gobierno amigo y responde con un fuerte coletazo: hacer pública su conversación telefónica con Fox, donde el presidente mexicano le solicita retirarse el jueves de

la Cumbre de la ONU en Monterrey, para “no complicarle el viernes”; donde le pide también “no agredir a EUA o al Presidente Bush”, y “no hacer mención sobre el tema de la embajada o de las relaciones México-Cuba o de ese evento que vivimos en días pasados”. En fin donde exhibe la doctrina Castañeda y sus desastrosos resultados. La independencia de la política exterior de México a cambio de la invitación a un almuerzo con cabrito regiomontano.

La situación es bochornosa. El Presidente y su Secretario de Relaciones Exteriores han quedado exhibidos como mentirosos, como ingenuos y como torpes. Conversación indebidamente divulgada, acusa el comunicado de la Presidencia ¿Y desde cuando existe privacidad en la relación entre jefes de Estado? El interés de cada país está por encima de cualquier privacidad entre gobernantes.

Aceptó una modalidad que pudo rechazar, dice plañidero el comunicado. ¿A quién le dan pan que lllore? dice el sabio dicho popular. La llamada telefónica de Fox le estaba dando un arma al viejo caimán del Caribe para presionarlo a la hora del voto en Ginebra. ¿Por qué, si se sentía agraviado no dio a conocer la grabación inmediatamente después?, se llaman ahora a sorpresa los involucrados. ¡Justamente porque era la mejor carta para presionar! Quemarla antes habría sido un derroche. Venganza y no respuesta a un agravio, dice el comunicado del PAN. Las dos cosas: la venganza como respuesta a un agravio.

El voto de México en Ginebra no fue ilegal, tampoco injerencista. Nada más denotó torpeza, ingenuidad e ignorancia profundas. Como parte de la nueva estrategia en materia de política exterior el resultado está a la vista y no podía ser más desastroso. Fidel desde Cuba dictando las jugadas de la política interna de México, y México por primera vez haciendo política injerencista en Cuba (en Cuba no hay democracia, punto 8 del comunicado de la Presidencia). George Bush feliz del espectáculo. Divide y vencerás dice el viejo lema imperial.

Como el gobierno del cambio no quiso *hacer cambio alguno* en materia de política económica, de política social, de lucha contra la impunidad, como el voto del 2000 lo leyó solamente como hartazgo de siglas y no de régimen, le pareció que lo más lucidor, lo más redituable era cambiar su política exterior. Así decidió ser aliado incondicional de EUA sin contrapeso alguno. Y Cuba, nos guste o no, sigue siendo un símbolo de contención al poder imperial de EUA, una relación que marca distancias con el poderoso y eterno vecino. Hay mil maneras de promover los derechos humanos en Cuba, la abstención en el voto de condena y la promoción activa para la eliminación del bloqueo económico son algunas de ellas.

El comunicado de prensa de la Presidencia le enrostra a Cuba que aquí hay democracia y división de poderes, pero también mucha soberbia. El Senado acordó por unanimidad exhortar al Ejecutivo para un voto de abstención en Ginebra. No lo escuchó, y tenía la obligación legal de hacerlo porque según nuestra Constitución vigente, en las definiciones de política exterior también incide el Senado.

Ahora es necesario de manera unánime y con el voto en contra de Bush, exigir que el Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, renuncie. Es la única manera de iniciar una rectificación en materia de política exterior. Otro desastre y otro desgaste como el que está ahora viviendo México pondría en mayor riesgo nuestra precaria viabilidad como nación independiente. Después puede ser demasiado tarde. O quizá no sea necesario exigir la renuncia a Castañeda; es posible que por dignidad él mismo la presente. Bastaría un poco de humildad para darse cuenta de la terrible lección política que ha recibido: Si quieres cambiar estrategias, más vale que primero aprendas cómo hacerlo.

## CICLO DE DERROTAS

01/05/02

El mes de mayo inicia con la fiesta de los trabajadores. En este año es motivo de celebración el hecho de que los asalariados en Italia hayan realizado manifestaciones multitudinarias en todo el país en contra de la iniciativa de reforma laboral de Berlusconi, que pretende eliminar la ilegalidad de despedir a los trabajadores por causa injustificada. Movilizaciones obreras de esa magnitud no se habían visto en Italia en los últimos treinta años, tanto que el Primer Ministro ha tenido que desistir de su proyecto de reforma.

Pero más allá de esa noticia alentadora en el mundo internacional del trabajo, lo cierto es que la reformas económicas de los gobiernos de todo el mundo siguen afectando derechos laborales y no por ello están consiguiendo que los niveles de empleo y de salario se recuperen para disminuir los rezagos en los niveles de bienestar de los trabajadores y de sus familias. Continúa, en una marcha que parecería no tener fin, el ciclo histórico iniciado a principios de los ochentas a favor de la recuperación de la ganancia. Ese ciclo ha sido de derrotas para el movimiento obrero y debilitamiento de sus organizaciones; por eso son tan significativas la movilizaciones de los trabajadores italianos.

Por su parte, el sindicalismo mexicano ha enfrentado la estrategia económica de recuperación de la ganancia –también llamada neoliberalismo– con la debilidad congénita de haber nacido de un pacto corporativo con el Estado, de manera que a la desigualdad histórica de cualquier embestida de los capitalistas, ha debido sumar la inmovilidad a que lo condena una serie de ataduras legales junto a su pertenencia al régimen de partido de Estado desde su nacimiento. Hoy que el partido de Estado ya no es hegemónico en el poder, la voluntad del gobierno del cambio pareciera ser la de no

cambiar demasiado las funcionalidades del viejo sindicalismo: garantizar el control sobre los trabajadores y la legitimidad de las políticas gubernamentales.

Por fortuna no todo el sindicalismo mexicano se caracteriza por esa subordinación al gobierno, pero por desgracia las luchas y la recomposición sindical en el país aún no alcanzan para que mayoritariamente los sindicatos sean organizaciones libres, independientes y democráticas, esto es representativas de los intereses de sus agremiados. Todo parece indicar que esas luchas sindicales, las más importantes, las que se desarrollaron en la década de los setentas, no alcanzaron la densidad social necesaria para que las organizaciones políticas de la izquierda hicieran de la centralidad obrera el eje de sus propuestas programáticas. Basta apreciar el desarrollo del PRD para juzgar el gran atraso de la problemática laboral en relación a temas como el electoral. En ese desfase del principal partido político de izquierda en el país, seguramente ha habido una amnesia oportunista, pero también la ausencia de luchas obreras.

En términos de espacio social y político es evidente que la lucha por el respeto al voto fue el eje en torno al que se movilizaron todos los sectores democráticos a partir de los ochentas. Apareció el ciudadano como sujeto social, luchando aparentemente sólo por democracia electoral. Ese ciclo se cerró con la derrota del PRI del 2000. Hoy es necesario ponerle apellidos a esa democracia, no como una cuestión voluntarista pero sí con la claridad de que un programa de izquierda no puede navegar hasta el infinito sin una propuesta clara para los asalariados del siglo XXI. El PRD enfrenta ese desafío. Ya veremos si logra resolverlo.

Y quizá por esa orfandad de partidos de izquierda, los sindicatos democráticos y progresistas, como los congregados en la Union Nacional de Trabajadores (UNT), de repente les da por comportarse como partidos. Así me pareció la decisión de firmar el Acuerdo para el Desarrollo Político Nacional por parte de la UNT hace algu-

nas semanas, sin tener garantía alguna sobre el proyecto de reforma laboral que envíe el Ejecutivo al Congreso de la Unión. Haber logrado que ese documento se vaya elaborando con el consenso de las partes es un hecho relevante. Y seguramente no debe ser fácil transitar entre las posiciones de los dinosaurios del Congreso del Trabajo y de las organizaciones empresariales. Sin embargo, tratar de romper ese cerco con el salto a la esfera de lo político, puede convertirse en una fuga hacia delante. En fin, con tanto vacío político de izquierda, aumenta la responsabilidad de los sindicatos democráticos para empujar por una reforma laboral representativa de los intereses de los trabajadores. Una reforma laboral que por demás, se ve aún muy verde.

#### CASI SIN SALIDA

08/05/02

El próximo fin de semana el PRD celebrará otro Congreso Nacional. En un momento delicado por la crisis no resuelta que se abrió en 1999, el PRD llega a este Congreso con la buena noticia de que tiene una flamante presidenta surgida de la izquierda no priísta con la legitimidad y popularidad que han tenido los dirigentes que rompieron con el PRI....pero nada más. Porque la estela de sus recientes comicios internos, sirvieron para confirmar de nuevo que siempre que sea posible, los grupos pondrán sus intereses por encima de aquellos del partido, con tal de mantener, ampliar o acceder a parcelas del poder. Comicios que sirvieron también para burlar, otra vez, la legalidad interna, y que en contra de la promesa de su nueva dirigente, en lugar de limpiar esos resultados se prefirió llegar a acuerdos para mantener la unidad partidaria. Y por si fuera poco,

en algunos estados las elecciones habrán de repetirse con el consecuente desgaste partidario.

En ese Congreso Nacional habrán de aprobarse los documentos básicos en torno a los cuales el partido define su norma estatutaria, sus principios, y su línea política. Todo parece indicar que el documento programático –que quedó sin resolver en el anterior Congreso– se definirá hasta noviembre del presente año, de manera que el de línea política adquiere, por esa circunstancia, una relevancia particular. Sin programa de acción, los delegados al Congreso habrán de decidir la línea política que les permita recuperar al partido –¿refundarlo?– como instrumento de lucha de la sociedad para empujar hacia la transición democrática y entonces contribuir de manera decidida a que el país no se quede atorado en la simple alternancia. Una alternancia en la que el PRI podría recuperar la presidencia de la república en el 2006.

Pero quizá la pretensión del PRD no sea convertir la alternancia en transición a la democracia, sino simplemente contribuir al largo periodo de liberalización política en el que estamos inmersos, y junto con ello colocar como prioridad la de mantenerse todos bajo la misma sigla, léase el mismo registro, léase también la misma franquicia. Y los indicadores apuntan a que con todo y su nueva presidenta hacia allá continuará caminando el PRD.

La unidad del partido de izquierda más grande e importante del país es un capital político de alto valor y sin duda ella se garantiza en el PRD si se opta por la liberalización política del país como el eje de sus acciones, luchando por ampliar la democracia electoral y representativa sin pasar a la democracia participativa. En esta línea son suficientes unos pocos cambios al sistema político, mientras permanece intacta la esencia del régimen político, con la misma política económica excluyente, con los mismos controles corporativos sobre las organizaciones sociales, con la misma política racista hacia los indígenas. Y de esa línea lo que resulta es un partido de oposición funcional al sistema.



Me da la impresión de que el PRD ya se encuentra instalado en esa ruta y que ese es el resultado más importante de las elecciones de marzo pasado. A pesar de que Rosario Robles y algunos grupos que la apoyaron no comparten esa visión, es muy difícil que se puedan escapar a las presiones de las corrientes que controlan el aparato para rescatar al partido de ese camino; es muy difícil porque seguramente el chantaje de la ruptura es muy fuerte. Pero queda la pregunta: ¿No valdría la pena hacer un alto en el camino y valorar la pertinencia de continuar bajo las mismas siglas a pesar de las profundas diferencias? ¿No es acaso muy desgastante para uno y otro sector del partido continuar en la misma organización? La postura política de cada una de las dos corrientes es legítima y respetable, la pregunta es si vale la pena continuar en un arreglo de falsa unidad. Es probable que al PRD le esté sucediendo lo que a muchos matrimonios, a quienes la duda en torno a quién se queda con el patrimonio después del divorcio, es lo que los mantiene unidos "felizmente". Sería triste, lamentable y reprochable que sea el registro lo que mantiene los lazos de unión entre ambas corrientes.

Pero también es posible que los sectores encabezados por Rosario Robles no tengan diferencias sustantivas con los llamados "amachuchos" y que las diferencias internas se expliquen solamente en el radicalismo ideológico de los primeros. Si este fuera el caso, podría pronosticarse un largo, accidentado y sólido matrimonio. Por lo pronto habrá que estar atentos a lo que suceda el próximo fin de semana.

## ESTRATEGIA ERRÓNEA

15/05/02

El Presidente Vicente Fox ha sido el primero en incorporar el tema migratorio en la agenda bilateral con Estados Unidos de América. En su primera reunión con George W. Bush, todavía como candidato planteó la necesidad de abatir las fronteras entre ambos países para el tránsito de los trabajadores, y así resolver de fondo el problema migratorio. Los presidentes priístas habían mantenido el tema en las orillas de la agenda a pesar de que la tasa de migración se dobló a partir de la década de los ochentas, precisamente como resultado de la estrategia de sobrevivencia de parte de los millones de trabajadores que resultaron población excedente para los proyectos económicos del neoliberalismo inaugurado en México a partir de 1982. A pesar de esa realidad insoslayable, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo fueron omisos en el tratamiento del problema. Por si fuera poco Salinas negoció un TLCAN que dejó fuera la el tema del trabajo migratorio, a pesar de la extensión de la frontera y a pesar de la relevancia económica de ese intercambio económico para ambos países.

Esa historia de omisiones explica que la definición foxista del tema migratorio como una prioridad en la relación entre México y EUA, haya despertado esperanzas en esos millones de trabajadores que tienen que abandonar su país en busca de mejores horizontes. A más de un año de las promesas de mejorar la situación de los trabajadores indocumentados, su incumplimiento será sin duda una factura más contra el gobierno foxista a cobrar en las elecciones legislativas del próximo 2003.

Quizá por ese temor, el Presidente Fox aprovechó su viaje de la semana pasada a Nueva York para, en la cena privada celebrada con el Consejo de las Américas señalar que: "no puede haber una

relación privilegiada entre Estados Unidos y México sin un avance real en asuntos sustantivos como una discusión integral en el tema de la migración". Reiteró: "Prometí luchar por un acuerdo amplio sobre la migración entre México y Estados Unidos. Eso es lo que he estado haciendo y eso es lo que continuaré haciendo".

En su respuesta, el gobierno de Washington no pareció percatarse del tono de urgencia de su vecino sureño. Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado señalaron que "ha habido progreso, aunque no tanto como hubieran querido ambos presidentes debido a la situación creada por los atentados del 11 de septiembre", para finalizar con la frase conocida: "no hay fechas límite para resolver la cuestión de migración".

Aunque la versión completa del discurso en esa cena privada no ha sido divulgada, de las principales líneas discursivas que transmitió su oficina de prensa, podría concluirse que el Presidente intentó hacer un serio recordatorio al gobierno de Bush sobre los compromisos mutuos en la relación bilateral, o más bien sobre aquello que el gobierno de Fox entendió como compromisos. Del mencionado comunicado de prensa se desprende que este ofreció modificar la tradicional política exterior mexicana en torno a Cuba a cambio de un mejor trato a México en el tema migratorio, que podía traducirse en amnistía para indocumentados o por lo menos en visas de trabajadores huéspedes. Es evidente que el gobierno mexicano ha dado ya la prenda de su compromiso con el voto de Ginebra a favor de los derechos humanos en Cuba, sin recibir hasta ahora nada a cambio.

En una colaboración reciente a propósito de ese hecho, en este espacio afirmé que ese voto no era ilegal y tampoco injerencista como muchos afirman desde la izquierda, pero que sí fue torpe e ingenuo. El discurso de Fox en el Consejo de las Américas no sería más que la expresión del desencanto que produce el actuar ingenuamente. La ingenuidad por lo regular se paga cara, y en política los costos son altísimos. La evidencia de que se está actuando de

esa manera en la relación con el país más poderoso del planeta no puede más que producir honda preocupación. Mientras tanto el PRD propone, para resolver todos estos entuertos, la creación de un consejo consultivo en materia de política exterior (!).

## ECONOMÍA VULNERABLE

22/05/02

*En solidaridad con Ericka Zamora*

La realidad económica es muy terca. En contra de las declaraciones del Srio. de Hacienda, durante la Convención Bancaria de abril pasado en Cancún, en el sentido de que el primer trimestre de la economía mexicana sería de recuperación, las cifras recientes del INEGI indican que enero-marzo del presente año fue el sexto periodo consecutivo de una caída de la actividad económica que empezó al finalizar el año 2000. Para calificar si una economía está o no en recesión, es necesario que durante dos trimestres consecutivos el Producto Interno Bruto (PIB) registre una disminución. El inicio del siglo XXI en México ha triplicado ese requisito.

El hecho por supuesto no es halagüeño para un país cuya economía durante las últimas dos décadas, ha tenido un desempeño pobre, por decir lo menos. Crecimientos insuficientes e inestables del PIB han sido la característica de ese comportamiento. Y en esa evolución, los años de 1983 y 1995 destacan como los casos más graves, sólo comparables en el Siglo XX a la caída de 14% del PIB en 1932, a consecuencia de la Gran Depresión de 1929 en EUA.

Como en aquel entonces, la causa más inmediata de la recesión que hoy está viviendo nuestro país es la disminución de la actividad económica en EUA, nuestro principal mercado para las exportaciones que se originan en nuestro territorio. Sobre este hecho es

importante destacar que a diferencia de aquella crisis de 1932 cuando a la economía le bastó un año para recuperarse, e iniciar una ruta de crecimiento del PIB que siempre superó a la tasa de crecimiento de la población y que se detendría hasta cincuenta años después, periodo en el que se configuró el llamado milagro mexicano o desarrollo estabilizador; a partir de 1982 el zigzagueante comportamiento de la economía ha provocado una fuerte caída en el bienestar de la población, y un deterioro profundo de las condiciones de producción.

Pero además, mientras la crisis de 1929 en EUA requirió del New Deal de Roosevelt con su política keynesiana para poder recuperar la demanda, la disminución de la actividad económica en ese país que hoy nos afecta, fue sólo eso, una disminución en el ritmo de su crecimiento que no llegó a configurarse como una recesión, en tanto no llegaron a registrarse dos trimestres consecutivos de caída en la producción. La frase acuñada décadas atrás que decía que cuando la economía de EUA se resfría, a México le da pulmonía, sigue describiendo la relación entre ambos países, ahora institucionalizada en un flamante TLCAN.

Por si fuera poco, la pulmonía se genera por la alta dependencia de las exportaciones originadas territorialmente en México, pero no necesariamente nacionales. En efecto, la alta concentración de esas exportaciones en manos de transnacionales, convierten al territorio nacional en una ampliación del espacio para la producción de empresas extranjeras, sobre todo de EUA y por lo tanto también de sus estrategias de acción. En esas estrategias la generación de empleos y salarios suficientes y los encadenamientos productivos con otros sectores no están precisamente entre sus prioridades. No es casual entonces que mientras el primer trimestre del año, el PIB en EUA haya tenido una recuperación del 5.8%, en México la recesión haya continuado con una caída en ese indicador del 1% (cifras desestacionalizadas).

Esta argumentación no constituye un alegato en contra de la inversión extranjera, pero por supuesto intenta exhibir la vulnerabilidad económica de México producto de políticas económicas erradas, como la apertura económica indiscriminada y la falta de cumplimiento de la obligación constitucional del Estado para ser el rector del desarrollo económico con los sectores privado, social, y público como los protagonistas de ese desarrollo, incluido en el privado por supuesto el capital extranjero. Como en la década de los treinta en EUA a México también le hace falta un nuevo pacto social. Pero frente a la debilidad económica del país, lo único que se le ocurre al Presidente Fox es repetir el estribillo de que es urgente la privatización del sector eléctrico. También a los empresarios. ¡Pobre país!

### TOQUE DE QUEDA

29/05/02

El día nueve del mes en curso, el Cabildo del Municipio de Tecate, Baja California, emitió un punto de acuerdo mediante el cual se decreta restringir el libre tránsito a los menores de edad a partir de las 22:30 horas. El Cabildo considera que a partir de esa hora, ningún menor tiene motivos para transitar por las calles.

Frente al serio problema de inseguridad pública que se vive en el país, y particularmente en los estados de la frontera norte, a las autoridades de Tecate no se les ocurrió mejor medida que la de imponer un toque de queda a ese sector de la población. La decisión del cabildo de Tecate es grave porque significa una violación a los derechos humanos de los menores de edad y por supuesto una violación a diversas garantías constitucionales, entre ellos al artículo 11 que garantiza el libre tránsito por todo el territorio de la Repú-

blica. Es también preocupante por el precedente ilegal para acciones futuras de otras autoridades.

Por fortuna, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California (PDH), por iniciativa propia, ha emitido una recomendación al Lic. Juan Vargas Rodríguez, presidente municipal de Tecate por medio de la cual: “solicita y exige la restitución inmediata del estado de derecho en el municipio de Tecate, B. C., suspendiendo de manera definitiva la aplicación y efectos de la aprobación impugnada”. La Ley de la PDH de B. C., obliga a los servidores públicos a responder sobre sus recomendaciones en un plazo no mayor de cinco días. A través de la prensa local, el presidente municipal de Tecate anunció que dicha recomendación no será acatada.

Es posible que las autoridades municipales de Tecate se hayan contagiado del espíritu del gobierno de EUA, quien a raíz de los atentados terroristas del pasado 11 de septiembre ha impuesto una serie de medidas de seguridad que van en contra de las garantías individuales, o quizá se trató de una inspiración totalmente local. Para intentar legitimar su ilegalidad, el gobierno municipal de Tecate argumenta la opinión favorable de la ciudadanía del lugar, emitida en una supuesta consulta popular levantada previamente a la decisión del Punto de Acuerdo. Si así fue, al presidente municipal y al cabildo les parece que la Constitución y las Leyes se pueden someter a votación.

Ciertamente, los menores residentes de los estados fronterizos del norte pueden estar sujetos a condiciones que propicien en mayor medida que en otras regiones, una conducta delictiva. En esas condiciones específicas se encuentra en primer término, la presencia generalizada de la rentable industria del narcotráfico. Seguramente al punto de acuerdo del cabildo de Tecate lo anima el propósito de que los menores de edad no caigan en las redes del crimen organizado. En Tijuana, por ejemplo, se ha dado el fenómeno de los narco-juniors, término con el que se designa a los jóvenes

de clase media y alta que “en busca de emociones fuertes” participan en el narcotráfico. La prensa informa con mucha frecuencia de las muertes violentas de esos jóvenes. Las buenas intenciones, que podemos suponer, animan la actuación de las autoridades de Tecate, más adelante los podría llevar a decidir proteger, no sólo a los menores de edad de los riesgos de la delincuencia, sino también a toda la población, y entonces llegarían a decretar un punto de acuerdo que impusiera el toque de queda para todos.

Por la amenaza que significa para la vigencia del estado de derecho en el país, es importante que las autoridades de Tecate se retracten de su decisión. Es además preocupante que hasta la fecha, el Congreso del Estado no haya discutido y analizado la improcedencia del referido punto de acuerdo. Quizá el paso siguiente para detener esa medida a todas luces ilegal, sea la demanda de juicio político en contra del presidente municipal y del cabildo de Tecate.

## LA CHAROLA

05/06/02

La semana pasada, a invitación de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, asistí a la presentación del libro de Sergio Aguayo, *La Charola*. Fue una interesante oportunidad para leer con detenimiento la investigación de Aguayo de la cual emerge de manera nítida el carácter autoritario y antidemocrático del sistema político mexicano. Una investigación rigurosa escrita de manera amena, el libro contribuye a plantear las interrogantes básicas en torno a las características que debería de tener un sistema de seguridad nacional eficiente y respetuoso de los derechos humanos. Sin



duda uno de los temas fundamentales en la agenda pendiente para la auténtica democratización del país.

Funcionar a través de reglas no escritas, en medio de la ambigüedad ha sido parte de la naturaleza de los servicios de inteligencia en nuestro país. La necesidad de una Ley de Seguridad Nacional es a todas luces evidente y constituye una propuesta que el autor fundamenta a lo largo de su libro. Tal como lo plantea Aguayo, una de las características de los servicios de inteligencia en un régimen democrático tendría que ser su vigilancia y supervisión por parte del Congreso. En la actualidad, el Cisen se encuentra en un limbo legal en tanto no existe ordenamiento jurídico alguno que norme su existencia, funciones, y responsabilidades. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, faculta a la Secretaría de Gobernación para cumplir con las tareas de Seguridad Nacional, y en ello se fundamenta que los servicios de inteligencia se encuentren a su cargo. Y nada más.

*La charola*, es producto de una investigación en varios archivos, entre ellos el de la Dirección Federal de Seguridad. Aunque limitada, la apertura a esos archivos significó sin duda un avance para el conocimiento de los sótanos del poder. Por otra parte a inicios del presente año, la Suprema Corte de Justicia resolvió que existe razón jurídica suficiente para que la PGR abra la investigación sobre la masacre de 1968 y sobre la guerra sucia de los setentas. A tal propósito se ha dispuesto la apertura de esos archivos, además de la creación de una fiscalía especial para la investigación de esos hechos. La decisión significa por supuesto otro avance muy significativo. Corre el peligro, sin embargo, de que esa investigación se prolongue demasiado, que no se llegue al fondo del asunto y que se convierta en una especie de ley de punto final disfrazada.

Que no se reduzca a eso, depende de la voluntad política del nuevo gobierno, voluntad política que por desgracia en otros asuntos que podrían abatir la impunidad, no se ha visto. Pero que esa investigación no se diluya, depende también de la sociedad. Una

ciudadanía observante y vigilante del ejercicio del poder por parte del gobierno, una sociedad que exige cuentas, que exige resultados sobre las investigaciones y que además dedica buena parte de su energía organizativa a vigilar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos, contribuiría sin duda a que esa fiscalía cumpla con las tareas para la que fue diseñada. Todo ello como parte del camino para eliminar la impunidad en México, para que nunca más se repitan episodios históricos tan vergonzosos para la conciencia nacional, como son los que ahora investiga esa fiscalía especial.

Haber usado los servicios de inteligencia, sin respeto a institucionalidad alguna, como servicios privados de uno u otro grupo en las disputas internas del poder en el régimen priista, llevó, como señala Aguayo, a una pobreza en el análisis, al sobredimensionamiento de los conflictos para garantizar su funcionalidad al sistema, a la incapacidad de valorar de manera adecuada esos conflictos, y a la incapacidad también de prever, desactivar y en su caso resolverlos de manera política, y no mediante la represión.

El libro de Sergio Aguayo constituye –entre otros méritos– una referencia obligada en la discusión sobre las reformas jurídicas e institucionales necesarias para que los servicios de inteligencia no se constituyan en un Estado dentro del Estado. La estrategia para garantizar la seguridad nacional y las funciones de los servicios de inteligencia no pueden ser seguir siendo temas que definan los grupos de poder en turno.

## ¡AMNISTIA, YA!

15/06/02

La Fiscalía Especial para Desaparecidos y Movimientos Sociales del Pasado de la PCR, ya tiene en su poder denuncias sobre los hechos del 10 de junio de 1971 para iniciar la investigación correspondiente. Debió hacerse de oficio, pero en fin, ya no habrá pretexto para esclarecer las responsabilidades del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, empezando la que él mismo tuvo en esa matanza de estudiantes, de la cual se documentan al menos treinta y cinco muertos. Por su parte, el reportaje de *El Universal* (10 y 11 de junio del 2002) basado en documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, constituye un excelente documento para la investigación de esa fiscalía, en tanto aporta evidencia clara de que el grupo paramilitar denominado los *Halcones* fue creado durante la campaña de Echeverría, y por supuesto con su conocimiento.

Si bien el largo movimiento estudiantil de la década de los sesentas que culminó con la masacre de 1968, que tuvo el corolario de aquel jueves de *corpus*, y que fue la causa inmediata de la guerrilla urbana de los setentas, tuvo una respuesta de parte de el Estado que evidenció de manera sistemática el carácter autoritario y represivo del viejo régimen priista; lo cierto es que tres décadas después, la tortura de detenidos por diversas causas continúa siendo una práctica vergonzante de los cuerpos policiacos que en algunos casos se ha acompañado de desapariciones. Sin ir más lejos, en las cárceles de máxima seguridad, al momento de escribir estas líneas, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arena Agis se encuentran en huelga de hambre. Están poniendo seriamente en riesgo su vida, Jacobo tiene más de cincuenta días en ayuno y su esposa más de treinta días. Ellos demandan sentencia absolutoria y amnistía a los presos políticos, quienes fueron detenidos sin la observación de los

ordenamientos legales para que después confesaran mediante la tortura. En el caso de Jacobo y Gloria, de esas arbitrariedades han dado cuenta un Grupo de Trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional.

Frente a la continuación de esos métodos de investigación de los servicios de inteligencia y policíacos del país, resulta casi un contrasentido la constitución de una fiscalía especial para investigar los hechos de la guerra sucia de los sesentas y setentas. Si el gobierno actual, es incapaz de erradicar esas prácticas con la voluntad y la decisión política necesarias, ¿qué esperanza le queda entonces a la justicia cuando se trata de hechos del pasado?

Tienen razón quienes manifiestan su más profundo escepticismo sobre la eficacia de esa fiscalía especial, y sin embargo es necesario utilizar ese espacio para obligar al gobierno a realizar esas investigaciones, como es necesario también levantar la voz sobre todos los actos de las autoridades que lesionen los derechos humanos. La existencia de esa fiscalía no es una concesión graciosa del gobierno, sino el resultado de la incansable lucha de las organizaciones de familiares de los desaparecidos políticos en la guerra sucia de los setentas, es su conquista y la de una sociedad más conciente y organizada. No es poca cosa que treinta años después el Estado reconozca la paternidad de los crímenes cometidos contra los opositores de esa época. Ahora, a esa paternidad conceptual hay que ponerle nombres y apellidos.

Por eso es necesario aplaudir la decisión de Jesús Martín del Campo, Raúl Álvarez Garín y Pablo Gómez de presentar las denuncias correspondientes a los hechos del 10 de junio de 1971 a treinta y un años de los sucesos. Y junto con esas denuncias y otras que se se presenten, es necesario también exigir la amnistía a todos los pesos políticos que actualmente se encuentran confinados en diversas cárceles del país. Continuar dando un trato policíaco-militar a movimientos sociales que han optado por la vía armada, sin reconocer las causas de profunda injusticia social que les han dado

origen y sin que el Estado resuelva esas causas como es su obligación constitucional, es continuar por el mismo camino del viejo régimen priísta.

Una de las evidencias más claras de que ese viejo régimen se resiste a morir y que sigue actuando con otras siglas, es precisamente la existencia de presos políticos y la continuación de la tortura como método de investigación. Para dar credibilidad a la fiscalía especial es necesario que de inmediato el Ejecutivo envíe al Congreso una iniciativa de Ley de Amnistía para la liberación de los presos políticos. Olvidar las acciones ilegales que esos presos pudieron cometer, para reconocer las causas que las originaron, sería una señal de fortaleza política del gobierno. ¿Lo hará? ¿o tienen razón quienes señalan su debilidad política?

#### AGRESIÓN CONTRA INDOCUMENTADOS

19/06/02

El pasado jueves 14, una camioneta que transportaba a 23 migrantes fue agredida a balazos en la frontera de Mexicali y Caléxico con el resultado de ocho personas heridas, algunos de ellos de gravedad. Sobre este hecho y hasta el momento de escribir estas líneas, los funcionarios de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República han guardado absoluto hermetismo, mientras los heridos son atendidos en hospitales de California en calidad de detenidos por las autoridades de migración, junto con el resto de los indocumentados. De ellos, la mayoría son centroamericanos y cinco mexicanos. Uno de los heridos declaró que los disparos fueron hechos por miembros del ejército mexicano.

Semanas atrás, en este espacio comenté la aberración legal cometida por el gobernador de Baja California al publicar un decreto

en el que prohíbe el tránsito de autos y personas en cierta zona de la frontera con California, con el argumento de la alta peligrosidad que esa área representa para los indocumentados. Es posible que los agresores, se hayan sentido amparados en esa prohibición anti-constitucional del ejecutivo panista de Baja California para disparar contra gente indefensa. Pero seguramente también el ambiente colaboracionista del gobierno mexicano con el de EUA para evitar los cruces fronterizos de los indocumentados ha creado un clima propicio para este tipo de barbaridades.

Apenas unas horas antes de esa agresión a balazos, de visita en Tijuana, el Presidente Fox había declarado que el acuerdo migratorio con EUA está avanzando, sin precisar qué tipo de acuerdo, ni qué grado de avance. Lo cierto es que a casi dos años de iniciado su mandato, la violencia que sufren los indocumentados sigue aumentando. Los muertos a consecuencia de la puesta en marcha de la Operación Guardián en 1994 llegan a casi dos mil, y las agresiones en territorio mexicano se multiplican a lo largo de las rutas de tránsito de esos trabajadores que se encuentran plagadas de retenes custodiados por miembros del Ejército, o la Policía Federal Preventiva o la Judicial Federal. Esas revisiones que dan lugar a diversas violaciones a los más elementales derechos se pueden observar también en los aeropuertos.

Esa violencia se ve también alimentada por el clima xenofóbico que se ha excacerbado en EUA a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2000. El anuncio que George Bush hizo la semana pasada, en el sentido de crear un Departamento de Seguridad del Territorio Nacional (véase *El Universal*, 17 de junio del 2002, p. A 10) en el que se fusionarían las diversas dependencias encargadas del control de las fronteras, para evitar la entrada de terroristas y narcotraficantes, obviamente endurecerá aún más la estrategia de sellamiento fronterizo implementada a partir de 1994. Ahora se pretende levantar una valla a lo largo de los tres mil doscientos kilómetros de la frontera con México.

Más que un límite territorial, la colindancia con EUA se está convirtiendo en una trinchera, en la cual y para colmo, los residentes del sur son atacados por sus propias fuerzas armadas. Obviamente es necesario que el Congreso de la Unión exija de la manera más enérgica a las autoridades de la SRE y de la PGR la información necesaria para esclarecer –y castigar a quien resulte responsable– de la agresión a indocumentados el pasado 14 de junio.

Mientras estos brutales atentados contra los derechos de los migrantes continúan, el gobierno de Fox presenta su Programa Nacional para el Financiamiento al Desarrollo 2002-2006, en el cual lejos de asumir la responsabilidad constitucional (art. 25) de ser el rector del desarrollo económico nacional, se “cura en salud” frente a la realista perspectiva de no cumplir con la meta de crecimiento del 7% prometida en campaña. Los culpables, dice, serán los opositores a la aprobación de las llamadas reformas estructurales; para empezar la propuesta de privatizar el sector eléctrico, y ahora la producción de gas natural.

ZOZOBRA

26/06/02

La semana pasada durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, al referirse a los riesgos que corre la economía mexicana por la escasez de recursos fiscales, el Secretario de Hacienda, Gil Díaz, pronunció la mala palabra en boga: argentinización. Y como en esta época globalizante las economías nacionales se mueven al ritmo de los mercados financieros, basta que se ponga en duda su solidez para que la vulnerabilidad se ponga de manifiesto. No son los intelectuales los que parecen “terrones de azúcar” como declaró un senador, sino las mismas economías que se disueltan a la

menor provocación, sobre todo cuando se carece de una planta productiva competitiva, como es el caso de México.

No puede haber amenaza mayor para un país que el señalamiento público de alguna autoridad financiera de que no está exento de una quiebra financiera como la que vive actualmente Argentina. El Presidente Fox de inmediato reaccionó para aseverar que México tiene una sólida posición y que goza de la confianza de los inversionistas. Sin embargo ellos, los inversionistas del volátil mercado financiero, a quienes también se les conoce con el mote de "los mercados" le creyeron al Secretario de Hacienda, no al Presidente de la República, de manera que prefirieron protegerse comprando dólares, así que a las pocas horas el dólar repuntó hasta 11 pesos para finalmente cerrar en 10 pesos, esto es, una devaluación del 2 por ciento.

Con razón el hecho ha causado gran revuelo. Después de muchas disonancias y desencuentros en el gabinete presidencial, las declaraciones de Gil Díaz vienen a corroborar de manera dramática que ese gabinete no existe y que Fox tiene el poder pero no el mando. Y por si la falta de cohesión política en el equipo de gobierno fuera poca, para colmo la situación económica es tan frágil como lo advirtió Gil Díaz. No importa la relativa estabilidad del tipo de cambio, tampoco el abatimiento de la inflación, ni el considerable nivel de reservas internacionales, cuando la actividad económica sigue postrada y cuando se padece un gran desastre en las finanzas públicas, la presión de la cuantiosa deuda escondida provoca una gran vulnerabilidad económica.

Donde no hay voces disonantes en el equipo de Fox, es en la propuesta de que la solución a los males económicos son las privatizaciones y la reforma fiscal regresiva que de nuevo han colocado en el tapete de la discusión. Por el contrario, de lograr apoyo para esas reformas, el vaticinio de la argentinización de México se cumpliría más temprano que tarde. Además es necesario recordar que México ha sido pionero para evidenciar el fracaso del lla-



mado neoliberalismo, baste recordar los resultados de esa política económica durante los últimos veinte años y las fuertes crisis de 1983, 1987 y 1995. Lo que hace falta es abandonar el modelo que ha llevado a los países latinoamericanos a una larga agonía y empezar a fortalecer sus plantas productivas.

Por lo pronto, y a raíz de sus recientes declaraciones, las voces que exigen la renuncia del Secretario de Hacienda se han extendido, y las que demandan una recomposición del gabinete se hacen más fuertes. Ante la ausencia de rumbo, tienen razón. Pero obviamente no está ahí la solución a los problemas que aquejan al país. Renuncias para resolver la ineficacia ¿para sustituirlos por quiénes? ¿por otros del mismo talante?

A estas alturas vale la pena preguntarse: ¿dónde quedó el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional firmado el 17 de agosto del año pasado por los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión y al que se fueron sumando diversas fuerzas sociales? Es obvio que ese supuesto Acuerdo, naufragó. Y sin embargo es evidente la necesidad de un gran Acuerdo Nacional para sacar al país de la zozobra. Pero para ello se requiere poner los intereses nacionales por encima de los mezquinos intereses privados que han prevalecido hasta ahora. Se necesita entonces claridad y liderazgo. ¿Existen en el gobierno de Fox?

## LA TRANSICIÓN ATORADA

03/07/02

A dos años de haberse registrado el cambio de partido en el gobierno, es evidente que la transición democrática del país se encuentra atorada. Además de la gran conquista popular que significó sacar al PRI de Los Pinos, lo cierto es que las viejas reglas del ejercicio del

poder político continúan actuando. Lo dramático de la situación es que este empantanamiento parece ser producto de la prolongación del viejo régimen vestido ahora con nuevos ropajes, y no del empuje de las fuerzas que estarían pretendiendo conservar lo viejo frente a aquellas que quisieran renovar el sistema político.

Decepción, desencanto, desilusión, son los calificativos más usuales para caracterizar la percepción política de la ciudadanía frente a la figura del Presidente Fox. Diversas encuestas están haciendo evidente el impacto producido por la gran distancia entre las expectativas creadas por Vicente Fox en su campaña y los resultados de su gobierno. Sin duda la medición de ese desfase entre gobernantes y gobernados es una dimensión muy importante para caracterizar la situación política actual y las perspectivas del cambio democrático en el país, pero no alcanza a recuperar la profundidad de la crisis que vive el país.

Sin reforma indígena para la paz con dignidad en Chiapas; sin reforma laboral para acabar con el viejo corporativismo sindical y distribuir el crecimiento de la productividad; sin reforma fiscal para fortalecer las finanzas públicas; y sin fortalecimiento del Estado de Derecho para luchar contra la impunidad, es evidente que continuarán imperando las prácticas políticas del viejo régimen, por la sencilla razón de que los pilares en los que ese sistema se apoyó continúan operando, esto es el racismo y la antidemocracia; el corporativismo sindical; los privilegios fiscales y la discrecionalidad en el gasto público; y la utilización de los recursos públicos para fines partidarios y para el enriquecimiento privado. Para desmantelar esos pilares de manera simultánea y firme, se requiere antes que nada de la voluntad de los actores políticos, empezando por el Presidente y por el partido en el gobierno.

¿Pero por qué habría de interesarle al Presidente Fox y a su partido el desmantelamiento del viejo régimen si fueron copartícipes y beneficiarios de la reformas impulsadas desde el salinismo y sus aliados históricos, también del rescate bancario de Zedillo? Menos

aún, ¿por qué habría de interesarle al PRI dismantelar esos pilares si de ellos depende su poder y si aspira a recuperarlos de volver a la Presidencia en el 2006? En cuanto al PRD, por desgracia sólo se le ha visto claridad en la reforma fiscal, como si fuera un PRI bueno, pero nada en relación a impulsar las autonomías indígena y sindical.

Pedirle liderazgo al Presidente para impulsar estas reformas que constituirían la esencia del pacto político para el México democrático del siglo XXI es tanto como demandarle que traicione su proyecto, lo mismo sucede con el PRI y con el PAN. Pero otra vez, lo dramático de la situación consiste que nadie le está exigiendo que lleve adelante la reforma democrática del Estado, ese nuevo pacto político. Y cuando los partidos y otras fuerzas sociales firman un Acuerdo para el desarrollo Político Nacional en Bucareli (agosto del 2001), lo hacen porque es tan vago que saben que no tendrá ninguna repercusión alguna. Al Presidente se le exige que de resultados y la ausencia de los mismos se mide por sus fracasos legislativos, sobre todo reforma fiscal y energética; para inmediatamente extraer la conclusión de que es el Congreso el que no lo deja gobernar. Una campaña ciertamente contraproducente para la República porque el resultado es la victimización de quien habría que exigirle liderazgo y la animadversión contra un poder republicano, esto es el Congreso.

El tiempo que el país pierde con el empantamiento de la transición lo ganan los partidos en sus cálculos políticos de ampliar sus espacios de poder. ¿Quién le cree al PRI su resistencia a la privatización de energéticos, si cuando estuvieron en el poder la promovieron? ¿Quién no se da cuenta que su oposición es sólo electorera para, si recuperan ese poder ellos mismos promoverla? Se trata sólo de las pequeñas reyertas de la sustitución de una clase política por otra (por cierto bastante bisoña), pero no de la confrontación de proyectos distintos.

Nada indica que la situación cambie en los próximos meses, la pregunta es cuánto tiempo se puede prolongar la crisis de la clase

política sin que se desborde. Sobre todo cuando esa crisis tiene como trasfondo una frágil situación económica. Sigo pensando, como ya lo he planteado en este espacio, que es la hora del Poder Judicial a propósito de su próxima resolución sobre las controversias de inconstitucionalidad de la reforma indígena.

### ATENCO: PROVOCACIÓN PRIISTA

17/07/02

Hizo muy bien el gobierno de Vicente Fox en no caer en la provocación priista de utilizar la fuerza pública como respuesta a la crisis desatada en San Salvador Atenco el pasado jueves. Sin que el gobierno del Estado de México haya hecho nada por defender los intereses de los ejidatarios de la región afectados por la decisión de construir el aeropuerto en Texcoco, la provocación fue evidente cuando el gobernador Arturo Montiel apareció ese día en gira de trabajo por la zona. Ante el intento de los ejidatarios por entrevistarlos, en lugar de escucharlos, envió a la policía para disaudirlos. Cuando los manifestantes trataron de romper el cerco, la violencia se desató con el resultado de varios ejidatarios detenidos, entre ellos sus líderes; ciertos funcionarios tomados como rehenes por los campesinos; y algunos heridos incluso de gravedad.

A partir del decreto expropiatorio del 22 de octubre del 2001 y de la decidida movilización de los ejidatarios, el gobierno estatal ha estado presionando al gobierno federal para que sea éste el que tome las medidas necesarias y asuma los costos políticos de poner un alto a las movilizaciones. Con la proximidad de la visita del Papa y seguramente muy molestos por el espectáculo de ver sentado en el banquillo de los acusados al expresidente Luis Echeverría por sus responsabilidades en las masacres estudiantiles de 1968 y de

1971, y quizá animados también por la reunión de 19 gobernadores de oposición, a algún sector de priistas les pareció que la situación era idónea para que el gobierno de Fox fuera el responsable de una represión semejante a la de 1968. Para completar el cuadro, el gobernador Montiel no sólo envió la fuerza pública, también utilizó el lenguaje de sus ancestros dinosáuricos para señalar a “fuerzas extrañas” como la responsables del conflicto.

La primera reacción del gobierno federal fue preocupante. Los argumentos de no caer en ningún chantaje, junto con los torpes balbuceos del Secretario Cerisola en el sentido de que el proyecto del Aeropuerto en Texcoco no se detendría, podían hacer esperar lo peor. No sucedió así. Las consecuencias del cúmulo de torpezas cometidas por el gobierno federal en la decisión de lo que sería la magna obra pública de este sexenio, estaban a la vista. Lo que tendría que haber sido el delicado trabajo político de conciliar intereses para ubicar el nuevo aeropuerto en el lugar adecuado una vez analizados todos los ángulos de la decisión, estalló en una crisis que puso en riesgo seriamente la paz social. La magnitud de la amenaza a la gobernabilidad obligó al Presidente Fox a realizar una reunión con los miembros del gabinete en la que seguramente les quedaron claros los enormes costos políticos de responder con la fuerza pública a un movimiento social de profundo arraigo en la zona.

La liberación de los detenidos de ambas partes la noche del pasado domingo, las declaraciones desde la Secretaría de Gobernación y después del mismo Presidente Fox, en las que no descarta la reconsideración de construir el nuevo Aeropuerto en Texcoco, junto con los recursos legales aún abiertos –como la controversia de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno del Distrito Federal–, son elementos que abren una nueva etapa en el conflicto y que permiten abrigar esperanzas sobre una solución en la que mediante el diálogo se tome en cuenta los intereses de los campesinos. Estos factores políticos y jurídicos podrían configurar una solución

que sentaría un precedente, no sólo para hacer justicia a los ejidatarios afectados, sino también para abrir nuevas perspectivas a la transición política hasta hoy empantanada.

Son muchas las lecciones que hasta ahora deja el conflicto motivado por el decreto expropiatorio de los terrenos ejidales para ubicar el nuevo aeropuerto en Texcoco, una de ellas es que no siempre van de la mano intereses económicos y políticos. Que el gobierno federal haya cedido a las presiones del Grupo Atlacomulco para construir el aeropuerto en Texcoco, seguramente fue posible gracias a algún pacto para el reparto de beneficios económicos derivados de esa decisión. Pero obviamente el fortalecimiento político que de esa medida se deriva para el grupo que antes encabezaba Carlos Hank, no podía ser desaprovechado por sus beneficiarios en la disputa por el poder que se sigue librando entre la vieja y la nueva clase política, no alrededor de programas económicos y sociales distintos, sino sólo por la gestión política del mismo proyecto excluyente para las grandes mayorías del país, como he venido sosteniendo en este espacio. Como beneficiarios económicos directos, los priístas del Grupo Atlacomulco construyeron el escenario y el gobierno federal estuvo a punto de caer en la trampa política.

Otra lección es que la voracidad económica no es una buena consejera a la hora de tomar decisiones que afecten a sectores con una fuerte identidad social y con un alto sentido de la dignidad. Cuando a la dignidad no se le pone precio, como están haciendo los ejidatarios afectados, pueden desarrollarse movimientos sociales como el que logró conquistar la transparencia electoral y echar al PRI de Los Pinos (1988-2000). Por eso es posible que el resplandor de los machetes de los ejidatarios de Atenco –que a muchos asusta– no sea más que el anuncio de que el camino a la transición democrática del país se sigue construyendo desde abajo. Para el bien de todos.

## ATENCO Y CHIAPAS

24/07/02

Si la convicción que anima al gobierno de Vicente Fox en el diálogo acordado con los ejidatarios afectados por la construcción del aeropuerto alterno de la Cd. de México, es la misma que el Secretario de Comunicaciones Pedro Cerisola hizo explícita en su reunión con militantes panistas el domingo pasado en Mérida, Yucatán, entonces hay malos augurios sobre ese diálogo. Sobre la crisis que estalló dos semanas atrás en San Salvador Atenco, el Secretario Cerisola dijo: "No nos confundamos, el asunto de Atenco puede juzgarse a toro pasado como un error, y seguramente no hubo perfecciones (sic). Sin embargo, no es un problema del aeropuerto, es un problema político. Están queriendo ver qué clase de gobierno somos y cómo vamos a resolver los problemas", (Ver *El Universal*, 22 de julio, primera plana).

Una cosa es ver en la violencia que estalló el jueves 11 una trampa puesta por el PRI al gobierno foxista -hipótesis que sigo pensando como suficientemente explicativa de los hechos y que sostuve en mi colaboración de la semana pasada en este espacio-, y otra es poner en duda la autenticidad del movimiento de los ejidatarios en defensa de las tierras afectadas por el decreto expropiatorio del 22 de octubre del 2001, como lo hace el Secretario Cerisola. Suponer que las movilizaciones de los ejidatarios se encuentran manipuladas por intereses ajenos a ese sector, como se desprende de las declaraciones del Secretario, denota que el gobierno "del cambio" tiene los mismos códigos que el régimen priísta utilizó para encontrar las causas de los conflictos sociales. En ese código, no existen movimientos sociales sino aglomeraciones de retrasados mentales que actúan como títeres al ritmo que les dictan fuerzas extrañas que los manipulan.

En la concepción priísta de los movimientos sociales como producto de alguna manipulación política externa, esas fuerzas podrían encontrarse en la CIA, en el comunismo soviético; en el castrismo cubano y hasta en el imperialismo yanqui; la fuerza de la ideología del nacionalismo revolucionario permitía achacar las culpas de los conflictos sociales a cualquier elemento externo y lograr credibilidad. Así sucedió con el movimiento estudiantil de los sesentas; con la guerrilla de los setentas; pero ya no fue tan fácil con el movimiento ciudadano por la democracia electoral de los ochentas y los noventas, por la sencilla razón de que la guerra fría concluyó con la caída del Muro de Berlín y de que la sociedad mexicana, junto con los medios de comunicación han cambiado. Las viejas historias de los movimientos sociales como producto de la manipulación ya no tienen sustento, pretender ahora resucitarlas *denota mucha torpeza política*.

Por su parte el Procurador de Justicia del Estado de México Alfonso Navarrete Prida, días atrás aseguró que elementos de organizaciones como el EPR y el Procup participan en el movimiento de Atenco. Coincide con el Secretario en la tesis de la manipulación, la diferencia es sólo el origen de la misma. Las declaraciones de Cerisola sirven para ubicar el origen del problema en intereses priístas, las del procurador para echar más leña al fuego al conflicto que enfrenta el gobierno federal. Ambos se atrincheran en sus intereses políticos de grupo y tratan de desvirtuar el movimiento social que se ha desarrollado a lo largo de los últimos nueve meses.

En relación al precio del metro cuadrado de los terrenos que se pretende expropiar, Pedro Cerisola argumentó que "Los desarrolladores inmobiliarios dicen que no se puede pagar más de treinta y cinco (pesos)" y que el precio de 25 pesos para las tierras de riego está por encima de los 18 pesos que se pagaron a los agricultores de Denver en EUA, afectados por la construcción del aeropuerto de esa ciudad. Es posible que así sea, pero el problema es que los interlocutores para resolver la ubicación del aeropuerto al-



terno de la Cd. de México, no son ni los desarrolladores inmobiliarios, ni el mercado de tierras en Denver, sino y precisamente ejidatarios organizados y convencidos de que la tierra no tiene precio.

A pesar de la reforma salinista-panista al artículo 27 constitucional que permite la venta de terrenos ejidales, pareciera que aún existen núcleos de campesinos empeñados en que su tierra no se mercantilece, es el caso de San Salvador Atenco. Cuando el EZLN surgió, Salinas declaró que el problema se reducía a cuatro o cinco municipios de la selva chiapaneca. Ocho años después el conflicto continúa sin solución. Si el gobierno de Fox se sienta a dialogar con los ejidatarios de la región donde se pretende construir el aeropuerto con la idea de que se trata de personas manipuladas por intereses extraños, a los que se puede convencer de vender sus tierras a precios más altos y recibir otros beneficios, entonces es muy probable que en esa mesa no se logre una solución y que Atenco se convierta en otro Chiapas....sólo que a pocos kilómetros de la capital del país

## EL JUEGO DE LA JUSTICIA

10/07/02

A la justicia se la representa como una señora de ojos vendados, balanza en una mano y espada en la otra. Según esta imagen, son consustanciales a la justicia la imparcialidad con la que se juzga y la equidad y eficacia con las que se aplica la ley. Pero como a la hora de hacer justicia esas virtudes están muy lejanas de la realidad, sus representaciones más populares están asociadas con todos los vicios que permiten el crecimiento de la impunidad y la ausencia de derecho. A esos vicios que han caracterizado al sistema de justicia en nuestro país, tendríamos que agregar la moda que

se ha ido imponiendo durante los últimos años que consiste en abrir investigaciones que se convierten en largos y tortuosos caminos que terminan fincando delitos que ya prescribieron o cuya existencia no se puede probar. Pero mientras se llega a esas conclusiones los juicios se ventilan en la opinión pública de manera ostensible y con ello van cumpliendo la funcionalidad política de dirimir las disputas internas de la clase en el poder, muy distante de la obligación legal de dilucidar responsabilidades y de castigar a los culpables de los delitos imputados.

La mayoría de esos procesos están relacionados con asesinatos políticos; con fraudes bancarios; con el uso indebido de puestos públicos que van en detrimento del patrimonio nacional; y con los delitos electorales cometidos en el desarrollo de las campañas. A ellos hay que agregar la novedad en este sexenio de las investigaciones abiertas para juzgar a los responsables de las matanzas de Tlatelolco, el diez de junio y la guerra sucia contra la guerrilla de los años setentas.

Asesinatos políticos como los de Manuel Buendía, Colosio, Ruiz Massieu, el Magistrado Polo Uscanga y masacres como las de El Bosque, Aguas Blancas y Acteal han llegado a conclusiones y resultados sobre los cuales siempre queda la percepción de que no se llegó hasta el final. Pero apenas se cierran expedientes cuando ya se abren otros como el de Aguas Frías, investigación por la que se encuentran presos campesinos tan pobres como los asesinados en ese paraje, habitantes de un pueblo misérrimo como el de los ahora difuntos. Y sin embargo se afirma que se está haciendo justicia, aún cuando sea difícil creer que todos los ahorros (?) de una comunidad indígena sean destinados para comprar armas y defenderse de los vecinos del pueblo cercano por los litigios de tierras, y aunque así fuera, lo cierto es que la justicia por mano propia y no a través de las instituciones creadas para impartirla, habla precisamente de los vacíos de poder que el gobierno deja, seguramente para que sus funcionarios continúen en el poder.

En cuanto a las investigaciones sobre fraudes bancarios sabemos que han sido tan deficientes que los acusados gozan de libertad porque la autoridad estuvo presta a detenerlos, una vez que los delitos habían prescrito, sobre lo cual el Sr. Cabal Peniche no tendrá queja alguna, pero sí quienes pagamos la socialización de sus pérdidas y la permanencia de más de gobiernos priístas gracias a los problemas de inequidad de las campañas electorales, como reconoció el propio expresidente Ernesto Zedillo, mientras seguramente recordaba el desvío de recursos de la Banca Cremi-Unión que se destinaron al financiamiento de su campaña, investigación que al parecer aún no concluye, seguramente atrapada en el candelero del secreto bancario. De igual suerte goza el ex regente Espinoza Villarreal.

Y después de las promesas de Francisco Barrio de atrapar a los peces gordos del *Pemexgate* el ex director de la paraestatal se presenta ante una juez en Houston, Texas para enterarse de que el gobierno mexicano no ha enviado los documentos necesarios para su extradición, mientras Lino Korrodi el responsable de las finanzas de los *Amigos de Fox*, logra la suspensión provisional de las acciones de autoridad para investigar sus cuentas, en lo que parecería ser un empate en los dos juicios que están sirviendo para medir fuerzas entre los priístas desbancados en el 2006 y la nueva clase política que arribó al poder en esas fechas. Todo ello al amparo del Programa del Gobierno Federal para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, cuyo acto de presentación en agosto del año pasado en la sede del PRI, se convirtió en una especie de pacto de no agresión entre ambas fuerzas.

Por eso en la investigación del *Pemexgate* y de los orígenes de los recursos de campaña usados por los *Amigos de Fox*, seguramente continuaremos viendo a la Sra. Justicia con los ojos sin vendar, sin balanza, y en lugar de espada, blandiendo una ligera raqueta de ping-pong. Ojalá que las investigaciones de la fiscalía especial sobre hechos del pasado que ya ha logrado sentar en el banquillo de

los acusados al ex Presidente Luis Echeverría, no caiga en el mismo juego.

## DE RUPTURAS Y PASADOS REMOTOS

31/07/02

El fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto hizo declaraciones macabras y delicadas sobre los hechos de la guerra sucia de los años setenta que está investigando. El sábado pasado, desde Acapulco, Guerrero, el fiscal lanzó la hipótesis de que es altamente probable que presuntos integrantes de grupos guerrilleros de aquellos años se encuentren reclusos en cárceles clandestinas. "Si ocurrió en Mozambique, por qué no en México... descartarlo sería atroz". Otras de sus hipótesis es que se encuentren enterrados en cementerios también clandestinos, o que formen parte del universo de indigentes que deambulan por la calles con alteración de sus facultades mentales.

Una vez establecidas y hechas públicas esas presunciones, al fiscal le corresponde hacer de inmediato lo que por ahora sólo está considerando como necesario: solicitar las órdenes de cateo de los predios donde supuestamente se encontrarían las cárceles o los cementerios de los desaparecidos, así como el censo de los indigentes. Sólo de esa manera podría esa fiscalía continuar construyendo la ruta de su credibilidad.

La creación de esa fiscalía especial ha estado rodeada del franco escepticismo de muchos, y de la esperanza moderada de que realmente se haga justicia, que alienta a otros. Como ya lo he dicho en este espacio, su misma creación significa un avance para la construcción de un sistema democrático en el país, y ese avance es producto en primer término, de la larga lucha de las organizaciones de

familiares de los desaparecidos políticos, a pesar de que hasta ahora, al menos alguna de esas organizaciones no reconozca a esa fiscalía como una conquista de su movimiento. La fiscalía especial es producto también y por supuesto, del amplio movimiento democrático que se desplegó a partir de 1988.

Ver a Luis Echeverría y a Martínez Domínguez en el banquillo de los acusados, constituye sin duda un hecho positivo para el desarrollo de la cultura democrática del país. Los poderosos que antes eran intocables ahora pueden ser juzgados. Pero no es suficiente. No basta convocarlos a un juicio como indiciados, es necesario llevar esas investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Quedarse a mitad del camino sería alimentar el cinismo político de los gobernantes y la desconfianza de los gobernados.

En algunas ocasiones el fiscal ha declarado que su responsabilidad no es enjuiciar instituciones, sino servidores públicos que sean señalados como responsables de hechos delictivos cometidos en el pasado contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos. En estricto sentido tiene razón. Juzgar a las instituciones no corresponde al ámbito de la justicia, sino de la política.

Pero también es cierto que de la mano de esas investigaciones judiciales, es inevitable que la sociedad vaya desarrollando el juicio político contra el régimen priísta que fue el responsable de la guerra sucia. De ello se dan cuenta en primer término los priístas. Por eso las protestas de Roberto Madrazo, de Gómez Villanueva, y de otros, después de los interrogatorios a Echeverría. Si de romper con el pasado se trata, obviamente el trabajo de la fiscalía especial es fundamental.

Sin embargo, por los avances en las investigaciones de la fiscalía especial pareciera que tratándose del pasado, al gobierno de Vicente Fox le es más fácil y conveniente romper con el pasado remoto del populismo priísta y no con la historia iniciada por los llamados gobiernos tecnócratas. Al menos así parece desprenderse de las reyertas establecidas por la Secretaría de la Contraloría en su

supuesta lucha contra los desvíos de recursos públicos de los Salinas; y de los fraudes contra Pemex y Capufe entre otros. El problema es que, siendo el priismo un sólido entramado de complicidades, las investigaciones de la fiscalía especial pueden llegar a toparse con ese entramado. El tiempo lo dirá.

Por esas razones, la esperanza de que la fiscalía llegue al fondo de las investigaciones es moderada. Y quizá para irse curando en salud a propósito de los límites de su tarea, en alguna entrevista, el fiscal Carrillo Prieto definió como elementos de una discusión abierta la retroactividad e imprescriptibilidad de los delitos que investiga, así como los alcances del fuero militar y de las leyes nacionales e internacionales. Ciertamente si las investigaciones y los resultados de la fiscalía especial sólo dependieran de la clase política –la que está y la que quiere retornar–, la esperanza de combatir la impunidad sería mucho menos que moderada. Obviamente cualquier resultado positivo de esas investigaciones para el desarrollo democrático del país, depende del interés que la sociedad ponga en ellas.

#### ATENCO Y EL BESO, UNA BUENA Y UNA MALA DECISIÓN

07/08/02

Durante la semana pasada el Presidente Fox tomó dos decisiones importantes para el desarrollo político del país, una buena y otra mala. La buena es que anuló el decreto expropiatorio de los terrenos ejidales de Texcoco para la construcción del nuevo aeropuerto, la mala es que al besar el anillo del Papa Juan Pablo II violó la legalidad que se comprometió a cumplir cuando aceptó protestar como Presidente de la República Mexicana.

En la decisión de dar marcha atrás al proyecto de construcción del aeropuerto en Texcoco, seguramente estuvo presente el cálculo

de la probabilidad de que la Suprema Corte de Justicia resolviera que el decreto era inconstitucional, resolución que sumada a las que ya ha tomado la Corte en este sentido sobre la manera que viene ejerciendo su mandato el Presidente Fox, podría tener un alto costo político para su gestión. Y sin duda en la cancelación del proyecto influyó de manera fundamental, la determinación de los ejidatarios de San Salvador Atenco de no vender sus tierras, misma que los llevó a desarrollar una lucha ejemplar a lo largo de los últimos nueve meses.

Pero independientemente de cuál haya sido la ponderación que el gobierno federal hizo entre el riesgo de exhibir la inconstitucionalidad de sus decretos expropiatorios y las movilizaciones de los ejidatarios para finalmente cancelar el proyecto de Texcoco, lo cierto es que esa decisión merece el reconocimiento político debido. De aquí en adelante, si el aprendizaje de gobernar no es muy lento, cualquier propuesta alternativa tendrá que ser dialogada y consensada primero con los posibles afectados. Esta pareciera ser la lección elemental que se deriva del fracaso del proyecto de Texcoco.

Esta buena decisión, se dió a conocer el mismo día en que concluyó una visita del Papa plagada de conductas que no se corresponden con el marco jurídico que rige las relación Iglesias-Estado en nuestro país a partir de las reformas de 1992. En primer término, a una visita pastoral del líder de la Iglesia Católica se le dió el carácter de visita de Estado, por lo que pudimos presenciar que de manera impropia el Estado mexicano se hacía cargo de las ceremonias que debían estar organizadas por la jerarquía católica y donde en todo caso el Estado mexicano pudo ser el facilitador. Si no era visita de Estado, el Presidente no tenía por qué haber asistido al recibimiento en el hangar presidencial, tampoco los miembros del gabinete, y mucho menos de la manera destacada en que lo hicieron, esto es, no como simples ciudadanos quizá creyentes, sino como funcionarios de gobierno.

No conforme con violentar de esa manera la Ley de Cultos, todavía como Jefe de Estado Vicente Fox se inclina a besar el anillo de otro Jefe de Estado ¿Dónde queda entonces la soberanía del Estado que representa? ¿Dónde la promesa de hacer cumplir y respetar la ley? Siendo diputada en la LV Legislatura voté en lo general a favor de la reforma al 130 constitucional y de la Ley de Cultos. Se trataba efectivamente de regular una relación cuya existencia, hasta entonces el Estado mexicano había negado. Y esa reforma que establece que los funcionarios de gobierno no podrán asistir en tal carácter a ceremonias religiosas es lo que puso fin a la simulación y no como el Secretario de Gobernación, Santiago Creel, interpreta, esto es que los funcionarios alegremente violen la ley.

Estos hechos, de los que fueron responsables en primera instancia el Presidente de la República y el Secretario de Gobernación son graves, y es grave también que el PRD como supuesto partido de izquierda no se haya pronunciado frente a los mismos como "entidad de interés público (para) promover la participación del pueblo en la vida democrática..." (artículo 41 de la Constitución). Más allá de las declaraciones de algunos de sus dirigentes, la situación ameritaba una toma de posición como instituto político.

Todo parece indicar que el afán de agradar a un pueblo mayoritariamente católico hace que el interés electoral haga a un lado las obligaciones legales del gobierno y los deberes políticos del PRD o de cualquier otro partido o agrupación política llamada de izquierda. No se extrañen cuando la iglesia católica participe desde el púlpito para apoyar las reformas legales promovidas desde el gobierno y desde la derecha. Cuando fue necesario, en la reciente visita papal, no se deslindaron de la simulación de hacer pasar como legales las conductas de los gobernantes violatorias de la ley. Quizá no sepan que la tragedia de los oportunistas es no saber ser oportunos.



## BLINDAJE A LAS TRASNACIONALES

14/08/02

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) marca el año 2003 como el inicio de una nueva etapa en la desgravación de productos agropecuarios. Frente a esta perspectiva y a pesar de la alta competitividad de su sector primario, el gobierno de George Bush presentó hace algunas semanas la Ley Agrícola 2002, mediante la cual se reafirma la política de cuantiosos subsidios de apoyo a sus productores del campo. Por su parte el gobierno del Presidente Fox, a través de sus Secretarios de Economía y de Agricultura presentaron la semana pasada un gotesco Programa de Blindaje Agropecuario (véase *El Universal*, 12 de agosto, p. A11). Este programa hace patente el continuismo del llamado “gobierno del cambio” en relación a la política económica inaugurada por los gobiernos priístas en diciembre de 1982, cuya estrategia es dejar que el mercado decida el rumbo, aún en sectores prioritarios y estratégicos como es el caso de la producción alimentaria.

Para empezar, constituye un sin sentido utilizar el término blindaje para aludir a una política cuyo centro es la desprotección al sector. Desprotección en todos los sentidos como lo marca la estrategia neoliberal. Por ejemplo, abrir las fronteras comerciales frente a socios cuya productividad es diez veces mayor que la nacional, también eliminar subsidios y apoyos crediticios cuando los países competidores continúan utilizando esos instrumentos para fortalecer a sus productores.

El programa coyuntural anunciado por los secretarios mencionados, es fiel al programa sectorial del gobierno. No podía ser de otra manera. Así nos recuerda que las políticas públicas del presidente Fox en la materia están encaminadas a: capacitar a los productores; potenciar las actividades productivas rurales no agrícolas,

léase artesanías y turismo; y por último diversificar los ingresos de los productores rurales a través de empresas de servicio e industriales que den valor agregado. En otras palabras la política gubernamental parte de la agonía del sector y entonces sugiere que los productores rurales se dediquen a otra actividad sin abandonar el campo. Y a quienes han logrado sobrevivir, es decir, los que disponen de capital, les reitera que las políticas públicas actuales "se dirigen hacia mayores niveles de especialización productiva y eficiencia económica".

Así pues la política pública para el sector agropecuario, como para el resto de los sectores, se reduce a acompañar las orientaciones del mercado y a apoyar a sus beneficiarios que no son precisamente los campesinos, sino los productores con capital para quienes se ha dispuesto la desregulación, la privatización de ejidos y la concentración de tierras mediante las sociedades de inversión, como un jugoso negocio, en el que participan por supuesto compañías trasnacionales.

Pero bueno, si el Sr. Bush ofreció su Ley Agrícola 2002 a sus productores rurales, el Sr. Fox no se podía quedar atrás. Para empezar y para que quede claro de que se trata de proteger al mismo sector de inversionistas de ambos lados de la frontera, señala que "Todos los productores que sean competitivos tendrán el apoyo del gobierno federal". Y a sabiendas de que la mayor apertura comercial a partir del 2003 significará mayor desmantelamiento de pequeños productores, entusiasmados, los Secretarios de inmediato afirman: "Más aún, no sólo se trata de proteger y defender a los productores, sino de impulsar, lo antes posible los cambios estructurales que requiere el campo, así como el comercio agropecuario".

Entre las medidas de blindaje dedicadas a los productores eficientes, el gobierno ofrece: convertirse en adalid mundial del libre comercio agropecuario (medida número uno); recordar -ahora sí- que el TLC incluye salvaguardas para casos de competencia desleal (medida dos); saludar a la bandera nacional siempre que sea nece-

sario (medida tres); convencer al consumidor de que si no compra no es por falta de ingresos sino por falta de conciencia nacional (medida cuatro); aplicación de recursos fiscales inexistentes gracias a la deuda escondida avalada por el gobierno foxista (medida cinco).

Sí el Sr. Fox no podía fallarle al Sr. Bush. En materia agropecuaria se trataba de enviar el mensaje de que la soberanía agroalimentaria no está entre las prioridades del gobierno de México y de que los criterios del mercado, léase los intereses de las transnacionales en el campo mexicano, seguirán dictando las orientaciones de la política económica en la materia.

### ¿MEDIR O RESOLVER LA POBREZA?

21/08/02

Durante los últimos años, y sobre todo a partir de 1989 cuando se inauguró el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), la discusión sobre la cuantificación de la pobreza en el país se ha puesto en boga. Cincuenta y tres millones setecientos mil pobres es la cifra reconocida por el gobierno federal según la nueva metodología de medición presentada la semana pasada por la Sedesol. Más de sesenta millones según Julio Boltvinik, reconocido especialista en la materia. Sin embargo, cualquiera que sea la cifra que más se acerque a la realidad, lo cierto es que las condiciones de vida de más de la mitad de la población total no le permiten alcanzar los mínimos de bienestar.

Los diagnósticos cuantitativos sobre la pobreza son útiles por muchas razones, la más importante es que esos estudios permiten medir el rezago social, sin embargo pueden convertirse en discusiones bizantinas si el interés en medirlo no se acompaña de una

política eficaz para atacar la raíz del problema y empezar a resolverlo. Ni el gobierno actual ni los anteriores han documentado ese interés pues la máquina de generar pobres, esto es la política económica, continúa funcionando de manera vigorosa.

Junto con la moda de discutir el volumen de la pobreza, *entró* también en escena la estrategia de combatir a la pobreza con programas asistencialistas que iniciaron con el Pronasol y que sólo han ido cambiando de nombre, programas cuya cobertura ha estado acotada a la población en pobreza extrema y que según el gobierno actual no llega a los tres millones de familias. Así, desde 1989 empezó a desarrollarse una política que reparte migajas a la población en extrema pobreza, la que para acceder a esas migajas debe tener una tarjeta que la acredite como tal. La pobreza se ha credencializado y con ello se ha segmentado a la población en ciudadanos de diferentes categorías. Institucionalizada así la pobreza, *se ha terminado* por concebirla como una mala jugada del destino, como una fatalidad que si no logra conjurarse con la política asistencialista, al menos sí funciona para capturar votos mientras se continúa aplicando la política económica productora de pobres. Además, focalizar el combate a la pobreza forma parte de la estrategia del Estado de renunciar a su obligación constitucional de hacer una realidad los derechos sociales como derechos universales para garantizar una vida digna.

Cuando, como diagnostica el estudio del gobierno federal, el 56.9% de los hogares sobreviven con ingresos de 35 y 52 pesos diarios en el campo y la ciudad respectivamente, las únicas inversiones rentables son las finanzas especulativas, el narcotráfico o el sector exportador, porque esas actividades no dependen de un robusto mercado interno, para ellas el poder de compra de la población es un dato marginal. Y esa realidad socioeconómica va determinando el círculo perverso de mayor concentración del ingreso y la riqueza y mayor extensión de la pobreza.

La pobreza seguirá marcando el destino de cada vez más amplios sectores de la población hasta en tanto no se dé un vuelco a la política económica que permita el crecimiento sostenido y suficiente de los salarios reales, del empleo, del gasto social y el mejoramiento en la distribución del ingreso. Pero no, apenas los salarios dan signos de recuperación cuando ya se los está satanizando como responsables de tensiones inflacionarias; el producto del sector formal de la economía crece mientras disminuye el empleo que genera en una fracturada relación que no se recompone; el gasto social apenas ha alcanzado los niveles per cápita de 1982 sin que se haga algo por pagar la deuda social acumulada en sus veinte años de caída y mientras todo se hace por pagar la deuda pública contabilizada y escondida que sumadas alcanzan el 80% del Producto Interno Bruto; la distribución del ingreso continúa concentrándose más según los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) del 2000, mientras el gobierno sigue presionando por una reforma fiscal regresiva.

En realidad la continuidad de esa estrategia respecto a salarios, empleo, gasto social, y distribución del ingreso, lleva implícita la decisión política de mantener la recuperación de las ganancias de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros a costa del empobrecimiento de amplios sectores de la población. Una vez que la decisión de favorecer a unos cuantos se ha mantenido de manera invariable por el llamado gobierno del cambio, no tendría por qué sorprenderse a la hora de medir la extendida pobreza en el país.

Son muchos los riesgos de continuar perfeccionando las mediciones de la pobreza sin tomar las medidas necesarias para modificar el rumbo de la economía y con ello combatir las causas que la generan y que además afectan al país en su conjunto. Por supuesto las probabilidades de estallidos sociales aumentan y la tentación de caer en el autoritarismo para combatir las inconformidades sociales también. Se ponen en riesgo la gobernabilidad y la paz social y junto con ello se vulnera el incipiente sistema democrático del

país, pero también su viabilidad económica en tanto el mercado interno se estrecha cada día más y el externo se hace más errático. Además de medir bien la pobreza, hay razones de peso y suficientes para cambiar la política económica.

## LA REFORMA ELÉCTRICA

28/08/02

Finalmente, el pasado miércoles entró a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa foxista de reforma a la industria eléctrica, con lo cual se abre una nueva etapa en el debate nacional sobre el destino de esta industria estratégica para el desarrollo económico del país. La iniciativa fue turnada al Senado de la República en donde se encuentran las propuestas presentadas por PRI y PRD en la actual legislatura. La manera en que se den los alineamientos de las fuerzas políticas en torno a la iniciativa presidencial determinará la ruta de las transformaciones de la industria eléctrica y también en buena medida el futuro político del gobierno foxista y del país.

Hasta ahora parece existir consenso entre las fuerzas políticas y sociales sobre la necesidad de la llamada reforma eléctrica para fortalecer a esa industria y que en el futuro sea capaz de abastecer de manera adecuada la demanda doméstica, así como la de los diversos sectores económicos del país. En lo que no existe consenso es en el diagnóstico del estado actual de la industria eléctrica y tampoco en la manera en que pueda ser resuelta su problemática.

Quienes están convencidos de que ese sector debe continuar en manos del Estado tal como lo establecen los artículos 27 y 28 constitucionales para de esa manera preservar un instrumento fundamental en el logro de la rectoría del Estado sobre el desarrollo

nacional (art. 25 de la Constitución) y para la soberanía nacional, han planteado reformas a las leyes secundarias para, entre otras, otorgar autonomía de gestión a la Comisión Federal de Electricidad y de esa manera lograr su fortalecimiento financiero. Es el caso, hasta ahora, del PRI y del PRD. Por su parte el Ejecutivo Federal y el PAN están proponiendo reformas constitucionales para ceder un espacio importante del mercado eléctrico a los inversionistas privados.

El debate sobre las nuevas reglas del juego para el sector eléctrico en realidad se inició hace diez años, cuando a las reformas al artículo 27 constitucional siguieron una cascada de modificaciones a sus leyes reglamentarias, entre otras la que norma la prestación del servicio eléctrico que permitió la participación de la inversión privada en la generación de electricidad para el autoconsumo, cuyos sobrantes deben ser entregados a la CFE. Gracias a esas reformas en la actualidad el 10% de la electricidad se genera por empresas privadas. Para una mayor participación en la producción del fluido eléctrico, los capitalistas están demandando la holgura de una reforma constitucional que les garantice una porción más amplia del negocio. La iniciativa foxista les estaría cediendo el mercado de los grandes consumidores, esto es alrededor del 60% del total.

Pero además de ese 10% de participación del capital privado que el Estado ya ha otorgado, a partir de 1996 y gracias a las reformas a la Ley General de Deuda Pública los inversionistas privados también participan en el sector eléctrico a través de la modalidad del financiamiento con registro diferido en el gasto denominada Pidiregas, que constituye un disfraz a la contratación de deuda con particulares para compensar la caída de la inversión pública en el sector energético. Los llamados Pidiregas forman parte de la deuda pública no contabilizada como tal, pero que cada ejercicio presupuestal exigen una mayor cantidad de recursos para cumplir con los compromisos contraídos con los inversionistas privados;

recursos públicos cuyo crecimiento está muy por debajo de los requerimientos de pago de esa deuda.

Esa merma en la capacidad de pago a los acreedores privados de CFE es una de las razones de la prisa del gobierno por lograr las reformas constitucionales. Si consigue que su iniciativa se apruebe, entonces desaparecería la presión sobre las finanzas públicas de esa parte de la deuda escondida, en tanto en lugar de Pidiregas habría cesión directa de más de la mitad del mercado eléctrico para la inversión privada. Sin duda un trueque bastante jugoso.

Esta situación ilustra que la iniciativa presidencial se guía por una estrategia de muy corto plazo en torno a un tema que compromete al futuro del país. Además de que tanto los compromisos de deuda existentes como el descuido de la inversión pública en el sector son resultado de una política en la cual han prevalecido razones ideológicas que disfrazan el voraz interés privado, a la hora de decidir entre Estado o mercado en la gestión de los sectores estratégicos. Habría que recordar también que la mayor parte del desastre de las finanzas públicas es resultado *del rescate bancario* y del derroche de recursos públicos en la banca de desarrollo, esto es de una política deliberada de privilegio al capital privado.

Existen versiones sobre el virtual apoyo de un sector de la dirigencia priísta a la iniciativa presidencial de reforma eléctrica, tema sobre el que volveré en este espacio. Pero nadie duda que los alineamientos de la fuerzas políticas en torno a esta reforma definirán su ubicación en el escenario electoral del 2003, tanto que es posible que ese cálculo político termine por congelar la iniciativa.



## EN BUSCA DE LA GOBERNABILIDAD

04/09/02

En su Segundo Informe de Gobierno, el Presidente Vicente Fox llegó al Congreso pidiendo a los partidos un acuerdo para lograr la gobernabilidad democrática. Esa petición fue lo más importante de su mensaje político en la tribuna de la Cámara de Diputados, y no por supuesto su informe sobre la situación que guarda la administración pública. Y aunque en su respuesta, la Diputada Paredes afirmó que no existe "crisis de gobernabilidad" lo cierto es que los dos primeros años de gobierno ya le dejaron claro al Presidente que sin el apoyo del Congreso no puede gobernar.

El preámbulo inmediato a la petición presidencial, fue el envío al Congreso de su iniciativa de reforma constitucional para la reestructuración del sector eléctrico; su reunión con la dirigencia priísta en Los Pinos para tratar el tema; la convocatoria de Rosario Robles a los partidos a la firma del Pacto de Morelia; las denuncias ante la Fiscalía Especial contra Elba Esther Gordillo y Carlos Jonguitud por su responsabilidad en el asesinato de Misael Núñez Acosta; la ausencia de acuerdo para la rotación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y por tanto la participación de Beatriz Paredes en la respuesta al Segundo Informe de Gobierno. Esos hechos marcaron el clima político de la semana anterior a ese Informe, en el contexto del primer tercio del gobierno foxista definido por la parálisis de las llamadas reformas estructurales del gobierno: la fiscal, la eléctrica y la laboral.

Vale la pena destacar los antecedentes inmediatos al Informe porque son significativos de la ausencia, hasta ahora, de una estrategia gubernamental para lograr acuerdos políticos con un Congreso que no controla, y de los reacomodos de las fuerzas políticas en estos tiempos de alternancia. La presencia de la dirección nacio-

nal priísta en Los Pinos desató una tormenta al interior de ese partido por el aparente respaldo de Madrazo a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, apoyo que iría en contra de los acuerdos de la asamblea nacional del PRI. Por su parte la fuerza política de Elba Esther Gordillo ya exhibida durante la firma del Acuerdo Nacional para la Evaluación Educativa y consolidada con su función de puente entre Fox y Madrazo, se tambaleó por la furia de ciertos sectores del PRI y por el señalamiento de Jonguitud contra la maestra como responsable del asesinato de Acosta Núñez en 1981.

En el fondo de estos hechos que definieron las primeras planas de la prensa nacional, se encuentra la disputa al interior del PRI sobre el papel a jugar en su relación con el Ejecutivo y sobre el sector capaz de conducir esa relación.

En el primer escarceo para medir fuerzas, el PRI le ganó la partida el gobierno por su oposición a la reforma fiscal. En este segundo round de la reforma eléctrica, el PRI se está moviendo con la inteligencia de la indefinición, sin duda esperando conseguir mayores seguridades de impunidad que las ya evidentes en el *Pemexgate* y Capufe. Mientras que la inteligente jugada de Rosario Robles de convocar a la firma de un acuerdo entre los partidos logró el objetivo de que no marginen al PRD de las negociaciones, como parecía ser la intención en Los Pinos, pero tuvo el costo político de fortalecer a Madrazo y al PRI, y desdibujar al PRD. Quizá también ese desleimiento perredista alimentó la soberbia de PRI y PAN a la hora de decidir la dirección de la Cámara de Diputados.

Sin duda la fuerza de Gordillo le viene, entre otros, de su habilidad para legitimar la política de "modernización" priísta desde 1982, de la rentabilidad de haber aportado centos de miles de votos a Carlos Salinas cuando otros sectores corporativos coquetearon con el cardenismo; del poder corporativo que le aporta el sindicato más fuerte de América Latina; y de su relación con los intelectuales del voto útil. La solidez de su figura la convierte en una gestora muy apta para los tiempos que vive el PRI, de ahí los apapachos de

Madrazo y el silencio de otros priistas en el momento de su autodefensa. Por su parte la demanda interpuesta por dirigentes de la CNTE ante la fiscalía especial, constituye una buena prueba para saber si ese órgano de la PGR sólo quiere tocar a las figuras del populismo priista o está dispuesta a investigar a personajes emparentados políticamente con el salinismo.

Así Fox llegó a rendir su Segundo Informe de Gobierno con un PRI fortalecido, con un PRD desdibujado y con un PAN ausente. Porque frente a la necesidad de tejer acuerdos con el resto de las fuerzas políticas para los proyectos del Ejecutivo, ¿dónde ha estado el PAN? ¿Sólo confirmando que Bravo Mena no era el candidato de Fox y que este perdió en las elecciones internas de su partido y ganó en las del PRI? El hecho es que la petición del Presidente de alcanzar un acuerdo político en el Congreso para lograr la gobernabilidad democrática, fue, aunque tardía, adecuada a los intereses de su proyecto que sabemos son los mismos del instaurado a partir de 1982 en el país. Pero a pesar de lo estratégico de su demanda y de que parece inaugurar un nuevo ciclo en su relación con el Congreso, aún así, no se vió al estadista que toma las riendas de la conducción política. No, solamente se vió a un empresario que agobiado por sus acreedores pide la reestructuración de su deuda para lograr sobrevivir la situación. Las próximas semanas seremos testigos de cómo se despliega la estrategia gubernamental para alcanzar esa gobernabilidad democrática.

## GOLPE A LA DEMOCRACIA

11/09/02

Atrincherada en discutibles argumentos jurídicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) asestó el pasado viernes seis de

septiembre un golpe a la democracia. Por ocho votos contra tres, los ministros declararon improcedentes 321 de las 330 controversias constitucionales interpuestas por municipios predominantemente indígenas, en contra del procedimiento para aprobar las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas. De esa manera frustraron las expectativas que se habían depositado en el máximo órgano del Poder Judicial para que se reabriera la discusión y se enmendara el atropello del Poder Legislativo en contra de los Acuerdos de San Andrés plasmados en la iniciativa de la Cocopa.

Para fundamentar su decisión, la *SJCN* argumentó que de haber entrado a la discusión sobre errores de procedimiento en la aprobación de esa reforma “se tacharía a la Corte de activismo judicial o de la arrogancia de creer que es el único órgano que tiene el monopolio de la eticidad. Todo tiene un límite –aseguró el Ministro Juan Díaz Romero–. La *SJCN* es el órgano terminal de la justicia en México. Así también la Constitución es el órgano terminal de esa pirámide”. Cuando justamente de lo que se trataba era de restablecer la ética en los fundamentos del Estado mexicano, para renovarlo, para lograr un nuevo pacto social incluyente, democrático; el último órgano en este proceso, esto es la *SJCN*, se declara incompetente en la materia. La pregunta es: después de esta decisión ¿qué esperanza le queda a la paz social, a la justicia, a la transición democrática?

Los especialistas en la materia sabrán argumentar si hubo razón jurídica suficiente para que el máximo órgano del Poder Judicial desechara por improcedentes esas 321 controversias constitucionales. Por lo pronto es necesario reflexionar sobre las consecuencias de esa decisión en varios órdenes de la vida nacional. En tanto los afectados en primera instancia por esta decisión son los pueblos indígenas excluidos de los beneficios del crecimiento por más de quinientos años, en términos sociales la decisión exacerbará el racismo abierto de muchos sectores y alentará el que todavía se encuentra disfrazado.

Y como el racismo es el ropaje de la discriminación económica y política, con la decisión de la Corte se seguirán alentando los mecanismos de hostigamiento y exclusión a los indígenas. Los grupos paramilitares financiados por caciques regionales en Chiapas continuarán la guerra de baja intensidad contra las comunidades zapatistas, en una escalada que está poniendo en grave riesgo precaria paz en esa entidad. Reproducir la exclusión y el hostigamiento contra los pueblos indígenas y alentar la guerra en Chiapas constituye la consecuencia inmediata de la decisión de la Corte. Dar un mensaje de guerra también, no sólo a los grupos paramilitares sino incluso a los grupos radicalizados que han valorado que están agotados los cauces pacíficos para la transformación del país.

Pero además, esa determinación coloca un serio obstáculo para que la alternancia se convierta en un proceso de transición a la democracia. Para esa transición es evidente la necesidad de un nuevo pacto social, incluyente y democrático. La decisión de la Corte fortalece las posiciones de la anquilosada clase política que menosprecia a los pueblos indígenas como parte necesaria y fundamental de la reforma democrática del Estado, en cuya base tendría que estar la fortaleza de ese nuevo pacto. Si no se entiende que la demanda de autonomía de los pueblos indígenas constituye el proyecto capaz de trascender la etapa de la democracia electoral para arribar a la democracia participativa, entonces la alternancia que estamos viviendo seguirá atapada en las inercias del pasado.

El reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas transformaría de raíz la constitución del Estado mexicano para democratizarlo y modernizarlo porque: a) abriría el camino a la tolerancia como forma de convivencia social, no sólo hacia los indígenas sino hacia cualquier minoría; b) abriría las puertas a la democracia participativa en tanto la autonomía transformaría la relación del Estado, no sólo con los pueblos indígenas, sino también con las organizaciones sociales; en otras palabras estaríamos

enciando el fin del corporativismo que ha sido uno de los pilares del autoritarismo en México; c) modificaría el centralismo político del Estado hacia un auténtico federalismo; d) recrearía las bases comunitarias de la explotación de los recursos naturales, fortaleciendo el modelo de economía mixta que establece la Constitución; e) haría una realidad la planeación democrática para el desarrollo nacional; f) democratizaría el sistema educativo; g) renovaría las bases de la impartición de justicia y h) perfeccionaría la democracia del sistema electoral vigente.

Obviamente esos procesos que constituirían una transformación democrática del Estado a partir de un nuevo pacto social no serían automáticos a una vez que los Acuerdos de San Andrés tuvieran reconocimiento constitucional y legal, pero es indiscutible que se abrirían las puertas a una nueva forma de ser del Estado nacional, precisamente la que el país necesita para iniciar el siglo XXI. Esa fue la puerta que cerró la SCJN el viernes pasado. Otras se abrirán.

*Los espejismos del cambio 2000-2002*, se terminó de imprimir en noviembre de 2002, en Ediciones y Gráficos Eón, S.A. de C.V., Av. México-Coyoacán núm. 421, Col. Xoco-General Anaya, C.P. 03330, México, D.F., Tels.: 56 88 91 12 y 56 04 72 63. La edición consta de 1000 ejemplares.

### **Formato de Papeleta de Vencimiento**

*El usuario se obliga a devolver este libro en la fecha  
señalada en el sello mas reciente*

Código de barras.

**2893255**

FECHA DE DEVOLUCION





2893255



UAM  
F1236  
G3.74

2893255  
Garavito Elias, Rosa Albi  
Los espejismos del cambio



*Los espejismos del cambio* sostiene con buenos argumentos que el desmantelamiento del viejo sistema autoritario priísta se está llevando a cabo de manera lenta, parcial y contradictoria.

Es natural que más de un lector no comparta todos los valores, puntos de vista, perspectivas, razonamiento desarrollados por la autora de esta obra, pero su inteligencia, profesionalismo, experiencia directa en el proceso político y compromiso y congruencia con una visión sobre lo que debe y puede ser México, hacen de *Los espejismos del cambio* una obra que debe ser tomada en cuenta al evaluar la naturaleza del proceso histórico del México contemporáneo y advertir sus posibilidades y sus peligros de cara al futuro.